



LA GACETA

Diario Oficial



Año CXXI

San José, Costa Rica, miércoles 27 de febrero del 2019

284 páginas

ALCANCE N° 45

PODER LEGISLATIVO

LEYES

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

**AUTORIDAD REGULADORA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

NOTIFICACIONES

PODER JUDICIAL

PODER LEGISLATIVO

LEYES

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PLENARIO

CÓDIGO PROCESAL AGRARIO

DECRETO LEGISLATIVO N.º 9609

EXPEDIENTE N.º 15.887

SAN JOSÉ – COSTA RICA

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

CÓDIGO PROCESAL AGRARIO

TÍTULO I JURISDICCIÓN AGRARIA

CAPÍTULO I ALCANCES Y LÍMITES

ARTÍCULO 1- Jurisdicción agraria

La jurisdicción agraria tiene por objeto tutelar las situaciones y las relaciones jurídicas que se susciten con respecto al desarrollo de las actividades de producción agraria de animales, vegetales u otros organismos. Además, de las actividades de transformación, industrialización, valorización y comercialización de productos agrarios, su trazabilidad, así como las auxiliares a estas, referidas a actos y contratos propios del ejercicio de la actividad agraria y el desarrollo rural.

ARTÍCULO 2- Competencia material

Los tribunales agrarios serán competentes para conocer, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, las pretensiones y los asuntos referidos a los siguientes aspectos, siempre que correspondan a materia agraria y de desarrollo rural:

- 1) Derechos reales y personales sobre bienes agrarios, destinados o aptos para el desarrollo de actividades y servicios agrarios, así como los vinculados a su tutela y aprovechamiento. Además, los procesos sucesorios relativos a estos.
- 2) La posesión, el deslinde, la división, la localización de derechos, el derribo, la suspensión de obra, la titulación, la rectificación de medida y la entrega material de bienes citados en el inciso anterior.
- 3) Los actos y los contratos vinculados con la constitución o el ejercicio de actividades y servicios agrarios. Quedan comprendidos el cobro de deudas cuyo plan de inversión esté vinculado con las actividades citadas, o cuya garantía esté constituida por los bienes indicados en el inciso 1) de este artículo, los contratos de seguro, así como aquellos entre particulares relacionados con la prospección de la biodiversidad cuando tengan relación con el desarrollo de actividades de producción agraria o conexas a estas.

- 4) Los conflictos surgidos entre particulares por el aprovechamiento de bienes o servicios ambientales para actividades agrarias y los relativos a lo regulado en el inciso 12) de este artículo. Además, la prevención, la restauración e indemnización de daños causados por las actividades agrarias, así como aquellos que impacten tales actividades.
- 5) Las controversias entre particulares originadas en el ejercicio de las actividades agrarias vinculadas con especies y variedades endémicas, orgánicas, mejoradas, derivadas, esencialmente derivadas o provenientes de organismos vivos modificados; incluyendo los relativos a los derechos de obtentores de variedades vegetales, y los relativos a lo regulado en el inciso 12) de este artículo.
- 6) Las pretensiones entre particulares, derivadas de controversias en materia de propiedad intelectual.
- 7) Los asuntos relativos a aspectos fitosanitarios y zoonosarios, así como los reclamos de las personas consumidoras vinculados con productos o servicios agrarios.
- 8) La constitución, el desarrollo, la transformación, la disolución y la liquidación de personas jurídicas, cuando la actividad principal sea agraria.
- 9) Los conflictos de competencia desleal entre las empresas vinculadas con las actividades agrarias o conexas a estas.
- 10) La administración y reorganización por intervención judicial de las personas físicas o jurídicas, cuando sea su actividad principal.
- 11) En grado y de forma definitiva, de los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) en procedimientos administrativos de revocatoria de asignación y nulidad de títulos de propiedad, otras modalidades de dotación de tierras, así como de las resoluciones vinculadas al desarrollo rural.
- 12) Las situaciones y las relaciones jurídicas relacionadas con conductas administrativas o manifestaciones específicas de la función administrativa, que por el contenido material o sustancial de la pretensión correspondan a extremos exclusivamente agrarios y de desarrollo rural y se deriven del Instituto de Desarrollo Rural o el instituto correspondiente.
- 13) Las demás que el ordenamiento jurídico disponga.

ARTÍCULO 3- Pretensiones excluidas

Quedan excluidas del conocimiento de los tribunales agrarios, las pretensiones propias de las jurisdicciones penal, laboral y contencioso-administrativa.

CAPÍTULO II GENERALIDADES

ARTÍCULO 4- Principios y reglas generales

Los tribunales agrarios deberán aplicar los principios generales del proceso y, además, sus actuaciones serán fundamentalmente orales. Aplicarán la inmediatez, la concentración, la publicidad, la itinerancia y la gratuidad en lo procedente. Todas las personas intervinientes en el proceso actuarán con buena fe procesal.

Se evitará el exceso de formalismos y todas aquellas actuaciones contrarias a la celeridad propia del proceso, sin demérito de la calidad de las decisiones judiciales, las cuales deben ajustarse a criterios de equidad y de derecho, así como la búsqueda de la verdad.

Los procesos regulados en esta ley se iniciarán a gestión de parte. Continuarán por actuación procesal de oficio o por actividad de parte.

ARTÍCULO 5- Ámbito de aplicación

Las disposiciones de esta ley son de aplicación en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico internacional aplicable y en leyes especiales.

ARTÍCULO 6- Finalidad del proceso

El fin u objeto del proceso es la efectividad del ordenamiento jurídico sustantivo y la solución del conflicto sometido a su conocimiento.

ARTÍCULO 7- Integración

En ausencia o insuficiencia de norma procesal expresa se deberán aplicar las disposiciones legales que rijan las situaciones análogas, los usos y las costumbres, cuando procedan, así como los principios generales del derecho.

Procede la aplicación supletoria de otras normas procesales que ofrezcan soluciones más céleres al proceso, siempre que se respeten los principios y las reglas de esta ley y ante ausencia o insuficiencia de una norma expresa.

ARTÍCULO 8- Indisponibilidad de las normas procesales

Las normas procesales son de orden público y, en consecuencia, de obligado acatamiento, tanto por el tribunal como por las partes y los eventuales terceros. Se exceptúan de esta regla las de carácter facultativo, por referirse a intereses privados disponibles de las partes o cuando el ordenamiento jurídico lo autorice expresamente.

CAPÍTULO III ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 9- Órganos jurisdiccionales

La jurisdicción agraria estará a cargo de los juzgados y tribunales agrarios, integrados por personas juzgadoras especializadas y por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Además, se contará con un equipo especializado de personas juzgadoras especialistas en materia agraria, a cargo de conciliaciones y de

ejecución, sin perjuicio de que por las cargas de trabajo asuman funciones de las demás personas juzgadoras para lograr una gestión más eficiente.

Para su organización, funcionamiento y conformación, se aplicará lo dispuesto en este Código y en la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993. Con ese fin, el Tribunal Agrario deberá constituirse con las secciones que sean necesarias, y tendrá su sede en el Segundo Circuito Judicial de San José; sin perjuicio de que la Corte Plena disponga la creación de otras sedes regionales del Tribunal, conforme a los requerimientos de trabajo para ofrecer un servicio público eficiente y de calidad.

Los juzgados contarán con las personas juzgadoras que sean necesarias. Se faculta a la Corte Plena para que amplíe las sedes de los juzgados agrarios, conforme a los criterios señalados.

ARTÍCULO 10- Funciones de los juzgados agrarios

Los juzgados agrarios conocerán los asuntos propios de su competencia, independientemente del valor económico de las pretensiones.

Entre ellos se encuentran:

- 1) La primera instancia en todos los procesos anticipados, contenciosos, no contenciosos y de ejecución.
- 2) Los impedimentos y las recusaciones de sus juezas y jueces, en la forma dispuesta en la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993.
- 3) El auxilio requerido por otros tribunales judiciales y arbitrales.
- 4) La ejecución de laudos y medidas cautelares emitidas en procesos arbitrales referidos a asuntos vinculados a la actividad de producción agraria.
- 5) El impulso y la práctica de conciliaciones.
- 6) Los demás asuntos que determine el ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 11- Funciones del Tribunal Agrario

El Tribunal Agrario conocerá:

- 1) El recurso de apelación interpuesto contra los autos y contra las sentencias emitidas por los juzgados agrarios, cuando proceda.
- 2) Las inconformidades de las partes y conflictos de competencia que se susciten entre los juzgados agrarios.
- 3) Los conflictos entre los juzgados agrarios generados por la acumulación de procesos.
- 4) En grado y de forma definitiva, los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y demás entes que la ley

disponga, cuando se vinculen con las actividades agrarias y de desarrollo rural.

- 5) Los impedimentos y las recusaciones de sus integrantes y de los conflictos que se susciten por dichos motivos entre las personas juzgadoras de los juzgados agrarios.
- 6) Los demás asuntos que determine el ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 12- Funciones de la Sala de Casación

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia será competente para conocer:

- 1) Las inconformidades y los conflictos de competencia suscitados entre los órganos de la jurisdicción agraria y los de otra materia, siempre que aquellos hayan prevenido en el conocimiento del asunto.
- 2) Los conflictos que se generen por impedimentos y recusaciones, así como la acumulación de procesos tramitados en distintas jurisdicciones, siempre que estos sean competencia agraria.
- 3) El recurso de casación contra las sentencias emitidas en procesos ordinarios, así como la revisión y demás resoluciones que tengan eficacia de cosa juzgada material.
- 4) El recurso de nulidad o la revisión contra laudos referidos a asuntos vinculados con la materia agraria.
- 5) Los demás asuntos que determine el ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 13- Funciones de las personas juzgadoras agrarias a cargo de la ejecución

Las personas juzgadoras agrarias, a cargo de la ejecución, ejecutarán las sentencias y demás resoluciones que, conforme a la ley, deban tramitarse por medio del proceso de ejecución; además, los procesos monitorios, de ejecución hipotecaria y prendaria.

Deberán asumir otras funciones, incluso aquellas asignadas a las personas juzgadoras decisoras, cuando la organización del despacho lo requiera. De ser necesario, serán itinerantes, abarcando la competencia territorial de dos o más tribunales agrarios.

ARTÍCULO 14- Sedes de los tribunales

Con la finalidad de acercar las sedes de los juzgados agrarios a las distintas poblaciones y comunidades, para garantizar el acceso a las personas usuarias, se realizará la distribución de la competencia territorial por zonas, con base en el índice de conflictos y gestiones. La delimitación geográfica podrá comprender distritos de diferentes cantones, o cantones de provincias distintas.

Los asientos de los juzgados se establecerán con ese fin en la cabecera de cada provincia, sin perjuicio de que si las circunstancias lo ameriten se creen otros en otros cantones. Se tomarán en consideración las vías de acceso y comunicación, la lejanía de los lugares y el encarecimiento de costos para el traslado de los usuarios y las usuarias.

El Tribunal Agrario tendrá su sede en el Segundo Circuito Judicial de San José, lo cual no obsta para que se instauren otros en circuitos judiciales diferentes. Mientras ello no suceda, los radicados en San José tendrán competencia en el ámbito nacional.

La instauración de las sedes citadas no afectará la itinerancia de las personas juzgadoras para la práctica de actos a su cargo.

CAPÍTULO IV COMPETENCIA OBJETIVA Y SUBJETIVA

ARTÍCULO 15- Perpetuidad de la competencia

Definida la competencia, las alteraciones en cuanto al domicilio de las partes, la situación del bien litigioso y del objeto del proceso no la modificarán, salvo disposición legal en contrario.

ARTÍCULO 16- Competencia preventiva

Si para un mismo proceso existe más de un tribunal competente, su tramitación corresponderá a aquel ante el cual se haya presentado de primero.

ARTÍCULO 17- Conexidad

Los elementos del proceso son el sujeto, el objeto y la causa. La conexidad, respecto de dos o más procesos o pretensiones, se dará cuando al menos dos de sus elementos sean idénticos, o uno si es la causa.

ARTÍCULO 18- Competencia funcional

La competencia funcional de los tribunales agrarios de las diversas instancias se regirá por lo dispuesto en este Código, la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y las leyes especiales.

ARTÍCULO 19- Competencia para cuestiones preliminares

La competencia de la jurisdicción agraria se extenderá al conocimiento y a la decisión de las cuestiones preliminares, directamente relacionadas con los procesos agrarios, aunque no lo sean de esta disciplina, salvo las de naturaleza penal. Tal decisión no producirá efecto fuera del proceso donde se emita y podrá ser revisada por la jurisdicción competente.

ARTÍCULO 20- Criterios objetivos

La competencia de los tribunales agrarios se determinará:

- 1) Conforme a la especialidad de la materia agraria.
- 2) Por el territorio definido para ejercer su competencia, con las salvedades de ley. Sin embargo, podrán delegar la práctica de notificaciones y actos de ejecución en otras autoridades que administren justicia de inferior categoría, cuando lo sean de su territorio, o en otros de igual o inferior categoría, de lugares ubicados fuera de su competencia territorial.
- 3) En medidas cautelares y tutelares, podrá delegarse la práctica de actuaciones a juzgados agrarios del lugar donde deban realizarse, según su competencia territorial. También se podrá delegar la realización, en el lugar, de actos propios del proceso de ejecución, cuando deban realizarse en el territorio que corresponde a la competencia de otro despacho agrario.

ARTÍCULO 21- Criterios para determinar la competencia territorial

La competencia territorial se determinará por el lugar donde se localice el inmueble objeto de las pretensiones o de las cuestiones preliminares y, en su caso, donde se desarrolle la actividad o los hechos en litigio. Lo anterior se aplicará salvo en los siguientes supuestos:

- 1) En procesos cobratorios, será competente el tribunal del lugar donde se implementó o pretendió desarrollar el plan de inversión del crédito. En su defecto, el del sitio donde se localice el inmueble dado en garantía. A falta de los supuestos anteriores, el del lugar del domicilio de la parte demandada.
- 2) Si se reclaman daños y perjuicios de forma accesoria, conocerá el tribunal competente para la pretensión principal.
- 3) En los asuntos vinculados con controversias en materia de propiedad intelectual, regirá el domicilio de la parte demandada, salvo disposición especial en contrario.
- 4) Cuando se trate del aseguramiento de bienes, apertura y reconocimiento de testamentos y sucesiones, regirá el último domicilio del causante. En su defecto, el lugar donde se localice la mayor parte de los inmuebles destinados a la actividad agraria y de desarrollo rural. Si no es posible aplicar alguno de los criterios anteriores, será competente el tribunal ante el cual se presentó la solicitud para actuar.
- 5) Los procesos anticipados serán competencia del tribunal al que le correspondería conocer el proceso para el que fueron planteadas. Si se solicita en relación con un proceso arbitral nacional o con un proceso jurisdiccional o arbitral extranjero, será competente el tribunal de primera instancia del lugar donde se deba ejecutar el laudo o sentencia o donde deban surtir efectos las medidas.
- 6) En procesos de administración y reorganización por intervención judicial, el competente será el tribunal del lugar donde se ubique la organización empresarial agraria de la parte demandada. Si se trata de varios centros de actividad, será

competente el del domicilio social. A falta de coincidencia, el proceso podrá radicarse en cualquiera de los tribunales donde se ubique alguno de esos centros.

7) En pretensiones sobre bienes muebles y los de carácter personal no referidas a inmuebles o sin efectos sobre estos, no comprendidas en los incisos anteriores, regirá el domicilio del demandado.

ARTÍCULO 22- Acumulación de procesos

Si dos o más procesos de igual naturaleza, conexos entre sí, se inician de forma separada, se ordenará su acumulación. La podrá pedir cualquiera de las partes o declararse de oficio.

No procede la acumulación cuando en uno de los procesos inició la audiencia de juicio o si esta no se celebró, si se encuentra en la emisión de sentencia. En procesos de ejecución hipotecaria o prendaria, solo se admitirá cuando exista identidad de causa.

La petición podrá presentarse ante el tribunal de cualquiera de los procesos vinculados; si se presenta ante el tribunal donde se tramita el proceso más antiguo, lo cual se determinará por la fecha de presentación de la demanda, se aportará copia de la demanda o solicitud inicial del que se pretenda acumular, con indicación de su estado procesal y la fecha de presentación. Si se presenta en el proceso más reciente, el tribunal de oficio dispondrá la remisión de la gestión al pertinente y deberá resolverse sin más trámite. Si se acoge, se ordenará traer el otro expediente y se suspenderá la tramitación del más antiguo si es necesario, en espera de que alcancen el mismo estado procesal. No obstante, podrán practicarse actuaciones de carácter urgente.

Si se plantea en el proceso más reciente, el tribunal de oficio dispondrá la remisión de la gestión al pertinente y deberá resolverse sin más trámite. Si se acoge, se ordenará traer el otro expediente y se suspenderá la tramitación del más antiguo, si es necesario, en espera de que alcancen el mismo estado procesal. No obstante, podrán practicarse actuaciones de carácter urgente.

El tribunal requerido podrá oponerse a la acumulación, conflicto que será resuelto por el superior común.

ARTÍCULO 23- Litispendencia

Se produce litispendencia cuando se tramiten separadamente dos o más procesos iguales, o con identidad parcial en las pretensiones, en los que no exista sentencia firme.

En el primer caso, de oficio o a solicitud de parte, se ordenará la terminación y el archivo del proceso instaurado más recientemente.

Si se trata de una litispendencia parcial y no procede la acumulación, se continuarán conociendo las pretensiones iguales en el proceso que se encuentre en una etapa más avanzada. En los restantes asuntos, se declarará la terminación del proceso únicamente respecto de las pretensiones sobre las cuales sea improcedente pronunciarse por dicho motivo. Se continuará con la tramitación, salvo si resulta innecesario resolver las pretensiones no coincidentes, en cuyo caso procederá declarar la terminación total y su archivo definitivo. Si todos los procesos se encuentran en el mismo estado procesal, se tramitarán las pretensiones en el más antiguo.

La demanda interpuesta ante un tribunal extranjero no produce litispendencia, salvo disposición expresa en contrario.

ARTÍCULO 24- Improrrogabilidad e indelegabilidad de la competencia

La competencia es improrrogable e indelegable. Los tribunales podrán requerir el auxilio de otros órganos jurisdiccionales y de otras autoridades, únicamente en los casos expresamente establecidos por ley.

ARTÍCULO 25- Incompetencia e inconformidad

La incompetencia podrá declararse de oficio o a instancia de parte. Si es de oficio, por el territorio deberá disponerse antes de convocar a la audiencia preparatoria; y si es por la materia, antes de convocar a la audiencia de prueba, salvo que se haya definido con anticipación mediante resolución firme.

La excepción de incompetencia deberá interponerse dentro del plazo conferido para contestar la demanda. Se pondrá en conocimiento de la parte contraria por tres días. De ser necesario, se programará una audiencia para recibir la prueba que se ofrezca y admita para tal efecto, y se resolverá de una vez. El tribunal podrá reservar la recepción de tal prueba y la decisión sobre la excepción de incompetencia para la audiencia preparatoria.

Las partes podrán mostrarse inconformes con lo resuelto sobre la excepción de incompetencia o la declaratoria de oficio, dentro del plazo de tres días. De decidirse en audiencia, la inconformidad se deberá plantear en esta. En ambos supuestos, se dispondrá la remisión del expediente al superior competente, el que tendrá tres días para emitir pronunciamiento.

ARTÍCULO 26- Conflictos de competencia

Si el tribunal que recibe un expediente disiente de lo dispuesto sobre la competencia por el remitente, planteará el conflicto de competencia en el lapso de tres días luego de recibido, el cual será resuelto por el órgano superior de ambos. Se aplicará el mismo trámite dispuesto para la inconformidad. Si ambos tribunales no tienen un superior común, resolverá el órgano competente según la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993.

ARTÍCULO 27- Impedimento y recusación

Será causal de inhibitoria por impedimento y recusación cualquier circunstancia que afecte la garantía de imparcialidad o pueda comprometer la integridad del juzgador o juzgadora de cualquier forma, además de las previstas expresamente en otras disposiciones normativas. Se aplicará el trámite dispuesto en la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y supletoriamente la normativa procesal civil. Lo anterior también procederá, en lo que corresponda, respecto de los impedimentos y recusaciones de personas peritas, consultoras técnicas y servidores judiciales.

Cuando la recusación sea temeraria, se impondrá una multa del cincuenta por ciento de un salario base, según lo establece el artículo 2 de la Ley N.º 7337 de 5 de mayo de 1993. En caso de que tal gestión haya tenido como efecto la suspensión de alguna audiencia oral, el monto se duplicará. La multa se depositará en la cuenta del tribunal.

Las resoluciones sobre inhibitorias y recusaciones tendrán únicamente recurso de revocatoria.

TÍTULO II

LOS SUJETOS PROCESALES, LA PRETENSION Y EL PATROCINIO LETRADO

CAPÍTULO I

PARTES Y LA CAPACIDAD PROCESAL

ARTÍCULO 28- Partes e intervinientes

Parte es quien plantea la pretensión procesal en nombre propio, o en cuyo nombre se formula, o quien tuviera interés directo y la persona contra la cual se dirige.

También lo serán las organizaciones debidamente constituidas y reconocidas conforme a la ley, en aquellos asuntos en que tengan interés directo.

Por disposición legal intervendrán en el proceso:

- 1) El Instituto de Desarrollo Rural (Inder), en los procesos en los cuales pueda existir un conflicto de posesión precaria, cuando se discutan derechos sobre inmuebles no inscritos en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria o sobre inmuebles relacionados con un contrato de asignación u otras modalidades de dotación de tierras, así como los asuntos vinculados con el desarrollo rural y en los supuestos que las leyes especiales establezcan.
- 2) La Procuraduría General de la República, en asuntos relativos a la tutela del dominio público, del ambiente y en el ejercicio de las demás atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico.

- 3) Las corporaciones y los entes del sector público agrario, en los procesos agrarios de su interés, en el cumplimiento de la normativa vigente.
- 4) Las asociaciones de desarrollo integral de los territorios indígenas involucrados u otros órganos de representación autónoma de las personas indígenas, en los conflictos agrarios derivados del derecho indígena, derechos e intereses de sus poblaciones y sus territorios.
- 5) El Catastro Nacional, cuando se diriman pretensiones sobre la modificación, la cancelación, la validez o la nulidad de planos, o ello sea consecuencia intrínseca de lo debatido, en caso de zonas catastrales o catastradas.
- 6) El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en los procesos en los que figure como parte una persona menor de edad.

Salvo disposición legal en contrario, se les conferirá a los intervinientes citados en este artículo cinco días para que se apersonen. Podrán hacerlo sin ser citados, en cualquier etapa del proceso, pero lo tomarán en el estado en que se encuentre. Si se trata de un apersonamiento fuera de audiencia, el tribunal decidirá sobre su participación en el plazo de tres días.

ARTÍCULO 29- Capacidad procesal

Para la demostración de la capacidad procesal, se aplicarán las reglas establecidas en la normativa procesal civil y la legislación especial, en lo que no se oponga a este Código. Además:

- 1) Toda persona representante deberá demostrar su capacidad procesal en la primera gestión. En casos de urgencia, podrá admitirse su comparecencia sin presentar la documentación pertinente para ello, pero si no se subsana en el plazo de tres días será nulo lo actuado con imposición del pago de costas, daños y perjuicios causados a quien actuó en tal condición.
- 2) La parte actora deberá acreditar la personería de la demandada, excepcionalmente podrá solicitar la colaboración del tribunal para cumplir ese requisito, cuando las circunstancias lo ameriten o si la demandada tiene su domicilio en el extranjero.
- 3) Quien se apersona como representante de un grupo en un proceso no supraindividual, deberá acreditar documentalmente su designación. Debe, en lo sucesivo, indicar los cambios de integración del grupo, si se presentaran.
- 4) Las personas representantes de entidades, instituciones y corporaciones públicas con facultades suficientes para litigar, cuya designación se publique en el diario oficial La Gaceta podrán invocar dicha publicación como prueba de su personería. Deberán indicar los datos de forma completa y expresar con el carácter de declaración jurada o bajo juramento que su designación no ha sido modificada o dejada sin efecto.

Asimismo, el tribunal tendrá un registro de personerías del Estado o entes públicos que las personas interesadas deberán actualizar oportunamente mediante certificación, cada vez que se genere un cambio, salvo cuando se trate de una designación publicada en el diario oficial La Gaceta o regida por normativa especial

en contrario. En la certificación donde conste la personería se deberá indicar el plazo de vigencia.

5) La falta de capacidad procesal y la defectuosa representación pueden ser apreciadas de oficio u objetadas por simple alegación de la parte contraria en cualquier momento, quien deberá fundamentar su reclamo.

6) Las partes e intervinientes deberán informarle oportunamente al tribunal sobre las correcciones y los cambios de su nombre o razón social, la transformación y la fusión organizativa. La falta de esas indicaciones no será causal de nulidad y en cualquier tiempo podrán realizarse las correcciones pertinentes, aunque exista sentencia firme, siempre y cuando las modificaciones no impliquen sustituciones que violen el debido proceso.

ARTÍCULO 30- Representante legal y arraigo

Será procedente el nombramiento de una persona curadora procesal o, en su caso, la aplicación del arraigo, en los supuestos y con las condiciones establecidas en la normativa procesal civil y la legislación especial. En caso de la persona curadora procesal, se aplicará además lo siguiente:

Si se ignora el domicilio de la parte demandada, quien gestione la designación de una persona curadora procesal deberá demostrar el agotamiento de los medios legales para ubicarla. También aportará certificación donde conste su representación legal, certificación de movimientos migratorios y cualquier otro requisito que el tribunal estime necesario, de acuerdo con la información que se desprenda del expediente.

ARTÍCULO 31- Gestoría procesal

Podrá comparecerse judicialmente a nombre de una persona, de quien no se tenga poder, cuando:

- 1) La persona se encuentre impedida de hacerlo o esté ausente del país.
- 2) Quien comparezca sea su ascendiente, descendiente, pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, o persona socia, asociada, copropietaria o que posea algún tipo de participación o interés común que legitime su actuación.

Si la parte contraria lo solicita, quien gestiona deberá prestar caución suficiente de que su gestión será ratificada por la representada. Tendrá la obligación de comunicarle a esta su actuación, la cual tendrá validez, solo cuando la demanda o la contestación sea ratificada dentro de un mes a partir de su presentación. De lo contrario, de oficio se declarará terminado el proceso, denegada la gestión o se tendrá por no contestada la demanda, y se condenará a la gestora al pago de costas, daños y perjuicios ocasionados.

ARTÍCULO 32- Litisconsorcio necesario

Cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación jurídica material el proceso deba resolverse con la participación de varias personas, estas deberán ser demandadas de una vez.

Se ordenará ampliar la demanda o contrademanda contra quienes falten dentro de los cinco días siguientes, contados a partir de la firmeza de la resolución que así lo disponga, con el apercibimiento de dar por terminado el proceso o archivar la contrademanda, según corresponda. Al formular la demanda de integración no podrá alterarse sustancialmente lo pedido al inicio. Bastará con indicar los datos para identificar y notificar a la demandada, citar y aportar los elementos probatorios, cuando no se amplíen o varíen los hechos o pretensiones en su contra. De lo contrario, la integración deberá cumplir los requisitos de la demanda inicial.

Los recursos y demás actuaciones procesales de cada litisconsorte necesario favorecerán a los otros, salvo que se trate de actos que impliquen disposición del derecho en litigio. En tal caso, solo tendrán eficacia respecto de las otras personas litisconsortes si emanan de todas o de cada una de ellas.

ARTÍCULO 33- Supuestos de litisconsorcio necesario

Deberá integrarse el litisconsorcio necesario, entre otros supuestos, contra:

- 1) Las asociaciones de desarrollo integral de los territorios indígenas involucrados u otros órganos de representación autónoma de las personas indígenas en procesos donde intervenga una comunidad indígena o persona de esa comunidad, o se relacionen las pretensiones con sus territorios o intereses y derechos de esa población.
- 2) El Instituto de Desarrollo Rural (Inder), cuando se diriman controversias originadas en su actividad agraria y de desarrollo rural. También cuando se trate de pretensiones referidas a inmuebles ubicados en la franja fronteriza, de su administración.
- 3) La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), en los asuntos relacionados con bienes de su propiedad destinados o destinables al desarrollo agrario, rural o a la tutela del ambiente.
- 4) La Procuraduría General de la República, en los casos relativos a bienes del dominio público.

ARTÍCULO 34- Litisconsorcio facultativo

Dos o más personas pueden litigar facultativamente en un mismo proceso de forma conjunta, ya sea activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto. Los actos de cada una de ellas no favorecerán ni perjudicarán la situación procesal de las restantes.

ARTÍCULO 35- Llamada a la persona garante

Cada parte podrá solicitar que se traiga al proceso a una tercera persona, respecto de quien pretenda una garantía. La citación deberá solicitarse antes o durante la audiencia preparatoria.

Se concederá a la persona garante ocho días para que participe en el proceso. Si se opone de forma fundada a la existencia del contrato de garantía o a su eventual ejecución, se remitirá a la citante a la vía ordinaria a dirimir sus eventuales derechos. Si la garante asume ser parte, podrá solicitar quien la citó, si resulta procedente, se le excluya del proceso, para lo cual se necesitará la aceptación de la contraria.

Cuando la garantía exigida no haya sido objetada, la sentencia deberá pronunciarse sobre ella, y producirá, en cuanto a la garante, la eficacia de cosa juzgada material. Su intervención no confiere ningún derecho a la parte contraria, salvo la responsabilidad relativa a costas.

ARTÍCULO 36- Llamada a la persona poseedora mediata

La parte poseedora de un bien en nombre ajeno, al ser demandada en nombre propio, deberá manifestarlo en la contestación e indicar los datos de identificación y domicilio de la persona que se aduce es la titular, para que se le cite. La citación podrá también solicitarse antes o durante la audiencia preparatoria. El tribunal concederá a la persona poseedora un plazo de ocho días, a fin de que intervenga en el proceso. Si asume ser parte, la citante podrá pedir que se le excluya del proceso, para lo cual se necesitará la aceptación de la actora.

No será aplicable lo dispuesto en esta norma, cuando por la naturaleza de lo debatido deba tenerse como litisconsorte necesario a la persona poseedora mediata.

ARTÍCULO 37- Intervención coadyuvante

Podrá intervenir en el proceso quien tenga un interés jurídico legítimo en su resultado, sin alegar derecho alguno a su favor, solo con el fin de coadyuvar a una parte.

La coadyuvancia podrá gestionarse hasta antes de las conclusiones en la audiencia de juicio. Si la solicitud se efectúa en audiencia, se resolverá de inmediato. Si se realiza fuera de ella, se tramitará por medio del proceso incidental.

Quien se apersona como coadyuvante, tomará el proceso en el estado en que se encuentre. Se le permitirá hacer alegatos, recusar, participar en actividades probatorias e interponer recursos y demás medios procedimentales para hacer valer su interés, excepto en lo que perjudique a quien coadyuva. Por su intervención, no devengará ni pagará costas, salvo en razón de las alegaciones que promueva con independencia de la parte principal.

ARTÍCULO 38- Aviso a las personas terceras interesadas

Se podrá dar aviso a las personas vinculadas con el objeto del proceso sobre su existencia, siempre que se desprenda su interés, a fin de que puedan hacer valer sus eventuales derechos por las vías correspondientes.

Se ordenará la comunicación a gestión fundada de parte, en la que se indicará la dirección exacta donde localizar a la persona tercera interesada, siempre que se pida antes de la audiencia de juicio. De acogerse la gestión, se procederá a hacer la comunicación, pero el proceso no se suspenderá por ese motivo. Lo resuelto carecerá del recurso de apelación. Si resulta infructuoso el acto de comunicación, se dejará sin efecto la orden de aviso.

Las personas terceras interesadas podrán comparecer aun cuando no hayan sido citadas. Si se hace en audiencia, se resolverá sobre su participación de forma inmediata. En caso contrario, su solicitud deberá resolverse en tres días.

**CAPÍTULO II
LEGITIMACIÓN PROCESAL****ARTÍCULO 39- Legitimación procesal**

Será parte legítima aquella que alegue tener o a quien se le atribuya una determinada relación jurídica con la pretensión.

Como actividad previa al establecimiento de la demanda o dentro del proceso, podrá plantearse una solicitud para determinar la legitimación procesal, cuando se desconozca o no se tenga certeza sobre la persona a quien se propone demandar.

Para tal efecto, se podrá citar a cualquier persona a declarar bajo juramento sobre los datos referentes a la legitimación procesal, necesarios para identificar debidamente a quien se pretenda demandar. También podrá solicitarse el auxilio de la Fuerza Pública, a fin de obtener la identificación de las partes. Los tribunales ordenarán las medidas necesarias para efectuar esa verificación.

Lo anterior será también aplicable cuando se requiera para aspectos referidos a la verificación de la capacidad procesal.

ARTÍCULO 40- Sustitución y sucesión procesal

La sustitución y la sucesión procesal se regirán por la normativa procesal civil y las leyes especiales. Además, se tendrá como sucesión procesal la intervención de una institución, entidad o corporación de derecho público con personalidad jurídica propia cuando por disposición legal, encontrándose en trámite un proceso, se le transfieren las competencias de otra. La gestión podrá formularse de oficio o a solicitud de parte. De declararse procedente, se continuará con la parte sustituta y la demanda se tendrá por dirigida en su contra.

ARTÍCULO 41- Enajenación del bien o derecho litigioso

La enajenación del bien o del derecho litigioso, a título particular, por acto entre vivos, permite a la persona adquirente o cesionaria suceder a la enajenante o cedente, siempre que la parte contraria no se oponga dentro del plazo de tres días a partir de la resolución que la apruebe. Si se acepta la oposición, la adquirente o cesionaria podrá intervenir como tercera o litisconsorte, según corresponda. En todo caso, la transmitente continuará como parte para todos los efectos procesales que beneficien a la contraria.

**CAPÍTULO III
PRETENSIÓN PROCESAL****ARTÍCULO 42- Pretensión procesal**

Se podrá pretender ante los tribunales la condena al pago de determinada prestación, la declaratoria de constitución, la modificación o la extinción de derechos y situaciones jurídicas, la adopción de medidas cautelares, la ejecución y cualquier otra clase de tutela prevista por la ley. Igualmente, podrá ejercerse oposición a la pretensión reclamada y gestionarse todos los actos legales autorizados para la defensa de una u otra posición procesal.

ARTÍCULO 43- Acumulación de pretensiones

En la demanda o contrademanda podrán proponerse varias pretensiones, siempre que sean conexas, no se excluyan entre sí, se trate de procedimientos comunes y el tribunal sea competente para conocer de todas. Si fueran peticiones excluyentes, podrán acumularse como principales y subsidiarias.

Si antes del señalamiento de la audiencia preparatoria, el tribunal estima que las pretensiones no son acumulables, requerirá a la parte actora para que las desacumule en el plazo de tres días, manteniendo aquellas cuya acumulación fuera posible. Si no se desacumulan o se mantiene la circunstancia de no acumulabilidad entre las pretensiones escogidas por quien demanda, se ordenará tramitar las que corresponda.

CAPÍTULO IV PATROCINIO LETRADO

ARTÍCULO 44- Patrocinio letrado

Las partes deberán actuar con patrocinio letrado, salvo que sean profesionales en derecho. Se otorgará el patrocinio letrado gratuito, conforme lo establece esta ley. Quien autentique será responsable de su contenido. Su firma implicará, salvo manifestación expresa en contrario, la dirección del proceso con las facultades de actuar en nombre de la parte para todo lo que le beneficie, siempre y cuando no se requiera su participación personal o poder especial judicial.

ARTÍCULO 45- Abogadas o abogados suplentes

Con el fin de evitar la posposición de audiencias, la persona abogada directora podrá designar a uno o dos suplentes, sin que ello implique costo adicional de honorarios para la parte, siempre y cuando la parte que representa así lo autorice de forma expresa, sin que sea obligatoria tal designación, quienes sean suplentes tendrán las mismas facultades de actuación en el proceso.

ARTÍCULO 46- Mandato judicial

Las partes podrán actuar en el proceso por medio de apoderado o apoderada judicial, sin perjuicio de que se requiera la comparecencia personal de las primeras.

El poder especial judicial se otorgará a personas abogadas en ejercicio. Podrá conferirse oralmente ante el tribunal, de lo cual se levantará un acta. También se podrá conferir por escrito, siempre que la firma de quien lo otorga esté autenticada por otro abogado o abogada o se trate de una firma digital. El mandato se entiende conferido para todo el proceso, incluyendo los anticipados y de ejecución, salvo disposición en contrario de la parte poderdante.

Para la renuncia, la transacción, la conciliación, el desistimiento, el allanamiento, el sometimiento a arbitraje, el retiro de ejecutorias de sentencias con efectos registrables, y cualquier acto de disposición del objeto del proceso, es necesaria la autorización expresa.

ARTÍCULO 47- Patrocinio letrado a cargo de la Defensa Pública

Las defensoras y los defensores públicos agrarios tendrán las facultades de directores del proceso, en los procesos en que intervengan, salvo que la parte amplíe sus atribuciones a las de un apoderado especial judicial, lo cual deberá indicar expresamente. Tendrán esas mismas facultades de abogados o abogadas directoras para los procedimientos administrativos que puedan incidir en la sede judicial.

Si actúan con facultades de mandatario o mandataria, estarán sometidos a las mismas prohibiciones del párrafo final del artículo 46 de esta ley. No tendrá valor ni efecto alguno lo que se haga en oposición a esas prohibiciones.

Los dineros por costas personales que se generen a favor de la parte patrocinada por la defensa pública agraria se distribuirán de la siguiente manera:

- a) Un cincuenta por ciento (50%) del total recaudado será asignado al Fondo de Apoyo a la Defensa Pública Agraria, para optimizar el servicio y la cobertura en el territorio nacional.
- b) Un cincuenta por ciento (50%) restante será depositado en el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia Agraria para garantizar la eficacia y la eficiencia del servicio público agrario. La administración de esos recursos se regirá conforme a la normativa, ambos fondos serán administrados por el Poder Judicial.

TÍTULO III DERECHOS Y DEBERES DE QUIENES SEAN SUJETOS PROCESALES

ARTÍCULO 48- Potestades y deberes del tribunal

El tribunal tendrá las siguientes potestades y deberes:

- 1) Asegurar la igualdad procesal de las partes.
- 2) Dirigir el proceso y procurar su pronta solución. Una vez iniciado, deberá ordenar de oficio todas las medidas tendientes a evitar su paralización, sin que pueda retardarse el procedimiento, valiéndose de la inercia de las partes, salvo cuando la actividad de estas sea indispensable.
- 3) Aplicar el régimen disciplinario, según corresponda.
- 4) Prevenir y sancionar cualquier acción u omisión contrarias a los principios y las reglas que informan el proceso. En especial, deberá desechar solicitudes o gestiones notoriamente improcedentes, o que impliquen una dilación manifiesta.
- 5) Sancionar cualquier acto contrario a la dignidad, buena fe, lealtad, probidad y el respeto debido entre las personas partícipes del proceso, así como toda forma de abuso y fraude procesal.
- 6) Emitir las resoluciones dentro de los plazos legales.
- 7) Utilizar en las resoluciones y en las actuaciones un lenguaje claro y comprensible.
- 8) Buscar la verdad real, respetando el equilibrio procesal.
- 9) Informar a las partes sobre su derecho de resolver las diferencias a través de medios alternativos de solución de conflictos; incentivar el uso de estos y prestar la colaboración necesaria dentro de los límites legales.
- 10) En el caso de asuntos referidos a personas y comunidades indígenas, sus poblaciones y territorios, en la aplicación de la normativa procesal, ha de tomarse en cuenta el derecho indígena, sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales. Se utilizarán dictámenes periciales culturales y los métodos a los que recurren tradicionalmente, para la solución de sus conflictos.

Lo anterior, siempre que no se infrinjan derechos fundamentales.

11) Los demás que establezca el ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 49- Derechos de las partes e intervinientes

A las partes e intervinientes se les deberá garantizar:

- 1) El acceso a la tutela judicial efectiva.
- 2) Tribunales imparciales, transparentes e independientes.
- 3) El derecho al uso de medios alternos de resolución de conflictos. Las partes podrán disponer de sus derechos y bienes, salvo los indisponibles o irrenunciables.
- 4) La defensa técnica gratuita, cuando proceda.
- 5) Costos procesales mínimos.
- 6) El derecho de ser oídas e informadas, de forma clara y oportuna, sobre sus derechos y deberes procesales, así como del estado y trámite de los procesos.
- 7) Un trato digno, procurándose siempre preservar su intimidad e imagen.
- 8) Cuando se trate de personas en condición de vulnerabilidad, la integración efectiva al proceso y la especialización de los servicios, acorde con sus requerimientos.
- 9) Los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 50- Gratuidad

Se litigará con exención de toda clase de timbres, sin obligación de aportar copias, rendir garantías o depósitos de dinero, con las excepciones expresamente dispuestas en este Código y la legislación especial.

Si es necesario publicar una resolución, edicto o aviso, las partes tendrán derecho a elegir si lo hacen en un diario de circulación nacional, o en forma gratuita en el Boletín Judicial, salvo disposición expresa en contrario.

Si es posible, de oficio, se remitirá electrónicamente copia de la resolución y, en su caso, del edicto o aviso, al ente encargado de la publicación. Caso contrario, a solicitud de parte, se emitirá la copia, debidamente sellada, para su diligenciamiento.

ARTÍCULO 51- Defensa técnica gratuita

Las partes tendrán acceso a la defensa técnica gratuita especializada, siempre y cuando acrediten plenamente que carecen de recursos económicos suficientes, para lo cual deben emitir una declaración jurada ante la Defensa Pública, cuyos datos serán verificados por esta. Las partes interesadas deberán pedir directamente este beneficio en las oficinas de la Defensa Pública de cada circuito judicial y se acreditará su aceptación en la primera resolución que dé curso al proceso. Si se acredita que quien solicita la defensa técnica tiene recursos económicos suficientes para sufragar el costo de la asesoría legal, dicha dependencia requerirá su pago, mediante de los mecanismos legales pertinentes.

ARTÍCULO 52- Itinerancia del tribunal

El tribunal, independientemente de su sede, ejercerá su función de forma itinerante, a fin de garantizar el acceso a la justicia, la disminución de costos y la búsqueda de la verdad.

ARTÍCULO 53- Deberes de las partes e intervinientes

Las partes y demás intervinientes ajustarán su conducta a la buena fe, lealtad, probidad, uso racional del sistema procesal, debido respeto de los sujetos procesales y al deber de cooperar con la administración de justicia y evitarán incurrir en todo comportamiento malicioso, temerario, negligente, dilatorio, discriminatorio, abusivo, irrespetuoso o fraudulento.

ARTÍCULO 54- Abuso procesal y procesos fraudulentos

Cuando el tribunal estime, de acuerdo con el resultado del proceso y la valoración probatoria, que una parte actuó con temeridad, mala fe o abuso en el ejercicio de los derechos procesales, lo declarará en sentencia. Podrá hacerlo de manera anticipada cuando existan elementos suficientes para ello.

En cualquier momento en que, por las circunstancias del caso concreto, el tribunal esté convencido del uso de un proceso para practicar un acto simulado o conseguir un móvil prohibido por la ley, dictará sentencia que impida a las partes obtener sus objetivos.

Si una parte incurre en alguna de las faltas contempladas en esta ley, el tribunal aplicará el régimen disciplinario sobre las partes y sus abogados, sancionando cualquier acto contrario a la dignidad de la justicia, la buena fe, la lealtad, la probidad; así como cualquier forma de abuso y fraude procesal. También cuando se compruebe que han realizado gestiones o han asumido actitudes dilatorias o litigado con temeridad. Según la gravedad de la conducta, el tribunal aplicará las amonestaciones, las multas, la expulsión de la oficina o local por el titular del despacho; poner a la orden de la autoridad respectiva para su juzgamiento cuando pudiera constituir delito, contravención o falta, o, en casos graves, la suspensión del abogado, según está prescrito en los artículos 216 al 223 de la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993.

Además, podrá condenarse a quien sea responsable al pago de daños, perjuicios y costas, los cuales se liquidarán en proceso de ejecución. Cuando sea evidente que quien haya asesorado legalmente a las partes, tenía conocimiento de la situación, se pondrá en conocimiento del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE EL DESAHUCIO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 55- Imprudencia del desahucio administrativo

En inmuebles destinados o destinables a actividades agrarias, el desahucio administrativo será improcedente cuando:

- 1) Exista proceso judicial en trámite, donde se pretendan el desalojo y la restitución del inmueble, si existe coincidencia de partes en sede administrativa y jurisdiccional.
- 2) A quien se pretenda desalojar, se encuentre en posesión del bien por causa de un contrato acordado con la persona gestionante o por mera tolerancia cuando esta sea superior a un año.
- 3) Se trate de personas que tengan una ocupación del inmueble superior a un año.

Si se inicia el procedimiento de desahucio administrativo antes de la interposición del proceso judicial, el tribunal, una vez instaurado este, de oficio o a solicitud de parte, podrá ordenar como medida cautelar la suspensión de la ejecución del desalojo aprobado mediante resolución firme.

ARTÍCULO 56- Informe técnico

La autoridad administrativa competente, previo a resolver la procedencia del desalojo, solicitará al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) un informe técnico a fin de determinar, fehacientemente, el tiempo y el motivo por el cual se encuentra ocupando el inmueble la persona contra quien se dirige el procedimiento.

ARTÍCULO 57- Lanzamiento administrativo

En circunstancias especiales, si el desalojo se ordena contra personas con alguna enfermedad grave o en condición de discapacidad que les dificulte su movilidad y situaciones afines, la autoridad policial podrá conceder un plazo prudencial no mayor de cinco días para practicar el desalojo.

Si no se desaloja el inmueble voluntariamente, se procederá a la expulsión. De existir cosechas por recolectar en ese momento, semovientes u otros animales que deban ser retirados y no pueda hacerse de forma segura y rápida, podrá concederse para el desalojo un plazo no menor de tres días ni mayor de un mes, conforme al ciclo productivo; pasado ese plazo en el caso de cosechas, solo se autorizará la recolección de los frutos en un plazo máximo de seis meses, de acuerdo con el ciclo productivo. Quien gestione el desalojo quedará como depositario de los bienes que no se retiren, con iguales deberes y facultades de uno judicial, salvo que otra persona idónea asuma el cargo. Para tal efecto, la autoridad policial, en el sitio, levantará un acta donde consignará además el inventario de los bienes.

Los plazos citados comenzarán a correr a partir del día siguiente del levantamiento del acta.

TÍTULO V

ACTIVIDAD PROCESAL

CAPÍTULO I ACTOS PROCESALES

SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 58- Informalismo de las formalidades

Los actos procesales no estarán sujetos a formas determinadas, salvo las que establezca la ley o resulten indispensables para la finalidad perseguida.

ARTÍCULO 59- Idioma

El idioma español deberá ser utilizado en todos los actos procesales. En los procesos donde participen personas indígenas, el tribunal les informará su derecho a que las resoluciones y actuaciones sean traducidas a su idioma con el apercibimiento de nulidad de lo actuado en caso de incumplimiento.

Deberá acompañarse la traducción de los documentos redactados en otro idioma.

Cuando la parte o interviniente deba ser oída o atendida y no se comunique por medio del idioma español o presente alguna capacidad disminuida temporal o permanentemente, deberá informarlo con suficiente antelación, a fin de que el tribunal tome las previsiones necesarias.

Se le nombrará una persona intérprete, cuyo costo estará a cargo de quien lo requiera, salvo que se trate de una declaración de parte o testimonial. Si se trata de personas indígenas o patrocinadas por la defensa pública, la persona intérprete deberá ser suplida a cargo del Poder Judicial. Lo será también cuando se brinde permanentemente el servicio de traducción en el idioma correspondiente, en el circuito judicial al que pertenece el tribunal.

ARTÍCULO 60- Formación del expediente electrónico

Las gestiones, las resoluciones y las actuaciones del proceso darán lugar a la formación de un expediente electrónico. Se formará, consultará y conservará por medios tecnológicos, salvo las excepciones dispuestas en esta ley.

ARTÍCULO 61- Devolución de documentos privados

El tribunal se dejará una copia de los documentos privados originales que las partes aporten como prueba. Para tal efecto, deberá adjuntarse una copia legible y completa, previo a su devolución, salvo que se pueda realizar electrónicamente o digitalmente, en la oficina que recibe el documento. Las partes presentarán los originales cuando el tribunal lo requiera, de oficio o a solicitud fundada de parte, con el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, si no tienen causa justa, se les podrá testimoniar piezas por el delito de desobediencia a la autoridad. Si no lo presentan será ineficaz, cuando la parte contraria haya alegado oportunamente falsedad del documento. La seguridad del documento estará a cargo del despacho durante el tiempo que se mantenga a su cargo.

ARTÍCULO 62- Documentos base

Cuando se deba aportar un documento base requerido para dar trámite a un proceso o gestión, se presentará el original. Para el trámite de devolución, custodia y exhibición, se aplicará lo dispuesto para los documentos privados. Cuando esté en poder de la parte, esta tendrá la responsabilidad exclusiva de su custodia.

Tratándose de títulos valores cambiarios o ejecutivos, el documento base deberá estar contenido en un soporte físico o digital donde aparezca de manera indubitable su contenido.

Las partes presentarán los originales cuando el tribunal lo requiera, de oficio o a solicitud fundada de parte, con el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, si no tienen causa justa, se les podrá testimoniar piezas por el delito de desobediencia a la autoridad. Si no lo presentan será ineficaz, cuando la parte contraria haya alegado oportunamente falsedad del documento. La seguridad del documento estará a cargo del despacho durante el tiempo que se mantenga a su cargo.

ARTÍCULO 63- Reposición de actuaciones

Si se extravía total, o parcialmente, un expediente, será repuesto inmediatamente por cualquier medio. Para esos efectos, el tribunal ordenará a las partes aportar o remitir electrónicamente los documentos originales para ser certificados, copias electrónicas de los que hayan presentado, si es posible con las constancias de recibidos respectivos, y de las cédulas de notificación recibidas. Si es necesario, se repondrán las pruebas indispensables para decidir conforme a derecho.

La persona que en criterio del órgano disciplinario competente sea responsable por dolo o culpa grave deberá asumir el pago de los daños y perjuicios que se generen con la reposición.

ARTÍCULO 64- Publicidad de las actuaciones escritas

Todo alegato escrito o documento incorporado al expediente, con las excepciones de ley, será de acceso a las personas que figuren como partes, abogadas y a quienes el ordenamiento jurídico autorice. Se pondrán a disposición de las personas usuarias los mecanismos necesarios, a fin de que la consulta del expediente físico o electrónico sea efectiva.

ARTÍCULO 65- Lugar y tiempo de las actuaciones

La audiencia de juicio y, en general, las diligencias probatorias, según la naturaleza de lo que deba ser definido, se practicarán en el lugar de los hechos. El tribunal, cuando lo considere innecesario, de forma justificada, podrá disponer lo contrario.

Si se realizan en el lugar de los hechos, podrán continuarse o finalizarse en la sede del tribunal y, excepcionalmente, en otro lugar idóneo a criterio de este.

Cuando no sea necesaria la itinerancia del tribunal, las actuaciones se realizarán en su sede.

Las actuaciones judiciales deberán iniciarse a la hora exacta señalada. A criterio del tribunal, podrán comenzar hasta quince minutos después. Aun más tarde, siempre que exista anuencia de las partes y del tribunal, lo cual se hará constar. En ambos supuestos se consignará el motivo del atraso.

ARTÍCULO 66- Días y horas hábiles

Para las actuaciones judiciales todos los días y las horas son hábiles, salvo aquellos que por disposición de la ley o de los órganos competentes hayan sido declarados inhábiles.

De oficio o a solicitud de parte, se podrán señalar y continuar audiencias en horas y días inhábiles, cuando la dilación pueda causar perjuicio grave a las partes, impedir el ejercicio de la función jurisdiccional o hacer ilusorio el efecto de una resolución. Contra la resolución que declare la habilitación no cabrá recurso alguno. Tal pronunciamiento será innecesario cuando la habilitación se requiera para proseguir una audiencia.

**SECCIÓN II
ACTOS DE PARTE****ARTÍCULO 67- Actos escritos de las partes**

La demanda, la contestación, la contrademanda, la réplica, la solicitud inicial en procesos no contenciosos, el recurso de casación, la revisión y las alegaciones emitidas fuera de las audiencias serán escritos. Las partes e intervinientes podrán optar por formularlos oralmente en el despacho, siempre que se hagan acompañar

de su abogado o abogada y que cumplan todos los requisitos establecidos en esta ley. El tribunal garantizará a las partes el uso efectivo de esta facultad, adecuándola a los requerimientos de los distintos grupos en condición de vulnerabilidad.

Los actos escritos de las partes e intervinientes se registrarán por las siguientes reglas:

- 1) Llevarán la firma de las partes. Si no pudieran firmar, otra persona lo hará a su ruego y la gestionante estampará su huella digital, salvo imposibilidad absoluta. En ambos casos, debe estar autenticada por persona abogada. Si se omite alguno de esos requisitos, la parte tendrá tres días para subsanar lo omitido, sin necesidad de resolución que así lo prevenga. De lo contrario, no se atenderá la gestión. La interesada podrá optar por ratificar la gestión oralmente en la sede del tribunal, en ese mismo plazo.
- 2) Si la parte es profesional en derecho, no se requerirá la autenticación.
- 3) Si se remiten las gestiones por medios tecnológicos, para su validez y eficacia, deberán cumplir los requisitos de seguridad y autenticidad requeridos en las leyes especiales y los reglamentos del Poder Judicial.

ARTÍCULO 68- Efectos

Los actos procesales de las partes, una vez recibidos de manera efectiva por el despacho competente, producirán inmediatamente la constitución, la modificación o la extinción de derechos y deberes procesales, salvo disposición legal en contrario.

Las gestiones presentadas o remitidas a un despacho u oficina que no corresponda surtirán efecto a partir del momento en que sean recibidas por el órgano que debe conocerlas.

ARTÍCULO 69- Localización

Las partes e intervinientes deberán indicar en su primera gestión la dirección exacta de su domicilio y medios adicionales dónde localizarles, entre otros, su dirección electrónica, número telefónico y de fax, así como el de quienes sean sus abogados o abogadas. Estarán obligadas a informar al tribunal los cambios, bajo su responsabilidad.

SECCIÓN III ACTOS DEL TRIBUNAL

ARTÍCULO 70- Forma y firma de las resoluciones

Las resoluciones contendrán los datos básicos para su individualización e identificación del tribunal y proceso en que se emitan.

Las resoluciones deben ser firmadas por las personas juzgadoras que las emitan, salvo que queden respaldadas por audio o video. Cuando se trate de providencias emitidas por tribunales colegiados, serán firmadas únicamente por quien presida.

La falta de alguna firma no provocará la ineficacia del acto, siempre que se corrobore la participación del juez o la jueza en el acto que debió suscribir.

ARTÍCULO 71- Forma y firma de las actuaciones

Cuando deba dejarse constancia del resultado de una actuación en un acta, se hará constar el lugar, la fecha, la hora de inicio y la finalización de la diligencia, así como las personas participantes. Si es escrita, será firmada por quien la practicó y, cuando sea necesario, por las demás participantes, previa lectura. Si alguien no sabe o no puede firmar, podrá hacerlo en su lugar otra a ruego, o bien, una persona testiga de la actuación. Cuando alguien no quiera firmar, así se consignará.

Si por algún defecto el acta se torna ineficaz, el acto que se pretendía probar con ella podrá acreditarse por otros elementos válidos. El acta escrita podrá ser reemplazada, total o parcialmente, por otra forma de registro, salvo disposición expresa en contrario.

ARTÍCULO 72- Comunicación de los actos procesales

La práctica de las notificaciones y todo lo relativo a ese acto procesal, se regirá por lo dispuesto en este código y la normativa especial para notificaciones. Para realizarlas, se considerará una sola persona, quienes litiguen unidas con una misma representación legal.

Las resoluciones pronunciadas en audiencia, se tendrán por notificadas a quienes estén presentes o hayan debido concurrir al acto, salvo disposición expresa en contrario.

Los señalamientos para audiencias y otras actuaciones deberán ser notificados a las partes con una anticipación mínima de tres días, salvo disposición en contrario o en situaciones de urgencia relacionadas con la programación de audiencias. En este último supuesto, la notificación podrá realizarse mediante telegrama, teléfono u otro medio de comunicación similar, de lo cual se dejará constancia.

Si en una resolución se impone una obligación de hacer o una orden de abstención, con el apercibimiento de que se podrá seguir causa por el delito de desobediencia a la autoridad, solo para los efectos penales, se notificará adicionalmente de forma personal a la parte obligada.

ARTÍCULO 73- Auxilio judicial

Los tribunales deberán prestarse auxilio en las actuaciones que requieran colaboración. Se exceptúa el auxilio judicial cuando se trate de práctica de prueba o de actos propios de una audiencia, que vulneren el principio de inmediación.

Se podrá pedir colaboración directamente a cualquier funcionario o funcionaria administrativa. Además, solicitar a los entes públicos pertinentes información sobre los datos que consten en sus registros, a fin de identificar o localizar a una parte, cuando sea indispensable realizar una notificación de forma personal y no se cuente con otro medio para lograrlo de forma efectiva.

**SECCIÓN IV
RESOLUCIONES JUDICIALES****ARTÍCULO 74- Resoluciones judiciales**

Las resoluciones judiciales se denominarán providencias, autos y sentencias. Serán orales o escritas.

En audiencia, se emitirán de forma oral e inmediata, con las salvedades de ley. Cuando la complejidad de lo planteado requiera un estudio especial o deliberación, se podrá decretar un receso.

Si son escritas, las providencias se dictarán en el plazo de tres días, y los autos en cinco días, sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales.

ARTÍCULO 75- Adición, aclaración y error material

Las aclaraciones o adiciones de autos y sentencias solo procederán respecto de la parte dispositiva. Si son emitidas en audiencia se gestionarán y resolverán de inmediato. De ser dictados por escrito, deberán pedirse dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación y resolverse en un plazo igual. Podrán ser aclarados y adicionados de oficio, en el mismo lapso. Si se omite resolver acerca de una petición concreta, se podrá pedir oralmente al tribunal que subsane la omisión.

El plazo para interponer el recurso que proceda contra autos y sentencias dictadas de forma escrita, se contará a partir del día inmediato siguiente al de la notificación de la resolución complementaria en la que se acepte o deniegue la gestión.

Los tribunales podrán corregir en cualquier tiempo los errores materiales de sus resoluciones. Tal pronunciamiento será declarado firme. Podrán igualmente corregir y adicionar resoluciones firmes con efectos registrales, cuando se trate de datos que requiera el Registro Nacional para la inscripción, siempre que no se altere sustancialmente lo concedido u ordenado en aquellas.

Cuando un tribunal de primera instancia note un error material en una resolución de un superior, informará electrónicamente a este tal suceso para que resuelva tal gestión.

Los tribunales podrán corregir en cualquier tiempo los errores materiales de sus resoluciones. Tal pronunciamiento será declarado firme. Podrán igualmente corregir y adicionar resoluciones firmes con efectos registrales, cuando se trate de datos que requiera el Registro Nacional para la inscripción, siempre que no se altere sustancialmente lo concedido u ordenado en aquellas. Cuando un tribunal de primera instancia note un error material en una resolución de un superior, informará electrónicamente a tal suceso para que resuelva tal gestión.

ARTÍCULO 76- Tribunal decisor

Las personas juzgadoras, que hayan asistido a una audiencia, deberán resolver, previa deliberación y votación, según corresponda, y asumir la redacción o formulación de su contenido.

ARTÍCULO 77- Imposibilidad del tribunal para resolver

Si un juez o jueza integrante del tribunal que realizó una audiencia se imposibilita para deliberar, votar y emitir la resolución respectiva, según corresponda, se aplicarán las siguientes reglas:

- 1) Si se trata de un tribunal unipersonal, se celebrará nueva audiencia por quien le sustituya.
- 2) En el caso de uno colegiado, los restantes integrantes tomarán las medidas pertinentes para realizar la deliberación. Podrá deliberarse haciendo uso de medios tecnológicos. Si no es posible integrar a quien tiene la imposibilidad, se celebrará una nueva audiencia.
- 3) La deliberación solo podrá suspenderse por accidente o enfermedad grave de las personas juzgadoras. En ese caso, la suspensión no podrá ser mayor a tres días, luego de los cuales se les reemplazará para realizar nuevamente la audiencia de juicio.

ARTÍCULO 78- Deliberación, votación y redacción en tribunales colegiados

Si la sentencia se emite en audiencia, la deliberación tendrá una duración máxima de dos días. Para deliberar, votar y emitir resoluciones, los tribunales colegiados aplicarán las siguientes reglas:

- 1) La deliberación y votación será secreta y dirigida por quien haya presidido la audiencia.
- 2) Quien la haya dirigido, someterá a deliberación del tribunal las cuestiones de hecho y de derecho. Previo análisis, se procederá a la votación, la cual no podrá interrumpirse salvo algún impedimento insuperable.

- 3) Para emitir la resolución, será necesario el voto conforme de la mayoría de las personas integrantes.
- 4) La redacción o emisión íntegra de la resolución corresponderá a quien presida. Cuando no forme parte del voto de mayoría, se asignará a otra de las integrantes.
- 5) Quien discrepe de la mayoría, salvará su voto de manera razonada y se insertará en la resolución. Deberá emitirlo dentro del plazo conferido para la redacción. Si el voto disidente no se hace en el plazo que legalmente corresponda, se tendrá por no puesto de pleno derecho, sin que se afecte lo resuelto. En tal caso, caducará la facultad de salvar el voto.

ARTÍCULO 79- Emisión de la sentencia

La sentencia se emitirá oralmente después de la exposición de conclusiones o, en su caso, de la deliberación. Cuando la deliberación no sea necesaria, terminadas las respectivas etapas procesales se pronunciará dentro del plazo legal.

Por razones de seguridad e integridad del tribunal y demás asistentes a la audiencia u otras razones referidas al tiempo y el lugar donde se realice la audiencia, la sentencia podrá emitirse en el plazo de cinco días. En supuestos de excepcional complejidad, su dictado íntegro se podrá realizar en el plazo de veintidós días hábiles. El tribunal deberá exponer el fundamento de la decisión.

Si las partes lo solicitan o el tribunal lo estima necesario, la sentencia deberá transcribirse.

ARTÍCULO 80- Efectos de la no emisión oportuna de la sentencia

Si no se emite la sentencia en los plazos establecidos, se comunicará al órgano disciplinario respectivo para lo que corresponda.

ARTÍCULO 81- Requisitos y contenido de la sentencia

Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los aspectos objeto de debate. No podrán conceder extremos no pedidos o dar más de lo solicitado, a excepción de aquello para lo cual el ordenamiento jurídico no exija iniciativa de parte o sean consecuencia intrínseca de lo pretendido para su eficacia.

Deberá indicarse el tipo de proceso, el nombre y las calidades de las partes e intervinientes y sus representantes, además de los requisitos propios de toda resolución. En los considerandos se indicará:

- 1) Una síntesis de los alegatos, las pretensiones y las excepciones.
- 2) La enunciación clara, precisa y ordenada de los hechos probados y no demostrados cuando los haya, con referencia concreta a los medios probatorios en que se apoya la decisión, de cuyo contenido se hará una referencia lacónica, así como de los criterios de apreciación de esos elementos.

3) Un análisis de las gestiones incidentales pendientes, de las cuestiones pretendidas y debatidas por las partes, las excepciones y las costas. Se expresarán con claridad los fundamentos jurídicos y las razones de equidad en que se basa la decisión.

La parte dispositiva iniciará con lo resuelto sobre los incidentes, las excepciones y lo decidido en términos imperativos y concretos. Se indicarán, de forma expresa y separada, los extremos que se declaren procedentes y los denegados, así como lo dispuesto sobre costas.

Las sentencias que resuelvan la apelación y la casación incluirán un breve resumen de los aspectos debatidos en la resolución impugnada y de los alegatos del recurso. Al tribunal superior le está prohibido resolver solo con remisión a las consideraciones de la sentencia de la instancia inferior. Deberá expresar sus razones.

ARTÍCULO 82- Extremos por resolver de oficio

El tribunal podrá ajustar en sentencia las condenas a lo que legalmente corresponda, cuando resulte procedente, si hay de por medio derechos irrenunciables. Se pronunciará sobre extremos que el ordenamiento jurídico permita resolver sin requerimiento de parte, cuando sean consecuencia intrínseca de lo debatido y lo concedido. De igual forma, podrá disponer las nulidades vinculadas con las pretensiones acogidas, cuando sea estrictamente necesario por interés público, para resguardar la seguridad jurídica o garantizar la información de los registros y los archivos oficiales.

ARTÍCULO 83- Tipos de condena

La sentencia estimatoria obligará a la ejecución de las obligaciones y las prohibiciones que imponga, así como a la satisfacción de los extremos reconocidos de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

De conformidad con el tipo de condena, lo decidido deberá establecer:

1) En pronunciamientos de condena sobre extremos económicos determinables en dinero, se indicarán el monto exacto de las cantidades otorgadas, sus adecuaciones hasta la fecha de la sentencia, el de los intereses cuando corresponda y las costas.

La condena se hará en abstracto, cuando no se pueda determinar de una vez la cuantía o la extensión de dichos extremos, pero se indicarán las bases y los parámetros para hacer la fijación.

2) En condenas a pagar periódicamente sumas de dinero, se establecerán los parámetros para la determinación, la adecuación futura cuando proceda y el pago de estas. A solicitud de parte, podrá realizarse su conmutación.

3) Cuando se condene a pagar una cantidad por liquidar, procedente de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, así como en la rendición de

cuentas, se otorgará un plazo de diez días a la persona vencedora para presentar la liquidación o a la obligada para la rendición de cuentas, con arreglo a las bases establecidas.

4) Si se ordena la entrega de un bien, se prevendrá a la parte vencida el deber de hacerlo en el plazo que establecerá el tribunal, de acuerdo con las circunstancias. Si se trata de un mueble, la entrega deberá hacerse en el lugar donde se localice, según lo que se haya determinado en el proceso, al cual deberá apersonarse la vencedora para su retiro. Si es necesario, se podrá disponer del auxilio de la Fuerza Pública.

Transcurrido el plazo otorgado, se ordenará la puesta en posesión.

Cuando se condene a la entrega de cantidad determinada de frutos en especie, o de efectos de comercio, se le advertirá a la parte deudora que si no cumple en el plazo fijado se convertirán a dinero y se procederá a hacer efectiva la suma resultante.

5) Si se impone una obligación de hacer, el tribunal conferirá a la parte vencida un plazo, de acuerdo con las circunstancias, a fin de que cumpla. Le advertirá que si no lo realiza en ese lapso, la vencedora quedará autorizada, sin necesidad de ulterior resolución, para realizarlo por cuenta de la perdidosa, quien deberá pagar, además, los daños y perjuicios ocasionados con su negativa.

6) Si se condena a otorgar una escritura, se concederá un plazo para su cumplimiento, fijado de acuerdo con las circunstancias, con el apercibimiento que si no se realiza el tribunal la otorgará en nombre de la persona obligada. Si la escritura tiene efectos registrales, deberán cumplirse todos los requisitos necesarios para su inscripción, con los gastos a cargo de quien corresponda.

7) Cuando se trate de condenas de no hacer o de abstenerse de adoptar o ejecutar una conducta, se prevendrá que en caso de infringirse la obligación impuesta se podrá destruir o dejar sin efecto lo hecho en contra de lo ordenado. Además, se le advertirá que se le denunciará ante el Ministerio Público por el delito de desobediencia a la autoridad, sin perjuicio de que en sede penal la conducta se recalifique.

ARTÍCULO 84- Invariabilidad y corrección de sentencias

Los tribunales no podrán revocar ni modificar lo decidido en sentencia, pero sí aclarar cualquier pronunciamiento oscuro o contradictorio, o suplir omisiones sobre algún aspecto debatido.

ARTÍCULO 85- Cosa juzgada

Para que se produzca cosa juzgada, es necesaria la identidad de sujetos, objeto y causa, salvo norma expresa en contrario. Los efectos se limitarán a lo dispositivo y podrá ser declarada de oficio. Producen eficacia de cosa juzgada material las sentencias firmes emitidas en procesos ordinarios y las resoluciones expresamente indicadas por la ley. Ello hará indiscutible, en otro proceso, la existencia o no de la relación jurídica juzgada.

Las emitidas en los demás procesos tendrán eficacia de cosa juzgada formal.

CAPÍTULO II PLAZOS

ARTÍCULO 86- Improrrogabilidad de plazos

Los plazos establecidos en este Código son improrrogables, con las excepciones de ley. Cuando se permita la prórroga, esta deberá solicitarse antes del vencimiento del plazo. Lo que se resuelva carecerá de recurso.

Podrán renunciarse, ampliarse o restringirse con el consentimiento de las partes, salvo disposición expresa en contrario.

ARTÍCULO 87- Interrupción de plazos

Los plazos podrán interrumpirse por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten a las partes realizar o participar en el acto por sí o por medio de quien ejerza su representación, y se volverán a iniciar cuando haya cesado la causa. Durante la interrupción solo se practicarán actos urgentes y de aseguramiento.

Los motivos serán apreciados por el tribunal, de oficio o a instancia de parte. Entre otros, serán admisibles:

- 1) La muerte o la enfermedad grave de una parte, si carece de apoderado o apoderada judicial su abogado o abogada estará en la obligación de informarlo al tribunal tan pronto tengan conocimiento. De igual forma, si quien falleció es representante de una persona jurídica y no existe posibilidad legal de que otra asuma el cargo.
- 2) La muerte o la enfermedad grave del apoderado o apoderada judicial. En este caso, se notificará a la parte de forma personal, para que en el plazo de tres días, provea al cuidado de sus intereses. Dichos motivos no serán eficaces si son alegados por la parte que ha gestionado después de ocurridos, o no se invocan dentro de los tres días después de haber cesado.

ARTÍCULO 88- Plazos perentorios

Los plazos perentorios no podrán abreviarse o prorrogarse, ni aún por acuerdo de partes.

ARTÍCULO 89- Plazos judiciales

Cuando la ley sea omisa en cuanto a la duración de un plazo, el tribunal lo fijará tomando en cuenta la naturaleza del proceso, la importancia y las condiciones del acto. Igual facultad tendrá cuando este deba establecerse entre un máximo y un mínimo.

ARTÍCULO 90- Conteo de plazos

Los plazos de veinticuatro horas corresponden al día completo. Los plazos por días se entenderán hábiles, salvo disposición legal en contrario. Los plazos por años o meses, se contarán de fecha a fecha.

Cuando el día de partida no exista en el mes de vencimiento, el plazo concluirá el último día de este. Si el día final de un plazo es inhábil, se tendrá por prorrogado hasta el día hábil siguiente. La misma regla se aplicará cuando se declare asueto parte de ese día final.

Los plazos serán comunes, salvo disposición legal en contrario o cuando por su naturaleza el tribunal le otorgue el carácter de individual al corresponder el cumplimiento de una actuación o prevención solo a una de las partes.

Los plazos individuales correrán a partir del día siguiente de aquel en que se efectuó la notificación a cada una de las partes. Los comunes, al día siguiente a la última notificación que se practique.

ARTÍCULO 91- Vencimiento de los plazos

En todo plazo, el día de vencimiento se tendrá por concluido en el instante en que, según la ley, deba cerrar el despacho o las oficinas previstas para la recepción de documentos del lugar donde debe hacerse la gestión o practicarse la actuación. Serán admisibles y válidas las gestiones presentadas y las actuaciones iniciadas a la hora exacta en que se cierran estas.

En caso de que sean recibidas por oficinas encargadas para la recepción de documentos, así como cuando sea procedente el recibo electrónico de actos de parte, sus efectos se producirán el día y la hora de la presentación, con independencia de la jornada ordinaria de trabajo del respectivo despacho.

Para determinar la hora de realización del acto, se seguirá la hora oficial del reloj del tribunal, o lo que se desprenda de los sistemas tecnológicos de los cuales disponga el Poder Judicial.

El tribunal rechazará de plano las gestiones realizadas cuando hayan vencido los plazos, salvo que la ley disponga lo contrario o exija acusar rebeldía.

**CAPÍTULO III
ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA****ARTÍCULO 92- Nulidad de actos procesales**

La nulidad de los actos procesales procederá solo cuando se haya vulnerado el debido proceso y se cause indefensión. Quien la gestione deberá señalar el aspecto a corregir y su posible solución.

No podrá declararse la nulidad cuando:

- 1) Sea posible la subsanación del acto defectuoso.
- 2) El acto, aunque irregular, logre el fin para el que estaba destinado.
- 3) Quien la alegue sea la parte que concurrió a causarla, o esta no haya sufrido perjuicios por la violación.
- 4) Se trate de solicitudes de nulidad reiterativas ya denegadas.
- 5) No se haya reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil. En tal caso se tendrá por consentida tácitamente, salvo que se trate de extremos esenciales o insubsanables.
- 6) Quien tenga legitimación para impugnar el acto haya aceptado, expresa o tácitamente, sus efectos.

Los defectos de los actos procesales deberán subsanarse, siempre que sea posible. La rectificación del error o el cumplimiento del acto omitido no podrá retrotraer el proceso a periodos ya precluidos, salvo los casos expresamente previstos por este Código.

Cuando sea imprescindible la declaratoria de nulidad, se conservarán todas las actuaciones que en sí mismas no se vean afectadas por la invalidez. La nulidad, total o parcial, de un acto no conlleva la de las actuaciones que fueran independientes de aquel, ni impide que lo conservado produzca efectos legales, salvo disposición en contrario.

ARTÍCULO 93- Procedimiento de la nulidad

La nulidad de las resoluciones deberá ser alegada concomitantemente con los recursos procedentes. La de actuaciones practicadas en audiencia se reclamará y resolverá inmediatamente, previa audiencia a la contraria. La nulidad de actuaciones practicadas fuera de audiencia se gestionará vía incidental dentro de los tres días siguientes a que se tuvo conocimiento del acto defectuoso o estuvo en condición de conocerlo. Lo anterior cuando por la naturaleza del acto o por otra circunstancia no corresponda o resulte imposible hacerlo por vía de recursos o en la audiencia.

El derecho de alegar la nulidad precluirá si no se formula en el momento que corresponde, salvo que sea por vicios esenciales e insubsanables.

El tribunal podrá declarar de oficio la nulidad de los actos defectuosos o insubsanables, en su caso, en cualquier estado del proceso. Cuando la nulidad se refiera a resoluciones y actuaciones de un tribunal de instancia superior, el competente para decretarla será este. Contra lo resuelto, solo se podrá interponer recurso de revocatoria.

ARTÍCULO 94- Nulidad posterior a sentencia

Cuando se trate de procesos litigiosos en los cuales no proceda la revisión, podrá alegarse la nulidad con posterioridad a la resolución firme que ponga fin al proceso, mediante la vía incidental. El reclamo se sustentará en una de las causales por las cuales es admisible la revisión. Deberá plantearse dentro de los tres meses siguientes al conocimiento de la causal, o desde del momento en que debió conocerla o pudo hacerla valer la parte perjudicada. En caso contrario, se declarará inadmisibile.

**CAPÍTULO IV
SUSPENSIÓN DEL PROCESO****ARTÍCULO 95- Suspensión del proceso**

El trámite de los procesos solo se suspenderá por convenio de partes, prejudicialidad y en los casos previstos en la ley.

Las partes, de común acuerdo, podrán pedir la suspensión por única vez, por un plazo de hasta dos meses. Se decretará cuando no se vulnere el principio de inmediación y no se perjudique el interés general o a terceras personas. Si la solicitud tiene como fin conciliar o transar el proceso, el plazo podrá ser prorrogado por el período que se estime necesario.

ARTÍCULO 96- Prejudicialidad

Se podrá decretar la suspensión cuando para resolver el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que constituya el objeto principal de otro proceso pendiente, ante el mismo o distinto tribunal, si no es posible la acumulación de procesos. Se mantendrá hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial.

La existencia de un proceso penal en ningún caso dará lugar a prejudicialidad, salvo lo dispuesto en la ejecución hipotecaria o prendaria.

**CAPÍTULO V
LA DEMANDA Y LA CONTESTACIÓN****ARTÍCULO 97- Demanda**

La demanda deberá contener los siguientes datos:

- 1) El tribunal destinatario y el tipo de proceso.
- 2) El nombre de las partes y sus representantes, sus calidades, el número de identificación, los medios de notificación, el lugar exacto de su domicilio y los datos para su localización.

- 3) Los hechos relacionados con el objeto del proceso, expuestos con claridad y precisión.
- 4) El ofrecimiento detallado y ordenado de todos los medios de prueba.
- 5) La formulación clara, precisa e individualizada de las pretensiones, con indicación expresa de cuáles son las principales y separadamente las subsidiarias si las hubiera. Cuando se reclamen daños y perjuicios, deberá concretarse el motivo que los origina, en qué consisten y su estimación, la cual podrá hacerse de forma prudencial.
- 6) La estimación justificada de la demanda en moneda nacional. Si existen pretensiones en moneda extranjera, se usará el tipo de cambio respectivo al momento de su presentación, sin perjuicio de que en sentencia se pueda conceder lo pedido en la moneda solicitada.
- 7) Si el objeto de litigio es un inmueble, o se requiriera practicar una audiencia o diligencia fuera del despacho, deberán indicarse la ubicación exacta y las vías de acceso o, en su caso, el lugar idóneo de encuentro con el tribunal para guiarlo oportunamente, cuando sea preciso coordinar lo necesario para su debida realización.
- 8) El nombre de la persona abogada responsable de la dirección del proceso y sus suplentes, su número de teléfono, el correo electrónico y cualquier otro medio electrónico dónde localizarlos.
- 9) Cualquier dato de interés para la mejor comprensión del caso.
- 10) Podrán citarse los fundamentos de derecho que se invoquen en apoyo de la demanda.
- 11) La firma de la parte o su representante.

ARTÍCULO 98- Ofrecimiento y presentación de la prueba

En la demanda deberá indicarse la prueba ofrecida. Se aplicarán las siguientes reglas:

- 1) La prueba documental se aportará con la demanda o reconvenición. Salvo los casos en que se exija el original, podrá ser presentada en copia auténtica o simple, así como en certificación electrónica. Si se cuestiona la exactitud de la reproducción, deberá cotejarse con el original o verificarse el procedimiento de firmas y de certificación electrónica, si es posible técnicamente. De lo contrario, su valor probatorio quedará sujeto a la apreciación conjunta de los demás elementos probatorios.
Las copias de planos se presentarán sin fragmentarse y en papel tamaño carta, salvo que ello imposibilite su lectura. Podrán, adicionalmente, aportarse en formato digital. El tribunal procurará que se incorporen también de esa forma al expediente electrónico. Si la prueba documental se adjunta en un soporte que no permita la conservación de su contenido, esté incompleto, fragmentado, ilegible o con alteraciones, el tribunal ordenará que se aporten correctamente.
- 2) Podrá solicitarse que se emita orden para obtener información de registros o archivos particulares y privados, constancias o certificaciones, de interés para el proceso, siempre que no se contravenga lo dispuesto en el artículo 24 de la

Constitución Política, así como en las otras normas que regulen la protección de los datos personales.

3) Si se propone prueba pericial, se indicarán los temas objeto de la pericia, el cuestionario específico y se sugerirá la especialidad de la persona experta. Podrá solicitarse que el dictamen sea rendido por una o un funcionario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o de instituciones públicas. El tribunal valorará la pertinencia y la legalidad de la petición.

4) Las partes podrán aportar, con la demanda o contestación, informes técnicos elaborados por particulares o colegios profesionales. Se indicarán los datos de quien los elaboró, a fin de verificar su idoneidad.

5) En la prueba testimonial se especificarán el nombre completo, las calidades y el domicilio de las personas declarantes, así como los hechos sobre los cuales se referirán.

6) Cuando se ofrezca declaración de parte, en caso de personas jurídicas y esta cuente con varios representantes, deberá especificarse si se requiere alguien en particular.

Si se omite algún requisito al ofrecerse la prueba, se prevendrá su corrección en el plazo de tres días, con el apercibimiento de que se podrá declarar inadmisibles, de una vez o en la audiencia preparatoria, según corresponda.

ARTÍCULO 99- Estimación de la demanda

La estimación se fijará según el interés económico de la demanda. Para su determinación se tomará como base lo establecido en la normativa procesal civil. Al fijar la cuantía, el tribunal podrá aumentar o disminuir el monto de la estimación expresada por la parte actora, con base en los parámetros legales.

ARTÍCULO 100- Demanda defectuosa

Si la demanda no cumple los requisitos legales, el tribunal otorgará tres días para su cumplimiento, especificando todos los defectos, con el apercibimiento de declararla inadmisibles. Igual consecuencia se producirá si dentro de ese lapso la parte no subsana los defectos que puedan tener los documentos presentados con la demanda para demostrar su capacidad procesal.

La parte demandada, dentro del emplazamiento, podrá pedir que se corrijan los defectos de la demanda o se subsane cualquier vicio de capacidad o representación de la actora. La petición deberá ser resuelta de inmediato. Si la corrección implica cambios sustanciales en la demanda, se conferirá un nuevo emplazamiento, el cual se notificará donde la parte demandada haya señalado.

ARTÍCULO 101- Demanda improponible

Se rechazará la demanda, o la solicitud inicial en procesos no contenciosos, cuando sean evidentemente improponibles, mediante sentencia anticipada, emitida al inicio o en cualquier estado del proceso. Lo serán aquellas en que:

- 1) La pretensión sea evidentemente contraria al ordenamiento jurídico, imposible o carente de interés.
- 2) Se ejerciten en fraude procesal o con abuso del proceso.
- 3) Sea aplicable la caducidad.
- 4) La pretensión haya sido objeto de pronunciamiento en un proceso anterior con autoridad de cosa juzgada, de modo que el nuevo sea reiteración del anterior.
- 5) Quien la propone carezca, de forma evidente, de legitimación.
- 6) En proceso anterior se haya renunciado al derecho.
- 7) El derecho haya sido conciliado o transado y exista resolución firme que los haya homologado o sometido a arbitraje con anterioridad.
- 8) El proceso se refiera a nulidades procesales que han debido alegarse en aquel donde se causaron.
- 9) Sea evidente la falta de un presupuesto material o esencial de la pretensión.

ARTÍCULO 102- Modificación o ampliación de la demanda

La demanda podrá ser modificada o ampliada en cuanto a las partes, los hechos, las pretensiones y las pruebas, antes de la contestación o de que haya vencido el plazo para contestar, salvo en procesos monitorios y de ejecución. El nuevo emplazamiento deberá hacerse por tres a cinco días.

En el proceso ordinario también podrán ampliarse los hechos y las pretensiones en la audiencia preparatoria.

ARTÍCULO 103- Emplazamiento

Si la demanda es admisible, el tribunal emplazará a la parte demandada para su contestación, en la resolución respectiva indicará el plazo, la forma cómo deberá hacerlo y las consecuencias en caso de omisión.

Los efectos del emplazamiento, tanto materiales como procesales, se producirán a partir de su notificación, conforme lo dispuesto en la normativa procesal civil.

ARTÍCULO 104- Contestación negativa de la demanda

La parte demandada deberá contestar la demanda dentro del emplazamiento. De ser necesario, aclarará sus calidades y se referirá a los hechos de la demanda en el orden en que fueron expuestos, expresando, de forma razonada y clara, si los reconoce como ciertos, los rechaza por inexactos, los admite con variantes o rectificaciones, o los desconoce de manera absoluta. Manifestará con claridad su posición sobre la pretensión, la estimación, la prueba y los fundamentos legales si los hay. Ofrecerá y presentará todas sus pruebas del modo previsto para la demanda. Indicará medio para recibir las comunicaciones futuras y los datos necesarios para su localización. Podrá interponer excepciones, debidamente fundadas. Se le otorgarán tres días para que corrija los defectos.

ARTÍCULO 105- Excepciones procesales

Solo son admisibles como excepciones procesales, las siguientes:

- 1) Falta de competencia.
- 2) Falta de agotamiento de la vía administrativa, cuando sea obligatoria.
- 3) Prescripción.
- 4) Compromiso arbitral o cláusula de sometimiento a conciliación o transacción extrajudiciales.
- 5) Falta de integración de litisconsorcio pasivo necesario.
- 6) Indebida acumulación de pretensiones.
- 7) Demanda improponible.
- 8) Litispendencia.

ARTÍCULO 106- Resolución de excepciones

Todas las excepciones procesales se resolverán en la audiencia preparatoria, salvo la de incompetencia.

La de prescripción, así como transacción, conciliación, cosa juzgada, acuerdo arbitral y caducidad, como causales de demanda improponible, se acogerán en la audiencia preparatoria cuando sean evidentes o manifiestas. De lo contrario, se resolverán en la sentencia. Lo resuelto en cuanto al rechazo de estas en esa audiencia no enervará que puedan ser analizadas nuevamente al resolverse sobre el fondo.

ARTÍCULO 107- Momento y forma para interponer las excepciones

Las excepciones procesales y materiales deberán oponerse al contestar la demanda o la contrademanda. Podrán invocarse y fundamentarse excepciones materiales, incluida la de prescripción, hasta en la fase probatoria de la audiencia de juicio, si los hechos ocurren con posterioridad a la contestación o llegan a conocimiento de la parte demandada, después de expirado el plazo para contestar.

En procesos ordinarios, las excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad podrán formularse hasta antes de dar inicio la fase de conclusiones de la audiencia de juicio. Serán resueltas en sentencia.

ARTÍCULO 108- Excepción de indebida acumulación de pretensiones

La excepción de indebida acumulación de pretensiones se resolverá en la audiencia preparatoria. De acogerse, se ordenará la desacumulación, lo cual podrá disponerse aún de oficio. Si fueran excluyentes, podrán acumularse como principales y subsidiarias. La desacumulación deberá realizarse de inmediato, de lo contrario el tribunal lo hará. Lo anterior se aplicará cuando se mantenga la imposibilidad de acumulación entre las elegidas. Contra la resolución que declare con lugar dicha excepción, procederá el recurso de apelación en efecto suspensivo.

ARTÍCULO 109- Reconvencción y réplica

En procesos ordinarios, la parte demandada podrá reconvenir a la actora y a otras personas que no lo sean. Deberá hacerlo al contestar la demanda y cumplir los mismos requisitos exigidos para esta. La demanda y la reconvencción han de ser conexas.

Si se admite la contrademanda, se concederá a la reconvenida un plazo de quince días para contestar. La réplica tendrá iguales requisitos que la contestación.

ARTÍCULO 110- Rebeldía

La falta de contestación de la parte demandada la constituirá en rebelde, sin necesidad de resolución que así lo declare. Podrá comparecer en cualquier momento, pero tomará el proceso en el estado en que se encuentre. La rebeldía no implicará que deban tenerse necesariamente por admitidos los hechos de la demanda. Al pronunciarse sobre el fondo de lo debatido, el tribunal deberá tomar en consideración el resultado integral de la prueba.

Si la parte demandada se apersona al proceso pero omite contestar la demanda o no lo hace oportunamente, se emitirá sentencia anticipada luego de escuchar las conclusiones de la parte actora, salvo que sea necesario convocar a audiencia para realizar otras etapas del proceso.

ARTÍCULO 111- Allanamiento

Si la parte demandada se conforma de manera expresa con lo pretendido en la demanda, se dictará sentencia anticipada, salvo si existen indicios de fraude procesal, la cuestión planteada es de orden público, se trate de derechos indisponibles, irrenunciables o resulte indispensable recibir prueba para resolver, en cuyo caso se continuará con el procedimiento.

Si se expresa conformidad parcial con la demanda, se dictará de una vez sentencia sobre los extremos aceptados, con las salvedades indicadas en el párrafo anterior. Cuando se allane la Administración Pública, deberá presentarse el acuerdo o la resolución que lo autorice.

La actora contará con el plazo de cinco días para informar al tribunal si opta por ejecutar lo decidido de inmediato o lo reserva para el proceso de ejecución del principal. En el primer supuesto, la ejecución se tramitará en legajo o carpeta separados. El proceso seguirá su curso normal en cuanto a las pretensiones no aceptadas.

ARTÍCULO 112- Procedimiento simplificado

Las partes podrán presentar la demanda y la contestación de manera conjunta, renunciando al emplazamiento y solicitando que se señale de una vez la audiencia de juicio. Si no existe prueba que practicar, podrán solicitar se proceda al dictado de la sentencia.

Las partes podrán solicitar, en la demanda o en la contrademanda, que una vez contestadas estas, el proceso se resuelva de una vez, con la prueba que conste. Al emplazarse de la demanda o la reconvención, el tribunal necesariamente hará indicación de esa solicitud. Si no se formula oposición en la contestación o la réplica, se tendrá por aceptada tácitamente la solicitud y se procederá a la emisión de la sentencia, salvo que el tribunal considere que se está ante un fraude procesal. Cuando se rechace la gestión, se continuará con la tramitación del proceso.

TÍTULO VI ACTIVIDAD PROCESAL PROBATORIA

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA

ARTÍCULO 113- Fin y carga de la prueba

La actividad probatoria tiene por objeto la búsqueda de la verdad real. La carga de la prueba incumbe, salvo disposición en contrario, a quien:

- 1) Formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho.
- 2) Se oponga a una pretensión, afirmando hechos impeditivos, modificativos, extintivos del derecho de la parte demandante.
- 3) Quien funde su derecho en leyes extranjeras ha de probar la existencia de estas.

Para la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria de cada una de las partes, de acuerdo con la naturaleza de lo debatido. Las normas precedentes se aplicarán salvo que una disposición legal distribuya con criterios especiales la carga de la prueba.

ARTÍCULO 114- Medios de prueba

Son medios de prueba admisibles la declaración de parte, la declaración testimonial, el dictamen de peritos, los documentos, los informes, los reconocimientos judiciales, la prueba científica o tecnológica y cualquier medio probatorio legalmente permitido.

ARTÍCULO 115- Admisibilidad de la prueba

Serán admisibles las pruebas que tengan relación directa con los hechos debatidos, siempre que sean controvertidos.

Se aceptará la prueba útil y pertinente, y se rechazará la referida a hechos admitidos de forma expresa o que legalmente deban tenerse como tales, salvo que el tribunal considere se esté ante un fraude procesal. También se denegará la prueba concerniente a hechos evidentes o notorios y la prueba abundante, la inconducente y la ilegal.

Cuando sea necesario para la celeridad del proceso, el tribunal podrá admitir prueba, previo a la audiencia preparatoria, cuando sea necesario, en tal caso tomará las medidas pertinentes para que pueda ser recibida en la de juicio.

Las pruebas podrán ser consignadas y aportadas al proceso mediante cualquier tipo de soporte documental, electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, siempre que sean compatibles con los dispositivos que utilice el Poder Judicial.

ARTÍCULO 116- Deber de cooperación de las partes

Las partes deben diligenciar la obtención de las pruebas que ofrezcan. Podrán solicitar la cooperación del tribunal para obtener órdenes, citar las y los testigos, las y los peritos u ordenar su comparecencia por cualquier medio legal. La prueba no recibida o practicada por culpa de la oferente, se tendrá por inevaluable sin necesidad de resolución expresa.

Si es necesario practicar un reconocimiento judicial, una revisión de un bien para una pericia o la valoración de partes, si la obligada se opone u obstaculiza el acto injustificadamente, el tribunal la intimará para que preste la colaboración debida. Si mantiene su negativa, podrá tenerse como indicio de lo que se pretende demostrar, desvirtuar o hacer dudoso, sin perjuicio de ordenar el ingreso forzoso.

ARTÍCULO 117- Colaboración de personas ajenas al proceso

Las personas ajenas al proceso tienen el deber de prestar colaboración cuando sea necesario para la práctica efectiva de las actuaciones procesales.

ARTÍCULO 118- Ingreso o paso por propiedad privada

Si la colaboración de personas ajenas al proceso consiste en ingreso o paso a propiedad privada, el tribunal hará los apercibimientos legales sobre la eventual comisión del delito de desobediencia a la autoridad; si se niegan injustificadamente a colaborar, se remitirá testimonio de piezas a la sede penal, sin perjuicio de ordenar el ingreso forzoso, mediante resolución fundada. Además, advertirá que deberán evitarse daños o gastos innecesarios a esas personas o a su patrimonio. Si se

produce alguno, la indemnización estará a cargo de quien propuso la prueba, y si se ordenó de oficio, a quien le corresponda la carga probatoria.

ARTÍCULO 119- Deber de veracidad y juramento

Quienes declaren o rindan peritajes serán juramentados. Se les harán las advertencias legales sobre el deber de veracidad. El juramento no será exigido a las personas menores de doce años. No obstante, se les preguntará si conocen la diferencia entre la verdad y la falsedad de sus manifestaciones.

ARTÍCULO 120- Deber de guardar secreto

Cuando deban examinarse elementos probatorios de carácter privado, se incorporarán garantizando su reserva. El tribunal prevendrá a las partes y demás personas que presenciaron el acto el deber de guardar secreto acerca de lo examinado.

ARTÍCULO 121- Concentración y secuencia de las pruebas

La práctica de la prueba iniciará con la incorporación de la documental, el reconocimiento judicial, la declaración de partes, el dictamen pericial y la testimonial. A solicitud fundada de parte o de oficio, podrá alterarse dicho orden.

Para el recibo de los elementos probatorios el tribunal establecerá en qué sesión y día se practicará cada uno.

ARTÍCULO 122- Forma de los interrogatorios

Los interrogatorios serán orales y directos. En ellos deberán respetarse las siguientes reglas:

- 1) Las preguntas serán claras y precisas. No podrán referirse a más de un hecho y se procurará que las expresiones utilizadas sean comprensibles para quien declara. Si es necesario, el tribunal explicará sumariamente su contenido. Rechazará las preguntas que no guarden relación directa con los hechos controvertidos o el objeto del proceso, las impertinentes, las inconducentes, repetidas y dilatorias. También las referidas a hechos admitidos, evidentes y notorios, salvo que la parte alegue desconocimiento de estos, las insinuanes, las ofensivas, las insultantes o las capciosas.
- 2) Las respuestas no incluirán valoraciones o calificaciones, excepto las que ofrezcan las personas expertas y testigos técnicos. El tribunal limitará las respuestas cuyo contenido no verse sobre lo debatido.
- 3) Si surge controversia sobre la forma y el contenido de alguna pregunta, las partes expondrán brevemente su posición, sin sugerir o insinuar respuestas. No se decretará el receso de la audiencia y se retirará a la persona declarante, salvo que el tribunal lo estime innecesario.
- 4) Quien declare no podrá leer notas ni apuntes, excepto cuando sean personas

expertas o se autorice por tratarse de preguntas referidas a cifras, fechas, planos, croquis, datos de difícil precisión o cuando el tribunal lo estime necesario. De ser previsible la consulta de documentos en la audiencia, deberán tenerse cuando declare y si se considera pertinente, el tribunal ordenará su incorporación.

5) El tribunal podrá pedir aclaraciones, sin que con ello afecte la declaración fluida de la persona declarante.

ARTÍCULO 123- Práctica de la prueba en el lugar de los hechos y en sitios distantes

La prueba se recibirá en el lugar de los hechos, sin sujeción a las limitaciones de competencia territorial, salvo que sea innecesaria la itinerancia del tribunal, lo cual deberá justificarse.

Se podrá recibir la prueba a través de medios tecnológicos, siempre que se garanticen la inmediación y el contradictorio, cuando deba practicarse en lugares distantes de la sede del tribunal, resulte imposible, muy oneroso o innecesario su desplazamiento, así como por motivos de seguridad. El tribunal deberá justificar las razones de tal decisión.

ARTÍCULO 124- Práctica de la prueba en el extranjero

La prueba que se encuentre en otro país podrá ser recibida por medios tecnológicos, siempre que se garantice la inmediación, de conformidad con la legislación costarricense.

ARTÍCULO 125- Declaración domiciliaria o en otro recinto

Cuando quien deba declarar no pueda comparecer a la sede del tribunal o al lugar donde se deba recibir la prueba, por enfermedad, estado de gravidez u otras circunstancias especialmente justificadas, se podrá disponer lo haga en su domicilio o donde se encuentre. La proponente asumirá los gastos, con las salvedades de ley.

En situaciones excepcionales, el tribunal podrá ordenar se reciba la prueba sin la presencia de las partes y sus abogados. En tales casos, si no es posible la videoconferencia u otro medio tecnológico análogo, hará de su conocimiento la reproducción de las respuestas obtenidas mediante video y audio, a fin de que soliciten las aclaraciones o adiciones que estimen necesarias. La proponente asumirá los gastos, con las salvedades de ley.

ARTÍCULO 126- Nombramiento de intérpretes y declaraciones en condiciones especiales

Cuando se requiera de una persona intérprete o deba recibirse una declaración en condiciones especiales, se seguirán las siguientes reglas:

- 1) Si quien declara es una persona menor de edad, adulta mayor, en condición de discapacidad o con limitaciones idiomáticas, el tribunal deberá adoptar las medidas que garanticen sus derechos, dignidad y seguridad.
- 2) Si se requiere una persona intérprete, la parte proponente deberá solicitarlo al ofrecer la prueba, y cubrir sus honorarios y gastos, salvo disposición en contrario. El tribunal procurará que las declarantes comprendan lo que acontece en la audiencia. Si es del caso, deberá proveer intérprete aun cuando no exista solicitud expresa, con los costos a cargo de quien corresponda.
- 3) En los procesos en que intervenga como parte o declarante una persona indígena, si requiere intérprete será facilitado a cargo del Poder Judicial. En tales supuestos, así como cuando sea necesario para evitar discriminaciones y garantizar la efectividad de la declaración, se adoptarán medidas según las características y las necesidades particulares de quien declara.
- 4) Quien tenga alguna limitación que le afecte la comunicación oral de forma permanente o temporal, se le nombrará intérprete. Si sabe leer y escribir, podrá optar por contestar el interrogatorio por escrito, en cuyo caso así se les formulará. Si no pueden usar métodos alternativos conocidos, pero sí un lenguaje personal, la intérprete deberá conocer su forma de comunicación y no tener interés en el asunto.
- 5) Si es necesario, a fin de garantizar la seguridad e integridad del tribunal, las partes y las personas declarantes, se tomarán las previsiones tecnológicas y de infraestructura necesarias.

ARTÍCULO 127- Prueba trasladada

Podrán admitirse las pruebas practicadas en otro proceso y en procedimientos administrativos, cuando se trate de las mismas partes. Si quien no ha sido parte en aquel proceso o procedimiento se opone, no podrán ser trasladadas, y se podrá admitir como prueba documental.

ARTÍCULO 128- Prueba para mejor resolver

En la audiencia preparatoria, el tribunal podrá ordenar la prueba de oficio que estime necesaria para determinar la verdad real de los hechos.

Además, podrá admitirse u ordenarse para mejor resolver, de manera excepcional, hasta antes de cerrarse la audiencia de juicio. De ser necesario, podrá decretarse la suspensión de esa audiencia para obtenerla. Si no se han logrado incorporar las probanzas ordenadas al cierre de la audiencia de juicio, se prescindirá de ella.

Cuando se trate de prueba referida a información de registros públicos o la actualización de información que conste en el proceso, para verificar su vigencia, el tribunal podrá obtener la información directamente, por algún medio electrónico o tecnológico a su alcance. De no ser posible, la pedirá de oficio o prevendrá aportarla a quien corresponda la carga probatoria.

ARTÍCULO 129- Prueba para mejor resolver en segunda instancia y casación

La admisión de prueba para mejor resolver en segunda instancia y casación, de oficio o a instancia de parte, tendrá carácter excepcional.

La ofrecida por las partes solo podrá admitirse cuando sea estrictamente necesaria para resolver lo que es objeto de alzada, si no se pudo ofrecer o practicar en primera instancia por causas ajenas a estas, lo cual deberá demostrarse.

El plazo para emitir la sentencia se suspenderá cuando sea necesario practicarla o recibirla.

ARTÍCULO 130- Apreciación de la prueba

Las pruebas se valorarán bajo el principio de libre apreciación valoratoria.

Deberán expresarse los fundamentos fácticos, jurídicos y de equidad de los motivos por los cuales se confirió mayor o menor valor a unas u otras probanzas. No se podrá hacer una referencia general al conjunto probatorio como fundamento de las conclusiones. Deberá siempre hacerse la indicación concreta de los elementos particulares que sirven de apoyo.

CAPÍTULO II MEDIOS DE PRUEBA

SECCIÓN I DECLARACIÓN DE PARTE

ARTÍCULO 131- Declaración de parte

Las partes declararán sobre hechos propios o ajenos y podrán formularse preguntas recíprocamente. Las personas físicas lo harán de forma personal y las jurídicas por medio de su representante legal.

En la declaración de parte, se seguirán las siguientes reglas:

- 1) Si una parte fue ofrecida como declarante, deberá comparecer a la audiencia de juicio. No podrá ser obligada a declarar más de una vez sobre los mismos hechos en el proceso.

- 2) Las personas representantes declararán cuando se trate de hechos realizados durante su gestión. Si no hubieran intervenido en estos, estarán obligadas a responder según el conocimiento que tengan de los hechos.
- 3) Durante la audiencia de juicio, el tribunal podrá ordenar, de oficio o a solicitud de la contraria, que se rinda declaración de la parte presente, sin necesidad de que previamente se haya solicitado dicha prueba.
- 4) Si deben declarar dos o más partes sobre los mismos hechos, se tomarán las medidas necesarias para evitar la comunicación entre ellas durante el transcurso de la audiencia. Después de recibidas las declaraciones, el tribunal les informará de forma resumida lo ocurrido durante su ausencia.
- 5) No tendrán facultades para declarar en contra de quien se representa las personas que ostenten los cargos de albaceas, curadoras, tutoras, representantes de personas menores de edad, del Estado y sus instituciones, municipalidades y juntas de educación.

ARTÍCULO 132- Efectos de la declaración de parte anticipada

Cuando se reciba anticipadamente la declaración de parte y se reconozca la existencia de una deuda u obligación, se ejecutará lo reconocido mediante proceso monitorio o de ejecución, según corresponda.

SECCIÓN II PRUEBA TESTIMONIAL

ARTÍCULO 133- Declaración testimonial

Será admisible la prueba testimonial para demostrar todo tipo de hechos. Podrá rendirla cualquier persona con conocimientos sobre los hechos controvertidos, que tenga posibilidad de comunicar lo que conoce.

Las personas menores de edad podrán rendir testimonio cuando, a criterio del tribunal, tengan posibilidad de comunicar lo que conocen y declarar de manera veraz. Para tales efectos, el tribunal se ajustará a lo dispuesto en el Código de la Niñez y la Adolescencia y demás normativa especial.

Si quien declara tiene conocimientos científicos, técnicos, profesionales o prácticos, se admitirán las opiniones que, en virtud de sus conocimientos, agreguen a la respuesta.

El tribunal admitirá la prueba testimonial en un máximo de tres personas, si se ofrecen sobre hechos generales, o uno por tema específico. De oficio o ante solicitud fundada, se podrá ampliar o reducir su número, según la trascendencia y la necesidad de la prueba.

ARTÍCULO 134- Declaración testimonial en el extranjero

Solo se admitirá la declaración en el extranjero cuando sea absolutamente indispensable y la parte proponente carezca de otros medios para demostrar los hechos invocados. Se procederá conforme a las reglas de la normativa nacional que la regula. Podrá requerirse la autorización del Estado donde se encuentre la persona testiga, para que un juez o una jueza de ese país colabore con la realización del acto, cuando sea posible hacerlo mediante videoconferencia o un medio tecnológico afín. También podrá disponerse de la ayuda de quien ejerza la representación consular.

ARTÍCULO 135- Deber de declarar y abstenciones

Las personas testigas están en el deber de declarar la verdad de cuanto conozcan y les sea preguntado. Esta obligación se extiende a las funcionarias y los funcionarios públicos respecto de los informes y las certificaciones que hayan emitido.

Puede abstenerse de declarar la persona que sea examinada sobre hechos que conlleven responsabilidad penal contra sí misma, su cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive, de consanguinidad o afinidad. Podrán negarse a contestar preguntas que violen su deber o facultad de reserva, quienes estén amparados por el secreto profesional o, si conforme al ordenamiento jurídico, deban guardar secreto.

Deberá informárseles acerca de la facultad de abstención de que gozan antes de rendir testimonio. Podrán ejercerla al momento de responder determinadas preguntas. En caso de que sean citadas, deberán comparecer a la audiencia y explicar las razones de su abstención. Si el tribunal estima que se invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración en el acto.

ARTÍCULO 136- Citación de las personas testigas

La citación de las personas testigas se podrá hacer por cualquier medio escrito o tecnológico, de lo cual se dejará constancia. Se pedirá el auxilio de la Fuerza Pública si es necesario.

La parte proponente que requiera la citación deberá solicitar que se emita la orden con suficiente anticipación para que sea recibida con al menos tres días de antelación. Le corresponderá diligenciarla y devolverla al despacho antes del inicio de la audiencia correspondiente. En casos de urgencia, se podrá pedir sean citadas por el tribunal, sin plazo previo.

La persona declarante debidamente citada por medio de orden escrita, que rehúse comparecer sin justa causa, podrá ser conducida a la audiencia por la Fuerza Pública. Si injustificadamente se niega a declarar, es omisa o esquiva, se testimoniarán piezas al Ministerio Público para la respectiva investigación penal.

ARTÍCULO 137- Sustitución de las personas testigas

Procederá la sustitución fundada de las personas testigas ofrecidas y admitidas. La de estas últimas se aceptará solo por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, que impida su apersonamiento a la audiencia al momento de rendir declaración. La solicitud se tramitará y resolverá en la audiencia preparatoria si es por causas posteriores, en la audiencia de juicio.

ARTÍCULO 138- Práctica de la prueba testimonial

Durante la audiencia de juicio, antes de declarar, las personas testigas deberán estar aisladas; no podrán comunicarse entre sí, ver, oír o ser informadas de lo que ocurre en ella. Después de rendir su declaración, se podrá ordenar que continúen separadas, o autorizar su retiro o permanencia en el lugar donde se realice. El incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración, pero el tribunal apreciará esta circunstancia al valorar la prueba.

A cada manifestante se le instruirá acerca de sus derechos y obligaciones. Se le juramentará, con las excepciones de ley, haciéndole saber los alcances y las penas del delito de falso testimonio y que debe decir verdad, sin omitir hechos y demás aspectos sobre los cuales se le preguntará. Se le preguntará sobre su nombre, apellidos, edad, estado civil, profesión, oficio, domicilio, vínculo de parentesco con las partes e interés con el proceso; si es extranjero, los años de permanencia en el país y sobre cualquier otra circunstancia útil al proceso.

Quien declare relatará, de forma breve y espontánea, lo que conozca de los hechos para los cuales fue ofrecida, y los motivos por los que sabe de ellos, de la forma más clara posible, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron. Luego se realizará el examen directo. No se admitirán preguntas sugestivas, salvo en el contraexamen.

ARTÍCULO 139- Secuencia

Las personas testigas se recibirán de forma alterna, según hayan sido admitidas a cada parte. Estas dispondrán el orden de la declaración, salvo que por motivos fundados el tribunal determine la alteración de dicho orden.

Serán examinados por la proponente, seguida de la contraria y, finalmente, por el tribunal, sin perjuicio de que este pida aclaraciones en cualquier momento para evitar confusiones, garantizar el orden de la audiencia y en la búsqueda de la verdad real. Al concluir la declaración, las partes y el tribunal podrán repreguntar.

ARTÍCULO 140- Examen abusivo o redundante

El tribunal podrá dar por terminado el examen para quien lo formula, cuando sea evidente que esté prolongando la audiencia sin motivo, las preguntas sean reiteradas, versen sobre temas rechazados o insinúen la respuesta. Antes de imponerse esa sanción, deberá apercibirse a quien corresponda, el deber de corregir su actuación. Las partes podrán objetar las preguntas que se formulen, cuando no sean legalmente procedentes.

ARTÍCULO 141- Gastos de las personas testigas

La persona que declare como testiga tiene derecho a obtener de la parte que la propuso el importe por alimentación y transporte. Si es propuesta por varias partes, será asumido por igual entre ellas.

El monto por retribuir, a falta de acuerdo entre la parte y su testiga, se fijará teniendo en cuenta los datos y las circunstancias que consten en el proceso, una vez finalizada la audiencia respectiva. Si no se cancela en el plazo de cinco días a partir de la firmeza de la resolución, la declarante podrá gestionar el cobro por medio de la vía respectiva.

Quien declare no podrá sufrir rebajas en su salario por comparecer a los procesos, por el tiempo que haya estado a disposición del tribunal para rendir declaración. Podrá solicitar se le expida una constancia de su presencia en la audiencia, la duración y el lugar donde se efectuó.

**SECCIÓN III
PRUEBA PERICIAL****ARTÍCULO 142- Admisibilidad de la prueba pericial**

Será admisible la prueba pericial cuando, para apreciar hechos, circunstancias relevantes o adquirir certeza de ellos, sean necesarios conocimientos científicos, técnicos, prácticos, o cualquier otro, ajenos al derecho.

Si se ofrece por más de una parte para igual tema, el nombramiento recaerá en una sola persona experta o un solo equipo. Las partes podrán, de común acuerdo, hacer el nombramiento, siempre que reúna los requisitos de ley.

Si no existen profesionales, o no aceptan el cargo, se podrán nombrar a personas prácticas. También, cuando el dictamen verse sobre aspectos que no exijan título profesional.

Cuando se admita u ordene que los criterios técnicos los emita una entidad pública, el tribunal remitirá los oficios respectivos. Si no es posible hacerlo por medios tecnológicos, la parte interesada deberá diligenciarlos.

ARTÍCULO 143- Designación y aceptación del cargo

La persona experta se designará de la lista elaborada por el Poder Judicial, tomando en cuenta la naturaleza y el objeto de la experticia. Cuando las circunstancias del caso exijan la realización de diferentes pruebas periciales o de varias profesionales para dictaminar sobre una misma cuestión, podrán las partes o el tribunal proponer que se integre un equipo interdisciplinario, con el fin de concentrar las experticias requeridas, o elegir alguno del listado oficial.

Al hacer el nombramiento, el tribunal indicará con precisión los aspectos sobre los cuales deberá emitirse el dictamen. Para la aceptación se le conferirá un máximo de tres días, una vez que le sea comunicada la designación, por cualquier medio idóneo, de lo cual se dejará constancia. Si no acepta, se hará otro nombramiento.

ARTÍCULO 144- Honorarios y gastos

Los honorarios, gastos y cualquier otro costo para practicar la prueba pericial los asumirá la parte proponente, a menos que se haya ordenado la emisión del dictamen a cargo de una persona funcionaria del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o de entidades estatales. Serán fijados al momento de la designación, otorgándose un plazo máximo de cinco días para su depósito. Si la contraria amplía los temas objeto de la pericia, deberá contribuir proporcionalmente, según lo disponga el tribunal.

Los honorarios serán fijados prudencialmente tomando en cuenta la naturaleza del dictamen, el trabajo y el tiempo que exija, así como las tarifas vigentes en cada colegio profesional o las establecidas en el decreto de salarios mínimos. Los gastos se fijarán con base en los parámetros dispuestos por el Poder Judicial.

La falta de depósito de esos montos tendrá como consecuencia la inevaluabilidad total o parcial de la prueba, sin necesidad de resolución que así lo establezca. Lo anterior regirá, salvo que una de las partes mantenga interés en su práctica, en cuyo caso deberá depositar la totalidad dentro de los tres días siguientes a la comunicación de dicha circunstancia, por cualquier medio idóneo.

A solicitud de la persona experta, podrá girársele por adelantado para la realización del dictamen la suma correspondiente a gastos, de forma total o parcial. Si por su culpa no lo rinde, deberá devolverla en el plazo de tres días, a partir de que se le prevenga por el tribunal. En caso contrario, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, la parte podrá ejecutar su cobro por medio del proceso monitorio; para ese efecto, el tribunal expedirá la certificación respectiva.

ARTÍCULO 145- Elaboración y presentación del dictamen

Si no se indica de forma debida cuál es el objeto de la pericia, la persona experta deberá pedir al tribunal, por cualquier medio, las aclaraciones pertinentes, antes de proceder con su labor. Asimismo, pedirá al tribunal que haga la comunicación

debida a las partes con señalamiento de hora y fecha en los casos cuando requiera de su presencia en la práctica de la prueba o para visitar un inmueble.

Las partes podrán concurrir a esas diligencias, sin obstaculizarlas. Estarán obligadas a prestarle auxilio a la persona experta, en cuanto sea necesario para el cumplimiento de su labor. Si se niegan, se podrá pedir al tribunal la adopción de las medidas pertinentes.

Si no se rinde el dictamen en el plazo conferido, no se amplía o no comparece la experta sin justa causa a la audiencia de juicio, perderá sus honorarios y gastos.

ARTÍCULO 146- Requisitos del dictamen

La experticia será fundada y contendrá, de manera clara y precisa, una relación detallada de las actividades realizadas, fuentes, parámetros o elementos técnicos y probatorios utilizados y las conclusiones. Se adjuntarán los documentos y los anexos respectivos, o se indicará la fuente correspondiente, cuando no sea posible incluirlos. Deberá presentarse por escrito y firmado, al menos tres días antes de la audiencia de juicio, sin perjuicio del informe oral en las audiencias.

ARTÍCULO 147- Examen del dictamen en audiencia

El dictamen pericial será examinado en la audiencia de juicio, primero por la parte proponente, luego por la contraria y finalmente por el tribunal. Las partes podrán contar con el auxilio de personas asesoras técnicas o profesionales.

Quien rinda el peritaje comparecerá a la audiencia y expondrá brevemente su dictamen. En ese acto, podrán pedírsele las aclaraciones o las adiciones necesarias e, incluso, objetarse y cuestionarse el informe, con otros medios probatorios. Deberá dar las explicaciones requeridas y referirse a la prueba invocada en contra de sus conclusiones.

ARTÍCULO 148- Dictámenes o informes técnicos

El tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, solicitar dictámenes o informes técnicos de universidades, institutos, colegios profesionales, laboratorios oficiales u otros organismos especializados, públicos o privados, cuando se refieran a aspectos propios de sus funciones, conocimientos o experiencia. En la resolución que lo ordene se indicarán la persona, la dependencia u oficina encargada de realizarlo y el plazo conferido. Será aplicable lo regulado para la rendición de informes en general.

ARTÍCULO 149- Verificación de estados económicos, financieros y rendición de cuentas

Para la certificación de estados financieros o la realización de inventario de bienes, determinación del estado económico, rendición de cuentas, informes contables o de

cualquier otro tipo, el tribunal podrá nombrar profesionales en ciencias contables o con la especialidad requerida. El tribunal podrá ordenar cualquier otra prueba o requerir la información necesaria.

Las personas socias, copropietarias, asociadas o que posean algún tipo de participación respecto de personas jurídicas de las cuales sean parte podrán gestionarlo aún de manera anticipada, debiendo demostrar su condición en la solicitud. Si se trata de sociedades comerciales, quienes lo soliciten deberán representar al menos el diez por ciento (10%) del capital. En los demás casos, han de ser titulares de cuotas en la misma proporción.

SECCIÓN IV PRUEBA DOCUMENTAL

ARTÍCULO 150- Documentos

Se considerarán documentos tanto los que consten o se tramiten por medios físicos como los que contengan datos, informaciones o mensajes, y sean expresados o transmitidos por un medio electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producidos por nuevas tecnologías.

Los documentos públicos y privados admitidos, tácita o expresamente, se presumen auténticos y válidos, mientras no se pruebe lo contrario. Los recibidos o conservados por medios tecnológicos y los que los despachos judiciales emitan como copias de originales almacenados por estos medios conservarán la validez y la eficacia del documento.

Las copias certificadas de los documentos originales tendrán la eficacia probatoria de estos. La misma eficacia se otorgará a las copias simples, cuya autenticidad no haya sido impugnada en su oportunidad.

ARTÍCULO 151- Exhibición de documentos

Se ordenará a las partes la exhibición de documentos, informes, libros o cualquier otro elemento probatorio de esa naturaleza si están en su dominio o disposición, se refieran al objeto del proceso, sean prueba común o puedan derivarse datos probatorios para quien lo solicite.

Se aplicarán las siguientes reglas:

- 1) Con la petición de exhibición, quien lo solicite podrá aportar una copia o reproducción del documento. Si no lo tiene en su poder, indicará en términos concretos su contenido. Cuando se ordene la exhibición, se advertirá a la parte requerida, que ante su negativa injustificada, se podrá tener como exacto lo presentado o afirmado por la contraria. Lo anterior se dispone siempre que por medio de otras pruebas resulten manifiestamente verosímiles la existencia y el contenido del documento no exhibido.

- 2) Si el documento se encuentra en poder de una tercera persona, se le prevendrá lo exhiba, siempre que sea trascendente para el proceso y no le produzca perjuicio.
- 3) En ambos supuestos se podrá presentar copia certificada o testimonio del documento prevenido, salvo si el tribunal o las partes exijan el original por razones fundadas.
- 4) Las personas funcionarias públicas no podrán negarse a expedir certificaciones o testimonios, ni oponerse a exhibir los documentos de sus dependencias y archivos, de acuerdo con el ordenamiento vigente.
- 5) Al ordenarse la exhibición se advertirá que ante la negativa injustificada de cumplimiento podrá seguirse causa por el delito de desobediencia a la autoridad, sin perjuicio de que en sede penal la conducta se recalifique.

ARTÍCULO 152- Impugnación de documentos

La objeción a los documentos presentados con la demanda y la reconvencción se hará en la contestación o la réplica. Los aportados posteriormente deberán objetarse en la audiencia preparatoria. Será necesario exponer las razones concretas y las pruebas que sirvan de fundamento.

La oposición por falsedad podrá hacerse en el mismo proceso y los efectos de lo que se resuelva se limitarán a este. Para ese fin, el tribunal, de oficio o a instancia de parte, podrá solicitar colaboración a la oficina respectiva del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las sentencias emitidas por los tribunales penales, sobre la falsedad de un documento de influencia en el proceso, tendrán valor de cosa juzgada material.

ARTÍCULO 153- Informes y expedientes

El tribunal de oficio o a petición de parte podrá solicitar informes a cualquier persona física o jurídica, privada o pública, en relación con actos o documentos de su conocimiento o que estén en su poder, si se relacionan con los hechos o los actos de interés para lo debatido. También podrá requerirse la remisión de expedientes, testimonios, documentos, anexos, estudios relacionados con los informes, anotaciones, asientos de libros, archivos o similares. Los informes se considerarán auténticos, cuando sean emitidos por una persona funcionaria pública.

Se aplicarán las siguientes reglas:

- 1) No será admisible la solicitud de rendir un informe cuando, manifiestamente, tienda a sustituir otro medio de prueba no admitido.
- 2) La persona o entidad requerida podrá negarse a rendir el informe por motivos fundados, entre ellos, cuando se trate de información declarada secreto de Estado, pueda comprometer seriamente el secreto comercial o información no divulgada. En tal caso, y una vez recibida la solicitud, de inmediato, ha de exponer con claridad y precisión los motivos de impedimento. El tribunal valorará si son aceptables.

3) El tribunal advertirá que debe cumplirse con lo ordenado, en el plazo de ocho días, contado a partir del recibo de la solicitud, salvo que se autorice un plazo mayor. Cuando se trate de entidades públicas o personas jurídicas, la solicitud deberá dirigirse a la responsable, funcionaria u oficina encargada de su emisión o de ejecutar la orden. Se apercibirá que, en caso de incumplimiento, podrá incurrirse en el delito de desobediencia a la autoridad.

4) La información se remitirá al tribunal a la mayor brevedad, por cualquier medio idóneo, incluso electrónicamente. Se indicará, expresamente, que tiene el carácter de declaración jurada, a fin de garantizar su exactitud, lo cual se prevendrá al ordenarla, sin perjuicio de que en criterio del tribunal deba exponerse oralmente en audiencia.

SECCIÓN V RECONOCIMIENTO JUDICIAL

ARTÍCULO 154- Reconocimiento judicial

El reconocimiento judicial será admisible para el esclarecimiento y la apreciación de los hechos, cuando sea necesario o conveniente que el tribunal examine algún lugar, objeto o persona o verifique alguna situación o circunstancia. Cuando se realice a solicitud de parte, esta indicará los aspectos por constatar. La contraria podrá proponer otros.

Las partes y las personas abogadas podrán concurrir al reconocimiento judicial y formular las observaciones que consideren pertinentes. Con las salvedades de ley, podrán tomar fotografías, hacer grabaciones de video, audio u otros semejantes para dejar constancia.

De oficio o por solicitud fundada de parte, se autorizará la concurrencia de personas asesoras técnicas de las partes, previa acreditación de sus atestados profesionales y de testigos admitidas. Si es necesario, estas últimas serán examinadas durante el reconocimiento.

ARTÍCULO 155- Deber de colaboración de las personas concurrentes

Las partes deberán prestar la colaboración necesaria para la efectiva práctica del reconocimiento.

De impedirse el ingreso, se podrá ordenar el ingreso forzoso cuando el bien sea de una tercera persona, o el acceso forzoso si es de las partes. Se podrá auxiliar con la Fuerza Pública.

ARTÍCULO 156- Respaldo del reconocimiento judicial

El reconocimiento judicial se documentará, utilizando medios de grabación de audio y video. El tribunal podrá confeccionar un croquis. Si se registra en video, sin audio, se consignarán los aspectos relevantes en un acta.

Cuando no sea posible usar estos medios, se consignará en un acta, la cual se redactará al finalizar del reconocimiento.

ARTÍCULO 157- Reconocimiento de personas

Para la realización del reconocimiento de personas, se tomarán las medidas necesarias a fin de respetar su dignidad, seguridad y el respeto de los derechos de la personalidad. Con esa finalidad, se les permitirá la compañía de alguna persona de su confianza e, incluso, se podrá ordenar que se practique en el sitio donde se encuentre quien deba ser reconocido.

SECCIÓN VI OBJETOS Y SUSTANCIAS PROBATORIAS

ARTÍCULO 158- Objetos y sustancias peligrosas

Cuando las pruebas ofrecidas y aportadas por las partes, o recolectadas por el tribunal durante un reconocimiento judicial, sean objetos y sustancias peligrosas para la salud, o que por su naturaleza ameriten previsiones especiales para su preservación, se aplicarán, para su admisibilidad y práctica, las reglas de la prueba anticipada, en lo que corresponda.

De oficio o a solicitud de parte, el tribunal deberá adoptar las medidas pertinentes para su conservación y custodia. Además, pedir auxilio al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entidades públicas o terceras personas con idoneidad o capacidad técnica. A criterio del tribunal y si existe anuencia de la parte contraria, la oferente de la prueba podrá custodiarla, siempre que cumpla con los requerimientos técnicos o científicos.

Para la admisibilidad y conservación de este tipo de elementos probatorios, se tomará en cuenta lo dispuesto en leyes especiales.

ARTÍCULO 159- Custodia

Al ordenarse la entrega de pruebas que ameriten previsiones especiales, a la parte oferente o a otra persona, para su guarda y preservación, deberán respetarse las siguientes reglas:

- 1) El tribunal hará las previsiones para su efectiva custodia.
- 2) De oficio o a solicitud de parte, se podrá ordenar que terceras personas capacitadas o entidades públicas especializadas se encarguen de la recolección de

los elementos probatorios que deben ser custodiados de forma especial, cuando su peligrosidad o su naturaleza así lo ameriten. Una vez recolectados y almacenados de la forma técnica apropiada, el tribunal o uno de sus integrantes, si fuera un órgano colegiado, se apersonará al lugar para colocar los sellos respectivos y documentar los datos necesarios.

3) Previo a su depósito, el tribunal documentará, entre otros datos, su contenido, forma y estado. Tanto en el objeto como en su medio de almacenamiento, se colocarán etiquetas y sellos del tribunal, con indicación del proceso, el nombre de la parte oferente, el contenido y la fecha de entrega.

4) Al hacerse la entrega se documentará dicho acto y se indicará la resolución que lo ordena, el bien en custodia, el nombre de la parte oferente y el de quien lo recibe.

ARTÍCULO 160- Inspección del bien en custodia

Las partes podrán solicitar que se les permita inspeccionar el bien en custodia, para constatar su existencia y estado, previo a la audiencia de juicio. De programarse la diligencia, las partes podrán ir acompañadas por sus asesorías técnicas.

El tribunal coordinará la diligencia con la persona o la entidad a cargo de la custodia. Podrá participar solo una o uno de sus integrantes cuando se trate de un tribunal colegiado, manteniendo el acto validez y eficacia. Al finalizar, el tribunal colocará de nuevo los sellos y documentará el acto, consignando los datos pertinentes y el estado actual.

Los gastos adicionales en que incurra la persona que custodia el bien estarán de la parte que solicitó la diligencia.

ARTÍCULO 161- Devolución de la prueba custodiada

Una vez examinada la prueba en custodia, durante la audiencia de juicio, o antes de ello cuando así se haya dispuesto, el tribunal ordenará su devolución a la parte que corresponda, salvo objeción fundada de la contraria. En tal caso, podrá ordenarse, a costo de esta, que se mantenga la custodia hasta la terminación del proceso, salvo que la objetante desista de su gestión. También se ordenará la devolución de lo custodiado, cuando el proceso termine de forma anticipada por cualquier causa.

Si es necesario, se fijará fecha para la devolución, y el tribunal o uno solo de sus integrantes, cuando se trate de un órgano colegiado, se apersonará al lugar pertinente para realizar la devolución.

ARTÍCULO 162- Destrucción de la prueba

Si la devolución del elemento probatorio no es posible por su peligrosidad, no se retira en el plazo conferido o resulta innecesario hacerlo por el estado en que se encuentra, quien lo custodia deberá solicitar autorización para destruirlo, e informar

las causas, lo cual se pondrá en conocimiento de las partes por tres días. Si se autoriza, el tribunal prevendrá que se elimine de forma idónea. A la diligencia asistirá el tribunal para documentar el acto.

ARTÍCULO 163- Gastos derivados de la prueba en custodia

Los gastos de recolección, traslado, almacenamiento, custodia, devolución y destrucción, cuando proceda, serán cubiertos por la parte oferente o a quien le corresponda la carga de la prueba. Si es necesario y se trata de una parte asistida por la defensa pública o una persona indígena, se podrá pedir colaboración para ello, sin costo alguno, a las entidades públicas competentes, cuando no puedan ser asumidos por el Poder Judicial.

ARTÍCULO 164- Derechos y deberes de la persona custodiante

La persona o dependencia a quien se encomiende la custodia de una prueba especial tendrá los mismos derechos y deberes que un depositario judicial en lo que corresponda. Además, deberá:

- 1) Mostrar el bien a las personas expertas, asesoras y consultoras técnicas autorizadas por el tribunal. Si se tienen que adoptar previsiones adicionales o incurrirse en gastos para que sean examinados por ellos, deberá la parte oferente de la pericia correr con su costo.
- 2) Si existe algún riesgo de degradación, pérdida o contaminación, deberá dar aviso inmediatamente al tribunal, para que tome las medidas pertinentes, siempre que ello sea posible, con el fin de garantizar que se pueda obtener la información solicitada o requerida antes de su pérdida.
- 3) Informar al tribunal cualquier alteración, pérdida o sustracción, especificando sus causas, sin perjuicio de las medidas que por su cuenta deba tomar oportunamente.

SECCIÓN VII OTROS MEDIOS PROBATORIOS

ARTÍCULO 165- Reconstrucción de hechos

En la reconstrucción de hechos, se seguirá el procedimiento dispuesto para el reconocimiento judicial.

ARTÍCULO 166- Medios científicos

Podrá ordenarse la práctica de reproducciones de cualquier naturaleza, calcos, relieves, filmes o fotografías de objetos, personas, documentos y lugares, radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos, y, en general, cualquier prueba científica y reproducciones de cualquier naturaleza. En lo relativo a personas, se respetarán las restricciones legales. También podrá aportarse o solicitarse que se obtengan comunicaciones telegráficas, radiográficas, telefónicas,

telemáticas y cablegráficas, siempre que se hayan observado las leyes y los reglamentos respectivos.

En la audiencia se le dará a esta prueba el mismo trámite dispuesto para la pericial.

Los gastos de la prueba científica estarán a cargo de la parte proponente o de aquella a quien corresponda la carga de la prueba, salvo que sea ordenada de oficio o solicitada por una persona representada por la defensa pública.

SECCIÓN VIII PRUEBA ANTICIPADA

ARTÍCULO 167- Prueba anticipada

Antes del establecimiento de la demanda o de la audiencia de juicio, podrá solicitarse, admitirse y practicarse cualquier medio de prueba. Procederá cuando, si no se realiza, sea imposible o peligre su práctica posterior. Si la anticipación no era justificada, se condenará a la parte solicitante al pago de costas, daños y perjuicios en abstracto.

Sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo anterior, procederá admitir como prueba anticipada la verificación de los estados económicos, financieros y rendición de cuentas, la declaración de parte, la testimonial y la exhibición de documentos o bienes muebles. Deberá indicarse en términos generales sobre qué versarán, requisito sin el cual no se atenderá la gestión.

ARTÍCULO 168- Requisitos y trámite de la solicitud de prueba anticipada

En la solicitud de prueba anticipada, se indicará el nombre y las calidades de las partes, el objeto y la estimación del futuro proceso, cuando este no se haya establecido, la justificación, la prueba que se pide y el señalamiento del medio para atender notificaciones y el lugar donde se le podrá notificar a la parte contraria, salvo que aún no esté identificada.

Se garantizará la participación de la parte contraria, notificándosele previo a su realización. En casos de urgencia o si la notificación previa a la contraria pudiera afectar la finalidad o la eficacia de la prueba, podrá realizarse sin aviso anticipado. Si concurre pese a no haber sido citada, podrá intervenir, siempre que no obstaculice la práctica. De lo contrario, se ordenará notificarle el resultado, en los cinco días posteriores a la celebración de la diligencia.

El tribunal dispondrá lo necesario para la efectiva recepción de la prueba anticipada, en cualquier día y hora, aún con auxilio de la Fuerza Pública.

Esta prueba se incorporará oportunamente al proceso, cuando este se haya establecido.

ARTÍCULO 169- Rendición de cuentas como prueba anticipada

Toda persona que se considere con derecho a exigir de alguien rendición de cuentas, ante la negativa infundada de la obligada, podrá pedir, de forma anticipada, que se le ordene rendirlas.

Si se acoge la solicitud, el tribunal prevendrá la presentación de las cuentas en un plazo prudencial. Si se aportan, se pondrán en conocimiento de la parte solicitante y se tendrá por concluida la diligencia sin especial condenatoria en costas. Si no se rinden injustificadamente, se estará a las que presente la solicitante, en el proceso respectivo, en todo lo que la obligada a rendirlas no pruebe que son inexactas.

Si la obligada se opone con justa causa a la rendición de cuentas, el tribunal ordenará el archivo de la diligencia y condenará a la solicitante al pago de las costas. Si la oposición es infundada, el tribunal tendrá por no rendidas las cuentas.

TÍTULO VII ACTIVIDAD PROCESAL EN LAS AUDIENCIAS ORALES

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 170- Concentración de actos en audiencias orales

Las audiencias orales se realizarán sin interrupción, durante las sesiones consecutivas necesarias, hasta su terminación. Si no es posible efectuarlas en un solo día, el tribunal tomará las previsiones pertinentes, a fin de garantizar su continuación en días consecutivos. Los recesos se harán por períodos cortos.

Iniciada una audiencia, si no se puede concluir en la sesión programada, se aplicarán las reglas de la suspensión de audiencias.

ARTÍCULO 171- Dirección de la audiencia

La audiencia será dirigida conforme a los poderes y los deberes dispuestos por el ordenamiento jurídico y las siguientes reglas:

- 1) Se promoverá el contradictorio como instrumento para la verificación de la verdad de los hechos.
- 2) Iniciará con la presentación de quienes integren el tribunal. Se verificará la presencia de las partes o sus representantes, las personas coadyuvantes, testigos, expertas e intérpretes.
- 3) Quien presida explicará los fines y las actividades de la audiencia. Ordenará las lecturas necesarias, hará las advertencias legales, juramentará a quien

corresponda, moderará el debate y evitará la lectura innecesaria de textos y documentos. Impedirá divagaciones, sin que con ello pueda coartar el derecho de defensa y la igualdad procesal de las partes. Si es necesario, retirará el uso de la palabra y, en su caso, ordenará el abandono del recinto a quien no siga sus instrucciones.

4) Por su orden, se concederá la palabra a la parte actora o gestionante, a la contraria y a las terceras personas intervinientes. Si comparecen coadyuvantes, se les dará participación luego de la parte a favor de la que intervienen. Finalmente, podrá participar el tribunal, sin perjuicio de que participe cuando lo estime necesario. Tratándose de tribunales colegiados, quien presida otorgará la palabra a las demás integrantes.

5) El tribunal garantizará se mantenga el orden y el respeto a las personas presentes, utilizando las potestades de corrección y disciplina que le confiere el ordenamiento jurídico.

6) La ausencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia con la que concurra, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones procesales, salvo norma en contrario.

7) La parte que se apersona de forma tardía tomará la audiencia en el estado en que se encuentre, sin que se retrotraigan etapas ya cumplidas. Si alguna se retira, sin justa causa, proseguirá la audiencia.

Cuando a una parte la asista más de un abogado o abogada, solo podrá participar una en representación, conforme a su elección pudiendo alternarse las intervenciones.

ARTÍCULO 172- Comparecencia de las partes

Las partes y sus representantes deben asistir a las audiencias con los documentos que les identifiquen incluyendo los poderes que les acrediten para actuar con la amplitud necesaria para conciliar en representación de la parte que no asista. Si alguna no comparece por razones de caso fortuito o fuerza mayor lo comunicará al tribunal a la mayor brevedad.

Las partes deberán comunicar al juzgado los motivos que justifican su ausencia a las audiencias ya programadas.

Si no se acredita, se impondrá una multa, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de un salario base, establecido según el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993.

Si se considera justificada la excusa, el tribunal pospondrá la audiencia y procederá a hacer un nuevo señalamiento, lo cual comunicará a la parte contraria de inmediato.

El monto de esas multas será depositado en el fondo de apoyo a la administración de justicia agraria para la optimización del servicio público agrario. La administración de esos recursos corresponderá al Poder Judicial.

ARTÍCULO 173- Audiencia en el lugar de los hechos

En audiencias y actuaciones a realizarse en el lugar de los hechos, la parte interesada debe coordinar lo necesario con el tribunal, para que este se apersona al sitio en la hora programada.

El Tribunal podrá ordenar, a solicitud de parte o de oficio, el auxilio policial para garantizar la seguridad y la realización efectiva de la audiencia o la actuación en el lugar de los hechos.

ARTÍCULO 174- Ingreso forzoso

Cuando la audiencia o la actuación deba realizarse en el lugar de los hechos, las partes deberán permitir al tribunal el ingreso al bien objeto del proceso. Quien esté a cargo o ejerza la posesión de este al practicarse la actuación facilitará el acceso. El tribunal ingresará con las partes y demás personas que estime necesario.

De requerirse transitar por bienes ajenos para llegar al sitio, la parte interesada deberá obtener el permiso respectivo. Si se le deniega, requerirá al tribunal, con la debida antelación, la emisión de la orden de ingreso forzoso. Le suministrará la información necesaria, a fin de notificar personalmente dicha orden a la persona obligada. Esta contendrá la hora y la fecha programada para la actuación o la audiencia, y el apercibimiento de que, en caso de negativa, se le podrá seguir causa por el delito de desobediencia, sin perjuicio de incurrir en otras figuras delictivas.

ARTÍCULO 175- Posposición de las audiencias orales

Las audiencias orales se podrán posponer solo por razones de fuerza mayor, caso fortuito o solicitud planteada de manera conjunta por las partes. Si el tribunal estima se está en uno de esos supuestos, programará un nuevo señalamiento.

ARTÍCULO 176- Continuidad y suspensión de audiencias

Iniciada una audiencia no se suspenderá. En casos muy calificados podrá suspenderse, cuando sea necesario para la debida marcha del proceso o con el fin de deliberar sobre aspectos complejos, o a petición de parte para instar un acuerdo conciliatorio. La suspensión será lo más breve posible, debiendo el tribunal justificar la causa. Al decretarla, se programará la hora y la fecha para reanudarla, lo cual equivaldrá a citación para todos los efectos, aún en relación con las partes ausentes.

La continuación deberá señalarse dentro del plazo máximo de diez días, con las salvedades de ley. Si se vence el lapso de suspensión sin realizarse la audiencia, será necesario citar a una nueva, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda.

Las personas juzgadoras podrán intervenir en otros procesos durante el plazo de la

suspensión.

ARTÍCULO 177- Impedimento e inasistencia de personas abogadas

Las personas abogadas, con o sin mandato judicial, de tener impedimento para asistir a alguna audiencia, tomarán las previsiones para que otra profesional les sustituya.

Las audiencias no se pospondrán ni suspenderán por su ausencia. Sin embargo, será admisible como justificación para variar el señalamiento, la programación anterior de otra audiencia en horas y fechas coincidentes. Para hacer valer tal justificación deberán comunicarlo al tribunal a la mayor brevedad.

Su inasistencia injustificada a la audiencia preparatoria o a la de juicio, se comunicará al Colegio de Abogados y Abogadas para lo de su cargo. La parte correspondiente podrá nombrar a otra profesional en derecho, para que la siga asesorando.

ARTÍCULO 178- Inasistencia de personas juzgadoras a audiencias

Si no se pudiera realizar una audiencia por la ausencia o la llegada tardía de una persona juzgadora, de manera injustificada, de inmediato se fijará la hora y la fecha para su celebración para realizarse dentro de los diez días siguientes.

ARTÍCULO 179- Registro de control de audiencias

Cada tribunal tendrá un registro de control de audiencias. Consignará el lugar, la hora y la fecha de inicio, el tipo de proceso y la audiencia, la identificación de las partes y de quienes participaron, el lugar, la hora y la fecha de conclusión, así como la firma de las personas juzgadoras que comparecieron.

ARTÍCULO 180- Documentación mediante grabación

Las audiencias se registrarán en soportes aptos para la grabación y la reproducción de audio y video, o al menos en audio. Se tomarán fotografías, cuando se estime preciso.

Las partes podrán solicitar a su cargo una copia de los soportes donde haya quedado grabada la audiencia, a menos de que la información pueda grabarseles o enviárseles electrónicamente, sin costo alguno.

Si los medios de registro citados no pueden utilizarse por causa justificada, se realizarán actas para documentar el resultado de la prueba practicada y otros actos relevantes.

La falta o insuficiencia de la grabación no será motivo de impugnación de lo resuelto en la audiencia o de la sentencia. En ese caso, se podrá recurrir a otros medios

para acreditar lo acontecido.

ARTÍCULO 181- Documentación mediante acta

Las actas escritas serán lacónicas. De no poder documentarse la actuación mediante soportes de audio o de video, se consignará el resultado de la prueba, un resumen de las manifestaciones y alegatos de las partes, así como las resoluciones. En casos excepcionales, a criterio del tribunal, se consignará de modo literal lo acontecido. No será necesario registrar las preguntas formuladas, pero deberá quedar clara la respuesta. Serán firmadas por el tribunal, las partes, las personas testigos y expertas.

ARTÍCULO 182- Publicidad de las audiencias

Las audiencias serán públicas. El tribunal, de oficio o a solicitud de parte, podrá ordenar que sean privadas, total o parcialmente, por los siguientes motivos:

- 1) Consideraciones de orden público y moral.
- 2) Seguridad de personas y bienes.
- 3) Garantizar la privacidad de quienes participen y la práctica efectiva de la prueba.
- 4) Si la publicidad compromete un secreto protegido por el ordenamiento jurídico de carácter oficial, empresarial, particular y otros. El tribunal podrá imponer a quienes intervengan el deber de guardar secreto sobre los hechos que presenciaron o conocieron.
- 5) Por normativa especial que así lo disponga.

Si se ordena la privacidad parcial de la audiencia, desaparecida la causa, se continuará de forma pública.

También podrá disponerse, por razones de disciplina, orden y seguridad, o capacidad del lugar donde se realice la audiencia, el retiro o alejamiento de las personas cuya presencia no sea necesaria, o limitar la admisión o la presencia a un determinado número, así como la reubicación de animales que puedan entorpecer la audiencia.

ARTÍCULO 183- Obligaciones de quienes asistan a las audiencias

Quienes asistan a las audiencias permanecerán con actitud respetuosa y en silencio, mientras no estén autorizadas para participar. No podrán portar armas u

otros objetos que perturben u ofendan, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o capaz de producir disturbios.

ARTÍCULO 184- Derecho de la parte sin patrocinio letrado

Si se apersona alguna parte a las audiencias, sin asistencia legal, el tribunal le explicará su derecho a contar con patrocinio letrado y la necesaria reprogramación de la audiencia, a fin de garantizarle ese derecho. El Tribunal informará sobre la posibilidad de contar con asistencia legal gratuita.

ARTÍCULO 185- Participación de los medios de comunicación

Cuando las audiencias se realicen en salas de debate o en lugares de dominio público, el tribunal podrá permitir a los medios de comunicación colectiva instalar el equipo necesario para informar sobre su desarrollo. Señalará, en cada caso, las condiciones en que se ejercerán esas facultades.

El tribunal podrá prohibir o limitar la grabación, la filmación o afines cuando se pueda perjudicar el desarrollo de la audiencia o se esté en presencia de algún motivo por el cual proceda ordenar su privacidad. También, cuando alguna de las partes o personas que deban rendir declaración soliciten, expresamente, que no sea grabada su voz o su imagen.

Si la audiencia se celebra en bienes privados, para autorizar el ingreso de los medios de comunicación, será indispensable la anuencia de las partes o, en su caso, de la persona propietaria o encargada.

ARTÍCULO 186- Conciliación en audiencias

La conciliación, en cualquier audiencia, será puesta en práctica por las personas juzgadoras agrarias, salvo que exista la posibilidad de que se apersona en el acto una persona especializada en conciliación agraria. Los tribunales informarán a las partes de su derecho a conciliar, para que lo gestionen con antelación a la programación de las audiencias.

CAPÍTULO II AUDIENCIA PREPARATORIA Y AUDIENCIA DE JUICIO

ARTÍCULO 187- Programación

La audiencia preparatoria y la de juicio se señalarán en forma separada, excepto en los procesos de audiencia única. Se programarán sus sesiones de modo consecutivo, salvo que los requerimientos del caso lo impidan. De ser necesario programar más de un día para cada audiencia, el tribunal indicará la distribución de las actividades a desarrollar en ellos.

ARTÍCULO 188- Audiencia preparatoria

La audiencia preparatoria se realizará en la sede del juzgado o en el lugar de los hechos, cuando por la naturaleza del asunto el tribunal así lo disponga. Se señalará inmediatamente después de contestada la demanda y, en su caso, la contrademanda, o transcurrido el plazo para ello.

ARTÍCULO 189- Actividades en la audiencia preparatoria

En la audiencia preparatoria, además de las disposiciones generales de las audiencias, se realizarán las siguientes actividades:

- 1) Declaratoria de apertura de la audiencia e informe de las reglas que se deben seguir, del objeto del proceso y del orden como se conocerán las cuestiones por resolver.
- 2) Conciliación, durante la cual se garantizará la privacidad del acto.
- 3) Aclaración, ajuste o subsanación de los extremos de la demanda, contestación, contrademanda y réplica, cuando a criterio del tribunal sean oscuros, imprecisos u omisos. En procesos ordinarios, ampliación de hechos, pretensiones y prueba que les sirva de fundamento.
- 4) Refutación de la parte actora a la contestación de la demanda y, en su caso, a la contrademanda. Ofrecimiento y presentación de la contraprueba.
- 5) Determinación de la participación de quien pretenda ser coadyuvante u otros intervinientes procesales de no haberse integrado con antelación.
- 6) Admisión, práctica de prueba y resolución de las alegaciones de actividad procesal defectuosa pendientes, vicios de procedimiento invocados en la audiencia y excepciones procesales.
- 7) Admisión, práctica de prueba y resolución de procesos incidentales o medidas cautelares pendientes, resolución sobre suspensión, cancelación o modificación de medidas cautelares, si existe solicitud pendiente, reservada para audiencia.
- 8) Determinación de los hechos controvertidos y fijación del objeto del proceso.
- 9) Definición de la cuantía del proceso.
- 10) Admisión de pruebas y disposiciones para su práctica. El tribunal podrá ordenar la prueba de oficio que estime indispensable. De tratarse de prueba pericial, el tribunal designará a la persona experta, de no haberse admitido antes. Realizará las fijaciones y los plazos respectivos para la emisión del dictamen y el pago de honorarios y gastos. Se verificará en el acto si acepta el cargo.
- 11) Resolución sobre suspensión, cancelación o modificación de medidas cautelares, si existe solicitud pendiente, reservada para audiencia.
- 12) Señalamiento de la hora y la fecha para realizar la audiencia de juicio.

En procesos ordinarios, los hechos y las pretensiones se podrán adicionar o modificar en la audiencia preparatoria. Se garantizará a la contraparte oportunidad para la contestación. Si esta así lo pide, el tribunal podrá suspender la audiencia hasta un máximo de diez días.

El tribunal evitará que en esta audiencia se discutan cuestiones propias de la

audiencia de juicio.

ARTÍCULO 190- Audiencia de juicio

La audiencia de juicio comprenderá las siguientes etapas procesales:

- 1) Resumen del tribunal de los hechos controvertidos y fijación del objeto del proceso.
- 2) Incorporación y recepción de la prueba. Las partes deberán comparecer con todas las pruebas admitidas y aquellas que pretendan proponer como prueba complementaria.
- 3) Emisión breve y precisa de las conclusiones. El tribunal establecerá el tiempo para formularlas. Excepcionalmente, podrá pedir las aclaraciones que considere necesarias. Las partes podrán renunciar a emitir conclusiones.
- 4) Deliberación y emisión de la sentencia. Cerrado el debate, se procederá a la etapa de deliberación. Será privada y una vez concluida se comunicará lo resuelto, salvo que el tribunal disponga diferir el dictado de la sentencia. Previo a dar por terminada la audiencia, se expondrán las razones por las cuales se difiere y se indicará el plazo para su emisión, de acuerdo con lo dispuesto en este Código.

ARTÍCULO 191- Incorporación de prueba

La prueba documental y aquellos elementos probatorios admitidos y recibidos fuera de audiencia serán incorporados por el tribunal, con solo su mención. Este, de oficio o a solicitud fundada de parte, podrá disponer la lectura parcial o total, en casos excepcionales. Los objetos y otros elementos de prueba afines podrán exhibirse o mostrarse, cuando resulte necesario.

La parte deberá hacer la solicitud de exhibición o reproducción, total o parcial, al finalizar la audiencia preparatoria, para que el tribunal tome las previsiones, a fin de evitar recesos o suspensiones en la audiencia de juicio.

ARTÍCULO 192- Procedimiento sin audiencia o en audiencia única

Cuando no se justifique el señalamiento de audiencias, por la naturaleza del proceso, circunstancias propias de este, o no existir prueba que realizar, se dictará la sentencia. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, que el proceso se tramite en audiencia única, en la cual podrán expresarse conclusiones.

ARTÍCULO 193- Inasistencia de las partes a las audiencias

Ante la inasistencia injustificada de las partes a las audiencias se aplicarán las siguientes disposiciones:

- 1) Si la parte actora o reconventora no comparece a la audiencia preparatoria, se tendrá por desistida la demanda o la reconvenición y se le condenará al pago de

las costas, los daños y perjuicios. Sin perjuicio de lo anterior, podrá continuarse el proceso, si alguna de las partes presentes alega interés legítimo o si por la naturaleza de lo debatido deba continuarse, siempre que no exista impedimento cuya superación dependa exclusivamente de la parte demandante.

2) Si la inasistente a la audiencia preparatoria es la parte demandada, se dictará sentencia de inmediato, con la prueba que conste en el expediente, salvo que sea necesario practicar la prueba ofrecida por la actora o cuando las pretensiones se refieran a cuestiones de orden público o derechos indisponibles.

3) Si ninguna de las partes asiste a la audiencia preparatoria, de forma injustificada, se declarará desistido el proceso sin condenatoria alguna.

4) Si a la audiencia de juicio no comparece ninguna de las partes, el tribunal emitirá la sentencia conforme a lo dispuesto en este código. Si se presenta solo una, se practicará la prueba admitida a dicha parte. No se recibirá la prueba ofrecida por la parte ausente, salvo que la contraria manifieste interés en ella o el tribunal la considere necesaria.

5) En los procesos de audiencia única se aplicará lo dispuesto para la inasistencia a la audiencia preparatoria.

ARTÍCULO 194- Suspensión de las audiencias preparatoria y de juicio

Las audiencias preparatoria y de juicio podrán suspenderse de la forma y por los motivos establecidos en este Código.

ARTÍCULO 195- Identidad física de la persona juzgadora

La audiencia de juicio y la emisión de la sentencia deben ser realizadas por las mismas personas juzgadoras que hayan integrado el tribunal.

TÍTULO VIII ACTIVIDAD PROCESAL IMPUGNATICA

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 196- Medios de impugnación y legitimación

Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. Podrán impugnarlas, únicamente, las personas perjudicadas por estas, en los plazos y las condiciones dispuestos por ley.

Quien esté legitimado para impugnar podrá renunciar a su derecho al comunicársele la resolución en audiencia o en el plazo para recurrir. Si se realiza en una audiencia, el tribunal tendrá por firme la resolución de forma inmediata, cuando proceda.

Se podrá desistir de los recursos antes de que estos sean resueltos.

ARTÍCULO 197- Motivación de la impugnación

La impugnación contendrá las razones claras y precisas que ameritan la modificación o nulidad de lo resuelto; de lo contrario se declarará inadmisibles. Quien recurra expresará, por su orden, los motivos procesales, los sustantivos y, en su caso, ofrecerá la prueba. Cuando sea necesario, indicará el medio para recibir notificaciones.

Podrán ser objeto de impugnación solo aquellas cuestiones que hayan sido propuestas o debatidas oportunamente. La resolución que se emita no podrá comprender otros aspectos distintos de los planteados en el recurso, salvo que se trate de cuestiones de orden público. El pronunciamiento deberá referirse a las razones formuladas por quien recurra y a las opuestas por la contraria, salvo las nulidades o las correcciones que procedan por iniciativa del tribunal.

ARTÍCULO 198- Prohibición de reforma en perjuicio

La impugnación se considerará solo en lo desfavorable al recurrente. Podrá enmendarse o revocarse una resolución únicamente en lo que haya sido objeto de disconformidad, salvo que la variación, en la parte impugnada, requiera modificar o revocar otros aspectos del pronunciamiento.

ARTÍCULO 199- Inimpugnabilidad de las providencias

Contra las providencias no cabrá recurso alguno. Sin embargo, los tribunales podrán dejarlas sin efecto o modificarlas dentro de los tres días posteriores a su comunicación, de oficio o por observaciones de la parte interesada.

Las realizadas en audiencia serán orales y deberán resolverse sin mayor dilación. Si las observaciones formuladas fuera de audiencia se estiman improcedentes, se tendrán por rechazadas sin necesidad de una resolución que así lo disponga.

CAPÍTULO II MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

ARTÍCULO 200- Recurso de revocatoria

El recurso de revocatoria procede solo contra los autos, salvo disposición legal en contrario.

Se interpondrá ante el tribunal que lo emitió dentro de tres días si se impugna un auto escrito; de inmediato y de forma oral si se formula en audiencia. Lo resuelto sobre la revocatoria no tendrá recurso alguno.

El tribunal podrá revocar los autos de oficio. Lo hará en audiencia cuando se trate de una resolución oral, o dentro del tercer día si fuera escrita.

ARTÍCULO 201- Revocatoria y apelación conjuntas

Cuando sean procedentes tanto el recurso de revocatoria como el de apelación, las partes los formularán simultáneamente. El recurso de apelación será rechazado de plano, si no se ha pedido revocatoria.

En una misma resolución, se emitirá un pronunciamiento sobre la revocatoria y la admisibilidad de la apelación, según corresponda.

ARTÍCULO 202- Recurso de apelación

Procederá el recurso de apelación solo contra las resoluciones expresamente dispuestas y se interpondrá ante el tribunal que las emitió.

Tratándose de autos escritos, el plazo para presentarlo será de tres días. Los que se emitan en audiencia deberán apelarse inmediatamente después de su emisión.

El plazo para apelar las sentencias será de cinco días, salvo disposición legal en contrario. En audiencia se podrá interponer oralmente, luego de la comunicación de estas, supuesto en el cual se tendrá por renunciado el plazo para recurrir. Lo anterior, salvo que por motivos fundados el tribunal cierre la audiencia una vez emitida la sentencia.

El tribunal de primera instancia deberá pronunciarse sobre la admisión del recurso de apelación. Conferirá traslado a la parte contraria, para que dentro del tercer día se manifieste, salvo que este se formule en audiencia, supuesto en el cual deberá exponer sus alegatos de inmediato.

Si las partes ofrecen prueba, deberán hacerlo al plantear la apelación o al pronunciarse la contraria sobre el recurso.

Cuando esté pendiente algún acto procesal urgente, el expediente no se remitirá al superior hasta que se cumpla. Si lo tiene aquel y lo requiere el inferior para dar cumplimiento a alguna actuación, el órgano de segunda instancia enviará una copia idónea en soporte digital o físico, excepto que se pueda acceder total o parcialmente al expediente electrónico.

ARTÍCULO 203- Apelación de autos

El recurso de apelación procederá solo contra los autos que:

- 1) Denieguen el tipo de proceso elegido por la parte.
- 2) Declaren inadmisibile la demanda o pongan fin al proceso, total o parcialmente, por cualquier causa.

- 3) Se pronuncien sobre una medida cautelar o tutelar.
- 4) Se admitan excepciones procesales.
- 5) De oficio declaren la incompetencia, ordenen la acumulación o desacumulación de pretensiones y procesos o la integración de la litis consorcio pasivo necesario.
- 6) Emitan pronunciamiento sobre el fondo de una tercería o un proceso incidental, salvo si en este se deniega la nulidad.
- 7) Aprueben o imprueben la liquidación de intereses o la tasación de costas.
- 8) Ordenen o denieguen el embargo y su levantamiento.
- 9) Ordenen o aprueben el remate de un bien y resuelvan sobre la liquidación del producto de este.
- 10) Lo disponga expresamente la ley.

Serán también apelables los autos que tengan ese recurso en los procesos sucesorios, los de administración y reorganización con intervención judicial, conforme a la normativa procesal civil. De igual forma, serán apelables las resoluciones que tengan ese recurso según legislación especial.

ARTÍCULO 204- Apelación diferida

Cuando se formule el recurso de apelación contra una resolución emitida en la audiencia de juicio, si es admisible y no pone fin al proceso o tiene solamente efecto devolutivo, no se suspenderá el procedimiento. La apelación se tendrá como interpuesta de forma diferida. Quedará condicionada a que quien apele impugne la sentencia, reitere la apelación y a que lo objetado tenga trascendencia en la sentencia. La apelación diferida será resuelta al conocer de dicho pronunciamiento.

El recurso interpuesto de forma diferida por una parte, quien no figure como apelante de la sentencia, por haber resultado victoriosa, deberá ser considerado cuando su objeción recobre interés ante la procedencia del recurso planteado por otra parte.

ARTÍCULO 205- Efectos de la apelación

La admisión de la apelación contra la sentencia definitiva y de los autos que pongan fin al proceso produce efectos suspensivos, salvo disposición expresa en contrario.

El tribunal de primera instancia conserva la competencia en los supuestos de apelación contra resoluciones emitidas en asuntos tramitados en legajo separado, en medidas cautelares y tutelares y para la ejecución provisional.

ARTÍCULO 206- Procedimiento del recurso de apelación

Cuando la sentencia se emita de forma escrita, en la resolución donde se resuelva la admisibilidad del recurso, si se admite, se dará audiencia a las demás partes, por el plazo de tres días.

Ante el Tribunal Agrario, y dentro de los tres días siguientes luego de admitido el recurso de apelación, cualquiera de las partes podrá solicitar se programe una audiencia oral en la cual puedan expresar sus argumentos, disponiendo en cada caso el Tribunal, si en el mismo momento se dictara la resolución de fondo. Caso contrario, contará con veintidós días para resolver el recurso.

Cuando se admita u ordene prueba en segunda instancia, su resultado se pondrá en conocimiento de las partes por tres días, salvo si se señala audiencia específica para su práctica o recibo, o para resolver el recurso. En tal caso, sobre las pruebas, las partes deberán pronunciarse en dicha oportunidad.

Concluida la audiencia, se emitirá la resolución final de forma inmediata, o dentro de los veintidós días siguientes. Ese mismo plazo aplicará cuando no se realice la audiencia, contado a partir de que el expediente sea recibido por quien esté a cargo de su redacción.

De no comparecer las partes a la audiencia, el tribunal practicará la prueba si es posible o, en su caso, la incorporará y emitirá la sentencia, conforme a lo dispuesto en este Código. Si se presenta solo una parte, se realizará con esta y se escucharán sus conclusiones. Se prescindirá de la prueba que no se pueda practicar en dicha audiencia.

ARTÍCULO 207- Apelación por inadmisión

Procederá el recurso de apelación por inadmisión, contra la resolución que deniegue un recurso de apelación no diferido. Deberá presentarse dentro del tercer día ante el tribunal que dictó la resolución impugnada. El recurso expresará con claridad cuál es la resolución originalmente apelada, el auto denegatorio y las razones por las cuales se estima ilegal la denegatoria.

El tribunal de primera instancia deberá hacer un legajo físico o digital que contenga el recurso de apelación por inadmisión y la información necesaria para resolverla. Comunicará de su existencia al superior dentro de los tres días siguientes a su interposición. Siempre que sea posible, la información deberá enviarse electrónicamente.

La interposición del recurso de apelación por inadmisión no suspende el curso normal del procedimiento, salvo que el tribunal de segunda instancia disponga expresamente lo contrario, dentro de los tres días siguientes a la recepción de la información.

Si la apelación es improcedente, se confirmará el auto denegatorio y, en su caso, se dispondrá la devolución del legajo para ser agregado al principal. Si el superior declara procedente el recurso, revocará el auto denegatorio y admitirá la apelación. En ese mismo pronunciamiento, pedirá el expediente principal para continuar con el trámite de la alzada. Lo resuelto, si es posible, será comunicado al tribunal de instancia de la manera más expedita posible, por los medios legalmente autorizados.

ARTÍCULO 208- Recurso de casación

El recurso de casación se regirá por las siguientes reglas:

- 1) Procederá contra la sentencia emitida en procesos ordinarios, su ejecución, resoluciones que tengan eficacia de cosa juzgada material y en los casos que la ley expresamente lo señale. Podrá basarse en razones procesales y de fondo.
- 2) Será conocido por la Sala de la Corte Suprema de Justicia, según la distribución de competencia establecida en la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993. Cuando el tribunal de casación que reciba el proceso para resolver el recurso se declare incompetente para conocerlo, deberá remitirlo al correspondiente.
- 3) Se interpondrá de forma escrita ante el órgano de casación que corresponda, en el plazo de quince días. De ser necesario, las partes deberán señalar medio para atender notificaciones. De ser admitido, el órgano de casación conferirá cinco días a la parte contraria para que haga valer sus eventuales derechos.
- 4) En audiencia, el recurso podrá interponerse de forma oral, con lo cual se tendrá por renunciado el plazo y se escuchará de inmediato a la contraria. Lo anterior, salvo que por motivos fundados el tribunal cierre la audiencia una vez emitida la sentencia.
- 5) Indicará la resolución impugnada, los motivos concretos en que se funda, expuestos de forma ordenada y concisa y la prueba ofrecida para mejor resolver, si la hay. Si es documental, deberá aportarse con el recurso. No será necesario invocar las normas procesales o de fondo violadas, pero el reclamo debe ser claro en cuanto a las razones alegadas. En todo caso, la invocación errónea de normas no se considerará motivo para declararlo inadmisibles. Una vez interpuesto el recurso, no podrán ampliarse los motivos de casación.
- 6) Si el recurso no cumple los requisitos, salvo que se deduzcan del expediente, el órgano de casación prevendrá a quien recurre que lo corrija, dentro del tercer día. Los defectos se especificarán en la misma resolución, con el apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rechazarlo de plano.

ARTÍCULO 209- Casación por razones procesales

El recurso de casación será admisible por motivos de orden procesal, cuando se funde en:

- 1) La infracción o errónea aplicación de normas procesales esenciales para garantizar el debido proceso, siempre que la actividad defectuosa produzca indefensión y no se haya subsanado conforme a la ley.
- 2) La vulneración de la inmediación en la audiencia de juicio o en la deliberación.

- 3) La falta, insuficiencia o contradicción grave en la fundamentación de la sentencia.
- 4) La fundamentación de la sentencia se base en prueba ilegítima o introducida ilegalmente al proceso.
- 5) La incongruencia de la sentencia. No se incurrirá en dicha causal cuando se otorguen derechos de carácter indisponible u otorgados por el legislador, siempre que su existencia se haya debatido y demostrado en el proceso.
- 6) La inobservancia de las disposiciones previstas en este Código para la deliberación, la integración del tribunal y el plazo de la emisión de la resolución impugnada.

No serán motivos para recurrir la falta de pronunciamiento sobre costas o procesos incidentales sin influencia directa en el fondo del asunto, o cuando no se haya pedido subsanar la omisión por medio de adición.

La parte a quien haya perjudicado la inobservancia de la ley procesal podrá alegar una causal de casación por razones procesales. Lo anterior si oportunamente se agotaran todos los recursos contra lo resuelto.

ARTÍCULO 210- Casación por razones de fondo

Procederá el recurso de casación por razones de fondo, cuando se base en:

- 1) La violación de principios y normas sustantivas aplicables al caso concreto. Esta causal comprende la infracción a las normas sobre apreciación de la prueba.
- 2) El quebranto de la cosa juzgada material.

ARTÍCULO 211- Rechazo de plano del recurso de casación

El recurso de casación será rechazado de plano cuando:

- 1) Se interponga extemporáneamente.
- 2) La resolución impugnada carezca de ese tipo de recurso.
- 3) No se expresen los motivos concretos en que se funda.
- 4) Si se trata de una nulidad procesal, no sea una de las previstas como causal, no se haya reclamado oportunamente ante el tribunal correspondiente, ni se haya interpuesto recurso contra lo resuelto.
- 5) Se refiera a cuestiones no propuestas o alegadas oportunamente, ni debatidas en el proceso, sin perjuicio de otras razones cuando se alegue se causa indefensión.

ARTÍCULO 212- Efectos del recurso de casación

La admisión del recurso de casación produce efectos suspensivos, salvo en todas las cuestiones que se tramiten en pieza separada, medidas cautelares y ejecución provisional, para las cuales el tribunal de primera instancia conserva su competencia. Excepcionalmente, el órgano que conozca de la casación podrá decretar medidas cautelares y tutelares, de oficio o a gestión de parte.

ARTÍCULO 213- Procedimiento del recurso de casación

Cuando el órgano de casación respectivo reciba el recurso, verificará si es de su competencia y resolverá sobre la admisibilidad. Si lo considera pertinente, podrá señalar la hora y la fecha para una audiencia oral, si alguna de las partes la ha pedido o si se admite prueba distinta a la documental.

Si el órgano de casación ordena o admite prueba documental para mejor resolver, su resultado se pondrá en conocimiento de las partes por el plazo de tres días, para que aleguen lo que estimen conveniente acerca de su alcance e importancia, salvo que se señale una audiencia específica para conocer, alegar y debatir sobre el resultado de aquella.

Si no se admite el recurso, se dispondrá la devolución inmediata del expediente.

ARTÍCULO 214- Audiencia para resolver el recurso de casación

Para la audiencia en casación, se seguirán las siguientes reglas:

- 1) La audiencia será presidida por la persona relatora que integre la Sala de Casación. Dará la palabra a la parte recurrente, le otorgará el tiempo durante el cual hará su exposición y le requerirá que motive, de forma ordenada y concisa, cada uno de los vicios alegados. Luego se escuchará a la contraria por un tiempo igual para que exprese su posición sobre el recurso.
- 2) No se permitirá la lectura del recurso o documentos, salvo que se trate de citas breves de prueba, jurisprudencia, textos legales o doctrinarios, los cuales podrán ser leídos únicamente en lo conducente. Se dará un lapso para la réplica y la contrarréplica. Quienes integren el órgano de casación podrán solicitar aclaraciones o explicaciones a las partes. Si son varias las partes recurrentes, la actora iniciará la exposición.
- 3) Se incorporará la prueba documental que se haya admitida en casación y se escuchará a las partes sobre ella. En su caso, se recibirá la prueba restante, siguiendo las reglas dispuestas para la audiencia de juicio. Finalmente, se otorgará a las partes un período para conclusiones.
- 4) La ausencia injustificada de la parte implicará el desistimiento de la prueba, en caso de que se haya admitido, sin necesidad de resolución que así lo declare. Se realizará la audiencia con las partes presentes.
- 5) Cuando la audiencia se realice a solicitud de la parte recurrente, y esta no asiste de manera injustificada, se le impondrán las costas del recurso,

independientemente del resultado. Si dos o más partes gestionaron la audiencia, y ninguna se presenta, cada una asumirá las costas del recurso.

ARTÍCULO 215- Plazo para la sentencia de casación

Si no se señala para audiencia, la sentencia se dictará en el plazo de dos meses a partir de la firmeza de la resolución que admite el recurso.

Si se realiza audiencia, la Sala de Casación procederá a deliberar y emitir la sentencia al concluir esta. Cuando se trata de un caso complejo, se comunicará en un mes a partir del cierre de la audiencia. La determinación de la complejidad deberá ser justificada al darse por terminada esta.

ARTÍCULO 216- Sentencia de casación

En la sentencia de casación, se examinará primero la impugnación relativa a vicios procesales. Si no son procedentes, se analizarán los motivos de fondo.

Si la sentencia se casa por razones procesales, se anulará y reenviará el proceso al tribunal correspondiente. Se indicará la etapa a la que se deberán retrotraer los efectos, para que reponga los trámites y resuelva conforme a derecho. Cuando el vicio se refiera únicamente a la sentencia como acto procesal, la anulación recaerá solo sobre esta, a fin de que se dicte nuevamente la que corresponda, siempre que no se infrinja el principio de inmediatez. Tratándose de incongruencia, si se puede subsanar el vicio, la Sala de Casación dictará sentencia sobre el fondo, sin necesidad de reenvío. No habrá incongruencia si lo otorgado es consecuencia lógica de lo pedido.

Cuando se case por violar normas sustantivas, se emitirá una nueva sentencia, atendiendo las defensas de la parte contraria a la recurrente, omitidas o preteridas en la sentencia impugnada, si por haber resultado victoriosa esa parte, no ha podido interponer el recurso de casación.

La sentencia que se dicte no podrá pronunciarse sobre otros puntos distintos de los planteados en el recurso, salvo las nulidades, las correcciones o las reposiciones que procedan por iniciativa del órgano y el pronunciamiento sobre costas.

ARTÍCULO 217- Recursos contra las resoluciones emitidas por la Sala de Casación

Contra las sentencias que dicte la Sala de Casación solo procederá la revisión en los casos previstos por ley. Contra las demás resoluciones solo procederá revocatoria.

ARTÍCULO 218- Revisión

La revisión procederá contra la sentencia firme con eficacia y autoridad de cosa juzgada material, conforme a las causales y el procedimiento establecidos en la normativa procesal civil. El plazo y el dictado o la emisión de la sentencia se regirán por lo dispuesto para el recurso de casación en este Código.

ARTÍCULO 219- Tribunal sustituto

Cuando se anule una sentencia con ocasión de los recursos de apelación y casación, o por revisión, si es necesario repetir la audiencia de juicio, será realizada por el mismo tribunal que dictó dicho pronunciamiento, pero con una integración diferente.

**TÍTULO IX
MEDIOS EXTRAORDINARIOS DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO**

**CAPÍTULO I
MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**

ARTÍCULO 220- Fin y procedimiento

La conciliación, la transacción, el arbitraje y cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos deberán ser utilizados como instrumentos de paz social.

Cuando se utilicen para resolver un conflicto agrario, su procedimiento y homologación se regirán por este Código y, en lo que sea compatible, por lo que dispone la legislación especial.

ARTÍCULO 221- Medios alternativos en los casos donde es parte una persona indígena

En los asuntos entre personas indígenas o cuando al menos una parte lo sea, deberán ponerse en práctica prioritariamente los modelos establecidos por los respectivos pueblos indígenas a que pertenecen para la solución de conflictos, conforme al derecho indígena. Además, podrán basarse en dictámenes periciales culturales, cuando resulte necesario.

Deberá reconocerse la pertinencia cultural de dichas poblaciones, a fin de que también se protejan sus valores, prácticas sociales y se respete su concepto de justicia, siempre que no se transgredan los derechos humanos.

ARTÍCULO 222- Audiencia de conciliación judicial

Las personas juzgadoras agrarias que estén conociendo del proceso intentarán en cualquier estado del proceso que las partes solucionen el conflicto de forma conciliada en lo que sea legalmente posible; para tales efectos, se les indicará sobre

las ventajas de una solución conciliada, sin que sus manifestaciones constituyan motivo para recusar a la persona que juzga. En el acta no se incluirán manifestaciones hechas por las partes con motivo de la conciliación y lo afirmado por ellas no podrá interpretarse como aceptación de las proposiciones efectuadas.

La conciliación podrá estar a cargo de una persona juzgadora especializada en conciliación agraria, si existiera; en cuyo caso, en la misma audiencia, sustituirá a quien la dirige, para esa única actuación. De no haberla, la conciliación la dirigirá la persona juzgadora que esté conociendo del proceso.

ARTÍCULO 223- Homologación del acuerdo conciliatorio judicial

La homologación del acuerdo conciliatorio le corresponderá al órgano conciliador. Este verificará que lo acordado no afecte derechos de terceras personas, no contenga alguna ilegalidad, ni quebrante normas de orden público, tampoco que verse sobre bienes y derechos indisponibles, irrenunciables o que estén fuera del comercio. En tales supuestos, deberá improbarlo. Podrá homologarlo, parcialmente, cuando las restantes cláusulas válidas sean ejecutables y suficientes para lograr el fin de lo acordado.

Si el convenio está conforme a derecho, se homologará y se dará por terminado el proceso. Cuando la homologación sea parcial, el procedimiento seguirá su curso normal respecto de los extremos no convenidos. Los extremos homologados, parcialmente, se ejecutarán en legajo separado.

La sentencia que resuelva sobre la homologación deberá reproducir los acuerdos. Se emitirá en audiencia. Si es necesario, a criterio del órgano conciliador, en casos excepcionales, se podrá diferir durante tres días. Cuando se requiera cumplir con alguna condición o requisito acordado por las partes o exigido legalmente, dicho órgano determinará el plazo para pronunciarse sobre la homologación. El plazo podrá prorrogarse a solicitud de las partes. A su vencimiento, deberá resolverse lo que corresponda.

Concluida la participación del órgano conciliador, este deberá incorporar de inmediato al proceso el acta respectiva o, en su caso, de haberse conciliado, el acuerdo respectivo y la resolución que se pronuncie sobre la homologación, para que el tribunal continúe con lo que corresponda.

ARTÍCULO 224- Conciliación extrajudicial

La conciliación puede realizarse de forma extrajudicial, antes o durante el proceso. Si existe proceso, podrá presentarse en este el acuerdo, a fin de que se pronuncie sobre la homologación. En tal caso, serán aplicables las normas previstas para la conciliación judicial. De no existir proceso, se seguirá el procedimiento homologatorio regulado en los procesos no contenciosos.

ARTÍCULO 225- Conciliación previa facultativa

Antes de interponerse una demanda en esta sede, se podrá solicitar al órgano especializado en conciliación agraria que señale una audiencia, a fin de promover la conciliación con la eventual parte demandada. Para tal efecto, la persona proponente indicará el objeto del conflicto y la dirección exacta dónde se podrá notificar a quienes deban convocarse. La solicitud podrá ser presentada por todas las interesadas.

ARTÍCULO 226- Transacción

Las partes, en cualquier estado del procedimiento, podrán transar sobre el derecho en litigio y hacer valer el acuerdo, aportando el documento donde conste lo convenido. Podrá exponerse oralmente ante el tribunal, de lo cual se dejará constancia en un acta.

El tribunal analizará la transacción para determinar si concurren los requisitos legales para su validez y de no existir objeciones lo homologará. Si contiene defectos subsanables, de previo a resolver lo que corresponda, prevendrá su corrección. Salvo disposición legal en contrario, la transacción homologada produce cosa juzgada material. Si comprende todas las pretensiones debatidas, tendrá como consecuencia la terminación del proceso.

ARTÍCULO 227- Arbitraje

Las partes podrán dar por terminado el proceso, total o parcialmente, si acuerdan someter sus diferendos a un arbitraje. Procederá siempre que las controversias de orden patrimonial o no, actuales o futuras, estén fundadas en derechos respecto de los cuales tengan plena disposición.

Cuando las partes indiquen al tribunal que desean someterse a un arbitraje, deberán demostrar la existencia del compromiso. Si se concluye el proceso de forma total, indicarán lo acordado sobre costas. Ante su omisión, se entenderá que cada parte asume las suyas.

ARTÍCULO 228- Condiciones para la Administración Pública

La Administración Pública y las demás instituciones de derecho público podrán conciliar, transar, someter a arbitraje y utilizar otros medios alternativos de solución de conflictos, salvo disposición en contrario, y siempre que no se contraríen normas de orden público.

Deberá presentarse el acuerdo o la resolución que lo autorice, adoptada por el respectivo superior jerárquico o por el órgano en que este delegue esa función. Si está representada por la Procuraduría General de la República se requerirá la autorización expresa, iguales requisitos se exigirán en caso de gestión anticipada de alguna forma de terminación del proceso.

CAPÍTULO II MEDIOS ANTICIPADOS DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO

ARTÍCULO 229- Conclusión anticipada del proceso

Se podrá concluir anticipadamente el proceso por medio del desistimiento, la renuncia del derecho, la caducidad del proceso, la imposibilidad sobrevenida y la satisfacción extraprocesal, salvo que se trate de bienes indisponibles o de dominio público. Se aplicará supletoriamente la normativa procesal civil, siempre que no contravenga los principios procesales agrarios.

TÍTULO X CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD PROCESAL

ARTÍCULO 230- Garantías

Si se debe establecer el monto de una garantía o contracautela, el tribunal lo fijará de manera prudencial, salvo disposición expresa en contrario. Si la garantía está en riesgo de perder su eficacia, dispondrá su renovación o sustitución, con el apercibimiento de ejecutarlas inmediatamente o de dejar sin efecto las medidas o beneficios garantizados.

ARTÍCULO 231- Costas

Se consideran costas personales los honorarios por servicios de abogacía y la indemnización del tiempo invertido por la parte en asistir a los actos, cuando haya sido necesaria su presencia, para lo cual se tomarán en consideración las circunstancias personales. Los demás gastos indispensables del proceso son costas procesales.

En toda resolución que ponga fin a un proceso, se condenará a la parte vencida, aún de oficio, al pago de costas. En los procesos incidentales, solo se otorgarán las procesales, salvo norma expresa en contrario.

ARTÍCULO 232- Exención de costas

Se podrá eximir de la condena en costas, total o parcialmente, cuando:

- 1) La demanda o contrademanda comprenda pretensiones exageradas.
- 2) La sentencia admita defensas de importancia invocadas por la parte perdedora, las cuales modifiquen sustancialmente lo pretendido.
- 3) Haya vencimiento recíproco sobre pretensiones trascendentes, defensas o excepciones.
- 4) La parte vencida haya litigado con evidente buena fe. No la habrá cuando injustificadamente no haya asistido a las audiencias, o no aportó prueba alguna con su demanda, si se funda en hechos disputados.

ARTÍCULO 233- Criterios especiales para la condenatoria en costas

En la determinación de las costas, se seguirán los siguientes criterios:

- 1) La cuantía del proceso, la situación económica de la persona litigante, así como la etapa en la que se encuentre el procedimiento. Si el proceso no es susceptible de estimación pecuniaria, el tribunal fijará las costas prudencialmente, tomando en cuenta los dos últimos criterios.
- 2) El importe que se debe reconocer por el pago de honorarios de la persona abogada no podrá ser menor al cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) del importe líquido de la condenatoria o de la absolución. Lo anterior se dispone solo si resulta vencida una parte asistida por la defensa pública o servicios afines; una asociación integral de desarrollo indígena de una comunidad determinada; una entidad sin fines de lucro legalmente constituida y declarada de interés público, u organizaciones de mujeres micro, pequeñas y medianas productoras agrarias, conforme lo establezca la normativa especial. Cuando proceda, el pago de honorarios de abogados o abogadas corresponderá a la defensa pública, debiéndose declarar así en sentencia. Se depositarán en la cuenta bancaria especialmente designada con ese fin a favor de la defensa pública, los cuales se emplearán para cubrir gastos de la defensa agraria.
- 3) Si existe pluralidad de partes vencidas en costas, atendidas las circunstancias, se determinará si la condena es solidaria o divisible. Si no se especifica, se entenderá que es solidaria. Si se estipula divisible, el tribunal indicará cómo se distribuye la responsabilidad.
- 4) Cuando el extremo de costas se establezca a favor de varias partes, el monto aprovechará a todas por igual, salvo que se justifique y disponga una distribución diferente.

ARTÍCULO 234- Honorarios de abogados y abogadas y rendición de cuentas

Para la fijación de los honorarios de abogados y abogadas, lo relacionado con el convenio de cuota litis y la rendición de cuentas se aplicará la normativa procesal civil.

**TÍTULO XI
MEDIDAS CAUTELARES Y TUTELARES**

**CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTÍCULO 235- Oportunidad y procedencia de las medidas cautelares

En cualquier tipo de proceso, antes o durante el procedimiento, se podrá solicitar la adopción de medidas cautelares. Estas se decretarán de oficio, salvo norma expresa en contrario, o a solicitud y responsabilidad de la parte.

Se podrán ordenar cuando sean adecuadas y necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Además, para proteger la producción agraria, el ambiente, el suministro o la conservación de alimentos y materia prima, los derechos indisponibles o de orden público y los derechos de las personas productoras rurales.

ARTÍCULO 236- Presupuestos de las medidas cautelares

Para decretar la medida cautelar, el tribunal analizará los principios de proporcionalidad y razonabilidad, la ponderabilidad de intereses relacionados, la probabilidad y la verosimilitud de la pretensión o apariencia de buen derecho y el peligro ante la demora.

ARTÍCULO 237- Medidas cautelares atípicas

Podrán adoptarse, de forma inmediata, medidas cautelares atípicas dentro de los procesos agrarios para la protección de las actividades productivas y las conexas a estas, que sean objeto de estos procesos. La falta de certeza científica absoluta o técnica sobre lo que es objeto de tutela no podrá ser justificante para no adoptar las medidas cautelares correspondientes.

ARTÍCULO 238- Contenido de las medidas cautelares

Además de las medidas cautelares expresamente previstas por el ordenamiento jurídico, el tribunal podrá ordenar la conservación del estado de animales, vegetales, organismos vivos, bienes y situaciones, o bien, efectos anticipativos o innovativos, mediante la regulación o la satisfacción provisional de una situación fáctica o jurídica sustancial. También, podrá imponer o prohibir temporalmente obligaciones de hacer, no hacer o dar.

El tribunal dispondrá lo pertinente para su efectivo cumplimiento. Determinará con precisión su contenido, responsables, duración y forma de ejecución. De ser necesario, prevendrá garantía, indicando su tipo, cuantía y tiempo por el que deba prestarse. La medida no se ejecutará mientras la caución no se haya rendido. Además, podrá emitir una medida menos rigurosa que la solicitada, si se considera suficiente.

ARTÍCULO 239- Modificación, sustitución y levantamiento de medidas cautelares

La medida cautelar podrá ser modificada, salvo disposición en contrario, cuando, entre otras causas, hayan variado las circunstancias que motivaron su adopción. Podrá ser sustituida o levantada, excepto que lo impida su naturaleza o exista peligro de que el derecho de la parte actora se vuelva nugatorio. Para decidir, el tribunal se ajustará a los principios de proporcionalidad, ponderabilidad y razonabilidad. Si lo considera necesario, ordenará a la solicitante rendir garantía suficiente.

Si se levanta una medida no podrá ser adoptada por las mismas causas, a menos que surjan de nuevo las condiciones que la originaron.

Cuando una medida cautelar quede sin efecto al término del proceso o por cualquier otra causa se disponga su levantamiento, se ordenarán las disposiciones correspondientes y se remitirán las comunicaciones con ese fin.

ARTÍCULO 240- Caducidad y rechazo de medidas cautelares

Las medidas cautelares caducarán en tres meses a partir de su determinación si no se ejecutan en ese lapso, por culpa de la parte solicitante o, si después de ejecutadas, no se plantea la demanda. Además, cuando transcurran tres meses de inactividad del proceso imputable a quien la solicitó, salvo que proceda la deserción. La caducidad de la medida se declarará de oficio o a instancia de parte.

Rechazada la medida o declarada caduca, será prohibido decretar esta, salvo que se aleguen motivos diferentes, sustentados en hechos nuevos o distintos.

ARTÍCULO 241- Costas, daños y perjuicios

Podrá condenarse a la parte solicitante de una medida cautelar al pago de costas, daños y perjuicios, cuando:

- 1) Se declare la caducidad de la medida.
- 2) Se ordene la cancelación por improcedente, cuando fue ordenada sin comunicación previa a la contraria.
- 3) Se haya solicitado o ejecutado de manera abusiva.
- 4) La demanda se declare inadmisibile, improponible, se emita o se deniegue en sentencia.
- 5) El proceso finalice por renuncia, desistimiento o deserción.

La condenatoria se decretará en la resolución que levante o cancele la medida cautelar. Se ejecutará mediante el procedimiento de ejecución que corresponda. Si la medida forma parte de un proceso principal, sobre dicha condenatoria se resolverá en sentencia.

Cuando se establezca la obligación de rendir una garantía por monto fijo, esta se hará efectiva a favor de la parte afectada como indemnización mínima, sin perjuicio de que reclame por dichos extremos una suma mayor.

Si se ha otorgado alguna garantía o contragarantía, la parte que pretenda tener derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios causados con su ejecución deberá solicitarlo ante el tribunal mediante un simple alegato, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de cesación de los efectos de la medida. Si la solicitud no se formula dentro del plazo citado o no se acredita el derecho, la

garantía constituida se cancelará seguidamente y se devolverá a quien corresponda.

CAPÍTULO II MEDIDAS CAUTELARES ESPECÍFICAS

ARTÍCULO 242- Embargo preventivo

Para impedir que la parte accionada mediante el ocultamiento o la distracción de bienes pueda eludir una eventual responsabilidad patrimonial, la actora podrá pedir se decrete embargo preventivo.

Con la solicitud se deberá depositar una garantía correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del monto por el que se pide el embargo. Dicha caución no es necesaria si la gestión se funda en un título ejecutivo. La garantía podrá reducirse en proporción al valor de lo efectivamente embargado, cuando no se encuentren suficientes bienes de la demandada en los cuales se pueda hacer recaer la medida.

El embargo preventivo podrá reducirse cuando exceda el monto reclamado. Se levantará cuando se deposite la suma por la cual se decretó.

Si la medida es procedente, esta se ordenará sin necesidad de comunicarlo a la contraria.

ARTÍCULO 243- Anotación de demanda

Deberá disponerse la anotación de la demanda en bienes inscritos en registros públicos o privados que afecten a terceros, cuando se pida la constitución, modificación o extinción de un derecho real o personal con efectos reales. La parte demandante podrá gestionarlo sin necesidad de rendir garantía.

El tribunal librará mandamiento, con expresión del nombre, los apellidos, los números del documento de identificación de la parte actora y demandada, si constan en el expediente, así como las citas de inscripción del bien en litigio se remitirá de oficio, vía electrónica, a la mayor brevedad, salvo si existe alguna situación especial que lo impida. En tal caso, se utilizarán otros medios idóneos y, de ser necesario, la gestionante deberá diligenciarlo.

Anotado el mandamiento, cualquier acto relativo a los bienes se entenderá verificado, sin perjuicio del derecho del anotante.

No será admisible la contra cautela para el levantamiento de la anotación de la demanda.

No obstante, cuando el objeto de la demanda afecte una parte del inmueble y no la totalidad, el tribunal que ordenó la anotación podrá ordenar, si así lo solicita el propietario, la anotación únicamente en la parte del inmueble objeto de la demanda;

para ello, el propietario deberá por su cuenta, previo levantamiento del plano catastrado respectivo, segregar e inscribir como finca independiente en el Registro Público la parte del inmueble en litigio.

ARTÍCULO 244- Suspensión provisional de acuerdos sociales y similares

Cuando se impute la infracción de derechos, legales o convencionales, referidos a acuerdos sociales o de otras agrupaciones legalmente constituidas, se podrá disponer la suspensión provisional de los efectos del acuerdo impugnado. Para impedir la ejecución, se anotará la medida en el registro respectivo.

Si se trata de sociedades comerciales, quien lo solicite deberá demostrar que representa al menos el diez por ciento (10%) del capital social. En caso de otras personas jurídicas o entidades, deberá demostrar que es titular de cuotas en la misma proporción.

ARTÍCULO 245- Depósito de bienes

El depósito de bienes podrá ordenarse de oficio o a gestión de parte con previa rendición de garantía, si con la demanda se pretende su entrega y se encuentren en posesión de la parte accionada. Podrá ordenarse únicamente en casos muy calificados, cuando el bien esté en abandono o en peligro inminente de sufrir detrimentos graves o irreversibles, y siempre que no se agrave el conflicto económico social que da origen al proceso. Si se acoge, el tribunal designará depositario idóneo, fijará sus honorarios, ordenará el inventario de los bienes, así como la descripción detallada de estos y su estado. La persona designada deberá asegurar la conservación de tales bienes.

ARTÍCULO 246- Prohibición de innovar, modificar o cesar una actividad

Cuando un bien o derecho pueda sufrir menoscabo significativo o deterioro por causa de innovación, modificación o alteración en el curso del proceso, podrá prohibirse innovar, edificar, modificar, efectuar o ampliar cultivos perennes o semiperennes, así como ordenar el cese de una actividad o abstenerse, temporalmente, de llevar a cabo una conducta o prestación. Estas prohibiciones se dispondrán, en casos muy calificados, siempre que la medida no implique un menoscabo en la actividad productiva o genere un desequilibrio procesal y agrave el conflicto económico social.

ARTÍCULO 247- Acceso a fundos

Cuando sea necesario garantizar, de forma provisional, el acceso a un fundo ante el cierre del paso utilizado o imposibilidad sobrevenida en el uso de este por acciones humanas o de la naturaleza, se podrá ordenar el paso provisional por este u otro sector del inmueble, procurando la menor afectación. Lo anterior se

dispone siempre que no se tenga acceso o salida suficiente a una vía pública transitable.

La resolución que adopte la medida especificará las condiciones desde las cuales se permite el acceso provisional. Para su ubicación, se describirán sus características principales. También deberá disponer, si fuera el caso, la autorización de ejecutar obras y labores de mantenimiento, de acuerdo con las circunstancias, cuyo costo estará a cargo de la parte solicitante.

Si la medida se plantea de forma anticipada, de acogerse, la gestionante deberá interponer su demanda dentro del plazo de un mes. Vencido este, se declarará caduca y se le condenará al pago de las costas, los daños y perjuicios. Para mantener sus efectos, de verificarse los presupuestos de procedibilidad, las pretensiones de la demanda deberán versar sobre la constitución, la declaración, la modificación o el reconocimiento de un derecho real o personal de acceso a un inmueble.

CAPÍTULO III PROCEDIMIENTO CAUTELAR

ARTÍCULO 248- Solicitud de la medida cautelar

En la solicitud de medida cautelar, salvo que conste en el proceso, se indicarán el nombre y las calidades de las partes, el tipo y el objeto del proceso, lo pedido, su justificación y la finalidad. Además, de ser necesario, la prueba, la estimación y el medio para atender notificaciones. Deberá ofrecerse la prestación de garantía cuando legalmente se requiera, especificando el tipo y la justificación del importe que se propone. Si se trata de una medida cautelar anticipada, se indicará el lugar dónde notificar a la persona afectada o demandada.

La falta de algún requisito en la solicitud o en la demanda, si se presenta dentro de esta, no será impedimento para el trámite de la medida, excepto que sea indispensable a fin de resolverla.

ARTÍCULO 249- Audiencia para medidas cautelares

Antes de resolver una medida cautelar, se dará intervención a la demandada, con las excepciones de ley, y se convocará a las partes a audiencia que se celebrará a la mayor brevedad. Lo anterior será innecesario si está programada otra audiencia próximamente, caso en el cual se aprovechará dicha oportunidad, previo aviso a las partes.

En la audiencia se oír a las partes. Si se admite prueba se recibirá de una vez, se escucharán las conclusiones y se resolverá la medida.

Las medidas cautelares decretadas se ejecutarán inmediatamente. Ningún recurso, proceso incidental o petición detendrá la ejecución.

ARTÍCULO 250- Medidas provisionalísimas

Cuando se solicite una medida cautelar, el tribunal de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar medidas provisionalísimas de manera inmediata, sin traslado previo a la parte contraria, a fin de garantizar la efectividad de que se adopte finalmente. Tal resolución solo tendrá recurso de revocatoria.

Si la parte contra la cual se pide la medida, sin haberle sido comunicada, participa en alguna de las pruebas admitidas para resolverla, se le tendrá por notificada de dicha gestión. La resolución que se pronuncie sobre la medida cautelar se le deberá comunicar posteriormente, salvo que se emita en su presencia.

**TÍTULO XII
PROCESOS DE CONOCIMIENTO, MONITORIOS Y ESPECIALES****CAPÍTULO I
PROCESO ORDINARIO****ARTÍCULO 251- Procedencia y emplazamiento**

Las pretensiones que carezcan de un procedimiento expresamente señalado se conocerán por medio del proceso ordinario.

Cumplidos los requisitos de la demanda, se emplazará a la parte contraria. Se le harán de una vez todas las prevenciones correspondientes. Para contestar la demanda y la reconvencción se conferirán quince días. Si tiene su domicilio en el extranjero y no cuenta con una persona apoderada en Costa Rica, el plazo para contestar será de treinta días.

**CAPÍTULO II
PROCESOS SUMARIOS****SECCIÓN I
DISPOSICIONES VARIAS****ARTÍCULO 252- Procedencia**

Mediante el proceso sumario se tramitarán las pretensiones de:

- 1) Interdictos.
- 2) Desahucios.
- 3) Cobro de obligaciones dinerarias líquidas y exigibles, cuando no corresponda hacerlo en el proceso monitorio.
- 4) Derivadas de un contrato de arrendamiento, cuando se pretenda la resolución o la ejecución forzosa del acuerdo.
- 5) Relativas a la posesión provisional de bienes muebles, excepto dinero.

- 6) Entrega o devolución de bienes muebles, cuando haya título que acredite el respectivo derecho u obligación.
- 7) Referidas a controversias sobre la administración de la copropiedad y dominio compartido.
- 8) Prestación, modificación o extinción de garantías.
- 9) Solicitud de autorización, a fin de ingresar en predio ajeno, cuando lo permita la ley.
- 10) Cobro de créditos garantizados por el derecho de retención sobre bienes muebles.
- 11) Restablecimiento del derecho de paso fundado en un título preexistente, cuando no proceda el interdicto.
- 12) Derivadas de conflictos por competencia desleal agrarias. Además, las que se susciten por derechos de las y los obtentores de variedades vegetales.
- 13) Daños y perjuicios originados en la infracción de los derechos de las personas consumidoras cuando estén relacionadas con la actividad de producción de animales, vegetales y organismos.
- 14) Las dispuestas por ley.

Se podrá optar por acudir directamente a la vía ordinaria, salvo cuando se trate de los supuestos señalados en los incisos 1, 2, 5, 6, 9, 12 y 13.

ARTÍCULO 253- Emplazamiento en procesos sumarios

Si la demanda cumple los requisitos legales, se emplazará a la parte demandada y de una vez se harán las prevenciones respectivas. El plazo para contestar será de cinco días.

ARTÍCULO 254- Plazo para cumplimiento voluntario en procesos sumarios

La parte actora podrá solicitar que se otorgue a la demandada un plazo para el cumplimiento de la pretensión principal, cuando se refiera a:

- 1) La resolución del contrato de arrendamiento, si se pide por el incumplimiento de una obligación de hacer o entregar.
- 2) La devolución de un bien.
- 3) La prestación o modificación de garantías.
- 4) La autorización para ingresar a un inmueble o el restablecimiento del derecho de paso.

El plazo será de cinco días y se otorgará en el emplazamiento de la demanda. Si se cumple lo requerido, las partes deberán informarlo al tribunal. En tal supuesto, se dará por terminado el proceso sin especial condenatoria en costas.

ARTÍCULO 255- Sentencia desestimatoria y conversión a ordinario

Si se emite sentencia desestimatoria, se revocará cualquier acto de ejecución o medida cautelar acordados. No obstante, la parte actora podrá solicitar en el plazo

de cinco días a partir de su firmeza que se convierta el proceso sumario en ordinario.

Si se trata de los mismos hechos y partes, bastará que en la solicitud se informe que se mantiene lo expresado en la demanda sumaria y se readecuen las pretensiones. Caso contrario, deberá adjuntar de una vez el nuevo alegato de demanda, cumpliendo los requisitos legales.

El emplazamiento a la parte demandada se hará por el plazo de quince días, y su comunicación se hará en el medio señalado en el sumario. Si se demanda a otras personas, serán notificadas de forma personal. De igual manera, se notificará a quienes no se hayan apersonado al sumario o no hayan señalado medio para esos efectos.

Cuando se admita la conversión, se mantendrán las medidas cautelares declaradas. La prueba practicada con anterioridad conservará su eficacia, siempre que no se vulneren la inmediación, el derecho de defensa y el contradictorio de las partes, de lo contrario podrá incorporarse como documental.

SECCIÓN II DESAHUCIO

ARTÍCULO 256- Procedencia

La demanda de desahucio procederá cuando se pretenda el desalojo de un inmueble ante la terminación del contrato de arrendamiento agrario, en los casos previstos por la ley o para hacer cesar la mera tolerancia.

Será declarada improponible cuando sea evidente que la relación contractual es de una naturaleza diferente al arrendamiento, independientemente de la denominación o calificación jurídica dada al contrato. La actora podrá solicitar, dentro de los cinco días siguientes a la firmeza de la sentencia anticipada, la conversión del proceso en ordinario.

ARTÍCULO 257- Causales de terminación del arrendamiento dirimibles en proceso de desahucio

Se conocerán por medio del desahucio las siguientes causales de terminación de un contrato de arrendamiento:

- 1) Vencimiento del plazo.
- 2) Falta de pago.
- 3) Explotación o uso abusivo del bien.
- 4) Cambio de destino no autorizado.
- 5) Subarriendo, total o parcial, no autorizado.
- 6) Abandono notorio o descuido grave del bien.

- 7) Daños o deterioros causados significativos causados al bien por la persona arrendataria o permitidos por esta, que impidan el uso para el que es apto o afecten la continuidad de la producción o la organización empresarial.
- 8) Imposibilitar la inspección del bien a la persona arrendante o propietaria.
- 9) Falta de aviso a la arrendante o propietaria, de una situación de riesgo para el bien, por parte de la arrendadora.
- 10) Extinción del contrato por expiración del derecho de la persona usufructuaria o fiduciaria que haya dado en arrendamiento el bien, salvo acuerdo expreso en contrario.

ARTÍCULO 258- Demanda de desahucio y legitimación

Además de los requisitos generales, en la demanda se consignará la causal de desalojo, el lugar donde esté ubicado el inmueble, el monto de renta vigente y la fecha de pago cuando proceda. Se deberá demostrar el derecho de propiedad del bien o el que legitime a la parte actora, y el contrato de arrendamiento, si está documentado.

La demanda la podrá establecer solo la persona que compruebe ser propietaria, arrendante, subarrendante, poseedora del bien por título legítimo, o acredite que su derecho deriva de quien tuvo facultad para otorgarlo. Si no se demuestra dicha condición, la demanda será declarada improponible.

El desahucio procederá contra la persona arrendataria, subarrendataria, poseedora del inmueble y ocupante por mera tolerancia.

ARTÍCULO 259- Desahucio por falta de pago del arrendamiento

En toda demanda de desahucio sustentada en un contrato que implique el pago de rentas, se prevendrá a la parte demandada, al emplazarla, la obligación de depositar a la orden del tribunal los alquileres posteriores a la demanda. Se le apercibirá que ante su incumplimiento, se tendrá como una causal de desalojo adicional, que se resolverá en sentencia. Si existe duda sobre el monto del alquiler, el tribunal determinará prudencialmente la suma por depositar.

Si la parte demandada, al contestar, se opone de forma fundada a la prevención de depositar los alquileres posteriores, por haber pagado anticipadamente de forma suficiente, el tribunal podrá dejarla sin efecto. Lo anterior se dispone sin perjuicio de lo que resulte demostrado en sentencia, y de que se declare con lugar la demanda por configurarse la causal de falta de pago durante el proceso. Igual trámite procederá si se interpone la excepción de pago, basada en la compensación por gastos, reparaciones y servicios abonados por cuenta de la arrendadora, en disminución del precio o exoneración del pago.

ARTÍCULO 260- Intervención de terceros

En los casos, cuando, sin consentimiento de la parte arrendante o propietaria del bien, terceras personas lo posean o subarrienden, no será necesario demandarlas. Se les notificará la sentencia, a fin de que puedan hacer valer sus derechos.

ARTÍCULO 261- Depósito cautelar

En los procesos de desahucio, cualquiera que sea la causal invocada, si la persona arrendataria ha desalojado el inmueble, de oficio o a solicitud de parte, podrá otorgarse a la arrendante su tenencia, a título de depósito cautelar. Previo reconocimiento judicial, deberá levantarse un acta donde se consignará el estado del bien y el inventario de lo existente en este.

ARTÍCULO 262- Sentencia estimatoria

En la sentencia estimatoria se ordenará a la parte demandada la entrega del inmueble, dentro del plazo que el tribunal otorgue. Si se condena al pago de daños y perjuicios, se podrán determinar de una vez, de haber elementos probatorios suficientes; de lo contrario se hará en abstracto.

ARTÍCULO 263- Cultivos pendientes

Si existen cultivos o frutos que estén cosechándose o pendientes de ello, al momento de la firmeza de la sentencia estimatoria, la parte vencida podrá pedir, en los ocho días siguientes, se difiera la entrega total o parcial del bien, por el tiempo indispensable para su recolecta. Con la solicitud se deberá rendir garantía de pago o depositar el monto de la renta correspondiente por el tiempo adicional requerido para ese fin.

La solicitud se pondrá en conocimiento de la contraria por tres días. Si se acoge, podrán ordenarse las medidas pertinentes. El plazo concedido para postergar la entrega del bien debe ser razonable. Quedará sin efecto si sobreviene la pérdida de los cultivos.

Si al referirse a dicha gestión, la parte vencedora presenta simultáneamente solicitud de embargo, el tribunal resolverá conjuntamente ambas peticiones.

ARTÍCULO 264- Pretensión vía incidental en ejecución de sentencia

La parte ejecutante podrá gestionar vía incidental, una vez firme la sentencia estimatoria, el pago de los alquileres no satisfechos, los servicios y otros gastos inherentes al vínculo arrendaticio, pendientes de pago.

SECCIÓN III INTERDICTOS

ARTÍCULO 265- Procedencia y caducidad

Los interdictos son de amparo de posesión, restitución y reposición de linderos. En ellos solo podrá debatirse sobre la posesión actual y momentánea de bienes inmuebles y el ejercicio del derecho ya constituido de servidumbre, así como de la obligación de paso declarada judicialmente. De ninguna manera afectarán las cuestiones referidas a los derechos de propiedad y de posesión definitiva, sobre los cuales no se admitirá discusión.

Si se establece un interdicto en lugar de otro, o todos a la vez, de acuerdo con la situación de hecho, se resolverá el que proceda.

La demanda interdictal será improcedente cuando:

- 1) Se interponga luego de transcurridos tres meses, desde el inicio de los hechos u obras contra las cuales se reclama.
- 2) La perturbación o despojo reclamado provenga de decisiones judiciales o administrativas.
- 3) Lo disponga, expresamente, el ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 266- Amparo de posesión

El interdicto de amparo de posesión procederá cuando la persona que esté en posesión de un inmueble resulte perturbada por actos o hechos que manifiesten intención de despojo o perjudiquen el libre goce del bien.

Se estimará que existe intención de despojo siempre que la persona responsable de los hechos que se demandan haya conocido o debido conocer las consecuencias lesivas sobre el derecho ajeno.

La sentencia estimatoria ordenará a la parte demandada que mantenga a la actora en posesión del bien y se abstenga de perturbarle, con el apercibimiento de ser juzgada por el delito de desobediencia a la autoridad. Lo anterior se dispone sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones que corresponden ante el incumplimiento de sentencias con condena de no hacer.

ARTÍCULO 267- Restitución

Será procedente el interdicto de restitución, cuando la persona que ejerza la posesión haya sido despojada ilegítimamente de un inmueble, total o parcialmente.

La sentencia estimatoria ordenará a la parte demandada que restituya en la posesión del bien a la actora, en el plazo conferido para ello, con el apercibimiento de ser juzgada por el delito de desobediencia a la autoridad. Lo anterior se dispone

sin perjuicio de la aplicación de las normas que correspondan a las condenas de dar y de hacer.

ARTÍCULO 268- Sentencia estimatoria en servidumbres y obligación de paso

Cuando se trate del amparo o la restitución del ejercicio de una servidumbre o de la obligación de paso, la sentencia estimatoria ordenará a la parte demandada, respectivamente, que mantenga o restituya en su ejercicio a la actora. Podrán aplicarse las disposiciones atinentes a las condenas de hacer, de no hacer o de dar.

ARTÍCULO 269- Supuestos especiales en interdictos de amparo y restitución

Si los interdictos de amparo de posesión y de restitución se dirigen contra quien, inmediata y anteriormente, poseyó como dueño o dueña, la parte actora deberá probar que por más de un año ha poseído pública y pacíficamente como dueña, o que tiene otro título legítimo para poseer.

Si versan sobre servidumbres continuas no aparentes, o sobre discontinuas, el reclamo, para ser atendible, deberá fundarse en un título que provenga de la persona propietaria del fundo sirviente, o de aquellas de quienes esta lo obtuvo. Si se trata de una obligación de paso constituida judicialmente, deberá aportarse la sentencia firme.

ARTÍCULO 270- Reposición de linderos

Procederá el interdicto de reposición de linderos, cuando se incurra en alteración de límites entre inmuebles, por destrucción o colocación diferente de los preexistentes. La persona perjudicada podrá dirigir su demanda contra la autora del hecho, contra quien se haya beneficiado de este o contra ambos.

En la sentencia estimatoria se ordenará la restitución de los linderos a su estado original. Los gastos que impliquen la reposición o restitución serán asumidos por quien sea declarado responsable de la alteración, o quien se haya beneficiado de esta. Si la parte demandada admite la existencia de la alteración, pero niega ser la autora y no se determina quién lo fue, se ordenará la restitución a costa de la actora y de la demandada, según corresponda. Si se prueba que la demandada procedió con evidente buena fe, se le podrá eximir del pago de daños y perjuicios. De no cumplirse lo ordenado, se procederá según lo dispuesto en sentencia para condenas de hacer.

ARTÍCULO 271- Condena en daños y perjuicios

En sentencias estimatorias emitidas en procesos interdictales se condenará a la parte demandada al pago de los daños y perjuicios causados. Se liquidarán en ejecución de sentencia.

SECCIÓN IV SUSPENSIÓN DE OBRA NUEVA

ARTÍCULO 272- Procedencia y suspensión de la obra

Cuando la amenaza a los derechos de una persona propietaria o poseedora de un inmueble provenga de cualquier obra nueva que se esté iniciando, se ordenará suspenderla o ponerla en estado que ofrezca suficiente seguridad. En este último supuesto, podrán autorizarse las labores absolutamente indispensables. El tribunal, de inmediato, practicará un reconocimiento judicial, a fin de constatar y describir de forma detallada el estado de la obra, lo cual podrá complementar con prueba pericial.

La suspensión se prevendrá a la persona dueña de la obra, pero si no está presente en el acto se hará a la directora, encargada u operarias, para que inmediatamente se suspendan los trabajos, con el apercibimiento de seguirseles causa por el delito de desobediencia a la autoridad, en caso de incumplimiento.

En cualquier momento, a petición de parte, el tribunal podrá ordenar la destrucción de lo construido en contra de la orden de suspensión, a costa de la persona infractora.

ARTÍCULO 273- Continuación de la obra

Si la continuación de la obra apenas ocasiona un leve daño, se podrá autorizar su continuación, siempre que quien la ejecuta rinda garantía suficiente, a criterio del tribunal, la cual permita la destrucción de lo construido, si luego en sentencia, en ese supuesto, se declara procedente la demanda y se ordene la demolición de lo construido posteriormente.

ARTÍCULO 274- Sentencia estimatoria

En la sentencia estimatoria, se ordenará la suspensión definitiva de la obra, cuya ejecución se hará de inmediato, aunque se presente apelación. Además, se condenará a la parte demandada a pagar los daños y perjuicios. Deberán liquidarse una vez que esté firme la sentencia. Cuando constituya un peligro o transgresión evidente al derecho de propiedad ajena, se podrá ordenar la destrucción de lo edificado.

**SECCIÓN V
DERRIBO****ARTÍCULO 275- Procedencia y legitimación**

El sumario de derribo procederá cuando el mal estado de una construcción, un árbol o un bien en general constituya una amenaza para los derechos de quien posea un bien, el cual se pueda ver afectado por esa situación, para las personas transeúntes o cuando puedan ser perjudicados bienes públicos. La demanda podrá ser establecida por cualquiera que tenga interés.

ARTÍCULO 276- Adopción de medidas de seguridad

Presentada la demanda, el tribunal de inmediato hará un reconocimiento judicial del lugar o del bien, y emitirá las medidas de seguridad necesarias. Si lo estima conveniente, podrá auxiliarse con una persona experta o funcionaria pública, especialista en la rama profesional que se requiera.

Los gastos que ocasione la ejecución de las medidas de seguridad estarán a cargo de la dueña o poseedora del bien ruinoso. En su defecto, la actora suplirá los gastos. Tendrá derecho al reembolso correspondiente.

ARTÍCULO 277- Sumario de derribo de árboles

Cuando lo pretendido sea el derribo de un árbol en mal estado, se tendrá como parte a la Procuraduría General de la República.

Si se ubica en un territorio de dominio público, podrá tramitarse el proceso contra persona ignorada. Si se localiza en un inmueble privado, será necesario acreditar de forma idónea a quien pertenece o, en su caso, quien lo posee.

La autorización para el derribo total o parcial del árbol, o su desrame, no confiere derecho alguno para su aprovechamiento. Si es posible disponer del producto forestal, la persona autorizada legalmente deberá obtener los permisos necesarios ante la autoridad administrativa respectiva y asumir los costos. Si no existe persona legitimada que pueda aprovechar el producto de la corta o desrame, podrá hacerlo la Junta de Educación del lugar, o cualquier otra institución u organización autorizada por ley, a su costo y responsabilidad.

ARTÍCULO 278- Sentencia estimatoria

En la sentencia estimatoria se ordenará el derribo o la adopción de medidas de seguridad permanentes o temporales. Aunque se recurra, si se dispone el derribo, podrá practicarse inmediatamente de forma total o parcial, cuando no sea posible postergar la ejecución sin grave e inminente riesgo. También podrán ordenarse medidas de seguridad, permanentes o temporales, cuando no se hayan dispuesto o realizado antes. Cuando proceda, se condenará a la parte demandada al pago de los daños y perjuicios.

CAPÍTULO III PROCESO MONITORIO

ARTÍCULO 279- Procedencia y requisitos de admisibilidad

Mediante el proceso monitorio, se tramitará el cobro de obligaciones dinerarias, líquidas y exigibles, fundadas en documentos públicos o privados, con fuerza ejecutiva o sin ella. En lo no regulado expresamente en este Código, se aplicará lo dispuesto en la normativa especial, otras leyes especiales y la legislación procesal civil.

Además, en esta sede se aplicará lo siguiente:

- 1) La demanda deberá contener los requisitos generales establecidos en este Código. Sin embargo, la exposición de los hechos se hará de forma sucinta y se indicarán las sumas reclamadas de capital e intereses y los periodos por liquidar.
- 2) Al admitirse la demanda, se ordenará a la parte demandada pagar el capital, los intereses liquidados, los futuros de haber sido solicitados y ambas costas. Se le conferirá un plazo de quince días para que cumpla o se oponga, interponiendo en ese acto las excepciones respectivas. Se le prevendrá que, en caso de no oponerse, o si lo hace de forma infundada, se ejecutarán los extremos reclamados. En la misma resolución, el tribunal rechazará de plano el cobro de los extremos reclamados que sean legalmente improcedentes.
- 3) Si la parte demandada se allana totalmente a lo pretendido se ejecutará lo ordenado en la resolución intimatoria, si existieran bienes embargados. De lo contrario, la parte actora deberá indicar sobre cuáles lo hará recaer. Cuando el allanamiento sea parcial, en lo no aceptado, se continuará con el proceso.
- 4) Solo se admitirá la oposición basada en falsedad del documento, falta de exigibilidad de la obligación, pago y prescripción, sin perjuicio de las excepciones procesales procedentes. Para fundamentar la oposición, será procedente el ofrecimiento de prueba admisible, pertinente y útil. Si la oposición es fundada, no procederán temporalmente los efectos de la resolución intimatoria, salvo lo relativo a embargos. De ser necesario, se programará la audiencia única, la cual se regirá por las disposiciones de este Código.
- 5) La sentencia deberá emitirse en audiencia. Solo en casos de excepcional complejidad, el tribunal podrá diferir su dictado hasta por tres días, lo cual deberá justificar al finalizar la audiencia. Si la sentencia se emite en audiencia, el recurso de apelación se formulará de forma oral e inmediata. Si se difiere el dictado, deberá interponerse en los tres días siguientes a partir de su comunicación.
- 6) Cuando se admita la conversión del proceso monitorio al ordinario, se mantendrá la eficacia de la prueba practicada, siempre que no se viole la inmediatez. Se conservarán las medidas cautelares declaradas, previo rendimiento de caución, cuando sea legalmente requerida, salvo que se haya otorgado anteriormente.

CAPÍTULO IV INCIDENTES Y TERCERÍAS

ARTÍCULO 280- Procedencia

Cuando sea necesario resolver cuestiones relacionadas directamente con el proceso principal y no exista otro procedimiento establecido, se tramitarán mediante el proceso incidental.

Deberán promoverse simultáneamente. Se rechazarán de plano los interpuestos con posterioridad, sustentados en hechos conocidos con antelación. Contra tal pronunciamiento solo cabrá recurso de revocatoria.

Los incidentes no suspenden el proceso principal, salvo que la ley les conceda ese efecto de modo expreso, si es imposible continuar el procedimiento o cuando el tribunal lo disponga al resultar indispensable para el adecuado desarrollo de este.

ARTÍCULO 281- Interposición y trámite

Los formulados fuera de audiencia se tramitarán en legajo separado. Si no se cumple con los requisitos legales, serán rechazados de plano. Si se admiten, se emplazará a la parte articulada por un plazo de tres días y de una vez se indicará si se reservan o no para ser resuelto en la audiencia preparatoria o, en su caso, en la de juicio. En caso contrario, la resolución final se dictará en el plazo de tres días, salvo que deba practicarse alguna prueba o se reserve para ser resuelta en la sentencia del principal. Si es necesario practicar prueba se señalará una audiencia con ese fin, con la mayor brevedad, y al finalizar se emitirá de inmediato la resolución final.

En lo no regulado, expresamente, sobre incidentes y en las tercerías, se aplicará lo dispuesto en la normativa procesal civil y la legislación especial, en lo que no se oponga a lo previsto en este Código.

CAPÍTULO V DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA TUTELA DEL AMBIENTE

ARTÍCULO 282- Proceso de trámite preferente

Los tribunales agrarios conocerán de las controversias que se susciten entre particulares vinculadas con la biodiversidad, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, mientras no exista una jurisdicción ambiental. Este capítulo estará referido a este tipo de procesos exclusivamente.

1) Se priorizará en relación con otros procesos, el emplazamiento, la programación de actos necesarios para las medidas tutelares, el señalamiento de audiencias y la emisión de sentencia, en cualquier instancia.

- 2) Si se trata de un proceso ordinario, el plazo para contestar la demanda se reducirá a diez días.
- 3) La programación de la audiencia preparatoria no podrá superar los diez días siguientes a partir de la contestación de la demanda o de la contrademanda en su caso, o del vencimiento del plazo para hacerlo. Con ese fin, el tribunal podrá reprogramar las audiencias de otros procesos. Si por razones excepcionales o por aspectos probatorios no es posible hacer el señalamiento en el plazo indicado, deberán justificarse las razones por las cuales se señala fuera de este.

ARTÍCULO 283- Tutela cautelar en procesos agrarios

Para la efectiva tutela cautelar ambiental, en los procesos agrarios, además de las disposiciones generales de las medidas cautelares, se aplicarán las siguientes reglas:

- 1) La tutela cautelar para la protección de los recursos, los bienes y los servicios ambientales procederá aunque la demanda o la contestación no cumplan con los requisitos de forma para su admisibilidad, excepto si están relacionados con las pretensiones.
- 2) El tribunal podrá requerir que se rinda una garantía económica, o bien, disponer cualquier otro tipo de obligación de índole no dineraria, cuando alguna de estas sean necesarias para la efectiva ejecución de la medida.
- 3) A fin de determinar la procedencia de la medida y para su ejecución, sin necesidad de requerimiento de parte, el tribunal podrá gestionar la información que considere necesaria y ordenar de urgencia, cuando sea procedente, un reconocimiento judicial. Podrá ordenar experticias y auxiliarse con personas funcionarias públicas o consultoras técnicas.
- 4) La falta de certeza científica o técnica no podrá ser justificante para dejar de adoptar la tutela cautelar.
- 5) Cuando se adopten las medidas tutelares para evitar la amenaza o agravamiento de algún daño ambiental se harán las prevenciones pertinentes para su cumplimiento a la persona dueña del bien o poseedora por cualquier título, la construcción o la plantación, si está presente en el acto. Si no se encuentra, la prevención se hará a quien ejerza la dirección, administración o a la persona encargada, operaria, trabajadora, que posea o habite el lugar por encargo de otra, para que de inmediato suspenda las actividades, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le investigará por el delito de desobediencia a la autoridad.

ARTÍCULO 284- Condena de adoptar acciones u omisiones preventivas

Si se impone en la sentencia la orden de adoptar acciones u omisiones preventivas, el tribunal podrá disponer todas aquellas que sean consecuencia directa de lo resuelto y lo que como parte de ello se estime necesario para el debido control de su ejecución y la eficacia futura. Apercibirá que en caso de incumplimiento se testimoniarán piezas a la vía penal para que se le investigue por el delito de desobediencia a la autoridad; si son personas funcionarias públicas, lo será por el

de incumplimiento de deberes, sin perjuicio de otras figuras delictivas.

Si se trata de instituciones públicas o de personas jurídicas, se especificará sobre quién pesará la obligación de hacer efectivo lo resuelto, en razón del cargo que ocupa, en el entendido de que esta alcanza a quien le corresponda desempeñarlo.

ARTÍCULO 285- Condena por daño ambiental

Cuando se trate de una condena por daño ambiental el tribunal dispondrá lo siguiente:

- 1) Ordenará la recomposición o reparación del ambiente, siempre que sea factible, a fin de procurar restablecer el estado o situación preexistente de la forma más íntegra posible, considerado a partir de la mejor información disponible. Se entenderá que no será posible cuando el daño sea irreversible. Solo excepcionalmente y fundado en criterios técnico-científicos, el tribunal podrá ordenar la adopción de medidas alternativas o equivalentes en mayor beneficio del ambiente, cuando su costo sea considerablemente menor al de la recomposición. Podrán imponerse otras formas de reparación, cuando el daño no haya sido excesivo o el criterio técnico o científico recomiende, como solución idónea, la regeneración natural.
- 2) Si se impone a la persona responsable el deber de reparar, por sí misma, de forma integral, el daño causado, la sentencia establecerá los mecanismos para controlar y verificar el cumplimiento de esa obligación. Se apercibirá que en caso contrario se testimoniarán piezas a la vía penal para que se le investigue por el delito de desobediencia a la autoridad. Si el tribunal estima que la persona responsable no está capacitada para ello, técnica ni científicamente, podrá encomendar, a costa de esta, la ejecución específica a cargo de una tercera persona pública, privada u otras organizaciones civiles que sí lo estén.
- 3) De acogerse reclamos patrimoniales a título particular, cuando la parte demandante esté técnica y científicamente capacitada para llevar a cabo la ejecución específica de lo concedido, y haya solicitado que se le autorice hacerlo, pero a cargo de la demandada, sin que esta haya manifestado objeción, se podrá acoger la petición.

ARTÍCULO 286- Condena indemnizatoria

Cuando se solicite en la demanda la recomposición o reparación del ambiente, o la indemnización dineraria, independientemente de la prioridad con que se formulen, se ordenará en sentencia la recomposición. Si no es posible, se impondrá la indemnización, de manera subsidiaria.

Se exceptúan aquellos procesos en los cuales la parte actora sea la afectada directa y su pretensión consista únicamente en la indemnización, en función de su interés patrimonial particular.

ARTÍCULO 287- Destino de los recursos pecuniarios derivados de una condena

indemnizatoria

Los recursos pecuniarios derivados de una condena indemnizatoria, en lo concerniente al daño ambiental, deberán orientarse a la reparación de la afectación concreta. De no ser posible, se deberán destinar a la protección, preservación, restauración o mejoramiento en general de bienes, recursos, servicios o ecosistemas, iguales o equivalentes a los afectados.

ARTÍCULO 288- Indemnización por daño patrimonial individual

Se otorgará la indemnización a favor de la persona afectada directa, en los procesos donde se haya solicitado indemnización a título particular, por un daño ambiental que ha incidido sobre su patrimonio.

La indemnización concedida a la persona afectada directa no deberá comprender lo relativo al daño ambiental colectivo, ni tampoco lo que, de algún modo, haya sido ordenado o concedido anteriormente o en el mismo proceso, con el fin de reparar o restaurar el daño ocasionado al ambiente, y que con ello haya resultado beneficiada.

ARTÍCULO 289- Indemnización en beneficio de la colectividad

Se otorgará la indemnización en beneficio de la colectividad, a favor del Estado, en los procesos en los que no proceda un reclamo indemnizatorio particular, debido a la afectación del ambiente.

La sentencia ordenará se deposite lo concedido en la caja única del Estado, en una cuenta cliente creada para tal fin, cuyo titular será el ente público designado por el tribunal. Se elegirá a aquel cuyas competencias administrativas sean las más afines o idóneas para la recomposición de ambiente, según el daño analizado en el proceso. Dicho ente deberá destinar la indemnización para ejecutar las obras de reparación y restauración necesarias, tomando en cuenta las indicaciones que el tribunal haya determinado en la sentencia. Además, ordenará al Ministerio de Hacienda tomar las provisiones financieras en el título presupuestario correspondiente.

ARTÍCULO 290- Órganos de fiscalización de las condenas por daño ambiental colectivo

La sentencia que imponga una condena por daño ambiental colectivo deberá indicar cuáles serán los órganos de fiscalización encargados de controlar que se cumpla efectivamente lo ordenado, para prevenir, proteger o restaurar los daños al ambiente.

El órgano ejecutor podrá requerir, periódicamente, a dichos órganos informes de los avances en la ejecución, con el fin de emitir los recordatorios necesarios cuando exista alguna tardanza u omisión, o bien, para tomar otras medidas legales pertinentes en función de lo ejecutoriado.

TÍTULO XIII PROCESO DE EJECUCIÓN

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 291- Competencia en procesos de ejecución

El tribunal que emitió la resolución u homologó el acuerdo judicial o extrajudicial será competente para conocer del proceso de ejecución.

La resolución por ejecutar deberá ser cumplida, de la forma y los términos consignados en ella. Para su pronta y efectiva ejecución, la jueza o el juez dispondrá las medidas necesarias, aunque no se hayan ordenado en la resolución por ejecutar, siempre que no se altere lo otorgado o concedido en ella.

Si se ha omitido consignar las prevenciones referidas a las sanciones aplicables en caso de incumplimiento, se harán las respectivas advertencias, a fin de garantizar la efectividad de lo resuelto.

Salvo disposición en contrario, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o a solicitud fundada de parte, podrá ampliarse el plazo concedido para el cumplimiento de lo ordenado. Deberá ser razonable, proporcional y acorde con lo ordenado en sentencia.

ARTÍCULO 292- Procedencia

El proceso de ejecución procederá cuando haya adquirido firmeza el pronunciamiento por ejecutar, o se hayan cumplido las condiciones dispuestas en este. Iniciará de oficio, salvo si se requiere gestión de parte para ejecutar total o parcialmente lo otorgado. La ejecutante presentará la solicitud respectiva o, en su caso, la demanda de ejecución.

ARTÍCULO 293- Procedimiento

El proceso de ejecución se regirá por las siguientes disposiciones:

- 1) Se tramitará en el proceso principal. En tal caso y cuando se requiera gestión de parte, bastará una simple solicitud, la cual indicará los hechos específicos, las pretensiones y con ella se aportará la prueba. Si esta consta en el proceso, bastará con citarla. Si se trata de una ejecución parcial o provisional, se tramitará en carpeta o legajo separado.
- 2) De no ser posible tramitar la ejecución en el proceso principal, se presentará una demanda con ese fin. Esta cumplirá los requisitos generales, e indicará cuáles son los extremos concretos por ejecutar o liquidar, los montos respectivos y la prueba que le sirva de fundamento. Se aportarán los acuerdos o la ejecutoria de

las resoluciones y los documentos probatorios.

3) Si la demanda debió presentarse en algún proceso principal, se procederá a su acumulación material, de oficio o a solicitud de la parte contraria.

4) De la demanda o solicitud de ejecución se conferirá traslado a la parte ejecutada por el plazo de ocho días. Podrá ofrecer prueba de descargo. Si lo ejecutado es únicamente el pago de una suma líquida y exigible o se liquidan solo intereses, el emplazamiento será de tres días.

5) De ser necesario recibir prueba ofrecida por las partes u ordenada de oficio, se convocará a una audiencia. Si debe recibirse prueba pericial, científica o informes, se tomarán las previsiones para que conste su resultado a la mayor brevedad. Se programará la audiencia una vez que pueda ser recibida e incorporada en esta.

ARTÍCULO 294- Ejecución en procesos donde es parte la Administración Pública

En los procesos en los que la Administración Pública sea parte, las sentencias serán ejecutadas conforme a lo dispuesto y con las responsabilidades establecidas en este Código y la normativa procesal contenciosa administrativa.

ARTÍCULO 295- Ingreso forzoso para la ejecución

Para la ejecución de pronunciamientos y acuerdos ejecutorios, cualquiera que sea su naturaleza, si las circunstancias lo ameritan, la persona juzgadora de ejecución podrá ordenar el ingreso forzoso, cuando sea necesario entrar a un inmueble o edificación perteneciente a una tercera persona. Salvo casos excepcionales, deberá ser ejecutado por la misma autoridad judicial que lo ordenó.

ARTÍCULO 296- Imputación de pagos

Las sumas obtenidas como consecuencia de un proceso serán imputadas en el siguiente orden: costas, intereses y principal, salvo disposición legal en contrario.

ARTÍCULO 297- Costas del proceso de ejecución

Las costas generadas en la ejecución se fijarán en la sentencia respectiva. De no ser posible, la parte interesada podrá solicitar se fije su importe y ofrecer la prueba respectiva. La gestión se resolverá en el plazo de tres días, previo a lo cual se escuchará a la contraria por el mismo lapso.

CAPÍTULO II EJECUCIÓN PROVISIONAL

ARTÍCULO 298- Ejecución provisional de resoluciones con condena no dineraria

Las sentencias de condena patrimonial no dineraria que sean recurridas podrán ser ejecutadas de manera provisional, parcial o totalmente, solo a petición de parte. La solicitud deberá interponerse dentro del plazo otorgado para plantear el recurso de apelación o de casación, respectivamente. Se presentará ante la persona juzgadora del tribunal de primera instancia.

ARTÍCULO 299- Improcedencia de la ejecución provisional

No serán susceptibles de ejecución provisional las sentencias de condena patrimonial no dineraria cuando así lo disponga la normativa procesal civil, así como en los siguientes supuestos:

- 1) La modificación, nulidad o cancelación de asientos del Registro Público o la inscripción de un bien o derecho en cualquier otro tipo de registro oficial.
- 2) Contratos relacionados o, en general, bienes que hayan sido dotados o adjudicados mediante algún modelo de asignación de tierras o leyes y programas dirigidos al desarrollo y tutela del sector agrario y las poblaciones rurales.
- 3) Contratos donde forme parte alguna persona integrante de una población indígena. También cuando se decida sobre bienes ubicados en territorios indígenas o pertenecientes a sus comunidades.
- 4) Condenas a cargo de la Administración Pública.
- 5) La ejecución de algún extremo que pueda implicar u ocasionar una afectación grave e irreversible al ambiente, a sus recursos o a una actividad empresarial agraria.

De plantearse una solicitud de ejecución provisional en los supuestos mencionados, se rechazará de plano. Dicho pronunciamiento no tendrá recurso de apelación.

ARTÍCULO 300- Ejecución provisional de condenas dinerarias

La ejecución provisional de sentencias de condena dineraria se limitará al embargo de bienes por la suma que haya sido otorgada. No se admitirá oposición de la persona ejecutada. Podrá levantarse el embargo si acredita que ha hecho el depósito del monto por el cual se decretó en la cuenta del tribunal respectivo.

Si la sentencia de condena dineraria provisionalmente ejecutada es revocada, se levantarán los embargos y se condenará a la ejecutante al pago de las costas de la ejecución provisional y a resarcir los daños y perjuicios causados.

ARTÍCULO 301- Trámite de ejecución provisional

Si la solicitud de ejecución provisional es admisible, la persona juzgadora le dará curso, conforme a las siguientes reglas:

- 1) La petición deberá ser fundada e indicar el monto de garantía de ejecución provisional que se ofrece.
- 2) Recibida la solicitud, el tribunal formará un legajo que contendrá las actuaciones indispensables, las cuales serán incorporadas de oficio. De una vez, programará una audiencia a la mayor brevedad.
- 3) En audiencia se escuchará a la proponente y a la contraria. Esta podrá oponerse y, además, ofrecer contragarantía para suspender la ejecución provisional en el supuesto de que sea acogida. El tribunal resolverá en el acto, con criterios de razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad y equidad. Definirá el monto de la garantía, el cual será suficiente para restaurar la situación anterior si se revoca la sentencia, o si ello es imposible, se resarzan los daños, los perjuicios y las costas. Otorgará tres días a la parte proponente para que deposite el monto de la garantía, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se tendrá por abandonada la gestión sin necesidad de resolución que así lo declare. De haberse ofrecido contragarantía, se fijará el monto y prevendrá el depósito en los mismos tres días.
- 4) Si la solicitante de la ejecución provisional no asiste a la audiencia, se tendrá por desistida la gestión. Dicho pronunciamiento no tendrá recurso alguno. Si quien no asiste es la contraria, se resolverá la solicitud conforme corresponda.
- 5) Verificado el depósito de la garantía se procederá a ejecutar la sentencia. Si la garantía no es dineraria, se requerirá lo pertinente para su verificación.
- 6) De depositarse la contragarantía, no se ejecutará provisionalmente la sentencia y se procederá de inmediato a la devolución de la garantía.
- 7) Contra lo que se resuelva en la ejecución provisional no cabrá recurso de apelación. Lo resuelto se comunicará al tribunal que conozca el recurso de apelación o de casación, según corresponda, a efecto de que priorice la emisión de la resolución respectiva.

ARTÍCULO 302- Efectos de la revocatoria de la sentencia ejecutada provisionalmente

Si el superior revoca la sentencia que ha sido ejecutada provisionalmente, la jueza o el juez de ejecución procederá a la restauración de la situación anterior a la ejecución. Cuando no sea posible, deberá determinarse el monto de los daños, perjuicios y costas, haciéndose efectiva la garantía rendida.

CAPÍTULO III DISPOSICIONES SEGÚN EL TIPO DE CONDENA

ARTÍCULO 303- Pago de una suma líquida y exigible

Cuando la ejecución se refiera al pago de una suma líquida y exigible, se procederá al embargo y venta forzosa de bienes, susceptibles de esa medida. El dinero que se obtenga producto de embargos deberá ser depositado, de inmediato, a favor de la parte vencedora o de quien corresponda.

Si la condenada al pago es la Administración Pública se aplicará la normativa procesal contenciosa administrativa, en lo que corresponda.

ARTÍCULO 304- Cantidad por liquidar

Si la condena consiste en el pago de una cantidad por liquidar, la persona ejecutante presentará la liquidación respectiva. Si la contraria no se opone, se dictará sentencia aprobando las partidas solicitadas de acuerdo con lo ejecutoriado o reduciéndolas en la forma que el tribunal considere equitativo y legal.

Cuando deba reconocerse un extremo a favor de la vencida, sin lo cual no se pueda ejecutar la sentencia a favor de la gananciosa, esta solicitará que se requiera a la primera la presentación de la respectiva liquidación, dentro del plazo de cinco días. De no presentarla la acreedora quedará autorizada para hacerlo. Igual plazo tendrá esta para interponer la liquidación, sin necesidad de resolución que así lo requiera, al vencer el lapso concedido a la ejecutada. La liquidación se pondrá en conocimiento de la contraria por el plazo de tres días. Si no se plantea o si presentada la contraria no se opone, se aprobarán las partidas que se consideren justas, de acuerdo con lo que conste en el proceso.

ARTÍCULO 305- Rendición de cuentas

Si la sentencia condena a rendir cuentas y no establece el plazo para hacerlo, se requerirá a la parte obligada que la presente en el plazo de diez días. De no cumplirse, la ejecutante podrá presentar la liquidación. Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto para la condena de pagar una cantidad por liquidar.

ARTÍCULO 306- Condena de dar

Cuando deba entregarse un bien mueble o inmueble y la parte obligada no cumpla voluntariamente, o dentro del plazo conferido, se procederá a la entrega o puesta en posesión.

Si existen indicios acerca de posibles obstáculos generados por la parte ejecutada, para acceder a un fundo o lograr la entrega o puesta en posesión, se practicará el ingreso forzoso. Se procurará hacer efectiva la ejecución, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que pueda incurrir la ejecutada.

Los bienes muebles que no deban entregarse con un inmueble serán retirados por la ejecutada. Si la persona dueña no los retira en el acto de la expulsión, serán puestos en depósito a cargo de la ejecutante. Se levantará un inventario de estos. La ejecutante podrá declinar asumir el depósito de tales bienes, de poder designarse como depositaria a otra persona idónea, que muestre interés en asumir ese cargo.

A quien se designe depositaria se le advertirá acerca de los derechos y las obligaciones conferidas por ley. Cuando sea una tercera persona, se le prevendrá, además, el señalamiento de medio para notificaciones.

ARTÍCULO 307- Condena de hacer

En condenas de hacer, si la persona obligada realiza de modo distinto o defectuoso lo ordenado, se destruirá lo hecho y se dispondrá hacerlo conforme se ordenó en la sentencia. Todos los gastos correrán a cargo de la incumpliente, quien deberá indemnizar los daños, los perjuicios y las costas causadas con la ejecución indebida.

ARTÍCULO 308- Condena de no hacer

Si se incumple la obligación de no hacer, se ordenarán las medidas para lograr la efectividad de lo resuelto. Cuando sea procedente, se destruirá lo hecho en contra de lo dispuesto en la sentencia. Se condenará a la parte vencida a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

ARTÍCULO 309- Frutos en especie y efectos de comercio

Cuando sea necesaria la ejecución, por incumplimiento de la obligación de entrega de cantidad determinada de frutos en especie o de efectos de comercio, se procederá a la conversión a dinero y a hacer efectiva la suma resultante, según los parámetros fijados en la sentencia.

La valoración de los frutos se hará por el precio corriente y actual en el mercado del lugar donde deba verificarse la entrega; en su defecto, el más próximo, al día en que se practique, salvo disposición en contrario de la sentencia o de ley especial.

El precio se acreditará, salvo normativa en contrario, con el informe de una o un corredor jurado, y si no con el de una persona que sea comerciante de reconocida honorabilidad. En el acto del nombramiento se fijarán sus honorarios. El tribunal establecerá el procedimiento de valoración o la hará prudencialmente.

ARTÍCULO 310- Embargo en ejecución

En las sentencias de condena sobre extremos económicos determinables en dinero, cantidad por liquidar, de dar, de hacer, de no hacer, para asegurar los derechos de la parte ejecutante, se decretará embargo de bienes en cantidad suficiente, a criterio del tribunal. Se hará a instancia de parte y no se requerirá depósito alguno.

De lo actuado se levantará un acta en la que se consignarán hora, fecha y lugar, las características necesarias para identificar los bienes muebles y, en el caso de inmuebles, las citas de inscripción, su naturaleza, extensión, linderos, edificaciones, cultivos existentes, su estado y demás datos de interés.

CAPÍTULO IV EMBARGO Y REMATE DE BIENES

ARTÍCULO 311- Embargo y remate de bienes

En el embargo y remate de bienes, en lo pertinente, se aplicará lo dispuesto para el apremio patrimonial en la normativa especial y la legislación procesal civil siempre que sean compatibles con los principios agrarios, y las siguientes disposiciones:

- 1) La orden de embargo se remitirá por medios tecnológicos. Si no es posible, la parte interesada diligenciará lo pertinente. Solo podrá practicarse sobre bienes legalmente embargables.
- 2) Cuando se embarguen acciones o participaciones del patrimonio común de una empresa o grupos de empresas, o la mayoría de bienes o derechos pertenecientes a estas, y de designarse a una persona para su administración, el tribunal le exigirá informes periódicos de la gestión.
- 3) Se ampliará la orden de embargo a solicitud fundada de la parte ejecutante. Al resolver, el tribunal verificará que no se incurra en abuso del derecho.
- 4) Si el embargo resulta excesivo, la parte deudora podrá solicitar su reducción y aportar de una vez la prueba que estime pertinente. Tal gestión se pondrá en conocimiento de la parte contraria por el plazo de tres días. Se procederá de inmediato a resolver, salvo que sea necesario programar una audiencia para recibir prueba, lo cual se hará con la mayor brevedad, según las reglas del proceso incidental.
- 5) El levantamiento se comunicará mediante oficio o mandamiento, en la misma forma dispuesta para cuando se ordena el embargo.
- 6) Cuando exista concurrencia de personas embargantes y acreedoras con más de un proceso en trámite, y se haya realizado en más de uno la publicación del edicto de remate el mismo día, deberán gestionarse todos los pagos en el proceso al que se le haya dado trámite primero.
- 7) Si se deposita un monto para cancelar la totalidad de los extremos reclamados, previamente a efectuarse el remate, se solicitará a la parte ejecutante presente en el plazo de tres días una liquidación a la fecha del depósito, con el apercibimiento de resolverse con la información que conste en autos. Cuando la suma depositada resulta suficiente, se tendrá por extinta la deuda, se dará por terminado el proceso y se dispondrá el archivo. De lo contrario, se realizarán los

abonos a los extremos adeudados, en el orden legal correspondiente, y se continuará con el proceso.

8) El apremio patrimonial será realizado por persona juzgadora, quien presidirá el remate, o por quien figure como persona técnica judicial designado para ese fin.

9) Si se dispone el examen de los bienes objeto de remate en el lugar donde se encuentren, o que el remate se lleve a cabo en ese sitio, se ordenará a la persona deudora o depositaria tenerlos a la vista el día y la hora programados, en un lugar idóneo, cuando sea posible. Si se trata de animales, vehículos u otros bienes que por su naturaleza deban ser reunidos para su examen, se les requerirá que los agrupen, de forma segura y adecuada. La omisión de lo anterior, sin justa causa, se entenderá como negativa a ponerlos a disposición del tribunal. La comunicación se hará con los apercibimientos legales y con un mínimo de tres días de antelación, para que adopte las previsiones necesarias a fin de cumplirla efectivamente.

CAPÍTULO V EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y PRENDARIA

ARTÍCULO 312- Procesos hipotecario y prendario

En los procesos de ejecución hipotecaria y prendaria, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en las leyes especiales y la normativa procesal civil, siempre que sean compatibles con los principios procesales agrarios, así como las siguientes disposiciones:

1) Si se solicita el remate de bienes dotados o asignados por medio de programas sociales a una persona productora agraria, se verificará su procedencia. Si la ejecutante integra el Sistema Bancario Nacional, acreditará que con antelación informó de la situación a la entidad respectiva, para que esta ejerciera los derechos o potestades que la ley le otorga. De lo contrario, se declarará inadmisibile la demanda.

2) En la resolución que dé curso a la ejecución hipotecaria o prendaria, se harán las prevenciones generales a la parte ejecutada, indicándosele que podrá liberar los bienes en ejecución si deposita todos los extremos adeudados, hasta antes de dar por iniciada la subasta.

3) Si se trata de la ejecución de frutos o productos de cualquier naturaleza, se corroborará que el privilegio prendario no se encuentre caduco. De estarlo, declarará la inadmisibilidad de la demanda.

4) Cuando se alegue desmejoramiento de la garantía, podrá practicarse un reconocimiento judicial a solicitud de parte ejecutante.

5) La aprobación del remate de los restantes bienes quedará sujeta a que lo adeudado no quede cubierto con lo subastado. Cuando uno o varios de los bienes pertenezcan a una persona que haya consentido darlos en garantía, serán los últimos en subastarse.

De ser evidente que lo obtenido en la subasta no cubre lo adeudado, se aprobará el remate, si procede. De existir duda de si cubre lo adeudado totalmente, se prevendrá a la parte ejecutante que presente la liquidación final dentro del plazo de

tres días, a fin de determinar respecto de cuáles bienes deberá aprobarse el remate. Ante su omisión, el órgano ejecutor resolverá lo procedente con lo que conste en el proceso.

TÍTULO XIV PROCESO SUCESORIO

ARTÍCULO 313- Procedencia

Se tramitarán mediante el proceso sucesorio aquellos asuntos donde el patrimonio de la persona causante esté conformado por bienes agrarios, destinados al desarrollo rural y derechos derivados de estos, con aptitud para ser transmisibles por causa de muerte. Quedarán incluidos aquellos dotados, asignados o traspasados por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), o cualquier otra entidad del sector agrario, hayan o no vencido las limitaciones o las condiciones legalmente establecidas.

ARTÍCULO 314- Sede judicial y notarial

Las sucesiones deberán tramitarse en sede judicial. Podrán ser también notariales, excepto si se trata de distribuir bienes adjudicados mediante algún modelo de asignación de tierras, si han sido dotados, asignados o traspasados por entidades del sector agrario o a cargo del desarrollo rural, o cuando exista disposición en contrario.

ARTÍCULO 315- Trámite y requisitos del proceso sucesorio

En lo referido al proceso sucesorio, se aplicará lo dispuesto en la normativa procesal civil, leyes especiales siempre que sean compatibles con los principios procesales agrarios y las siguientes disposiciones:

- 1) El tribunal podrá adoptar las medidas cautelares necesarias para la preservación del haber sucesorio y garantizar la continuidad de las actividades agrarias y conexas a estas.
- 2) Si se plantean un proceso sucesorio judicial y otro notarial, el primero se acumulará al segundo, salvo improcedencia legal del segundo o si quienes iniciaron el judicial no quieren o no puedan hacer valer sus eventuales derechos en el notarial. En tal caso, el notarial se acumulará al judicial.
- 3) Los créditos serán pagados, si es posible, una vez firme la resolución que los tenga por reconocidos. De ser necesario, se dispondrá la venta de bienes que

se elijan al efecto. Si tienen limitaciones legales, deberá atenderse lo dispuesto en la normativa especial, en caso de que se permitiera su enajenación.

4) El tribunal estará facultado para autorizar, sin comunicación previa a las partes interesadas, la venta anticipada de bienes perecederos o cuando sea evidentemente necesaria y útil realizarla; en especial de frutos o animales.

ARTÍCULO 316- Bienes inventariados en posesión de terceras personas

La persona cónyuge sobreviviente o conviviente de hecho, a quien la ley le confiera derechos, la madre, el padre, los hijos e hijas que habiten en la vivienda al momento de la muerte de la causante, continuarán en ella, mientras no resulte adjudicada a otra. Si se declara en firme la indignidad de quien la habita, no podrá seguir ocupándola, excepto si existen menores de edad o incapaces, dependientes de esta. Los anteriores supuestos regirán, salvo disposición en contrario.

ARTÍCULO 317- Adjudicación de bienes y derechos sometidos a regímenes especiales

En procesos donde el haber sucesorio esté integrado por bienes y derechos sometidos a regímenes especiales, si fuera necesaria una autorización administrativa previa para su traspaso o dotación, se gestionará ante el ente público que corresponda.

En la resolución que declare a las personas sucesoras, se dispondrá la suspensión del proceso. Firme tal pronunciamiento, las interesadas deberán continuar el trámite ante el ente respectivo, al cual el tribunal le remitirá certificación de las piezas necesarias, para lo de su cargo. El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) deberá informar al juzgado los avances del proceso de decisión administrativa con la periodicidad que este determine.

Una vez que conste en el expediente lo decidido en firme en sede administrativa, se procederá a ordenar la continuación del proceso. Si se ha conferido autorización para hacer el traspaso o dotación del bien o derecho a favor de una o varias de las herederas, se continuará el procedimiento de protocolización de piezas y demás trámites necesarios para la terminación del proceso.

Si existen otros bienes y derechos no sometidos a esos regímenes, el procedimiento de distribución o partición podrá continuar cuando haya acuerdo unánime de las personas herederas para que, de ser procedente, se realicen particiones únicamente respecto de estos.

ARTÍCULO 318- Denegatoria de la autorización para distribuir bienes y derechos en regímenes especiales

Si se deniega la autorización en sede administrativa para adjudicar o dotar bienes y derechos del sucesorio, regulados por regímenes especiales, procederá lo establecido en este Código para indemnizar o reconocer a las personas herederas

declaradas lo que legalmente les corresponda, salvo normativa especial.

Para esos efectos, en el plazo de un mes después de la firmeza del acuerdo administrativo, el ente respectivo solicitará prueba pericial, a su cargo, para valorar lo que deba reconocerse a las personas herederas. Lo anterior, salvo que su valor conste en el proceso, por medio de las formas legalmente dispuestas para ello. Del resultado del avalúo pericial o, en su caso, del monto que conste, se rebajarán las deudas que la causante tuviera con el ente, hasta la fecha de la firmeza del acuerdo denegatorio.

De la suma definitiva, se dará traslado por tres días a las personas interesadas.

ARTÍCULO 319- Reversión de la adjudicación de bienes y derechos en regímenes especiales

Si se trata de bienes otorgados por medio del contrato de asignación de tierras, el ente administrativo podrá revertir la adjudicación o dotación, si el ordenamiento jurídico lo permite.

Definido el monto de los extremos que legalmente corresponda reconocer a las personas herederas, se otorgará a la entidad o a quien corresponda un mes para que lo deposite en la cuenta del tribunal a favor de estas, salvo que sea procedente otorgar un plazo mayor por requerirse una modificación presupuestaria por el ente.

El dinero depositado se distribuirá entre las personas herederas, a menos de que deba destinarse a pagar obligaciones pendientes a cargo del sucesorio, conforme al orden de prelación legal.

Verificado el cumplimiento de lo indicado, se ordenará la reversión del inmueble a favor del ente, la respectiva inscripción del título de propiedad en el Registro Público de la Propiedad Inmueble a su nombre y la cancelación de las deudas hipotecarias o las limitaciones inscritas en beneficio de este.

Si no se cancela la suma correspondiente, en el plazo conferido, será aplicable lo establecido en el proceso de ejecución de sentencia para las condenas dinerarias a cargo de la Administración Pública.

ARTÍCULO 320- Reconocimiento del valor de mejoras y otros extremos

Cuando la legislación especial autorice reconocer a las personas sucesoras, el valor de las mejoras necesarias y útiles, u otros extremos, se aplicará, en lo conducente, el trámite dispuesto en caso de denegatoria administrativa y reversión de bienes en regímenes especiales. Los extremos por reconocer deberán corresponder a los objetivos para los cuales fue celebrado el contrato de usufructo, arrendamiento u otra modalidad afín.

El ente estará obligado al pago, salvo que existan terceras personas interesadas dispuestas a reconocer su valor a las herederas, siempre que la ley lo autorice y se

cuenta con la anuencia administrativa, lo cual debe acreditarse. En tal caso, deberán depositar el monto en el plazo de un mes a partir de la firmeza del acto administrativo que lo apruebe. Si no lo hace, corresponderá realizarlo a la entidad, para lo cual se le otorgará un nuevo plazo para esos efectos.

Quien ostente el cargo de albacea, así como la persona adjudicataria, podrán solicitar al tribunal el retiro de las mejoras de puro adorno, siempre que con ello no se ocasione daño al bien o al ambiente.

TÍTULO XV PROCESOS NO CONTENCIOSOS

ARTÍCULO 321- Procedencia

Se tramitarán mediante el procedimiento establecido para la actividad judicial no contenciosa los siguientes procesos:

- 1) Pago por consignación.
- 2) Deslinde voluntario de inmuebles.
- 3) Homologación de transacción y conciliación extrajudiciales.
- 4) Inscripción de derechos indivisos.
- 5) Información posesoria.
- 6) Cualquier otro estipulado en la ley.

ARTÍCULO 322- Procedimiento

El proceso iniciará a gestión de la persona interesada, quien indicará sus calidades, formulará la pretensión y ofrecerá la prueba que le sirve de fundamento y aportará la documental. De existir omisiones, se conferirá un mes a la gestionante para que cumpla con los requerimientos legales. Se le apercibirá que de no cumplir con todo lo prevenido se dará por terminado el proceso y se archivará. La interesada podrá solicitar ampliación del plazo de manera justificada.

Se dará intervención a la Procuraduría General de la República, al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) o a cualquier otra institución, por cinco días, conforme a las leyes especiales correspondientes.

El tribunal podrá ordenar prueba para mejor resolver, en cualquier etapa del proceso. Las pretensiones que no tengan una tramitación concreta en las siguientes normas se regirán por la normativa especial y supletoriamente por el Código Procesal Civil en lo que sean compatibles con los principios procesales agrarios.

ARTÍCULO 323- Oposición fundada y conciliación

Si a la solicitud se opone alguna persona de manera fundada, se dará traslado a la promovente por tres días. Cualquiera de las involucradas podrá pedir audiencia de conciliación para dirimir el conflicto. De omitirse tal petición o no lograrse un acuerdo, se dará por terminado el proceso y se remitirá a las partes a la vía ordinaria, para que la opositora presente la demanda en el plazo de un mes. En caso de no hacerlo, se continuará el proceso no contencioso, salvo impedimento legal.

La resolución que dé por terminado el proceso no contencioso no tendrá eficacia de cosa juzgada material.

ARTÍCULO 324- Pago por consignación

Si lo debido es un bien determinado, el producto de una cosecha, un grupo de animales, entregables en el lugar donde se encuentren o en uno distinto del domicilio de la persona acreedora, o si el objeto no está determinado sino en su especie, no habrá necesidad de llevar el bien para hacer la oferta. En ese caso, bastará que se intime a la persona acreedora, para que acepte el pago, con indicación precisa del objeto de la prestación y, en su caso, del lugar donde se encuentra, lo cual se hará constar en el acta.

ARTÍCULO 325- Deslinde voluntario de inmuebles

El proceso no contencioso de deslinde procederá cuando deban definirse, demarcarse o identificarse los linderos de un inmueble.

En la solicitud se expresará si el deslinde debe practicarse en todo el perímetro del terreno o en un sector de este, con indicación precisa de su ubicación. Se indicarán las calidades de las personas que deban citarse, o si se ignora esa información. Se aportará el título de propiedad, la certificación registral si es un inmueble inscrito, los planos catastrados y cualquier otra documentación útil.

Se convocará a una audiencia en la que podrán participar profesionales en topografía elegidos por las personas interesadas.

En la demarcación se considerará la aptitud o el destino dado a los inmuebles involucrados.

Si están dedicados a la protección o el aprovechamiento del recurso forestal o ambiental en general, se practicará sin afectar indebidamente el equilibrio ecológico y la belleza escénica.

Realizada la definición o la demarcación del inmueble sin oposición, se documentará el resultado en un medio idóneo. Se especificarán las circunstancias topográficas y accidentes geográficos para ubicar la línea divisoria de las fincas, el

tipo de mojones, carriles o señales divisorias, su dirección, distancia entre una y otra, así como demás aspectos relevantes.

ARTÍCULO 326- Proceso de homologación

Con el proceso de homologación se verificará la legalidad de acuerdos, la transacción o conciliación extrajudiciales.

Si existe proceso judicial en trámite, la solicitud de homologación se presentará en este. De lo contrario, se presentará ante el tribunal que hubiera sido competente para conocer de lo que es objeto de acuerdo. Se indicarán las calidades de las personas que lo suscribieron, de eventuales interesadas y su domicilio. Se aportará el contrato de transacción o el convenio conciliatorio y cualquier otra documentación útil para lo pretendido.

A las personas interesadas se les comunicará la existencia del proceso y se les conferirán cinco días para que se apersonen a hacer valer sus derechos.

Si existe oposición, a solicitud fundada de parte o de oficio, el tribunal podrá programar una audiencia para aclarar o ajustar las cláusulas del acuerdo. Si no hay oposición se procederá a emitir pronunciamiento sobre el acuerdo, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales. La homologación podrá ser total. Será parcial, cuando las restantes cláusulas válidas sean suficientes para lograr el fin y la ejecución de lo acordado.

No se homologará el acuerdo que verse sobre bienes y derechos indisponibles e irrenunciables o que estén fuera del comercio, ni aquel que quebrante normas de orden público, trate sobre aspectos ilegales o pueda afectar derechos de terceras personas.

Las conciliaciones y transacciones extrajudiciales homologadas, en caso de incumplimiento de lo acordado, serán ejecutables mediante el proceso de ejecución.

ARTÍCULO 327- Inscripción de derechos indivisos

La inscripción de derechos indivisos, cuando se trate de bienes de naturaleza agraria, se regirá por la ley especial y lo dispuesto en este código.

La solicitud deberá indicar el nombre, demás calidades y domicilio exacto de las y los condueños; cuando proceda, se incluirá el de sus representantes. En tal caso, se acompañarán sus personerías. Se les dará traslado por el plazo de quince días.

Cuando el derecho a localizar corresponda a una finca que colinde con calles o bienes públicos, el proceso deberá tramitarse en esta jurisdicción. En tal caso, se citarán a la Procuraduría General de la República, la municipalidad respectiva o la entidad que corresponda, en calidad de colindante.

ARTÍCULO 328- Información posesoria

La obtención del título inscribible de dominio sobre inmuebles no inscritos, cuando la persona dueña carezca de él, se regirá por lo dispuesto en la Ley N.º 139, Ley de Informaciones Posesorias, de 14 de julio de 1941, vigente y lo que se regule en este Código.

Los documentos que se aporten al proceso deberán ser originales o copias certificadas.

En la resolución que dé curso a la gestión, se advertirá a la parte promovente que sus manifestaciones tendrán el carácter de declaración jurada y que cualquier falsedad podrá hacerla incurrir en el delito de perjurio, sin perjuicio de que incurra en otro de mayor gravedad. Si la titulante, o su representante legal cuando se trate de una persona jurídica, no firma la solicitud inicial, se otorgarán cinco días para que ratifique personalmente la veracidad de lo manifestado, ante el despacho o de forma escrita, con el apercibimiento de dar por terminado el proceso. A solicitud fundada de quien haya suscrito el alegato inicial, cuando se requiera un plazo adicional, podrá prorrogarse.

ARTÍCULO 329- Reconocimiento judicial

Se realizará un reconocimiento judicial del inmueble a titular, independientemente del área, en todos los procesos de información posesoria y de rectificación de medida. No será procedente sustituir esta prueba por la testimonial.

ARTÍCULO 330- Protección de recursos y bienes ambientales

El tribunal deberá verificar si se ha ejercido la posesión, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación especial que regula la protección del ambiente.

Tomará en consideración la anuencia de la persona promovente en adecuar el uso del bien a las actividades recomendadas en los informes que legalmente deban requerirse a las entidades o las instituciones competentes.

Deberá constatar la ejecución de prácticas encaminadas a este fin o delegar dicha fiscalización en los entes competentes.

ARTÍCULO 331- Reservas de ley en informaciones posesorias

En la parte dispositiva de la sentencia estimatoria, cuando proceda, se citarán, entre otras, las siguientes reservas y limitaciones:

- 1) Si la finca tiene frente a camino público, con un ancho inferior a veinte metros, las reservas de la Ley N.º 5060, Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972. Si el ancho es mayor, deberá especificarse la medida concreta.
- 2) De la Ley N.º 276, Ley de Aguas, de 27 de agosto de 1942, de las referidas a álveos o cauces y vasos que sean de dominio público, servidumbres de uso público en las riberas de los ríos no navegables y las márgenes de canales, acueductos o atarjeas.
- 3) La prohibición de cortar o eliminar árboles en las áreas de protección estipuladas en la Ley N.º 7575, Ley Forestal, de 13 de febrero de 1996, o en otras leyes especiales.
- 4) La prohibición de cambiar el uso del suelo en las áreas cubiertas de bosque.
- 5) La prohibición de destruir ilegalmente bosques o arboledas que contengan o donde habiten especies vegetales o animales, en vías de extinción.
- 6) Las de las fajas de terreno de dominio público o reservas demaniales para proteger las fuentes de agua, cuando no surtan alguna población o no convengan reservarlas para tal fin.

TÍTULO XVI DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 332- Alcances de la palabra tribunal

Cuando en este Código se cite la palabra «tribunal», deberá entenderse como tal al tribunal de cualquier categoría e instancia, ya sea unipersonal o colegiado.

ARTÍCULO 333- Normas prácticas

La Corte Suprema de Justicia emitirá los reglamentos y las normas prácticas necesarias para la aplicación de este Código. Dispondrá las medidas para la preservación de los soportes de grabación de las audiencias y sus respaldos por el tiempo necesario.

ARTÍCULO 334- Remisión de expedientes

Los expedientes y sus legajos, físicos y electrónicos, permanecerán en custodia del tribunal competente, hasta su terminación. Si es necesario su remisión o envío a otros órganos judiciales, deberán adoptarse las previsiones a fin de garantizar su seguridad y acceso.

ARTÍCULO 335- Ejecutorias y certificaciones judiciales

El tribunal competente, una vez firme la resolución a ejecutar, emitirá la ejecutoria.

Certificará la resolución e indicará si ha adquirido firmeza, cuando lo solicite una persona legitimada para ello.

ARTÍCULO 336- Forma del juramento

La forma del juramento se regirá por lo dispuesto en la normativa procesal civil.

ARTÍCULO 337- Informes sobre cobros

De todo cobro que se haga en las oficinas judiciales para efectuar alguna diligencia, prueba o actuación, deberá darse cuenta inmediata por la persona técnica judicial al Tribunal de la Inspección Judicial. A falta de ese aviso, podrá ser considerado el cobro o suma recibida como exacción indebida.

ARTÍCULO 338- Creación de tribunales agrarios

La Corte Suprema de Justicia quedará autorizada para crear nuevos juzgados y tribunales agrarios, a fin de garantizar el ejercicio eficaz y eficiente de la administración de justicia agraria.

ARTÍCULO 339- Nombramiento de las personas juzgadoras

Las personas juzgadoras de los tribunales agrarios serán nombradas con los requisitos, los derechos y los deberes establecidos en la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y, en general, en el ordenamiento jurídico. Deberán ser personas especialistas en la materia agraria y ambiental, o tener experiencia de al menos cinco años en el ejercicio de la profesión en dicha materia.

ARTÍCULO 340- Organización para la tramitación de procesos

La organización para la tramitación de los procesos deberá responder a criterios de razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad, especialidad, eficiencia y celeridad.

TÍTULO XVII REFORMAS Y DEROGACIONES

ARTÍCULO 341- Reformas

Se reforman las siguientes disposiciones legales:

1) Los artículos 2, 4, 9 y 10 de la Ley N.º 2755, Ley sobre Inscripción de Derechos Indivisos, de 9 de junio de 1961, y sus reformas. Los textos son los siguientes:

Artículo 2- Previamente el condueño o condueña deberá presentar una información ante el tribunal de la jurisdicción competente, correspondiente a la situación de la parcela que trate de localizar, donde indicará su deseo de llevar a cabo la localización, la descripción completa de la parcela, su estimación, así como los nombres y apellidos o razón social y domicilio de las personas colindantes, acreedoras hipotecarias, embargantes, anotantes y demás terceras que pudieran resultar directamente perjudicados con la localización.

Artículo 4- Cuando el Estado sea propietario o colindante del derecho a localizar, las diligencias se tramitarán ante el tribunal de la jurisdicción competente, según la naturaleza del inmueble sobre el cual versa dicho derecho, con la intervención de la Procuraduría General de la República.

Artículo 9- El Registro Público inscribirá la parcela como finca independiente, trasladará a la nueva inscripción los gravámenes y demás anotaciones que afecten el derecho localizado y al margen de este pondrá la razón correspondiente de haber quedado convertido en finca independiente. La cabida de la parcela a localizar no podrá ser superior a la que le corresponda de acuerdo con la proporcionalidad del derecho en relación con la cabida de la finca general, cuando esta resulte de un plano catastrado y esa circunstancia aparezca en el Registro. En los demás casos no será obstáculo para la inscripción de la escritura de localización, el hecho de que la medida de la parcela no guarde relación con la que proporcionalmente corresponda al derecho, según el Registro. En ese supuesto, se indicará esa circunstancia expresamente en la resolución final.

Artículo 10- Las inscripciones que se hagan al amparo de esta ley quedarán convalidadas si transcurren tres años a partir de la inscripción en el Registro de la localización respectiva, sin que se presente y anote en esa oficina demanda para invalidarla. El plazo de convalidación será de diez años, en relación con las personas interesadas que no hayan sido notificadas personalmente, y en los casos en los cuales se ordena la inscripción sin que exista plano catastrado de la finca madre o general. El tribunal hará constar esas circunstancias en la resolución final para que el Registro las transcriba literalmente.

2) Los artículos 68 inciso 3), 94 párrafo tercero, 95 y 177 de la Ley N.º 2825, Ley de Tierras y Colonización, de 14 de octubre de 1961, y sus reformas. Los textos dirán:

Artículo 68- En el contrato que se realice con la persona parcelera y en el título que se le entregue, se harán constar las estipulaciones siguientes:

[...]

3) Que las parcelas, cosechas, semillas, animales, enseres, útiles y equipo necesario para la explotación de las parcelas no podrán ser objeto de medidas judiciales, preventivas o de ejecución, por personas terceras o acreedoras, antes de que las parceleras hayan cancelado sus obligaciones con el Instituto, salvo que tales acreedoras lo sean por haber suplido créditos debidamente autorizados por este.

Artículo 94-

[...]

Solucionado el conflicto por el Instituto, con la conformidad de quien sea propietario, u ordenada la expropiación por el Poder Ejecutivo, aquel carecerá de toda acción judicial, sea agraria o penal, contra las personas poseedoras en calidad de tales. Caso contrario, quienes sean ocupantes quedarán expuestos a las sanciones legales comunes que puedan proceder.

[...].

Artículo 95- Para acogerse a las disposiciones de la presente ley, la persona propietaria de un inmueble o quienes sean ocupantes en precario, deberá dirigirse por escrito al Instituto formulando la consiguiente solicitud, e indicando con claridad el nombre, los apellidos, las calidades y el domicilio de la propietaria y del mayor número de ocupantes, así como la descripción y la ubicación de la finca, y si está total o parcialmente ocupada.

Una vez que el Instituto intervenga en la solución del conflicto suscitado entre la propietaria de un inmueble y las personas poseedoras en precario, podrá gestionar ante el juzgado agrario competente que ordene la anotación del conflicto al margen de la finca en el Registro Público, con el fin de que esa anotación afecte a terceras personas que quieran adquirir, hipotecar, arrendar o celebrar cualquier contratación sobre la finca anotada.

La anotación se hará por medio de mandamiento que el juzgado agrario expedirá a favor del Instituto, y quien adquiera la finca así anotada tomará el expediente tramitado en el Instituto en el estado en que se encuentre.

Artículo 177- De las resoluciones dictadas por el Instituto a que se refiere el artículo 66, cabrá recurso de apelación para ante el Tribunal Agrario, el que resolverá en definitiva dentro de los quince días siguientes.

3) Los artículos 5 párrafo tercero, 10 párrafo segundo, 17 y 18 de la Ley N.º 139, Ley de Informaciones Posesorias, de 14 de julio de 1941, y sus reformas. El texto es el siguiente:

Artículo 5-

[...]

Se ordenará también tener como partes a la Procuraduría General de la República, en todo caso, y al Instituto de Desarrollo Rural (Inder), cuando el proceso corresponda conocerlo a la jurisdicción agraria. Para la notificación, se comisionará a las respectivas oficinas centralizadas de notificaciones judiciales

[...]

Artículo 10

[...]

La resolución que apruebe o impruebe la información y las que tengan ese recurso serán apelables ante el tribunal que corresponda.

Artículo 17- En cualquier tiempo mientras no hayan transcurrido los tres años a que se refiere el artículo anterior, si se demuestra que el título posesorio se obtuvo contra las leyes vigentes, podrá el tribunal decretar en el expediente original y mediante el trámite del proceso incidental o sumarísimo, según corresponda respectivamente a la jurisdicción civil o agraria, la nulidad absoluta del título y de su respectiva inscripción en el Registro Público, y libraré la ejecutoria correspondiente para que este cancele el asiento.

Transcurrido el término de tres años de la inscripción del título, toda demanda deberá decidirse en proceso ordinario.

El litisconsorcio pasivo necesario deberá integrarse contra aquellas personas que puedan verse afectadas con lo pretendido en la demanda, aun cuando no hayan sido parte en el proceso de información posesoria.

Artículo 18- El conocimiento de las informaciones posesorias y rectificación de medida de título inscrito corresponderá a los tribunales competentes de la jurisdicción respectiva, según el lugar donde está el inmueble, cualquiera que sea el valor de este. Cuando el inmueble colinda con propiedades del Estado, municipalidades o instituciones públicas, el juez o la jueza tomará las providencias necesarias para que no se perjudique a tales propietarios.

4) El título de la sección IV para que se denomine “Procesos judiciales” y los artículos 51, 52 y 53 de la Ley N.º 8631, Protección a las Obtenciones Vegetales, de 6 de marzo de 2008. Los textos son los siguientes:

Artículo 51- Sin perjuicio de lo ordenado en el título XI del Código Procesal Agrario, en todo proceso relativo a la protección de los derechos de titulares de

obtenciones vegetales el tribunal podrá adoptar las medidas cautelares referidas en este ley.

Artículo 52- Las pretensiones de las y los titulares de obtenciones vegetales se tramitarán y decidirán mediante el proceso ordinario regulado en el Código Procesal Agrario.

Los casos de competencia desleal se tramitarán por el proceso sumario, según el artículo 17 de la Ley N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994.

Artículo 53- Dentro del proceso ordinario o en los casos de competencia desleal, dentro del proceso sumario, cuando una parte haya identificado alguna prueba pertinente para substanciar sus alegaciones y esta se encuentre bajo el control de la parte contraria, el tribunal estará facultado para ordenarle que la aporte. Si procede, la prueba será presentada a condición de que se garantice la protección de la información no divulgada.

5) Se adiciona un párrafo quinto al artículo 5, y se reforman los numerales 100 y 113 de la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas. Los textos son los siguientes:

Artículo 5- Los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, a no ser en los casos exceptuados por la ley; pero, una vez requerida legalmente su intervención, deberán actuar de oficio y con la mayor celeridad, sin que puedan retardar el procedimiento valiéndose de la inercia de las partes, salvo cuando la actividad de estas sea legalmente indispensable.

Los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma que aplicar y deberán hacerlo de conformidad con las normas escritas y no escritas del ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.

Los principios generales del derecho y la jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley.

Los usos y costumbres tendrán carácter supletorio del derecho escrito.

Al resolver los asuntos propios de su competencia, los tribunales, en cualquier instancia, deberán respetar eficazmente los principios y las normas de cada disciplina jurídica, prioritariamente cuando se trate de las especializadas.

Artículo 100- El Tribunal Agrario

El Tribunal Agrario conocerá:

- 1) El recurso de apelación interpuesto contra los autos y contra las sentencias emitidas por los juzgados agrarios, cuando proceda.
- 2) Las inconformidades y los conflictos de competencia que se susciten entre los juzgados agrarios.
- 3) Los conflictos entre juzgados agrarios generados por la acumulación de procesos.
- 4) En grado y de forma definitiva, los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y demás entes que la ley disponga, cuando se vinculen con las actividades agrarias y de desarrollo rural.
- 5) Los impedimentos y las recusaciones de sus integrantes y de los conflictos que se susciten por dichos motivos entre las personas juzgadoras de los juzgados agrarios.
- 6) Los demás asuntos que determine el ordenamiento jurídico.

Artículo 113- Funciones de los juzgadores agrarios

Los juzgados agrarios conocerán los asuntos propios de su competencia, independientemente del valor económico de las pretensiones. Entre ellos se encuentran:

- 1) La primera instancia en todos los procesos anticipados, contenciosos, no contenciosos y de ejecución.
- 2) Los impedimentos y las recusaciones de sus juezas y jueces, en la forma dispuesta en la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993.
- 3) El auxilio requerido por otros tribunales judiciales y arbitrales.
- 4) La ejecución de laudos y medidas cautelares emitidas en procesos arbitrales referidos a asuntos vinculados a la actividad de producción agraria.
- 5) El impulso y la práctica de conciliaciones.
- 6) Los demás asuntos que determine el ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 342- Derogaciones

Se deroga la Ley N.º 6734, Ley de la Jurisdicción Agraria, de 29 de marzo de 1982, y sus reformas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I- Todos los asuntos interpuestos con anterioridad a la entrada en vigencia de este Código, cualquiera sea su estado procesal, continuarán sustanciándose, en sus trámites y recursos, por las normas que regían a la fecha de su inicio. Para tal efecto, los órganos jurisdiccionales encargados de la materia, continuarán con el trámite de estos hasta su finalización. Para tal fin, contarán con los recursos humanos y materiales que fueran necesarios.

Los procesos que se inicien a partir de la vigencia de este Código serán tramitados y resueltos con las reglas de esta nueva normativa, con independencia de la fecha en que se generen los actos, las actuaciones, los contratos o las conductas objeto del proceso.

En lo posible, los órganos jurisdiccionales encargados de conocer los procesos tramitados con la anterior legislación procurarán aplicar las etapas, reglas y principios de oralidad, en todo aquello que fuera posible, siempre que con ello no se infrinja el ordenamiento jurídico.

TRANSITORIO II- El Poder Judicial deberá designar en el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigencia de este Código, un equipo de personas juzgadoras conciliadoras especialistas en derecho agrario y ambiental.

TRANSITORIO III- Se faculta al Poder Judicial para que mantenga las plazas de judicatura, los coordinadores judiciales, los técnicos judiciales, los defensores públicos y asistentes, los letrados y las letradas que sean requeridas para continuar atendiendo de manera exclusiva los procesos anteriores a la presente reforma, los cuales deben continuarse substanciando con la normativa derogada, así como para crear las plazas necesarias para tramitar y resolver los procesos que se inicien con la entrada en vigencia de este Código.

TRANSITORIO IV- Durante el plazo de dieciocho meses, después de publicado este Código en La Gaceta, la Corte Suprema de Justicia dictará el Reglamento de Organización Interna de la Jurisdicción Agraria.

TRANSITORIO V- El Poder Judicial deberá tomar las medidas necesarias para que, antes de la entrada en vigencia de esta normativa, las personas servidoras judiciales que la aplicarán sean debidamente capacitados acerca de sus fines y contenido, para una mayor eficacia y efectividad de su gestión, conforme al sistema oral. Deberá adoptar las previsiones presupuestarias requeridas con ese fin y para ofrecer la infraestructura y tecnología que posibilite su aplicación óptima. Asimismo, el Colegio de Abogados y Abogadas y las universidades públicas y privadas podrán capacitar a las abogadas y los abogados y estudiantes, según corresponda.

TRANSITORIO VI- Se faculta a la Corte Plena para que ajuste la categoría salarial de las personas juzgadoras agrarias, conforme a la función que desempeñen, de acuerdo con las reformas procesales laboral y civil, con el fin de garantizar la estabilidad y la especialización.

Rige un año después de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado el seis de setiembre del año dos mil dieciocho.

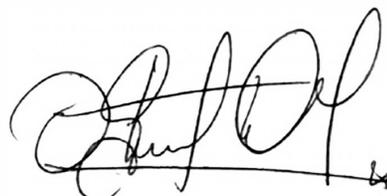
COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO



Carolina Hidalgo Herrera
Presidenta



Luis Fernando Chacón Monge
Primer secretario



Shirley Díaz Mejía
Segunda prosecretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintisiete días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.

Ejecútese y publíquese.



CARLOS ALVARADO QUESADA



MARCIA GONZÁLEZ AGUILUZ
MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ



LUIS RENATO ALVARADO RIVERA
MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

DECRETO EJECUTIVO N° 41529-MP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 50, inciso 20) y 146 de la Constitución Política, artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b) y 121 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227; la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) N° 9036 y su Reglamento; Ley de Tierras y Colonización (ITCO) N° 2825, Ley Forestal N° 7575, Ley General de Caminos N° 5060, la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, N° 7064, Código Municipal N° 7794 y sus reformas. Ley 8801, artículo 18 sobre los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional, Decreto Ejecutivo N° 39453-MP-PLAN, Reglamento de organización y Funcionamiento de los Consejos Regionales de Desarrollo, Decreto No. 38184 MAG, Reglamento de Constitución y Funcionamiento de los Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural, Ley de Planificación Nacional No. 5525, Ley Indígena No.6172, Ley General No. 8017 de los Centros de Atención Integral (CAIS).

CONSIDERANDO

- I. Que el Cantón de Buenos Aires cuenta con una extensión de 2382 km², con una densidad de 21 habitantes/ km² y con población de 50.161 habitantes, distribuida en 9 distritos: Buenos Aires, Volcán, Potrero Grande, Boruca, Pilas, Colinas, Chánguena, Biolley, Brunka. De los nueve distritos, el 50,3% vive en espacios considerados como rurales que corresponde a 8 distritos, mientras que el 49,7% de la población se concentra en el distrito de Buenos Aires considerado como cabecera del cantón.
- II. Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 32454-C del 27 de mayo de 2005 se declaró el cantón de Buenos Aires como *“Región de las Culturas Aborígenes de Costa Rica”*. La presencia de pueblos indígenas en dicho cantón representa un porcentaje muy importante de la población. Del total de la población el 18% (alrededor de 9.000 personas) corresponde a personas indígenas, ubicadas en 6 territorios indígenas: Térraba, Ujarrás, Boruca, Rey Curré, Salitre, Guaimy, Coto Brus y Cabagra.
- III. Que el artículo 1 de la Constitución Política dispone la pluriculturalidad como elemento esencial de la democracia costarricense. En particular, en el cantón de Buenos Aires coexisten seis territorios indígenas, factor que le convierte en un cantón de gran valor cultural y social para Costa Rica.

- IV. Que mediante Decreto No.38437-MP-MBSF (09/04/2014) se establece un mecanismo Mesa de Dialogo entre el Gobierno de Costa Rica y los Pueblos Indígenas de los Cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón.
- V. Que el Gobierno del Bicentenario estima imperante la generación de propuestas en aspectos clave para el desarrollo nacional como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación, reformas institucionales y de Estado, y diálogo social.
- VI. Que resulta prioritario atender las problemáticas del Cantón de Buenos de Aires de Puntarenas, con la conformación de un equipo de trabajo de alto nivel interinstitucional que impulse acciones mediadas por el diálogo social y la convivencia intercultural, para superar la confrontación de distintos enfoques de desarrollo que por años han minado las bases de la cohesión, el progreso económico y el potencial de la convivencia democrática en la región.
- VII. Que es menester definir una Estrategia Participativa para el Desarrollo Integral del Cantón de Buenos Aires, a efectos de generar respuestas coordinadas al corto, mediano y largo para el desarrollo del cantón. Lo anterior, con el objetivo de impulsar la participación proactiva y articulada de todos los actores públicos y privados.
- VIII. Que de conformidad con las Plataformas de Coordinación presentes en el Cantón (COREDES, CTDR, CCCI) y como resultado de la articulación liderada por la Presidencia de la República y el INDER, se consideraron los principales espacios de planificación y coordinación existentes en el cantón, a la vez que se identificaron las principales iniciativas (planes, programas o proyectos) que serán promovidas en el marco de este plan.
- IX. Que mediante Acuerdo CAN 58-10-2015 y por el Consejo de Gobierno en su Sesión Ordinaria N.º 79 en diciembre de 2015, se aprobó la Política de Desarrollo Rural territorial (PEDRT). Posteriormente, en el año 2016 se emitió el Decreto N° 39525-MAG del 29 de enero de 2016 *“Declaratoria de interés público de la Política de Estado 2015-2030.”*
- X. Que según el Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial (PNDRT 2017-2022), la Política de Estado de Desarrollo Rural Territorial (PEDRT 2015-2030), se constituye en el marco orientador de la asignación de recursos públicos y privados dirigida a dar respuesta a la creciente demanda de la población rural en el mejoramiento de las condiciones del desarrollo, con especial énfasis en los territorios con mayores brechas o rezagos sociales, económicos y ambientales.
- XI. Que producto de la revisión de bastas fuentes de información secundaria que permitió identificar a partir de resultados analizados desde indicadores e índices de desarrollo cantonal y distrital, cinco dimensiones para integrar el Plan de Desarrollo

Integral del Cantón de Buenos Aires, las cuales son: 1. Infraestructura y servicios, 2. Equidad e Inclusión Social; 3. Educación y formación técnica; 4. Economía y empleo rural; 5. Ecosistemas Territoriales. Cada una de estas dimensiones se abordará desde una mesa de trabajo creada con el fin de establecer y proponer acciones puntuales a la problemática identificada en el cantón.

Por tanto,

DECRETAN
“CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA ATENCIÓN DEL CANTÓN DE BUENOS AIRES”

Artículo 1°.- Creación. Créase la Comisión de Alto Nivel para la Atención del Cantón de Buenos Aires. La Comisión estará integrada por:

- a) Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano
- b) Presidencia Ejecutiva de Instituto de Desarrollo Rural (INDER)
- c) Coordinador mesa de trabajo infraestructura y servicios para el desarrollo
- d) Coordinador mesa de trabajo economía agrícola y empleo rural
- e) Coordinador mesa de trabajo educación y formación técnica
- f) Coordinador mesa de trabajo ecosistemas territoriales
- g) Coordinador mesa de trabajo inclusión y equidad social
- h) Alcalde de Buenos Aires

Artículo 2°.- Coordinador. La coordinación general de las diversas actividades de la Comisión de Alto Nivel estarán a cargo del Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano y el INDER.

Artículo 3°.- Objetivo de la Comisión de Alto Nivel. Corresponderá a la Comisión de Alto Nivel para la Atención del Cantón de Buenos Aires, la construcción y articulación de la Estrategia Participativa para el Desarrollo Integral del Cantón de Buenos Aires, según las 5 mesas de trabajo establecidas en el artículo 4 del presente Decreto.

Artículo 4°.- Mesas de trabajo. La Comisión contará con 5 mesas de trabajo, cada una de estas mesas estará vinculada a una dimensión identificada como prioritaria, con los siguientes objetivos:

- a) **Infraestructura y servicios:** tendrá como objetivo la promoción y priorización de recursos dirigidos a infraestructura para el desarrollo y la atención de servicios básicos, con el objetivo de facilitar el crecimiento económico y social de los habitantes del Cantón de Buenos Aires. Lo anterior, mediante la atención de las necesidades básicas insatisfechas y la reducción de las brechas de género, así como las necesidades diferenciadas de la población en general. Dicha mesa de trabajo estará bajo la coordinación de Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
- b) **Economía y empleo rural:** tendrá como objetivo el fomento de las actividades con potencial socioeconómico, mediante encadenamientos productivos competitivos y generadores de empleo en el Cantón de Buenos Aires. Lo anterior, mediante mecanismos de financiamiento para la producción, gestión y desarrollo empresarial, inversión en Infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización de productos y servicios, agricultura y producción familiar, y diversificación y transformación de la producción de bienes y servicios. Dicha mesa de trabajo estará bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- c) **Educación y formación técnica:** tendrá como objetivo el fortalecimiento de las capacidades, programas diferenciados educativos, capacitación en temas de emprendimiento y alineamiento de la oferta formativa con la empleabilidad del cantón. Dicha mesa de trabajo estará coordinada por el Instituto Nacional de Aprendizaje.
- d) **Ecosistemas Territoriales:** tendrá como objetivo el planteamiento de acciones que coadyuven con la producción amigable con el ambiente, la adaptación, la mitigación y la gestión del riesgo climático, orientadas al uso sostenible e integral de los recursos naturales; mediante el desarrollo y fortalecimiento de capacidades para el manejo integral y uso sostenible de los recursos, ordenamiento territorial y gestión integrada del recurso hídrico, manejo de residuos y desechos sólidos y líquidos, pago por servicios ambientales, negocios verdes y gestión del riesgo de desastres y adaptación. Dicha mesa de trabajo estará coordinada por el Ministerio de Ambiente y Energía.
- e) **Inclusión y equidad social:** tendrá como objetivo la promoción de la inclusión, integración y participación de los diferentes grupos poblacionales en la gestión de su propio desarrollo, incluyendo acciones diferenciadas hacia grupos tradicionalmente excluidos, que garanticen un desarrollo inclusivo y la reducción de desigualdades e inequidades. Dicha mesa de trabajo estará coordinada por el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social.

Artículo 5°.- Integración de las mesas de trabajo. Cada mesa de trabajo estará integrada por un representante de las siguientes instituciones.

- a) **Infraestructura y servicios para el desarrollo**: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Caja Costarricense del Seguro Social, Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Instituto Costarricense de Electricidad, Municipalidad de Buenos Aires, Consejos Regionales de Desarrollo (COREDES), y Consejo de Desarrollo Rural Territorial (CTDR).
- b) **Economía y empleo rural**: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Municipalidad de Buenos Aires, Consejos Regionales de Desarrollo (COREDES), y Consejo de Desarrollo Rural Territorial (CTDR).
- c) **Educación y formación técnica**: Ministerio de Educación Pública, Instituto Nacional de Aprendizaje, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Municipalidad de Buenos Aires, Consejos Regionales de Desarrollo (COREDES), Universidades Públicas en Buenos Aires, y Consejo de Desarrollo Rural Territorial (CTDR).
- d) **Ecosistemas Territoriales**: Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Salud, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Municipalidad de Buenos Aires, Consejos Regionales de Desarrollo (COREDES), y Consejo de Desarrollo Rural Territorial (CTDR).
- e) **Inclusión y equidad social**: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacional de la Mujer, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ministerio de Cultura y Juventud, Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, Municipalidad de Buenos Aires, Consejos Regionales de Desarrollo (COREDES), y Consejo de Desarrollo Rural Territorial (CTDR).

Los coordinadores de las mesas de trabajo podrán convocar, cuando se considere necesario, a otras instituciones públicas, organizaciones sociales o empresas privadas, que se consideren relevantes para el logro de los objetivos propuestos y el aprovechamiento de la mayor cantidad de recursos disponibles para ello.

Artículo 6°.- Participación de pueblos indígenas. Cada una de las mesas señaladas en el artículo 5 del presente decreto, contará con la participación de un representante de los pueblos indígenas, electo en el seno de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno de la República y los Pueblos Indígenas según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 38437-MP-MBSF.

Artículo 7°.- Sesiones de las Mesas de Trabajo: Los coordinadores de cada mesa de trabajo convocarán, al menos una vez al mes, a sesión de seguimiento a la ejecución de los acuerdos.

Artículo 8°.- Sesiones de la Comisión de Alto Nivel. De manera bimestral, el INDER y el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano convocarán a la Comisión de Alto Nivel para la Atención del Cantón de Buenos Aires. Dicho espacio dará seguimiento a los compromisos asumidos en cada una de las mesas de trabajo.

Artículo 9°.- Metodología de Desarrollo. El trabajo en las mesas deberá desarrollarse en al menos las siguientes fases:

- a) Fase de priorización de proyectos: análisis para priorización de trabajo en la mesa de los programas y proyectos que esté desarrollando cada institución, proyectos que estén en el Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial, en los Consejos de Desarrollo Rural Territorial, en el Plan Municipal, en el Plan de Desarrollo Humano Cantonal y aquellos propuestos por organizaciones comunales o el sector privado vinculados directamente con la temática de la mesa.
- b) Fase de calendarización: Los proyectos priorizados en la fase a deberán clasificarse por dimensión según lo señalado en el artículo 4 del presente Decreto, en el corto plazo (2019-2020), mediano plazo (2021-2022) y largo plazo (2022-2025).
- c) Fase de ejecución: se desarrollará una herramienta para el seguimiento de proyectos, que contenga el periodo de implementación y responsables de las acciones en el corto, mediano y largo plazo de los proyectos de impacto para la Agenda de Desarrollo Buenos Aires.

Artículo 10°.- Lineamientos de planificación. Las mesas de trabajo deberán guiarse por los lineamientos que defina el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Dicho Ministerio, brindará el soporte necesario para la gestión y planificación de los proyectos de cada una de las mesas de trabajo.

Artículo 11°.- Plazos de cumplimiento de la fases. Las fases señaladas en el artículo 8 del presente Decreto deberán ejecutarse en los siguientes a plazos:

- a) Fase de priorización de proyectos: en el plazo de dos meses a partir de la publicación del presente decreto.
- b) Fase de calendarización: en el plazo de un mes a partir de la finalización de la fase señalada en el inciso a).
- c) Fase de ejecución, en el plazo de dos años a partir de la finalización de la fase señalada en el inciso b):
 - a. Corto Plazo: los proyectos así clasificados deberán estar concluidos.

b. Mediano Plazo: los proyectos así clasificados deberán estar al menos iniciando fase de ejecución.

c. Largo Plazo: los proyectos así clasificados deberán estar al menos en fase de planificación.

Artículo 12°. - **Rendición de cuentas.** Cada 4 meses, la Comisión de Alto Nivel con sus respectivos jefes realizará una sesión abierta de rendición de cuentas en el cantón de Buenos Aires.

Artículo 13°.- Colaboración interinstitucional. Se instruye a los órganos de la Administración Central y Descentralizada, a colaborar sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos, en la implementación y ejecución de las medidas a corto, mediano y largo plazo de la Estrategia Participativa para el Desarrollo Integral del Cantón de Buenos Aires, Puntarenas.

Artículo 14°.- Rige. Rige a partir de su publicación.

Dado en el Cantón de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil diecinueve.

CARLOS ALVARADO QUESADA

Rodolfo Piza Rocafort
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

1 vez.—Solicitud N° 141417.—(D41529 - IN2019321406).

DECRETO EJECUTIVO N° 41572-JP-COMEX
**EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ
Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR**

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; los artículos 1, 3 inciso e) y 4 de la Ley de Creación del Registro Nacional y sus reformas, Ley N°5695 del 28 de mayo de 1975; los artículos 2 incisos a), b) y e), 2 *ter* y 2 *quater* de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el artículo 96 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978 del 6 de enero del 2000; y

CONSIDERANDO:

- I. Que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 de fecha 6 de enero del 2000, contiene en su Título VIII, disposiciones concernientes a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, las cuales están debidamente reglamentadas mediante el Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX de fecha 14 de marzo del 2007.
- II. Que para aprovechar las ventajas competitivas que ofrecen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen para productos y servicios propios, se requiere contar con disposiciones reglamentarias que faciliten el registro en forma ágil y clara, que permitan su adecuada promoción, administración y protección.
- III. Que a partir de la experiencia en el registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen nacionales y extranjeras, se torna necesario adecuar las disposiciones reglamentarias con la finalidad de dotar el procedimiento de mayor agilidad y certeza jurídica.

IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el informe DMR-AR-INF-003-19 de fecha 01 de febrero del 2019, emitido por la Dirección de Mejora Regulatoria, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, esta concluye que la regulación propuesta se encuentra conforme a los términos establecidos en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N°8220 de fecha 23 de marzo del 2012; así como en su Reglamento, Decreto Ejecutivo N°37045-MP-MEIC de fecha 22 de febrero del 2012, por lo que esta propuesta no transgrede los principios de mejora regulatoria.

Por tanto,

DECRETAN:

Reforma al Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de enero del 2000, Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX

Artículo 1.- Refórmense los artículos 2 inciso c), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20 y 21 del Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de enero del 2000, Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX, para que en lo sucesivo, el texto de cada artículo se lea de la siguiente manera:

“Artículo 2. Definiciones. Son aplicables al presente Reglamento las siguientes definiciones:

(...)

c) *Consejo Regulator:* el encargado de la dirección, administración, fomento, así como de supervisar y controlar el cumplimiento de las condiciones de uso de una indicación geográfica o denominación de origen conforme a las disposiciones de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N °7978, este Reglamento, el pliego de condiciones y la normativa de uso.

(...)"

“Artículo 4º-Solicitantes. Podrá solicitar el registro un productor que actúe en representación del sector, varios productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la solicitud, siendo que su actividad esté vinculada al producto o servicio que se identifica con esa indicación geográfica o denominación de origen, de conformidad con las disposiciones establecidas en el respectivo pliego de condiciones. Asimismo, podrá solicitar el registro una entidad que agrupe y represente a esos productores, fabricantes o artesanos, o una autoridad pública competente. Tratándose de una autoridad pública, la solicitud deberá ser presentada por el respectivo titular o representante legal, de conformidad con la legislación que la regule.

En atención a lo previsto en el párrafo anterior, la entidad que agrupe y represente a los productores, fabricantes o artesanos podrá adoptar la forma de cualquier organización de índole o naturaleza colectiva según el ordenamiento jurídico. Otros interesados podrán formar parte de esa entidad siempre y cuando cumplan con las mismas condiciones”.

“Artículo 5º-Impedimentos para el registro. En aplicación de los artículos 3 y 75 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, no se concederá el registro en los siguientes casos:

- a) no se conforme a la definición de indicación geográfica o denominación de origen contenida en el artículo 2 de la Ley;
- b) sea contrario al orden público o pueda inducir a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos;

- c) sea la denominación común o genérica de algún producto;
- d) cuando la indicación geográfica o denominación de origen sea idéntica o semejante a una marca, indicación geográfica o denominación de origen que se hubiese registrado o se encuentre en trámite para distinguir productos o servicios iguales o vinculados a los que la denominación de origen designa.

(...)

No obstante, podrá registrarse una indicación geográfica o denominación de origen y permitirse su coexistencia en el mercado, si el Registro considera que puede evitarse el riesgo de confusión en el público y cualquier perjuicio para la capacidad distintiva de la marca, mediante el uso en el etiquetado o en la presentación de los respectivos productos de indicaciones aclaratorias suficientes, de manera que no se genere confusión respecto al origen del producto. A estos efectos, el Registro podrá dictar en el marco de sus competencias las disposiciones que fuesen necesarias para regular el uso de los signos coexistentes, previa consulta con los titulares de los mismos.

De conformidad con el artículo 75 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, podrá registrarse una denominación de origen o una indicación geográfica, acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto; pero la protección no se extenderá al nombre genérico ni a la expresión empleada”.

“Artículo 6º-Pliego de Condiciones. A los efectos del artículo 2 y el inciso e) del artículo 76 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, la solicitud de registro se acompañará de un pliego de condiciones técnicamente fundamentado que contendrá según corresponda por su naturaleza, la siguiente información:

- a) los productos o servicios designados con la solicitud, con indicación de sus características generales, reputación o cualidades especiales, tales como,

pero sin limitarse a-, las morfoagronómicas, fisicoquímicas, organolépticas y microbiológicas, que se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se producen, incluyendo factores históricos, naturales y humanos;

b) mapas que delimiten la zona geográfica de producción o elaboración de los productos o de la prestación de los servicios designados y los criterios seguidos para tal delimitación;

c) descripción del proceso o método de producción, elaboración, extracción, u obtención del producto, o de prestación del servicio, con indicación de sus características generales y especiales, o de sus insumos, detallando los elementos que incidan de forma directa en las cualidades o características del producto o servicio de que se trate, incluyendo los factores históricos, naturales y humanos;

d) descripción de los controles que se aplican para asegurar que el producto cumple con los procedimientos y parámetros contenidos en cada una de sus etapas, que al efecto fueron establecidos en el pliego de condiciones, en cada una de sus etapas;

e) los análisis o estudios que acrediten las diferencias técnicas que distinguen los productos o servicios designados de otros de la misma naturaleza”.

“Artículo 7º-Normativa de uso y administración. La solicitud de registro deberá llevar adjunto la respectiva normativa de uso y administración, la cual deberá contener, según corresponda:

(...)

e) el logotipo oficial a ser usado, cuando así corresponda;

(...)”.

“Artículo 8º-Examen de la solicitud. Recibida una solicitud, el Registro procederá a examinar si la misma cumple los requisitos de forma previstos en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978 y el presente Reglamento, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. De no haberse cumplido alguno de los requisitos de forma, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud. El Registro examinará si la solicitud entra en alguno de los casos de prohibición contemplados en el artículo 75 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978.

En aquellos casos que no se requiera de un estudio técnico previo para determinar que la solicitud esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, por ser estas circunstancias notorias y evidentes, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada para lo cual cuenta con quince días hábiles”.

“Artículo 9º-Publicación. Realizado el examen de la solicitud conforme al artículo anterior, el Registro ordenará que se publique por tres veces consecutivas un aviso en el Diario Oficial La Gaceta, por cuenta del o los solicitantes, dicha publicación deberá contener la siguiente información:

(...)

c) la indicación geográfica o denominación de origen cuyo registro se solicita; cuando corresponda y sea posible, se indicará el nombre genérico al cual no se extiende la protección;

(...)

e) indicar expresamente dónde puede consultarse el expediente administrativo.

A partir de la fecha de publicación del primer aviso, cualquier persona podrá acceder al expediente para fines de información y obtener copias de los documentos contenidos en él. El costo de las copias correrá por costo y cuenta del administrado de conformidad con los montos establecidos por el Registro Nacional; adicionalmente deberán cancelarse los timbres y tasas correspondientes, en caso de que se requiera información certificada”.

“Artículo 10. -Oposiciones a la solicitud. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, o parte de esta, aplicándose al efecto los procedimientos y plazos previstos en el artículo 16 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978 y las disposiciones correspondientes del Reglamento de dicha ley, en lo pertinente y con fundamento en las prohibiciones establecidas en el artículo 75 de ese cuerpo normativo. En todo caso deberá argumentar, fundamentar y aportar la prueba necesaria que sustente sus alegatos.

De conformidad con las normas del artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, una oposición sustentada en el uso anterior como signo distintivo, de los términos que componen una indicación geográfica o denominación de origen se declarará improcedente si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro, la inscripción de la marca usada. No será necesario la solicitud de marca, cuando se alegue la genericidad de alguno de los términos que componen la indicación geográfica o denominación de origen.

El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de oposición y a la solicitud de inscripción de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente. La indicada solicitud, deberá ser presentada dentro de los quince días hábiles contados a partir de la presentación de la oposición”.

“Artículo 11. -Requerimiento de criterio técnico. Cumplidos los requisitos de forma y vencido el plazo para la presentación de oposiciones y su respectiva contestación, el Registro procederá a determinar la procedencia o no del registro

para lo que requerirá del criterio técnico de fondo de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos, profesionales, o en su defecto, de expertos independientes en la materia, atendiendo a la naturaleza del producto o servicio, a los que dará traslado del expediente completo. Estos brindarán un informe técnico por escrito en donde se recomiende la procedencia o no del registro solicitado. Los especialistas que ejerzan esta función deberán demostrar idoneidad técnica, por lo que no podrán haber formado parte del equipo que elaboró el pliego de condiciones técnicas, para evitar conflicto de intereses. En atención a la complejidad de la solicitud, el Registro podrá conformar un grupo de peritos de diferentes áreas para que rindan el criterio técnico.

Los centros o expertos requeridos deberán rendir su criterio técnico por escrito en un plazo máximo de tres meses, a partir del traslado del expediente. El indicado plazo será prorrogable hasta por tres meses más, dependiendo de la complejidad del asunto. El costo correspondiente al desarrollo del informe técnico escrito para evaluar la procedencia del registro correrá por cuenta del solicitante. Un solicitante o quien sea parte interesada, no podrá participar en la elaboración del criterio técnico. La designación de los entes que rendirán el criterio técnico se realizará de conformidad con el “Reglamento de selección y designación de entes técnicos para la elaboración de criterios de fondo en procesos de inscripción de denominaciones de origen e indicaciones geográficas”, adoptado por la Junta Administrativa del Registro Nacional mediante Acuerdo J477 del 08 de diciembre de 2016, o la normativa que le sustituya”.

“Artículo 12. -Resolución. Con vista en el examen efectuado, con las oposiciones y contestaciones que se hubieren presentado, así como los criterios técnicos vertidos, el Registro procederá a dictar la resolución de fondo. Si se resuelve declarar protegida la indicación geográfica o la denominación de origen, se indicará expresamente si la exclusividad se otorga sobre la totalidad del signo solicitado o si lo es únicamente sobre alguno de sus elementos. Se ordenará su inscripción, observando, en lo que corresponda, lo previsto en el artículo 78 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978.

En la misma resolución se ordenará la publicación por cuenta del interesado de un aviso de inscripción en el Diario Oficial La Gaceta y se aprobará la normativa de uso y administración. Una vez que el solicitante compruebe la publicación se hará entrega del certificado de inscripción. Sobre las resoluciones definitivas del Registro se procederá de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N°8039.”

“**Artículo 13. -Inscripción.** La indicación geográfica y la denominación de origen reconocida se inscribirá en un registro especial, en el que figurarán tanto las nacionales como las extranjeras. En el registro se indicará expresamente para cada signo distintivo si la exclusividad y protección se otorga sobre la totalidad de los vocablos que conforman el signo solicitado, o si lo es únicamente sobre alguno de sus elementos. Adicionalmente, se indicará el número de solicitud, y, si fuere el caso, su respectivo logotipo oficial”.

“**Artículo 16. -Integración de los Consejos Reguladores.** Los Consejos Reguladores estarán integrados por quienes se dediquen a la producción, elaboración, comercialización o promoción de los productos o servicios amparados en la indicación geográfica o denominación de origen, que desarrollen la actividad dentro del área correspondiente. Para cada indicación geográfica o denominación de origen habrá un único Consejo Regulador”.

“**Artículo 20. —Procedimiento de nulidad.** Siempre que se garanticen los principios del debido proceso y de conformidad con lo que establece el artículo 37 de Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen nacional o extranjera, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 75 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, tal y como lo indica el artículo 81 de la misma Ley.

La nulidad tendrá efecto puramente declarativo, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978

Al proceso de anulación le serán aplicables las disposiciones establecidas en los artículos 48 y 49 del Reglamento a la Ley de Marcas y el artículo 84 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978”.

“Artículo 21.-Indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras. Sujeto a lo dispuesto en los párrafos 4, 5 y 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo IC del Acta Final en que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ley de Aprobación N°7475 del 20 de diciembre de 1994, las disposiciones establecidas en instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica y las disposiciones pertinentes de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978 y este Reglamento, el Registro inscribirá las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que se encuentren debidamente protegidas en su país de origen.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo final del artículo 76 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, la exención del pago de la tasa establecida se aplicará a las autoridades públicas de todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio.

En lo no regulado específicamente en el presente capítulo, aplicarán las normas del presente Reglamento”.

Artículo 2.- Adiciónense al artículo 2, los incisos h) e i) y al artículo 6, el inciso f) del Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de enero del 2000, Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX; así como también los artículos 16 bis; 16 ter; 16 quater; 20 bis; 20 ter; 20 quater; 21 bis; 21 ter; 21 quater; 21 quinquies; 21 sexies; y 21 septies; cuyos textos se detallan a continuación:

“Artículo 2. Definiciones. Son aplicables al presente Reglamento las siguientes definiciones:

(...)

h) *Autoridad pública:* se entenderá como autoridad pública competente, aquella que esté facultada, en función de sus competencias legales, para representar al grupo de productores, fabricantes o artesanos de la localidad que corresponde a la indicación geográfica o denominación de origen solicitada, o que al efecto haya sido debidamente autorizada por dicho grupo.

i) *Nombre genérico o denominación común o genérica:* es la denominación de algún producto o servicio, cuando se considere como tal por los concededores de este tipo de producto o servicio y el público en general en Costa Rica”.

“Artículo 6º-Pliego de Condiciones. A los efectos del artículo 2 y el inciso e) del artículo 76 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, la solicitud de registro se acompañará de un pliego de condiciones técnicamente fundamentado que contendrá según corresponda por su naturaleza, la siguiente información:

(...)

f) descripción detallada de los sistemas de trazabilidad empleados para garantizar el seguimiento en cada una de las etapas de producción o elaboración”.

“Artículo 16 bis. - Reconocimiento del Consejo Regulador. A petición del solicitante de la inscripción de una indicación geográfica o denominación de origen determinada, el Registro anotará y reconocerá como Consejo Regulador a aquella organización constituida como tal, bajo la figura de asociación civil u otra organización de tipo colectivo sin fines de lucro reconocida como tal por el ordenamiento jurídico costarricense. No podrá ejercer ninguna actividad más

allá de su función como administradora de la indicación geográfica o denominación de origen correspondiente y no podrá dedicarse a la comercialización del producto o servicio objeto de protección. Deberá de estar debidamente inscrita en el registro respectivo y su domicilio legal deberá de estar ubicado en la zona correspondiente. En aquellos casos en que el solicitante de la inscripción se ajuste a las figuras antes indicadas, podrá constituirse como Consejo Regulador.

La inscripción de la asociación civil u otra organización de tipo colectivo que funja como Consejo Regulador es un proceso independiente del proceso de registro de la indicación geográfica o denominación de origen. El registro de la asociación no implica la inscripción de la indicación geográfica o denominación de origen. La inscripción de la indicación geográfica o denominación de origen no implica el registro del Consejo Regulador. Para obtener la autorización de uso de la indicación geográfica o denominación de origen, no será necesario pertenecer a la asociación civil u órgano colectivo que funja como Consejo Regulador; bastará con cumplir con los requisitos establecidos en la normativa de uso y administración y contar con la aprobación del Consejo Regulador”.

“Artículo 16 ter. - Funciones de los Consejos Reguladores. Los Consejos Reguladores tendrán las siguientes funciones:

- a) Formular y presentar ante el Registro las propuestas de modificación al pliego de condiciones y la normativa de uso y administración de la indicación geográfica o denominación de origen correspondiente.
- b) Orientar, vigilar y controlar la producción, elaboración, comercialización y promoción de los productos amparados con la indicación geográfica o denominación de origen, de conformidad con la normativa de uso y administración y el pliego de condiciones.
- c) Velar por el prestigio de la indicación geográfica o denominación de origen correspondiente, así como defender sus intereses.

- d) Realizar labores de control respecto de cualquier uso indebido de la indicación geográfica o denominación de origen y presentar cuando fuese necesario las denuncias ante las autoridades correspondientes.
- e) Llevar un registro interno de los autorizados a utilizar la indicación geográfica o denominación de origen correspondiente
- f) Garantizar el origen y la calidad de un producto o servicio, estableciendo para ello un sistema de control que comprenda los exámenes analíticos (tales como, pero sin limitarse a exámenes físicos, químicos, bacteriológicos, organolépticos y geográficos), en los casos que así corresponda.
- g) Aplicar las sanciones que correspondan, de conformidad con los procedimientos establecidos en la normativa de uso y administración.
- h) Otorgar, suspender y cancelar las autorizaciones de uso de la indicación geográfica o denominación de origen correspondiente, según lo establezca la normativa de uso y administración.
- i) Expedir certificados de uso, sellos numerados o cualquier otro instrumento de control, necesario para garantizar la trazabilidad, autenticidad, y el cumplimiento del pliego de condiciones de los productos identificados con la indicación geográfica o denominación de origen correspondiente.
- j) Realizar las labores de administración de la indicación geográfica o denominación de origen inscrita”.

“Artículo 16 quater. - Del financiamiento de los Consejos Reguladores. A fin de que los Consejos Reguladores, puedan cumplir con las obligaciones que la normativa les impone, podrán obtener recursos de:

- a) Cobro de tasas por el otorgamiento de autorizaciones, certificados, sellos numerados, o cualquier otro instrumento de control, todo de conformidad con lo establecido en la normativa de uso y administración.

- b) Contribuciones de los asociados, así como legados o donaciones.
- c) Todo otro recurso que establezca la normativa de uso y administración”.

“Artículo 20 bis. - Requisitos de la solicitud de nulidad. La solicitud relativa a la anulación del registro de una indicación geográfica o denominación de origen se dirigirá al Registro de la Propiedad Industrial y deberá contener los siguientes requisitos:

- a) Señalar el nombre, y dirección exacta del solicitante; tratándose de personas jurídicas, adicionalmente deberá indicar el lugar de su constitución, su domicilio social, el nombre del representante legal.
- b) Identificar la denominación de origen o la indicación geográfica contra la cual se plantea la nulidad, indicando número de expediente o el número de registro.
- c) Demostrar el interés legítimo en promover la nulidad del distintivo.
- d) Indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa su solicitud.
- e) Aportar las pruebas en que se funda la solicitud, las cuales deben ser remitidas en documento original o copia certificada. en caso de venir del extranjero deben cumplir con el apostillado o la legalización correspondiente según sea el caso, así como la traducción en caso de no estar escrito en castellano.
- f) Expresar la petición en términos precisos.
- g) Señalar el medio o lugar para recibir notificaciones.

h) Aportar el comprobante del pago total de la tasa establecida en el artículo 94 inciso m) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978.

i) Quien interponga la nulidad deberá identificar al solicitante de la inscripción del distintivo y al Consejo Regulador de la denominación de origen o de la indicación geográfica, (remitiendo la personería jurídica o el poder correspondiente cuando sea el caso) así como indicar la dirección exacta donde ubicarles para la respectiva notificación personal del traslado de la solicitud.

j) Aportar una fotocopia para el solicitante de la inscripción del signo, y otra para el Consejo Regulador, de la solicitud de nulidad, así como de las pruebas que aporta.

En caso de que la solicitud no cumpla los requisitos de forma correspondiente, el Registro procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978”.

“Artículo 20 ter. - Criterio Técnico. En caso de requerirse algún análisis pericial o cualquier otro estudio que a criterio del Registro sea necesario para el análisis integral de la nulidad interpuesta, se le prevendrá al solicitante de la nulidad que efectúe el depósito correspondiente de los honorarios del o los profesionales que harán el estudio correspondiente, cuya designación estará a cargo del Registro de conformidad con lo que establece el “Reglamento de selección y designación de entes técnicos para la elaboración de criterios de fondo en procesos de inscripción de denominaciones de origen e indicaciones geográficas” o la norma que le sustituya”.

“Artículo 20 quater.- Procedimiento. Siempre que la solicitud de nulidad se encuentre ajustada a lo prescrito en la normativa aplicable, el Registro la admitirá a trámite y dará audiencia a quien haya presentado la solicitud de inscripción del signo, así como al Consejo Regulador, por el plazo de un mes, para que hagan valer sus derechos y aporten u ofrezcan sus medios de prueba. Los medios de prueba deberán ser remitidos en documento original o fotocopias certificadas, en caso de venir del extranjero deben cumplir con el apostillado o la legalización correspondiente según la situación, así como la debida traducción cuando no esté escrito en español.

Vencido el plazo para contestar la solicitud de nulidad, el Registro resolverá en forma definitiva y razonada la solicitud, valorando las pruebas correspondientes. Si la resolución fuere favorable a la solicitud, se ordenará al interesado que publique dicha resolución en el Diario Oficial, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, para posteriormente comprobada dicha publicación proceder a realizar la anotación correspondiente en la base de datos donde constan sus antecedentes registrales. La decisión del Registro en cuanto a esta solicitud tendrá los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, los cuales deben ser presentados dentro de los tres y cinco días hábiles respectivamente, contados a partir de la notificación de la resolución a todas las partes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Observancia de Derechos de la Propiedad Intelectual, Ley N°8039, del 12 de octubre de 2000”.

“Artículo 21 bis. - De la inscripción de indicaciones geográficas o denominaciones de origen listadas en los Tratados de Libre Comercio e instrumentos similares. Las solicitudes deberán ser presentadas por el titular, por un representante legal, o por un apoderado de la indicación geográfica o denominación de origen, o bien por una autoridad pública del país de origen del respectivo signo.

Para la inscripción de indicaciones geográficas o denominaciones de origen listadas en los Tratados de Libre Comercio o instrumentos similares, y para efectos de transparencia, se adjuntará a la solicitud un resumen que comprenda la siguiente información:

- a) nombre de la indicación geográfica o denominación de origen;
- b) país de origen;
- c) nombre del titular del signo;

- d) nombre del solicitante; en caso de no ser el titular;
- e) fecha de protección en el país de origen;
- f) descripción del producto;
- g) descripción resumida de la zona geográfica y vínculo del producto con esta zona;
- h) nombre del Órgano de Control.

El o los solicitantes del registro de una indicación geográfica o denominación de origen deberán acreditar mediante certificación, constancia o documento análogo la protección en su país de origen. El Registro no otorgará protección a los términos más allá de la protección otorgada en el país de origen”.

“Artículo 21 ter. - Examen de la solicitud. El Registro examinará si la solicitud cumple los requisitos de forma previstos en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978 y el presente Reglamento, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. De no haberse cumplido alguno de los requisitos de forma, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud. El Registro examinará igualmente, si la solicitud entra en alguno de los casos de prohibición contemplados en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, en cuyo caso notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y le otorgará un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada, en plazo máximo de quince días hábiles”.

“Artículo 21 quater. - De la inscripción de denominaciones de origen con base en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional: El Registro examinará las solicitudes para la inscripción de denominaciones de origen que sean remitidas por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual.

El Registro procederá al examen de la solicitud y validará si entra en los casos de prohibición; de ser así, notificará a la Oficina Internacional, en un plazo no mayor de un año desde que haya sido notificado de la concesión del registro internacional”.

“Artículo 21 quinquies. - Publicación. Realizado el examen de las solicitudes indicadas en los artículos 21, 21 bis y 21 quater de este Reglamento, de una denominación de origen o indicación geográfica internacional, el Registro ordenará que se publique por tres veces consecutivas un aviso en el Diario Oficial La Gaceta. Este edicto tendrá la información establecida en el artículo 9 del presente Reglamento. En el caso de las solicitudes presentadas en el marco del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, el aviso únicamente se publicará en el portal web oficial del Registro Nacional, por tres veces consecutivas.

A partir de la fecha de publicación del primer aviso, cualquier persona podrá acceder al expediente para fines de información y obtener fotocopias de los documentos contenidos en este”.

“Artículo 21 sexies. -Oposiciones a la solicitud. En el proceso de inscripción se podrá presentar oposición contra el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, aplicándose al efecto los procedimientos y plazos previstos en el artículo 16 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978 y en las disposiciones correspondientes del Reglamento de la Ley de Marcas, en lo pertinente y con fundamento en las prohibiciones establecidas en el artículo 75 de ese cuerpo normativo. Para efectos de los procesos de oposición, aplicarán las disposiciones del artículo 10 del presente Reglamento”.

“Artículo 21 septies. -Resolución e inscripción: Con vista en el examen efectuado, y analizadas las oposiciones presentadas al efecto, el Registro procederá a la inscripción con base en los artículos 12 y 13 del presente Reglamento”.

Artículo 3.- Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, a los seis días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.


CARLOS ALVARADO QUESADA



MARCIA GONZALEZ AGUILUZ
Ministra de Justicia y Paz



DYALÁ JIMÉNEZ FIGUERES
Ministra de Comercio Exterior


1 vez.—O. C. N° 3400038476.—Solicitud N° 011-2019-MCE—(D41572 - IN2019322834).

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE LA CONTRALORÍA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

R-DC-14-2019. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Despacho Contralor General. San José a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de febrero del dos mil diecinueve.---

CONSIDERANDO:

1º—Que los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, establecen los límites económicos a partir de los cuales aplica cada uno de los diferentes procedimientos de contratación, y la cuantía para poder apelar ante la Contraloría General de la República el acto de adjudicación.

2º—Que dichos artículos establecen que la Contraloría General de la República debe actualizar los límites antes señalados a más tardar la segunda quincena de febrero de cada año tomando como referencia, entre otros, la variación porcentual de Índice de Precios al Consumidor (IPC).

3º—Que mediante el Voto 998-98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se determinó que en la actualización de los límites de contratación se deben ponderar las condiciones macroeconómicas del país, la condición real de las partidas que se destinan para la adquisición de bienes y servicios no personales, así como la preponderancia de las licitaciones públicas a partir de la cual se debería valorar el resto de procedimientos de contratación administrativa. De lo anterior deben existir los estudios que respalden las decisiones que se adopten.

4º—Que el Programa Macroeconómico 2019-2020 publicado por el Banco Central de Costa Rica reitera el compromiso de esa institución con la meta de inflación de mediano plazo definida en 3%, con un rango de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba y otro hacia abajo, igual a la establecida para el periodo anterior.

5º—Que a partir de las sumas base aprobadas por el legislador en los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, se ha estimado necesario mantener parámetros diferenciados de actualización, con el propósito de reconocer el caso particular de los contratos de obra pública, de manera que los límites resulten ajustados a la realidad y dimensión de ese tipo contractual. Cabe señalar, que la metodología de actualización en el caso de los citados contratos de obra también parte esencialmente de valoraciones relativas a las variables antes indicadas.

6º —Que el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa asigna a la Contraloría General el deber de elaborar una lista con el nombre de cada Administración y el monto de su presupuesto autorizado para respaldar la contratación de bienes y servicios no personales, la cual se calcula sobre el promedio de las sumas presupuestadas por cada Administración para respaldar la contratación de bienes y servicios no personales, en el período vigente y en los dos períodos anteriores.

7°— Que se utiliza en la elaboración de los límites económicos las partidas para adquisición de bienes y servicios no personales del presupuesto institucional de cada Administración, entendiendo por éste el que rige durante el ejercicio económico y comprende el presupuesto inicial y sus variaciones (presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias), conforme lo regula la Norma 2.2.1 de las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE) Resolución R-DC-24-2012 emitida por el Despacho de la Contralora General de la República a las nueve horas del veintiséis de marzo de dos mil doce, que fue modificada por la Resolución R-DC-064-2013 de las quince horas del nueve de mayo de dos mil trece, publicada en la Gaceta No. 101 del 28 de mayo del 2013.

8°—Que para la preparación de los límites económicos que se definen en esta Resolución, se tomó la información del Sistema Institucional de Información sobre Planes y Presupuestos regulado mediante las “Directrices Generales a los Sujetos Pasivos de la Contraloría General de la República para el Adecuado Registro y Validación de Información en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) (D-1-2010-DC-DFOE)”; Directriz R-DC-54-2010 del Despacho del Contralor General de la República de las ocho horas del doce de marzo de dos mil diez. La captura de la información se realizó al ser las 10 horas del 14 de febrero del 2018.

9°—Que el artículo 22 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley N° 8660, establece el procedimiento para determinar los límites económicos a partir de los cuales aplica cada uno de los diferentes procedimientos de contratación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Asimismo, el artículo 26 estatuye que en el caso del ICE solo cabrá recurso de apelación cuando se trate de licitación pública.

10°—Que el artículo 45 aparte b) de la Ley N° 8660 reformó el artículo 23 de la Ley N° 7799 Reforma de la Ley de Creación del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, disponiendo que a la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago le aplicará el mismo régimen de contratación administrativa que el establecido para el ICE.

11°—Que el artículo 20 de esa misma Ley establece que la adquisición de bienes y servicios, que realicen las empresas del ICE constituidas como una sociedad anónima, quedarán excluidas de la Ley de Contratación Administrativa.

12°—Que el artículo 16 aparte ch) de la ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), Ley N°9366, reformó el artículo 16 de su ley orgánica, Ley N°7001, de 19 de setiembre de 1985 y sus reformas, disponiendo que al INCOFER le aplicará el mismo régimen de contratación administrativa establecido para el ICE en el capítulo IV del título II de la Ley 8660.

POR TANTO

Se resuelve:

I. —Actualizar los límites económicos que establecen los incisos a) al j) de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas, de conformidad con lo que se indica en las siguientes tablas:

I.A. Límites generales de contratación administrativa, excluye obra pública:

LÍMITES GENERALES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (EXCLUYE OBRA PÚBLICA) AÑO 2019							
Estrato ¹	Presupuesto para compra de bienes y servicios no personales Artículos 27 y 84		LÍMITES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Artículo 27				Recurso de Apelación Artículo 84
			Licitación Pública	Licitación Abreviada		Contratación Directa	
	Más de	Igual a o menos de	Igual a o más de	Menos de	Igual a o más de	Menos de	A partir de
A	76 400 000 000,00		663 000 000,00	663 000 000,00	95 600 000,00	95 600 000,00	331 000 000,00
B	51 000 000 000,00	76 400 000 000,00	571 000 000,00	571 000 000,00	29 670 000,00	29 670 000,00	235 500 000,00
C	25 500 000 000,00	51 000 000 000,00	400 000 000,00	400 000 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	168 600 000,00
D	12 740 000 000,00	25 500 000 000,00	285 700 000,00	285 700 000,00	23 740 000,00	23 740 000,00	123 300 000,00
E	2 550 000 000,00	12 740 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	20 770 000,00	20 770 000,00	88 900 000,00
F	1 274 000 000,00	2 550 000 000,00	171 400 000,00	171 400 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	76 200 000,00
G	764 000 000,00	1 274 000 000,00	114 300 000,00	114 300 000,00	14 840 000,00	14 840 000,00	52 600 000,00
H	255 000 000,00	764 000 000,00	85 700 000,00	85 700 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	38 100 000,00
I	76 400 000,00	255 000 000,00	57 100 000,00	57 100 000,00	5 930 000,00	5 930 000,00	25 390 000,00
J		76 400 000,00	28 570 000,00	28 570 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	12 700 000,00

¹ Los estratos corresponden con los incisos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa.

I.B. Límites específicos de contratación administrativa para obra pública:

LÍMITES ESPECÍFICOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA OBRA PÚBLICA Año 2019							
Estrato ¹	Presupuesto para compra de bienes y servicios no personales Artículos 27 y 84		LÍMITES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Artículo 27				Recurso de Apelación Artículo 84
			Licitación Pública	Licitación Abreviada		Contratación Directa	
	Más de	Igual a o menos de	Igual a o más de	Menos de	Igual a o más de	Menos de	A partir de
A	76 400 000 000,00		1 029 000 000,00	1 029 000 000,00	148 400 000,00	148 400 000,00	514 000 000,00
B	51 000 000 000,00	76 400 000 000,00	886 000 000,00	886 000 000,00	46 040 000,00	46 040 000,00	365 200 000,00
C	25 500 000 000,00	51 000 000 000,00	621 000 000,00	621 000 000,00	41 430 000,00	41 430 000,00	261 500 000,00
D	12 740 000 000,00	25 500 000 000,00	443 300 000,00	443 300 000,00	36 840 000,00	36 840 000,00	191 300 000,00
E	2 550 000 000,00	12 740 000 000,00	310 300 000,00	310 300 000,00	32 230 000,00	32 230 000,00	137 900 000,00
F	1 274 000 000,00	2 550 000 000,00	265 900 000,00	265 900 000,00	27 620 000,00	27 620 000,00	118 200 000,00
G	764 000 000,00	1 274 000 000,00	177 300 000,00	177 300 000,00	23 030 000,00	23 030 000,00	81 700 000,00
H	255 000 000,00	764 000 000,00	133 000 000,00	133 000 000,00	13 810 000,00	13 810 000,00	59 100 000,00
I	76 400 000,00	255 000 000,00	88 600 000,00	88 600 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	39 370 000,00
J		76 400 000,00	44 330 000,00	44 330 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	19 730 000,00

¹ Los estratos corresponden con los incisos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa.

II. —Límites de contratación aplicables al ICE y JASEC.

LÍMITES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA AÑO 2019					
Cálculo según artículo 22 de la Ley N° 8660					
Instituciones	Licitación Pública	Licitación Abreviada		Contratación Directa	Estrato de referencia ¹
	Igual a o más de	Menos de	Igual a o más de	Menos de	
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)	7 234 561 451,00	7 234 561 451,00	95 600 000,00	95 600 000,00	A
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC)	684 462 694,00	684 462 694,00	26 700 000,00	26 700 000,00	C

¹Determinado según el monto presupuestario promedio, en millones de colones del periodo 2017-2019, para la adquisición de bienes y servicios no personales indicado como referencia en el punto XI de esta resolución.

III.— De conformidad con lo indicado en el párrafo segundo del artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el caso de la **Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL)** la cuantía para apelar el acto de adjudicación ante la Contraloría General de la República, en los contratos de obra pública será a partir de quinientos catorce millones de colones (¢514.000.000,00), que corresponde al límite económico para apelación en el estrato A contenido en la tabla I.B. de esta Resolución. Para las restantes contrataciones, la cuantía para apelar el acto de adjudicación ante la Contraloría General de la República, será a partir de trescientos treinta y un millones de colones (¢331.000.000,00), que corresponde al límite económico para apelación en el estrato A contenido en la tabla I.A. de esta Resolución.

Asimismo, el monto que equivaldría a la cuantía para la licitación pública calculada de conformidad con el artículo 22 de la Ley N° 8660 es mil ochocientos cuarenta y cinco millones ciento cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y dos colones (¢1.845.146.552,00), el cual deberá ser considerado para efectos de objeción y refrendo, en el tanto así corresponda el cumplimiento de ese requisito.

IV.— De conformidad con lo indicado en el párrafo segundo del artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el caso de **Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA)** la cuantía para apelar el acto de adjudicación ante la Contraloría General de la República, en los contratos de obra pública será a partir de doscientos sesenta y un millones quinientos mil colones (¢261.500.000,00), que corresponde al límite económico para apelación en el estrato C contenido en la tabla I.B. de esta Resolución. Para las restantes contrataciones, la cuantía para apelar el acto de adjudicación ante la Contraloría General de la República será a partir de ciento sesenta y ocho millones seiscientos mil colones (¢168.600.000,00), que corresponde al límite económico para apelación en el estrato C contenido en la tabla I.A. de esta Resolución.

Asimismo, el monto que equivaldría a la cuantía para la licitación pública calculada de conformidad con el artículo 22 de la Ley N° 8660 es quinientos dieciséis millones seiscientos treinta y nueve mil setecientos un colones (¢516.639.701,00), el cual deberá ser considerado para efectos de objeción y refrendo, en el tanto así corresponda el cumplimiento de ese requisito.

V.— De conformidad con lo indicado en el párrafo segundo del artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el caso de **Cable Visión S.A.** la cuantía para apelar el acto de adjudicación ante la Contraloría General de la República, en los contratos de obra pública será a partir de ciento treinta y siete millones novecientos mil colones (¢137.900.000,00), que corresponde al límite económico para apelación en el estrato E contenido en la tabla I.B. de esta Resolución. Para las restantes contrataciones, la cuantía para apelar el acto de adjudicación ante la Contraloría General de la República, será a partir de ochenta y ocho millones novecientos mil colones (¢88.900.000,00), que corresponde al límite económico para apelación en el estrato E contenido en la tabla I.A. de esta Resolución.

Asimismo, el monto que equivaldría a la cuantía para la licitación pública calculada de conformidad con el artículo 22 de la Ley N° 8660 es trescientos veinticuatro millones trescientos treinta y cuatro mil treinta y ocho colones (¢324.334.038,00), el cual deberá ser considerado para efectos de objeción y refrendo, en el tanto así corresponda el cumplimiento de ese requisito.

VI.— De conformidad con lo indicado en el párrafo segundo del artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el caso de **Gestión Cobro Grupo ICE S.A.** la cuantía para apelar el acto de adjudicación ante la Contraloría General de la República, en los contratos de obra pública será a partir de treinta y nueve millones trescientos setenta mil colones (¢39.370.000,00), que corresponde al límite económico para apelación en el estrato I contenido en la tabla I.B. de esta Resolución. Para las restantes contrataciones, la cuantía para apelar el acto de adjudicación ante la Contraloría General de la República, será a partir de veinticinco millones trescientos noventa mil colones (¢25.390.000,00), que corresponde al límite económico para apelación en el estrato I contenido en la tabla I.A. de esta Resolución.

Asimismo, el monto que equivaldría a la cuantía para la licitación pública calculada de conformidad con el artículo 22 de la Ley N° 8660 es ciento veinte millones ochocientos setenta y cinco mil novecientos setenta y seis colones (¢120.875.976,00), el cual deberá ser considerado para efectos de objeción y refrendo, en el tanto así corresponda el cumplimiento de ese requisito.

VII. — Límites de contratación aplicables al INCOFER

LÍMITES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA AÑO 2019					
Cálculo según artículo 16 aparte ch) de la Ley N° 9366 que refiere al artículo 22 de la Ley N° 8660					
Institución	Licitación Pública	Licitación Abreviada		Contratación Directa	Estrato de referencia¹
	Igual a o más de	Menos de	Igual a o más de	Menos de	
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)	311 920 089,00	311 920 089,00	23 740 000,00	23 740 000,00	D

¹Determinado según el monto presupuestario promedio, en millones de colones del periodo 2017-2019, para la adquisición de bienes y servicios no personales indicado como referencia en el punto XI de esta resolución.

VIII.— Aquellos procedimientos que al entrar en vigencia esta Resolución ya tienen la publicación o la invitación del aviso a participar realizado, continuarán su trámite —hasta su finalización— según las formalidades propias del procedimiento iniciado.

IX. —El parámetro a utilizar para definir la procedencia del recurso de apelación, es el monto vigente a la fecha de publicación o comunicación del acto de adjudicación.

X. —La actualización de límites contenida en esta Resolución, no aplicará a las contrataciones que se encuentren en trámite de refrendo o de aprobación interna, según corresponda, a la fecha de entrada en vigencia de esta Resolución.

XI. —Establecer para la aplicación de los límites actualizados en esta Resolución relativos al artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, los montos presupuestarios promedios, en millones de colones, del período 2017–2019, para la adquisición de bienes y servicios no personales, utilizando los presupuestos institucionales correspondientes para los dos primeros periodos y el presupuesto inicial para el periodo vigente. La información que se utilizó corresponde a la registrada y aprobada en el SIPP. El listado final de las entidades y órganos de la Administración Pública es el siguiente:

Entidad u Órgano	Promedio 2017-2019 -En millones-	Estrato
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS	15,10	J
AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB)	804,80	G
ALMACEN FISCAL AGRICOLA DE CARTAGO S.A.	336,80	H
ASAMBLEA LEGISLATIVA	6.219,47	E
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	6.997,25	E
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	31.741,48	C
BANCO DE COSTA RICA	173.361,59	A
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI)	2.570,30	E
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	242.050,31	A
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	118.002,82	A
BCR-SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.	4.413,85	E
BCR CORREDORA DE SEGUROS S.A. (BCRCS)	1.901,13	F
BCR PENSION OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS SOCIEDAD ANONIMA	3.326,20	E
BCR VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.	2.288,71	F
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA	18.336,10	D
BN-VITAL OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS S.A.	4.311,59	E
BN CORREDORA DE SEGUROS S.A.	1.731,78	F
BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A	2.746,12	E
BN VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.	1.680,21	F
CABLE VISION DE COSTA RICA CVCR S.A.	4.508,19	E
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)	771.883,59	A
CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS	84,12	I
CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA	1.421,97	F
CENTRO CULTURAL E HISTORICO JOSE FIGUERES FERRER	57,52	J
CENTRO NACIONAL DE LA MUSICA	1.536,10	F
COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	578,38	H
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO	912,37	G
COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMON	1.248,93	F
COMISION DE ENERGIA ATOMICA DE COSTA RICA	18,15	J
COMISION NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS	83,18	I
COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACION	3.773,49	E
COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS	3.216,51	E

Entidad u Órgano	Promedio 2017-2019 -En millones-	Estrato
COMISION NACIONAL DE VACUNACION Y EPIDEMIOLOGIA	1.798,60	F
COMISION NACIONAL PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD	177,21	I
COMISION PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO REVENTAZON	146,38	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE ACOSTA	40,44	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE AGUIRRE	106,71	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE ALAJUELA	660,83	H
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE ALAJUELITA	104,74	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE ALFARO RUIZ	33,70	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE ATENAS	53,92	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BAGACES	59,86	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BARVA	151,07	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BELEN	338,24	H
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE BUENOS AIRES	55,40	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CARRILLO GUANACASTE	169,15	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CARTAGO	741,82	H
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CORREDORES	89,98	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE COTO BRUS	64,49	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CURRIDABAT	350,64	H
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE DESAMPARADOS	364,63	H
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE EL GUARCO	69,63	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE ESCAZU	416,11	H
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE ESPARZA	78,27	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE GARABITO	100,86	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE GRECIA	174,70	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE GUACIMO	48,15	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE GUATUSO	13,72	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE HEREDIA	596,57	H
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE HOJANCHA	20,35	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE JIMENEZ	48,11	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE LA CRUZ GUANACASTE	61,27	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE LA UNION	229,09	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE LEON CORTES	13,84	J

Entidad u Órgano	Promedio 2017-2019 -En millones-	Estrato
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE LIBERIA	385,94	H
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE LOS CHILES	31,71	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE MATINA	60,63	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE MONTES DE OCA	175,29	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE MONTES DE ORO	65,41	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE MORA	80,80	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE MORAVIA	82,60	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE NANDAYURE	44,83	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE NARANJO	70,06	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE NICOYA	86,62	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE OREAMUNO	54,25	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE OSA	88,67	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE PARAISO	127,30	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE PARRITA	64,70	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE PEREZ ZELEDON	206,17	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE POAS	48,44	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE POCOCI	343,01	H
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE PURISCAL	63,82	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SAN CARLOS	275,82	H
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SAN ISIDRO DE HEREDIA	62,98	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SAN JOSE	1.935,09	F
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SAN MATEO	8,28	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SAN RAFAEL DE HEREDIA	109,63	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SAN RAMON	110,38	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SANTA ANA	356,54	H
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SANTA BARBARA HEREDIA	85,90	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SANTA CRUZ	117,60	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SANTO DOMINGO HEREDIA	156,79	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SARAPIQUI	69,22	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SIQUIRRES	87,45	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE TARRAZU	24,77	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE TIBAS	115,56	I

Entidad u Órgano	Promedio 2017-2019 -En millones-	Estrato
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE TILARAN	58,43	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE TURRUBARES	27,50	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTES DE VALVERDE VEGA	39,34	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ABANGARES	61,02	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALVARADO	34,49	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE GOICOECHEA	221,18	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE GOLFITO	65,98	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE PALMARES	69,70	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE PUNTARENAS	120,08	I
COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SAN PABLO, HEREDIA	50,15	J
COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE TURRIALBA	75,24	I
COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	241.925,56	A
CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL	571,60	H
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL	23.361,97	D
CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO	2.807,30	E
CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S	218,14	I
CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES	2.959,43	E
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD (CONIS)	44,83	J
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS (CONICIT)	212,26	I
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR	310,72	H
CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PERSONA JOVEN	502,08	H
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)	3.511,35	E
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	35.508,66	C
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)	4.436,15	E
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD	346.875,89	A
CONSEJO RECTOR SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO	1.481,36	F
CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION	77,95	I
CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL	37.144,16	C
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA	1.746,40	F
CORPORACION GANADERA	381,42	H
CORREOS DE COSTA RICA S.A.	9.221,09	E
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL	75.741,82	A

Entidad u Órgano	Promedio 2017-2019 -En millones-	Estrato
DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA	706,08	H
DEPOSITO AGRICOLA DE CARTAGO S.A.	271,99	H
DIRECCION NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACION Y NUTRICION Y DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL	18.954,99	D
DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO	2.064,94	F
EDITORIAL COSTA RICA	101,79	I
EMPRESA DE SERVICIOS METROPOLITANOS ESM SOCIEDAD ANONIMA	99,22	I
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA (ESPH)	76.201,06	A
EMPRESA HIDROELECTRICA LOS NEGROS S.A. (SUBSIDIARIA E.S.P.H.)	548,44	H
FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA	8,34	J
FEDERACION DE MUNICIPALIDADES CANTONES PRODUCTORES DE BANANO (CAPROBA)	306,36	H
FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO	21,89	J
FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE GUANACASTE (ANTES LIGA DE MUNICIPALIDADES DE GUANACASTE)	109,60	I
FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS (FEDEMSUR)	7,50	J
FEDERACION DE MUNICIPALIDADES Y CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DEL PACIFICO (FEMUPAC)	13,45	J
FEDERACION METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES DE SAN JOSE	69,95	J
FEDERACION OCCIDENTAL DE MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA	99,19	I
FONDO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE LIMON	2,78	J
FONDO NACIONAL DE BECAS	2.571,71	E
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL	1.053,27	G
GESTION COBRO GRUPO ICE SOCIEDAD ANONIMA	106,61	I
INS-VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.	1.433,10	F
INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A	1.280,36	F
INS RED DE SERVICIOS DE SALUD SOCIEDAD ANONIMA	10.620,82	E
INS SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	7.765,23	E
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA)	171.202,39	A
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	864.887,62	A
INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES	11.072,00	E
INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA EN NUTRICION Y SALUD (INCIENSA)	2.821,02	E
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUACULTURA	1.605,38	F
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO	4.050,89	E

Entidad u Órgano	Promedio 2017-2019 -En millones-	Estrato
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT)	33.540,69	C
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION (ICODER)	12.187,77	E
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS	1.901,87	F
INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GAMEZ SOLANO	2.059,07	F
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER)	27.593,45	C
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM)	2.771,52	E
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA (ICAFE)	1.195,52	G
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	30.771,18	C
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA)	66.274,01	B
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	2.922,53	E
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO	3.376,75	E
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA INTA	1.353,14	F
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	11.854,02	E
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS)	615.979,70	A
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	9.260,59	E
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA	6.943,82	E
INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA (ITCR)	25.146,69	C
JUNTA ADMINISTRATIVA CEMENTERIOS DE GOICOECHEA	97,65	I
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA	6.204,31	E
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	2.513,57	E
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL	1.581,52	F
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CEMENTERIO DE LIMON	24,44	J
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CEMENTERIO GENERAL Y LAS ROSAS DE ALAJUELA	157,80	I
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL	19.368,14	D
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO (JASEC)	45.353,74	C
JUNTA ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA	18.741,21	D
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE	26.358,05	C
LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGIA	283,75	H
LIGA DE MUNICIPALIDAD DE HEREDIA	19,71	J
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	3.437,04	E
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA (MINAE)	4.878,02	E
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES (MICITT)	2.131,13	F
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	3.369,43	E

Entidad u Órgano	Promedio 2017-2019 -En millones-	Estrato
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	8.440,56	E
MINISTERIO DE ECONOMIA INDUSTRIA Y COMERCIO	1.498,74	F
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA	61.987,71	B
MINISTERIO DE GOBERNACION Y POLICIA	806,70	G
MINISTERIO DE HACIENDA	39.283,34	C
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	33.101,82	C
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	1.128,01	G
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	46.660,99	C
MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA	1.227,28	G
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	7.360,45	E
MINISTERIO DE SALUD	10.058,73	E
MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA	65.304,32	B
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	5.029,55	E
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	617,19	H
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES	4.026,42	E
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA	1.653,20	F
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA	13.010,96	D
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA	1.371,95	F
MUNICIPALIDAD DE ASERRI	2.400,14	F
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS	1.331,04	F
MUNICIPALIDAD DE ATENAS	1.168,17	G
MUNICIPALIDAD DE BAGACES	1.841,41	F
MUNICIPALIDAD DE BARVA	2.518,27	E
MUNICIPALIDAD DE BELEN	4.431,94	E
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES	4.846,98	E
MUNICIPALIDAD DE CAÑAS	2.229,14	F
MUNICIPALIDAD DE CARRILLO GUANACASTE	4.349,01	E
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO	12.831,17	D
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES	4.071,28	E
MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS	1.928,12	F
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT	7.596,14	E
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS	5.354,73	E
MUNICIPALIDAD DE DOTA	2.249,54	F
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO	1.806,84	F
MUNICIPALIDAD DE ESCAZU	16.852,54	D
MUNICIPALIDAD DE ESPARZA	2.782,61	E
MUNICIPALIDAD DE FLORES	1.292,51	F

Entidad u Órgano	Promedio 2017-2019 -En millones-	Estrato
MUNICIPALIDAD DE GARABITO	2.754,60	E
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA	8.127,74	E
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO	2.776,85	E
MUNICIPALIDAD DE GRECIA	4.123,71	E
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO	3.602,39	E
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO	2.154,46	F
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA	12.187,84	E
MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA	1.286,50	F
MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ	1.243,27	G
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ GUANACASTE	3.117,30	E
MUNICIPALIDAD DE LA UNION	5.074,82	E
MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES	1.261,84	F
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA	6.049,06	E
MUNICIPALIDAD DE LIMON	4.469,73	E
MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES	2.406,48	F
MUNICIPALIDAD DE MATINA	2.318,15	F
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA	3.174,48	E
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO	1.464,86	F
MUNICIPALIDAD DE MORA	1.934,73	F
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA	2.866,58	E
MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE	1.821,00	F
MUNICIPALIDAD DE NARANJO	3.902,59	E
MUNICIPALIDAD DE NICOYA	3.205,99	E
MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO	1.765,69	F
MUNICIPALIDAD DE OROTINA	2.561,40	E
MUNICIPALIDAD DE OSA	3.930,06	E
MUNICIPALIDAD DE PALMARES	1.285,69	F
MUNICIPALIDAD DE PARAISO	2.711,80	E
MUNICIPALIDAD DE PARRITA	1.809,35	F
MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON	6.213,69	E
MUNICIPALIDAD DE POAS	1.514,24	F
MUNICIPALIDAD DE POCOCI	5.440,16	E
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS	4.917,54	E
MUNICIPALIDAD DE PURISCAL	1.530,23	F
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS	2.732,57	E
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	8.981,92	E
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA	1.404,53	F

Entidad u Órgano	Promedio 2017-2019 -En millones-	Estrato
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	26.014,40	C
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO	805,46	G
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA	2.471,75	F
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA	1.997,07	F
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	3.634,04	E
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA	6.682,99	E
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DE HEREDIA	2.503,68	E
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	3.895,43	E
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA	3.807,21	E
MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI	4.391,07	E
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	2.365,00	F
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA	1.958,39	F
MUNICIPALIDAD DE TARRAZU	1.648,89	F
MUNICIPALIDAD DE TIBAS	3.752,18	E
MUNICIPALIDAD DE TILARAN	1.711,60	F
MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA	4.694,25	E
MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES	1.528,32	F
MUNICIPALIDAD DE UPALA	3.081,70	E
MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA	1.303,65	F
MUNICIPALIDAD DE VASQUEZ DE CORONADO	2.396,61	F
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO	1.072,13	G
MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE	839,61	G
MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORANEO	80,90	I
MUSEO DR. RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA	78,84	I
MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA	406,17	H
MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA	1.559,91	F
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD	3.989,77	E
OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS	136,34	I
OFICINA NACIONAL FORESTAL (ONF)	84,15	I
OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y DE CAPITALIZACION LABORAL DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL SA	2.378,23	F
OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS DEL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL S.A	5.931,33	E
PATRONATO DE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y ADQ DE BIENES	7.017,05	E
PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS	33,18	J
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)	22.438,25	D
PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACION	163,94	I

Entidad u Órgano	Promedio 2017-2019 -En millones-	Estrato
POPULAR SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS S.A.	1.939,87	F
POPULAR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION SOCIEDAD ANONIMA	1.291,97	F
POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.	1.307,40	F
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	1.660,00	F
PROGRAMA INTEGRAL MERCADEO AGROPECUARIO	19.784,75	D
PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA (PROCOMER)	8.357,86	E
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S. A	33.329,61	C
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO SOCIEDAD ANONIMA	1.467.119,0 1	A
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO	5.151,67	E
SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS RIEGO Y AVENAMIENTO	11.451,79	E
SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL	3.183,77	E
SISTEMA DE EMERGENCIAS 911	1.493,70	F
SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION	16.269,88	D
SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION MUSICAL	619,20	H
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO (SINIRUBE)	2.077,94	F
SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION CULTURAL (SINART)	4.531,38	E
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	2.002,53	F
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)	6.962,25	E
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS	4.774,21	E
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS (SUGESE)	2.266,29	F
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES	2.332,37	F
TEATRO NACIONAL	1.806,91	F
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR	1.863,86	F
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO	598,45	H
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	12.283,98	E
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO CONTRATO NO. 2526/OC-CR BID-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	15.659,86	D
UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES	799,63	G
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	86.368,25	A
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED)	33.065,36	C
UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA)	60.771,88	B
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL (UTN)	11.748,33	E

XII.— En caso que exista alguna discrepancia con el promedio calculado en la lista del punto XI de esta resolución, cada entidad u órgano de la Administración Pública podrá interponer ante la Contraloría General de la República, una solicitud de revisión del cálculo realizado acompañada de la respectiva documentación de respaldo, que será debidamente analizada según las particularidades del caso.

XIII.— Aquellas instituciones cuyos presupuestos no se encuentren incluidos en la lista del punto XI de esta Resolución, utilizarán como referencia los límites económicos aplicables al inciso j) de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas. Lo anterior, hasta que realicen solicitud ante la Contraloría General de la República para que se proceda a calcular el correspondiente presupuesto promedio para la adquisición de bienes y servicios no personales y se adicione esta Resolución.

XIV.— En la solicitud que deberá realizarse ante la Contraloría General de la República que señala el inciso XIII deberá aportarse una certificación en la que conste el monto referido a los egresos de las partidas –servicios, materiales y suministros y bienes duraderos- que respaldan la adquisición de bienes y servicios no personales incluidas en el presupuesto institucional para el periodo 2016 y 2017, así como del presupuesto ordinario aprobado para el ejercicio económico 2018.

XV.— De manera excepcional se registrarán por el presupuesto de la entidad a la que están adscritos, los órganos desconcentrados que disponen de personalidad jurídica instrumental, presupuesto propio y potestad de ejecutarlo, que no se encuentran incluidos en la lista del punto XI de esta Resolución. Lo anterior, hasta que realicen el respectivo registro en el SIPP y formulen solicitud ante la Contraloría General de la República para que se proceda a calcular el correspondiente presupuesto promedio para la adquisición de bienes y servicios no personales y se adicione esta Resolución.

XVI. — La presente resolución rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE.

Marta E. Acosta Zúñiga
CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 vez.—Solicitud N° 141656.—(IN2019322717).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

Resolución

14 de enero del 2019

SGF-0077-2019

SGF-PUBLICO

Dirigida a:

- **Bancos Comerciales del Estado**
- **Bancos Creados por Leyes Especiales**
- **Bancos Privados**
- **Empresas Financieras no Bancarias**
- **Otras Entidades Financieras**
- **Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito**
- **Entidades Autorizadas del Sistema Financiera Nacional para la Vivienda**

Asunto: Disminución del porcentaje de acumulación que se aplica sobre utilidades que se destina para la conformación de la estimación contra cíclica. (Acuerdo SUGEF 19-16)

El Superintendente General de Entidades Financieras,

Considerando que:

- I. El *Reglamento para la determinación y el registro de estimaciones contra cíclicas*, SUGEF 19-16 fue aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) mediante artículo 6 del acta de la sesión 1258-2016, del 7 de junio del 2016 con el objeto de cuantificar y constituir las estimaciones contra cíclicas
- II. Mediante artículo 13 del acta de la sesión 1416-2018 del 15 de mayo de 2018, el CONASSIF acordó modificar el Transitorio II para incorporar la gradualidad del porcentaje mínimo para calcular el registro mensual del gasto por componente contra cíclico, en el cual se estableció una gradualidad iniciando con un 5% hasta alcanzar el 7% a partir de julio 2020.
- III. Mediante artículo 7, del acta de la sesión 1463-2018 del 27 de noviembre de 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 2 del 03 de enero del 2019, el CONASSIF modificó el Transitorio II de dicho reglamento, y facultó al Superintendente a suspender temporalmente el registro de estimaciones contra cíclicas o disminuir temporalmente los porcentajes mínimos para su cálculo, en casos necesarios, para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero.

- IV. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), publicado por el Banco Central de Costa Rica con corte a octubre 2018, muestra una desaceleración en el dinamismo de la economía. Dicho IMAE con tendencia ciclo muestra una variación interanual del 2,10%, que comparativamente es inferior al crecimiento que se evidenció en diciembre 2016 y 2017.
- V. Después de la entrada en vigencia del Reglamento para la determinación y el registro de estimaciones contra cíclicas en junio 2016, el crecimiento del crédito del sector financiero experimentó incrementos interanuales de dos dígitos. Posterior a ello, los crecimientos interanuales son menores, llegando a mostrarse en agosto 2018 la menor tasa de crecimiento en los últimos 8 años.
- VI. El Índice de Auges Crediticios del Banco Central de Costa Rica, que permite determinar si la razón *Crédito al Sector Privado a Producto Interno Bruto* se aleja de su tendencia de largo plazo y cuya lectura favorece la toma de decisiones relacionadas con estabilidad financiera, muestra que el indicador se mantiene por debajo de su propensión de largo plazo desde mediados de 2017 y durante el año 2018.
- VII. El porcentaje de estimación específica por riesgo de crédito respecto a la cartera crediticia clasificada en A1 y A2, se ha incrementado en el último año. A nivel del agregado se observa que dicho coeficiente en el Sistema Financiero Nacional, a octubre de 2018 es el más alto de los últimos 12 años con un nivel de 2,9%, incluso mayor que lo mostrado en la pasada crisis del 2010 cuando su valor alcanzó el 2,7% en mayo 2010, reduciéndose posteriormente a 1,7% en noviembre 2014. Por lo tanto el incremento de la estimación específica mostrado en 2018 es evidencia de la fase recesiva del ciclo.

Dispone:

1. Disminuir temporalmente el porcentaje de acumulación establecido en el Transitorio II del Acuerdo SUGEF 19-16, que se aplica sobre el resultado positivo de la diferencia entre el saldo de las cuentas 500 "Ingresos" menos 400 "Gastos" más 450 "Impuestos y participaciones sobre la utilidad" de cada mes, el cual se destina para la conformación de la estimación contra cíclica. La disminución del porcentaje será de 5% a 2,5%. Esto aplica para aquellas entidades que no han alcanzado la meta de estimación contra cíclica al 31 de diciembre del 2018.
2. El saldo actual acumulado de la estimación contra cíclica, registrado en la cuenta analítica "139.02.M.02 (Componente contra cíclico), que mantienen las entidades, no será sujeto de des acumulación en virtud del cambio de porcentaje establecido en esta Resolución.

3. Las entidades que alcanzaron el nivel meta de estimación contra cíclica y que se encuentran bajo la regla de la fórmula, establecida en el Artículo 4. "*Cálculo del requerimiento de estimaciones contra cíclicas*", del *Reglamento para la determinación y el registro de estimaciones contra cíclicas*, SUGEF 19-16, continuarán acumulando o des acumulando, conforme con la metodología que establece dicho artículo y, el artículo 5 "*Registro Contable*" de ese reglamento.
4. El porcentaje de acumulación mensual del 2,5%, para calcular el registro mensual del gasto por componente contra cíclico, se aplicará a partir del 1 de enero del 2019 y, estará sujeto a revisión en los primeros seis meses del año 2019.
5. Derogar la Resolución SGF-3966-2018 del 21 de diciembre del 2018 y comunicada el 04 de enero del 2019.

Rige a partir del 1 de enero del 2019.

Bernardo Alfaro A., **Superintendente**.—1 vez.—Solicitud N° 139053.—(IN2019316829).

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

RE-0017-IT-2019

San José, a las 15:00 horas del 21 de febrero de 2019

CONOCE EL DIRECTOR A.Í. DE LA INTENDENCIA DE TRANSPORTE SOBRE EL AJUSTE EXTRAORDINARIO DE OFICIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS, MODALIDAD TAXI, BASE DE OPERACIÓN REGULAR.

EXPEDIENTE ET-010-2019

RESULTANDOS:

- I. El Regulador General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, aprueba mediante resolución RRG-4199-2004 de las nueve horas del 13 de diciembre de 2004, publicada en La Gaceta 23 del 2 de febrero de 2005, el modelo denominado: “Modelo de Regulación Económica del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas, Modalidad Taxi”.
- II. La Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, mediante resolución RJD-141-2014, publicada en La Gaceta 215 del 7 de noviembre de 2014, modifica el cálculo de la tarifa banderazo en el procedimiento extraordinario de fijación del modelo, esto a fin de introducir en la tarifa la variación en el canon de regulación de la Autoridad Reguladora (Aresep) y el canon del Consejo de Transporte Público (CTP).
- III. La Intendencia de Transporte, mediante resolución RE-109-IT-2018, de las 11:30 horas del 23 de agosto de 2018, publicada en el Alcance Digital 151 a la Gaceta 159, del 31 de agosto de 2018 fija las tarifas vigentes para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi – base de operación regular, la cual se tramitó en el expediente ET-038-2018.
- IV. La Intendencia de Transporte, por medio del oficio IN-0026-IT-2019, el 07 de febrero de 2019, emite el informe preliminar del procedimiento extraordinario de fijación tarifaria para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi, base de operación regular (folios 2 al 16).
- V. El Director a.í. de la Intendencia de Transporte, por medio del oficio OF-0161-IT-2019 del 07 de febrero de 2019, solicita al Departamento de Gestión Documental la apertura del expediente tarifario, en el cual se tramita la fijación tarifaria extraordinaria para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi, base de operación regular,

- VI. La Intendencia de Transporte, mediante oficio OF-0168-IT-2019 del 07 de febrero de 2019, solicita a la Dirección General de Atención al Usuario la convocatoria a consulta pública. (folios 17 al 18).
- VII. La convocatoria a consulta pública, se publica en los diarios La Extra, La Nación y La Teja del 13 de febrero de 2019 y en La Gaceta 31 del 13 de febrero de 2019; en la misma, se otorgó un plazo a los interesados que feneció el 19 de febrero de 2019, para que presentaran sus posiciones a favor o en contra de la fijación tarifaria, indicando las razones que consideraran (folios 43 al 44).
- VIII. La Dirección General de Atención al Usuario, mediante informe IN-0039-DGAU-2019 del 19 de febrero de 2019, remite el informe de oposiciones y coadyuvancias presentadas en la etapa de consulta pública (folios 96 al 97).
- IX. El estudio de marras fue realizado por la Intendencia de Transporte produciéndose el informe IN-0034-IT-2019 del 21 de febrero de 2019, que corre agregado al expediente.
- X. Se han cumplido las prescripciones de ley en los plazos y procedimientos.

CONSIDERANDOS:

- I. El Director de la Intendencia de Transporte sustituye al Intendente de Transporte durante sus ausencias temporales, tales como vacaciones, incapacidades y sustituciones temporales con motivo de la representación institucional, entre otros. Para el caso en concreto, el Intendente de Transporte, el señor Enrique Muñoz Aguilar se encuentra en vacaciones del 4 al 22 de febrero de 2019, por lo que este acto lo resuelve el señor Mauricio González Quesada, en su condición de Director a.í., según el oficio 658-RG-2018 del Regulador General de la Aresep, nombramiento realizado a partir del 24 de julio de 2018 y que a la fecha se encuentra vigente.
- II. Del oficio IN-0034-IT-2019 del 21 febrero de 2019 que sirve de base para el dictado de la presente resolución, conviene extraer lo siguiente:

“(...)”

2. MARCO REFERENCIAL

El 13 de diciembre de 2004, el Regulador General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, por medio de la resolución RRG-4199-2004 publicada en La Gaceta 23 del 2 de febrero de 2005, aprueba el “Modelo de Regulación Económica del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas, Modalidad Taxi”, dentro de este modelo de regulación se establece el procedimiento extraordinario de fijación tarifaria para el servicio, el cual tiene por objeto reconocer oportunamente en las tarifas, los cambios, aumentos o disminuciones en los precios de aquellos componentes de costo fijados por actores externos a la administración del servicio, con el fin de propiciar la continuidad operativa del servicio de transporte público por taxi. Específicamente en el capítulo V de la metodología, en el apartado del Procedimiento Extraordinario de Fijación, se indica que las fijaciones se efectuarán, cada seis meses en el mes de febrero y agosto de cada año.

Adicionalmente, mediante resolución RJD-141-2014, publicada en La Gaceta 215 del 7 de noviembre de 2014, se modifica el cálculo de la tarifa banderazo en el procedimiento extraordinario de fijación del modelo, esto a fin de introducir en la tarifa la variación en el canon de regulación de la Autoridad Reguladora (Aresep) y el canon del Consejo de Transporte Público (CTP).

Asimismo, se aplica también el criterio de homologación tarifaria, establecido en el modelo de regulación (RRG-4199-2004), el cual señala que, en cada base de operación, se calcula la tarifa plana para los diferentes tipos de vehículos que estén autorizados a operar en ella y se escoge la mayor como la tarifa banderazo por jornada, que aplicará para todos los tipos de vehículos. También, se aplica como criterio de redondeo el llevar la tarifa a los cinco colones más próximos, según lo establece la resolución indicada.

Se indica además, con base en el “Modelo de Regulación Económica del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas, Modalidad Taxi” (resoluciones RRG-4199-2004 y RJD-141-2014), que desde la resolución RRG-4910-2005 de las ocho horas y treinta minutos del cuatro de agosto del 2005 y posteriores resoluciones de fijaciones extraordinarias de tarifas para el servicio de transporte público modalidad taxi, se ha instituido que la estructura tarifaria que se establece, no contempla diferenciación alguna respecto a las horas del día (diurna o nocturna) en que se presta el servicio y las tarifas se cobran de acuerdo con lo que marque el taxímetro, independientemente de situaciones tales como: a) condiciones del camino, b) distancia del recorrido, c) origen o destino del servicio d) naturaleza del

día (hábil o feriado), e) nacionalidad del usuario. En consecuencia, el vehículo con que se presta el servicio debe poseer indefectiblemente, un sistema de medición de acuerdo con los mecanismos legales y técnicos estipulados para ello, según lo ordena el artículo 59 de la ley 7969, siendo obligatorio que en todos los viajes se accione el taxímetro y que sin excepción la tarifa que cobra sea la que señale dicho dispositivo.

También se ha indicado, basados en la metodología vigente y desde la resolución RRG-10073-2009 de las nueve horas y treinta minutos del 7 de setiembre del 2009 en adelante, que el valor que debe cancelarse por el uso de vías de tránsito (peaje) no está considerado como un costo dentro de la tarifa del servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad taxis, de ahí que dependiendo de la vía de tránsito que escoja el usuario, éste deberá pagarlo en forma adicional a la tarifa. El pago del peaje procede únicamente cuando el usuario está haciendo uso del servicio de taxi.

3. CÁLCULO TARIFARIO

De conformidad con lo establecido en la resolución RRG-4199-2004 del 13 de diciembre de 2004, que corresponde al Modelo de Regulación Económica del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas Modalidad Taxi, específicamente en la Sección 1 del Capítulo V en el que se dispone el procedimiento automático de ajuste para la fijación extraordinaria de tarifas, se procede a calcular los componentes del índice de ajuste I según el siguiente algoritmo (en adelante ecuación 1):

$$I = \left[\left(\frac{SMT_1}{SMT_0} \right) - 1 + \left(\frac{PPC_1}{PPC_0} \right) - 1 + \left(\frac{TC_1}{TC_0} \right) - 1 \right] \cdot 100$$

Donde:

I: Índice de ajuste automático de la tarifa.

SMT₁: Salario mínimo por jornada ordinaria para un taxista, vigente al mes anterior a la aplicación del procedimiento de fijación extraordinaria por ajuste automático.

SMT₀: Salario mínimo por jornada ordinaria para un taxista, vigente al mes anterior a la última fijación tarifaria (sea esta ordinaria o extraordinaria) por ajuste automático.

PPC₁: Precio ponderado del combustible (diésel, gasolina súper y gasolina regular) aprobado por la Autoridad Reguladora y vigente al mes anterior a la aplicación del procedimiento de fijación extraordinaria.

PPC₀: Precio ponderado del combustible (diésel, gasolina súper y gasolina regular) aprobado por la Autoridad Reguladora y vigente al mes anterior a la última fijación tarifaria.

TC₁: Tipo de cambio del colón con respecto al dólar estadounidense, vigente al último día del mes anterior a la solicitud de fijación extraordinaria por ajuste automático, calculado por el Banco Central de Costa Rica.

TC₀: Tipo de cambio del colón con respecto al dólar estadounidense, vigente al último día del mes anterior a la última fijación tarifaria (sea esta ordinaria o extraordinaria), calculado por el Banco Central de Costa Rica.

Este procedimiento automático de ajuste considera las variaciones de los parámetros que tienen mayor peso en las tarifas, determinados en la resolución supra indicada con base en un análisis de sensibilidad del modelo tarifario, estas son el salario mínimo por jornada ordinaria para un taxista, el precio ponderado del combustible y el tipo de cambio del colón con respecto al dólar estadounidense, las cuales, para el caso que nos ocupa de fijación tarifaria para el servicio de taxi, base de operación regular del I semestre 2019, se calculan de la siguiente forma:

3.1 Salario

En el año 2018, el Consejo Nacional de Salarios establece la resolución CNS-RG-03-2018 del 13 de agosto de 2018, publicada en La Gaceta 159 del 31 de agosto de 2018, mediante la cual resuelve modificar el salario por jornada diaria mínimo del taxista, de la siguiente manera:

*“(...) 2- Clasificar el puesto de servicio remunerado de traslado de personas, en la modalidad de Chofer de Taxi y afines a Taxista, en la categoría salarial de **Trabajador Calificado (TC)** y 3-Rige a partir de su publicación.” (Destacado no es del original).*

De acuerdo con el procedimiento establecido, aplicando el componente respectivo de la ecuación 1 anteriormente descrita y la modificación en la clasificación de categoría salarial del puesto del chofer de taxi, el cálculo de la variación del salario es como se indica a continuación:

Factor	Valor	Referencia
SMT ₀	11.897,51	Decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 40743-MTSS, publicado en el Alcance Digital 291 a La Gaceta 228, del 01 de diciembre de 2017.
SMT ₁	11.471,53	Decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 41434-MTSS, publicado en la Gaceta 235 del 18 de diciembre de 2018.
Variación	-3,58%	

Mediante el Decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 40743-MTSS, publicado en el Alcance Digital 291 a La Gaceta 228, del 01 de diciembre del 2017, el cual comenzó a regir el 01 de enero de 2018, se establecieron los salarios mínimos para el sector privado para el periodo 2018, según el ajuste salarial anual que se debe aplicar en octubre de cada año y que rige a partir del primero de enero del siguiente año, de acuerdo con la Metodología para la fijación de Salarios Mínimos para el Sector Privado establecida por el Consejo Nacional de Salarios, en el Acta de Sesión 5414-2016, del 31 de octubre de 2016.

Por su parte, en el Decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 41434-MTSS, publicado en La Gaceta 235 del 18 de diciembre de 2018, se establecen los salarios mínimos para el sector privado para el periodo 2019, los cuales rigen a partir del 1° de enero de 2019.

3.2 Combustible

Los precios de referencia de los combustibles para el cálculo PPC₀ y PPC₁ son los siguientes:

Precio	PPC₀	PPC₁
Gasolina súper	677,00	596,00
Gasolina regular	652,00	581,00
Diésel	556,00	534,00

Los precios correspondientes al PPC₀ fueron los aprobados por la Autoridad Reguladora mediante resolución RIE-055-2018 de fecha 22 de junio de 2018, publicada en el Alcance Digital 124, a La Gaceta 116 del 28 de junio de 2018. Los precios correspondientes al PPC₁ fueron los establecidos por la Autoridad Reguladora mediante resolución RE-0001-IE-2019 del 07 de enero de 2019, publicada en el Alcance Digital 06, a La Gaceta 06 del 09 de enero de 2019.

Para el cálculo de los precios ponderados del combustible, se parte de los precios indicados anteriormente y de la composición de la flota según el tipo de combustible, distribución que se obtiene de la última fijación tarifaria ordinaria de oficio, tramitada en el expediente ET-093-2015, y resuelta mediante resolución 147-RIT-2015 del 18 de noviembre de 2015, publicada en el Alcance Digital 100, a La Gaceta 228, del 24 de noviembre del 2015. El detalle se muestra a continuación:

Tipo de combustible	Sedán	Adaptado para discapacitados	Rural
Gasolina súper	35,33%	11,18%	15,83%
Gasolina regular	35,33%	11,18%	15,83%
Diésel	29,34%	77,64%	68,35%

De acuerdo con el procedimiento establecido aplicado en el componente de la ecuación 1 y a los datos anteriormente indicados, el cálculo de la variación del combustible es como se indica:

Combustible ponderado	Sedán	Adaptado para discapacitados	Rural
PPC ₀	632,67	580,26	590,41
PPC ₁	572,51	546,19	551,31
Variación	-9,51%	-5,87%	-6,62%

3.3 Tipo de cambio

De acuerdo con el procedimiento establecido, y aplicando el componente respectivo en la ecuación 1, el cálculo de la variación del tipo de cambio es como se indica:

Factor	Valor	Referencia
TC ₀	570,07	Tipo de cambio de venta de referencia del BCCR de 31 de julio de 2018.
TC ₁	614,17	Tipo de cambio de venta de referencia del BCCR de 31 de enero de 2019.
Variación (%)	7,74%	

3.4 Índice de ajuste automático

En resumen, el cálculo del Índice de ajuste automático de la tarifa (I), cuya fórmula se describe en la ecuación 1 es el siguiente:

Variable/ Tipo de Vehículo	Índice I		
	Sedán	Adaptado para discapacitados	Rural
Variación salario	-3,58%	-3,58%	-3,58%
Variación combustible	-9,51%	-5,87%	-6,62%
Variación tipo de cambio	7,74%	7,74%	7,74%

Ahora bien, el índice de ajuste automático (I) es afectado por el peso que cada uno de los ítems de costo tiene en la estructura tarifaria, según lo establece la RRG-4199-2004, en la que se indica lo siguiente:

“Para efectos de la aplicación, en el procedimiento extraordinario del modelo automático de ajuste, del índice de ajuste automático, éste es afectado por el peso que cada uno de los ítems de costo tiene en la estructura tarifaria, lo cual genera un índice proporcional denominado I_w .”

Los pesos de los costos de las variables se obtienen de la última actualización de la estructura de costos realizada mediante la fijación tarifaria ordinaria de oficio, tramitada en el expediente ET-093-2015 y resuelta mediante resolución 147-RIT-2015 del 18 de noviembre de 2015, publicada en el Alcance Digital 100, a La Gaceta 228, del 24 de noviembre del 2015. Los pesos para cada ítem de costo, y para cada tipo de vehículo se detallan a continuación:

Rubro	Peso de los costos		
	Sedán	Adaptado para discapacitados	Rural
Costos por salarios y cargas sociales	44,29%	45,98%	43,08%
Costos por consumo de combustibles	13,14%	12,39%	11,75%
Reposición activos	3,40%	6,34%	5,89%

Como se mencionó anteriormente, el índice proporcional denominado (I_w) para cada tipo de vehículo, considera en su cálculo la variación de cada parámetro y el peso ponderado de su costo dentro de la estructura tarifaria, este cálculo se puede observar en el anexo de cálculo tarifario, cuyo resultado se muestra a continuación:

Variable/ Tipo de vehículo	Sedán	Adaptado para discapacitados	Rural
Variación salario	-1,59%	-1,65%	-1,54%
Variación combustible	-1,25%	-0,73%	-0,78%
Variación tipo de cambio	0,26%	0,49%	0,46%
<i>I</i>ω	-2,57%	-1,88%	-1,87%

Una vez calculado el índice (*I* ω), se procede a ajustar las tarifas para cada tipo de vehículo como sigue:

3.5 Tarifas

Para el cálculo de cada una de las tarifas establecidas en el pliego tarifario se procederá según se detalla en cada caso:

a. Tarifa banderazo

De acuerdo con la resolución RJD-141-2014, publicada en La Gaceta 215 del 7 de noviembre de 2014 se incorpora en el cálculo de la tarifa banderazo del Procedimiento Extraordinario de Fijación del Modelo de Regulación Económica del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas Modalidad Taxi, la variación en el canon de regulación de la Aresep y el canon del Consejo de Transporte Público (CTP). Por lo consiguiente, el canon Aresep y el canon CTP, se incluyen como componentes en la fórmula de cálculo de la tarifa banderazo.

La tarifa banderazo se calcula según el siguiente algoritmo:

$$T_{bf} = T_b \cdot (1 + I\omega) + \left[\frac{\Delta_{\text{CanonCTP}} + \Delta_{\text{CanonARESEP}}}{N \cdot Vd \cdot 12} \right]$$

Donde:

***T*_{bf}**: Tarifa banderazo final calculada después del ajuste.

***T*_b**: Tarifa banderazo calculada en la última fijación tarifaria aprobada.

(1+*I* ω): Proporción del índice de ajuste automático.

Δ_{CanonCTP} : Diferencial entre el canon del CTP vigente al momento de la aplicación del modelo y el canon del CTP incorporado en la tarifa *T*_b.

Δ_{CanonARESEP}: Diferencial entre el canon de Aresep vigente al momento de la aplicación del modelo y el canon de Aresep incorporado en la tarifa Tb.

N: Número promedio de días en operación por mes calculados en la última fijación ordinaria.

Vd: Número promedio de viajes por día calculados en la última fijación ordinaria.

El reconocimiento del canon en la tarifa banderazo según el tipo de vehículo, cuyo cálculo se puede observar en el anexo de cálculo tarifario, se detalla a continuación:

1. Vehículos tipo sedán

Detalle	Canon Tb (colones)	Canon Actual (colones)	Variación (colones)	N	Vd	Meses al año	Monto a reconocer (colones)
Canon Aresep	115.300,46	37.830,22	-77.470,24	26	24	12	-12,8318
Canon CTP	114.329,00	95.715,00	-18.614,00				

2. Vehículos adaptados para personas con discapacidad

Detalle	Canon Tb (colones)	Canon Actual (colones)	Variación (colones)	N	Vd	Meses al año	Monto a reconocer (colones)
Canon Aresep	115.300,46	37.830,22	-77.470,24	26	24	12	-12,8318
Canon CTP	114.329,00	95.715,00	-18.614,00				

3. Vehículos tipo rural

Detalle	Canon Tb (colones)	Canon Actual (colones)	Variación (colones)	N	Vd	Meses al año	Monto a reconocer (colones)
Canon Aresep	115.300,46	37.830,22	-77.470,24	26	29	12	-10,6194
Canon CTP	114.329,00	95.715,00	-18.614,00				

El monto del canon de Aresep incorporado en la tarifa banderazo (Tb) ϕ 115.300,46 es el publicado en el Alcance Digital 248 a La Gaceta 196 del 18 de octubre del 2017 y el del CTP ϕ 114.329,00 el publicado en el Alcance Digital 213, a La Gaceta 166 del 01 de setiembre del 2017.

Por su parte, el canon vigente al momento de la aplicación del presente ajuste tarifario de Aresep es el publicado en el Alcance 195 a La Gaceta 210 del 13 de noviembre del 2018, el cual corresponde a ¢37.830,22 por lo cual su variación respecto al periodo 2018 es de ¢-77.470,24 y para el canon del CTP, el monto es de ¢ 95.715,00, establecido mediante la resolución RG-0356-RG-2018 del 28 de agosto de 2018, por lo que la variación respecto al periodo 2018 es de ¢-18.614,00. Esto aplica para cada una de las modalidades.

Así las cosas, la tarifa banderazo resultante para cada tipo de vehículo se detalla a continuación:

Tipo de vehículo	Tarifa vigente (colones)	1+lw	Incorporación del canon	Tarifa resultante (colones)	Tarifa propuesta (colones) utilizando el criterio de la RRG-4199-2004*
Sedán	670	0,9743	-12,8318	640	645
Adaptado para personas con discapacidad	670	0,9812	-12,8318	645	645
Rural	670	0,9813	-10,6194	645	645

*Se aplica el criterio de homologación tarifaria, establecido como política en el modelo de regulación (RRG-4199-2004), el cual señala que, en cada base de operación, se calcula la tarifa plana para los diferentes tipos de vehículos que estén autorizados a operar en ella y se escoge la mayor como la tarifa banderazo por jornada, que aplicará para todos los tipos de vehículos.

b. Tarifa variable por distancia

La tarifa variable por distancia se calcula según el siguiente algoritmo:

$$T_{vdf} = T_{vd} \cdot (1 + I\omega)$$

Donde:

T_{vdf}: Tarifa variable por distancia final calculada después del ajuste.

T_{vd}: Tarifa por distancia calculada en la última fijación tarifaria aprobada.

(1+lw): Proporción del índice de ajuste automático.

Como resultado de aplicar la fórmula indicada, se obtiene la siguiente tarifa variable para cada tipo de vehículo:

Tipo de vehículo	Tarifa vigente (colones)	1+Iω	Tarifa propuesta (colones)
Sedán	630	0,9743	615
Adaptado para discapacitados	595	0,9812	585
Rural	650	0,9813	640

c. Tarifa por espera

La tarifa por espera se calcula según el siguiente algoritmo:

$$T_{ef} = T_e \cdot (1 + I\omega)$$

Donde:

T_{ef}: Tarifa por espera final calculada después del ajuste.

T_e: Tarifa por espera calculada en la última fijación tarifaria aprobada.

(1+Iω): Proporción del índice de ajuste automático.

Como resultado de aplicar la fórmula indicada, se obtiene la siguiente tarifa por espera para cada tipo de vehículo:

Tipo de vehículo	Tarifa vigente (colones)	1+Iω	Tarifa propuesta (colones)
Sedán	3.850	0,9743	3.750
Adaptado para discapacitados	3.930	0,9812	3.855
Rural	3.995	0,9813	3.920

d. Tarifa por demora

La tarifa por demora se calcula según el siguiente algoritmo:

$$T_{df} = T_d \cdot (1 + I\omega)$$

Donde:

T_{df}: Tarifa por demora final calculada después del ajuste.

T_d: Tarifa por demora calculada en la última fijación tarifaria aprobada.

(1+Iω): Proporción del índice de ajuste automático.

Como resultado de aplicar la fórmula indicada, se obtiene la siguiente tarifa por demora para cada tipo de vehículo:

Tipo de vehículo	Tarifa vigente (colones)	1+ω	Tarifa propuesta (colones)
Sedán	6.300	0,9743	6.140
Adaptado para discapacitados	6.005	0,9812	5.890
Rural	6.570	0,9813	6.445

3.6 Resultado tarifario por tipo de vehículo

Los resultados obtenidos para cada tipo de vehículo, según los datos indicados anteriormente, son los siguientes:

Tarifa según tipo de taxi	Tarifas (en colones)		Variación	
	Vigente	Recomendada	Absoluta	Porcentual
Taxi sedán				
Tarifa banderazo	670	645	-25	-3,73%
Tarifa variable	630	615	-15	-2,38%
Tarifa por espera	3.850	3.750	-100	-2,60%
Tarifa por demora	6.300	6.140	-160	-2,54%
Taxi adaptado para personas con discapacidad				
Tarifa banderazo	670	645	-25	-3,73%
Tarifa variable	595	585	-10	-1,68%
Tarifa por espera	3.930	3.855	-75	-1,91%
Tarifa por demora	6.005	5.890	-115	-1,92%
Taxi rural				
Tarifa banderazo	670	645	-25	-3,73%
Tarifa variable	650	640	-10	-1,54%
Tarifa por espera	3.995	3.920	-75	-1,88%
Tarifa por demora	6.570	6.445	-125	-1,90%

(...)"

- III. Igualmente, del informe IN-0034-IT-2019 del 21 de febrero de 2019, que sirve de fundamento a la presente resolución, en relación con las manifestaciones exteriorizadas por los usuarios del servicio, con el fin de orientar tanto a los usuarios como a los operadores del servicio, se resumen los argumentos expuestos y se les da respuesta de la siguiente manera:

"(...)

Posición admitida

- 1. Oposición de Miguel Ángel Salas Castro, cédula de identidad número 1-0529-0251, el cual presenta escrito vía correo electrónico y consta a folios del 45 al 57 y del 63 al 95.**

Los argumentos expuestos por el señor Salas Castro en su oposición son los siguientes:

- 1. Desequilibrio financiero del gremio de los taxistas, y el conocimiento de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la competencia de las prácticas de la empresa UBER.*
- 2. El reciente acuerdo tomado por el Consejo de Transporte Público (CTP) de ampliar por tres años más la vida útil de las unidades de mayor antigüedad, para el opositor evidencia la situación de desequilibrio financiero de los prestadores del servicio.*
- 3. Solicita que la Aresep utilice los datos del estudio de mercado IICE-UCR, en referencia al aumento de la competencia por la oferta informal (piratas) y sobre la variación en la demanda y dificultades que enfrentan los taxistas por los servicios que se brindan mediante plataformas tecnológicas como UBER.*
- 4. Diseño del modelo tarifario para que los taxistas realicen cambio de unidad cada cuatro años acorde a la ley, pese a que la situación real mostrada en el estudio de mercado IICE-UCR realizado en el 2016, es que la mayoría de taxis superan los 10 años y otros se encuentran en el límite de los 15 años permitidos por el CTP, el cual recientemente fue extendido a 18 años, lo que afecta a la calidad del servicio y a la frecuencia del mantenimiento para mantener los parámetros operativos del servicio.*
- 5. Otorgamiento nuevas concesiones de taxi regulado en caso de la necesidad de oferta de taxis y no dejar que se incremente el servicio ilegal.*
- 6. Solicitud de actuación sobre la prestación ilegal del servicio, ordenando su cierre inmediato, para que no siga afectando a los prestadores legales del servicio, además manifestación de desprotección con la pretensión de rebaja en la tarifa.*

Posición no admitida

2. Oposición de Javier Antonio Cortés Montoya, cédula: 1-0657-0070, quien presenta escrito sin firmar y consta a folios del 58 al 62. La Dirección de Atención al Usuario mediante la resolución RE-0157-DGAU-2019, resolvió rechazarla debido a que el documento de posición enviado el 18 de febrero de 2019 por el señor Cortés Montoya, fue presentado sin firmar, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en el artículo 285 de la Ley General de la Administración Pública (Ley 6227), por lo tanto, se omite pronunciamiento al respecto por parte de esta Intendencia.

Respuesta a posición:

Se indica, en relación con las manifestaciones exteriorizadas por el opositor Miguel Ángel Salas Castro, y con el fin de orientar tanto a los usuarios como a los operadores del servicio, lo siguiente:

Los argumentos de la oposición del señor Salas Castro no versan sobre los alcances de la fijación tarifaria extraordinaria, tal y como se establece en el “Modelo de Regulación Económica del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas, Modalidad Taxi (RRG-4199-2004)”, establecido en la resolución RRG-4199-2004 del trece de diciembre del 2004, publicada en La Gaceta 23 del 2 de febrero de 2005, capítulo V “Procedimiento Extraordinario de Fijación”, sino a la exposición y solicitud de acciones sobre situaciones que se presentan alrededor de la prestación del servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi. Los argumentos indicados por el señor Salas Castro no se encuentran asociados a la propuesta sometida a consulta pública, tal y como se explica a continuación.

La metodología tarifaria vigente establece que las fijaciones tarifarias extraordinarias se realizarán cada seis meses, en los meses de febrero y agosto de cada año, con el objetivo de compensar los desequilibrios causados por el efecto inflacionario, para tal fin se revisará la variación experimentada entre el semestre en estudio respecto al semestre anterior en las variables: salario, combustible y tipo de cambio, y la variación en el canon Aresep y el canon CTP; no se involucran en estas fijaciones tarifarias valores atinentes a parámetros operativos sobre el servicio o características sobre el mercado del servicio de taxi; tal y como se indicó en la ecuación 1 del apartado 3. Cálculo tarifario.

En este contexto ninguno de los argumentos expuestos en la oposición que se analiza se refiere a las variables indicadas, por lo que este no es el procedimiento correspondiente para conocer y resolver sobre los temas planteados. Es importante enfatizar que lo que está en discusión

es el ajuste extraordinario de oficio para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi-base de operación regular y no una propuesta de fijación tarifaria ordinaria donde sí se considera toda la estructura productiva modelo del servicio.

Adicionalmente, para dar respuesta en forma puntual a las observaciones del opositor conviene indicar lo siguiente:

1. Respecto al desequilibrio financiero del gremio de los taxistas, y el conocimiento de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), y la competencia por las prácticas de la empresa UBER.

Tal y como se indicó anteriormente, la presente fijación se realiza en cumplimiento de lo establecido en la resolución RRG-4199-2004 del trece de diciembre del 2004, publicada en La Gaceta 23 del 2 de febrero de 2005, capítulo V “Procedimiento Extraordinario de Fijación”, el cual corresponde a un procedimiento automático de ajuste, en el que se ajustan las variables del entorno económico con mayor peso en la estructura productiva modelo, las cuales fueron determinadas con base en un análisis de sensibilidad del modelo tarifario, estas son: el salario del conductor del taxi, el tipo de cambio y el precio de los combustibles.

Los ponderadores de estas variables mencionadas se actualizaron con la estructura de costos de la última fijación tarifaria de oficio para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi-base de operación regular, según resolución 147-RIT-2015 del 18 de noviembre del 2015, y publicada en La Gaceta 28, Alcance Digital 100, del 24 de noviembre del 2015.

En el caso de la variación en el canon de regulación de la Autoridad Reguladora (Aresep) y el canon del Consejo de Transporte Público (CTP), se incluyó en el cálculo de la tarifa banderazo en el procedimiento extraordinario de fijación del modelo, mediante la resolución RJD-141-2014, publicada en La Gaceta 215 del 7 de noviembre de 2014.

2. Respecto al reciente acuerdo tomado por el Consejo de Transporte Público (CTP) de ampliar por tres años más la vida útil de las unidades de mayor antigüedad, que para el opositor evidencia la situación de desequilibrio financiero de los prestadores del servicio.

Como se menciona en el punto anterior, la propuesta en discusión es el ajuste extraordinario de oficio para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi-base de operación regular (taxis rojos), en apego a lo establecido en la resolución RRG-4199-2004, capítulo V

“Procedimiento Extraordinario de Fijación”, por lo que las variables consideradas son el salario mínimo por jornada ordinaria para un taxista, el precio ponderado del combustible y el tipo de cambio del colón respecto al dólar, sin que sean consideradas para el presente ajuste tarifario los parámetros operativos y condiciones de la prestación del servicio, incluida la edad máxima de las unidades.

3. Respecto a la solicitud de que la Aresep utilice los datos del estudio de mercado IICE-UCR, en referencia al aumento de la competencia por la oferta informal (piratas) y sobre la variación en la demanda y dificultades que enfrentan los taxistas por los servicios que se brindan mediante plataformas tecnológicas como UBER.

Dado que en la posición presentada por el señor Salas Castro se solicita contemplar en la presente fijación tarifaria los resultados de la “Contratación de Servicios Profesionales para la Elaboración de un Estudio de Mercado, la Actualización y Determinación de los Valores de los Parámetros Operativos e Indicadores de Rendimiento del Servicio de Transporte Remunerado de Personas, Modalidad Taxi” , es pertinente aclarar que la misma se realizó con el fin de efectuar un estudio de mercado sobre el servicio de transporte de personas, modalidad taxi que se brinda en todo el país, para la actualización de valores de parámetros operativos e indicadores del servicio de taxi regulado, a los cuales no les corresponde ser actualizados en una fijación tarifaria extraordinaria en la que no se involucran variables atinentes a parámetros operativos sobre el servicio o características sobre el mercado del servicio de taxi. Por otra parte, se le insiste al opositor que lo que se está conociendo en el presente proceso es el ajuste extraordinario de oficio para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi-base de operación regular (taxis rojos), en apego a lo establecido en la resolución RRG-4199-2004 ya mencionada, por lo que sus consideraciones en cuanto a los servicios brindados mediante otras plataformas tecnológicas no son competencia de esta Intendencia para ser analizados dentro de este tipo de procedimientos.

4. Respecto al diseño del modelo tarifario para que los taxistas realicen cambio de unidad cada cuatro años acorde a la ley, recientemente extendido a 18 años, lo que afecta a la calidad del servicio y a la frecuencia del mantenimiento para mantener los parámetros operativos del servicio.

Nuevamente se indica al opositor que el proceso que nos ocupa es la propuesta de ajuste extraordinario de oficio para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi-base de operación regular y no

una fijación tarifaria ordinaria en la que se actualizan los valores de costos y parámetros operativos del servicio.

5. Sobre otorgar nuevas concesiones de taxi regulado en caso de la necesidad de oferta de taxis y no dejar que se incremente el servicio ilegal.

Se reitera que la temática planteada no es concerniente a la propuesta en discusión, la cual corresponde a un ajuste extraordinario de oficio para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi-base de operación regular, no obstante, conviene aclarar que en relación con la administración de la oferta del servicio de taxis, de acuerdo con lo establecido en la Ley Reguladora del Servicio de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi (Ley 7969), el Consejo de Transporte Público (CTP) es el ente encargado del planeamiento y control de la oferta de servicio de transporte público, modalidad taxi, según el inciso a) del artículo 7 - Atribuciones del Consejo, que indica:

“(..). Artículo 7.- Atribuciones del Consejo

El Consejo, en el ejercicio de sus competencias, tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Coordinar la aplicación correcta de las políticas de transporte público, su planeamiento, la revisión técnica, el otorgamiento y la administración de las concesiones, así como la regulación de los permisos que legalmente procedan.*

(..).”

De lo anterior se observa que no es ante la Aresep ante quien se deben plantear la solicitud de otorgamiento de concesiones, toda vez que es una competencia del CTP.

6. Respecto a la solicitud de actuación sobre la prestación ilegal del servicio, ordenando su cierre inmediato, para que no siga afectando a los prestadores legales del servicio, además manifiesta una desprotección con la pretensión de rebaja en la tarifa.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la propuesta en discusión es el ajuste extraordinario de oficio para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi-base de operación regular

(taxis rojos), en apego a lo establecido en la resolución RRG-4199-2004 del trece de diciembre del 2004, publicada en La Gaceta 23 del 2 de febrero de 2005, capítulo V “Procedimiento Extraordinario de Fijación”.

Se reitera al opositor que el Modelo de Regulación Económica del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas, Modalidad Taxi, establecido en la RRG-4199-2004 es un modelo de industria que toma en cuenta la estructura productiva modelo tal y como lo establece el artículo 31 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Ley 7593) y cuyo principio rector es el servicio al costo, en concordancia con el artículo 3 de la citada Ley, de manera que la fijación de tarifas contemple los costos necesarios para la prestación del servicio y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad.

Específicamente en el Procedimiento Extraordinario de Fijación que corresponde al presente proceso tiene como objetivo de considerar las variaciones en el entorno económico y de esta manera compensar los desequilibrios causados por el efecto inflacionario, reconociendo las variaciones semestrales de las variables: salario, combustible y tipo de cambio, y considerando también la variación en el canon Aresep y el canon CTP, tal y como se indica en el artículo 31 de la Ley 7593.

Finalmente, se le indica que la Aresep en el uso de sus facultades otorgadas por ley actúa en conjunto con la Policía de Tránsito para tomar acciones con respecto de la prestación ilegal del servicio de transporte remunerado de personas.

(...)”

- IV. Conforme con los resultandos y considerandos que preceden y de acuerdo con el mérito de los autos, lo procedente es ajustar las tarifas del servicio de transporte público remunerado de personas, modalidad taxi base de operación regular; tal y como se dispone:

POR TANTO:

Fundamentado en las facultades conferidas en la Ley 7593 y sus reformas, en la Ley General de la Administración Pública (Ley 6227), en el Decreto Ejecutivo 29732-MP que es el Reglamento a la Ley 7593, el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos Desconcentrados (RIOF) y el Manual Descriptivo de Cargos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

EL DIRECTOR A.Í. DE LA INTENDENCIA DE TRANSPORTE

RESUELVE:

- I. Acoger el informe IN-0034-IT-2019 del 21 de febrero de 2019 y fijar las siguientes tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi, base de operación regular, para el I semestre de 2019:

Tarifa según tipo de taxi	Tarifa recomendada (colones)
Taxi sedán	
Tarifa banderazo	645
Tarifa variable	615
Tarifa por espera	3.750
Tarifa por demora	6.140
Taxi adaptado para personas con discapacidad	
Tarifa banderazo	645
Tarifa variable	585
Tarifa por espera	3.855
Tarifa por demora	5.890
Taxi rural	
Tarifa banderazo	645
Tarifa variable	640
Tarifa por espera	3.920
Tarifa por demora	6.445

- II. Reiterar lo indicado en anteriores resoluciones de fijaciones extraordinarias de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxis, base de operación regular, respecto a que el valor que debe cancelarse por el uso de vías de tránsito (peaje) no está considerado como un costo dentro de la tarifa del servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad taxis, de ahí que dependiendo de la vía de tránsito que escoja el usuario, éste deberá pagarlo en forma adicional a la tarifa. El pago del peaje procede únicamente cuando el usuario está haciendo uso del servicio de taxi.
- III. Reiterar lo indicado en anteriores resoluciones de fijaciones extraordinarias de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxis, base de operación regular, en cuanto a que la estructura tarifaria que se establece no contempla diferenciación alguna respecto a las horas del día (diurna o nocturna) en que se presta el servicio y las tarifas se cobran de acuerdo con lo que marque el taxímetro, independientemente de situaciones tales como: a) condiciones del camino, b) distancia del recorrido, c) origen o destino del servicio d) naturaleza del día (hábil o feriado), e) nacionalidad del usuario. En consecuencia, el vehículo con que se presta el servicio debe poseer indefectiblemente, un sistema de medición de acuerdo con los mecanismos legales y técnicos estipulados para ello, según lo ordena el artículo 59 de la Ley 7969, siendo obligatorio en todos los viajes que se accione el taxímetro y que sin excepción la tarifa que cobra sea la que señale dicho dispositivo.

- IV.** Las tarifas rigen a partir del día natural siguiente al día de la publicación de esta resolución en La Gaceta.

Cumpliendo lo que ordena el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública, se indica que contra esta resolución pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación. El de revocatoria y apelación deberán interponerse ante la Intendencia de Transporte, resolviendo el primero de ellos y el segundo se eleva al superior jerárquico. Los recursos de revocatoria y de apelación deberán interponerse en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de esta resolución.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.

**MAURICIO GONZÁLEZ QUESADA
DIRECTOR A.Í.
INTENDENCIA DE TRANSPORTE**

1 vez.—O. C. N° 9123-2019.—Solicitud N° 037-2019.—(IN2019322857).

INTENDENCIA DE ENERGÍA
RE-0017-IE-2019 del 22 DE FEBRERO 2019

**VARIACIÓN EXTRAORDINARIA DEL MARGEN DE LOS DISTRIBUIDORES,
AGENCIAS Y DETALLISTAS QUE COMERCIALIZAN GAS LICUADO DE
PETRÓLEO ENVASADO EN DIFERENTES ESPECIFICACIONES DE
CILINDROS**

ET-014-2019

RESULTANDO:

- I. Que el 7 de setiembre de 2007, mediante la resolución la resolución RRG-7205-2007 se establece el procedimiento a seguir para desarrollar fijaciones extraordinarias, el cual incluye dar participación ciudadana dentro del plazo establecido para resolver.
- II. Que el 2 de setiembre de 2008, mediante resolución RRG-8794-2008, publicada en La Gaceta N.º 197 del 13 de octubre de 2008, se aprobó el Modelo tarifario extraordinario para fijar el margen de los distribuidores, agencias y detallistas que comercializan gas licuado de petróleo envasado en cilindros.
- III. Que el artículo 30 de la Ley N.º 7593 y sus reformas indica que la Autoridad Reguladora, cuando se cumplan las condiciones de los modelos automáticos de ajuste, realizará de oficio las fijaciones de precio. Por otra parte, en la reforma al Reglamento a dicha Ley se establece que las resoluciones de este tipo de fijación de precio deben dictarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la iniciación del trámite.
- IV. Que el 23 de febrero de 2018, mediante la resolución RIE-014-2018, publicada en el Alcance Digital N.º 46 a La Gaceta N.º 39 del 1 de marzo de 2018, se establecieron los márgenes vigentes para estos operadores.
- V. Que el 17 de mayo de 2018, en el Alcance Digital N.º 103 a La Gaceta N.º 86, se publicaron los Decretos 41150-MINAE-S y 41151-MINAE-S mediante los cuales se establecieron el Reglamento General para la Regulación del Suministro de Gas Licuado de Petróleo y el Reglamento Técnico respectivamente.

- VI. Que el 25 de enero de 2019, mediante el oficio OF-0063-RG-2019, el Regulador General nombró al señor Marco Cordero Arce, como Intendente de Energía a partir del 28 de enero de 2019 y hasta que se realice el concurso ordinario de la plaza.
- VII. Que el 8 de febrero de 2019, mediante el oficio OF-0174-IE-2019, la Intendencia de Energía solicitó la apertura del expediente y la convocatoria a participación ciudadana para la variación extraordinaria del margen para los distribuidores, agencias y detallistas de gas licuado de petróleo -folios 1 al 3-.
- VIII. Que el 15 de febrero de 2019, en los diarios de circulación nacional: La Nación Diario Extra, La Teja y La Gaceta N.º33, se publicó la invitación a los ciudadanos para presentar sus posiciones, otorgando plazo hasta el 21 de febrero de 2019 -folio 20-.
- IX. Que el 21 de febrero de 2019, mediante el oficio OF-0043-DGAU-2019, la Dirección General de Atención del Usuario remitió el informe de oposiciones y coadyuvancias, el cual indica que [...] *no se recibieron oposiciones ni coadyuvancias [...]* –corre agregado al expediente-.
- X. Que el 22 de febrero de 2019, a las 11:00 horas se revisó el expediente digital el cual contienen 20 folios.
- XI. Que el 22 de febrero de 2019, mediante el informe técnico IN-0024-IE-2019, la Intendencia de Energía, analizó la presente gestión de ajuste tarifario y en dicho estudio técnico recomendó, fijar el margen de los distribuidores, agencias y detallistas que comercializan gas licuado de petróleo envasado en diferentes especificaciones de cilindros (corre agregado en autos).

CONSIDERANDO:

- I. Que del oficio IN-0024-IE-2019, citado y que sirve de base para la presente resolución, conviene extraer lo siguiente:

[...]

II. APLICACIÓN DEL MODELO

El modelo para los ajustes del margen de comercialización de los distribuidores, agencias y detallistas de cilindros con contenido de GLP aprobado mediante la resolución RRG-8794-2008, se detalla a continuación:

$$Mg_i = Mg_0 \times (1 + \text{variación del IPC})$$

Dónde:

Mg_i = Margen de cada eslabón en la cadena, en colones por litro para el periodo siguiente.

Mg₀ = Margen vigente de cada eslabón en la cadena, en colones por litro.

IPC = Índice de precios al consumidor (incremento de diciembre a diciembre)

La resolución establece que sobre el margen absoluto por litro que se fije, se puede hacer un descuento máximo por litro vendido de GLP de un 13% y que los ajustes se realizarán mediante el procedimiento extraordinario, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 7593, su Reglamento y la resolución RRG-7205-2007 del 7 de setiembre de 2007 y publicada en La Gaceta N°181 del 20 de setiembre de 2007.

1. Márgenes vigentes

Los márgenes vigentes fueron fijados mediante la resolución RIE-014-2018, publicada en el Alcance Digital N.º 46 a La Gaceta N.º 39 del 1 de marzo de 2018, tal y como se detallan:

<i>-Margen del distribuidor y agencias:</i>	<i>¢53,436/litro</i>
<i>-Margen del detallista</i>	<i>¢61,446/litro</i>

2. Actualización del margen

La variación del IPC se obtiene de los siguientes datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)¹:

¹ A partir de junio del 2015 el Instituto Nacional de Estadística y Censo calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una nueva base (junio 2015). Se utilizó la serie enlazada con la nueva base.

- Valor del IPC al 31 de diciembre de 2017: 102,45
- Valor del IPC al 31 de diciembre de 2018: 104,52
- Variación porcentual: 2,03%

La aplicación de dicho modelo se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N.º 1

**Cálculo del margen de comercialización del GLP
para distribuidores y agencias y detallistas**

Tipo		Margen vigente ¢ / litro	Variación IPC	Ajuste al margen ¢ / litro	Margen propuesto ¢ / litro
Margen distribuidores y agencias	y	53,436	2,03%	1,083	54,519
Margen detallista		61,446	2,03%	1,246	62,692

Fuente: Intendencia de Energía e INEC.

De acuerdo con lo anterior, al ajustar el margen vigente por la variación interanual del IPC de diciembre 2017 a diciembre 2018 (2,03%), se advierte la necesidad de realizar un aumento de ¢1,083 por litro al margen del distribuidor y agencia, mientras que el margen de los detallistas se debe aumentar en ¢1,246 por litro.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General para la Regulación del Suministro de Gas Licuado de Petróleo (Decreto 41150-MINAE-S), se homologarán estos eslabones de la cadena de suministro de GLP, como sigue:

Distribuidor y agencias pasará a denominarse Distribuidor de cilindros.

Detallistas pasará a denominarse Comercializador de cilindros.

Por lo tanto, los márgenes para cada uno de los cilindros comercializados en el mercado, según su capacidad serían los siguientes:

Cuadro N.º 2

**MARGEN DE LOS OPERADORES DEL SERVICIO PÚBLICO
POR CAPACIDAD DE CILINDRO MEZCLA PROPANO BUTANO
(en colones por litro para cada cilindro)**

CAPACIDAD (en litros)	DISTRIBUIDOR DE CILINDROS	COMERCIALIZADOR DE CILINDROS
Cilindro de 4,54 kg (10 lb)	475,26	546,50
Cilindro de 9,07 kg (20 lb)	950,51	1 092,99
Cilindro de 11,34 kg (25 lb)	1 188,14	1 366,24
Cilindro de 15,88 kg (35 lb)	1 663,40	1 912,74
Cilindro de 18,14 kg (40 lb)	1 901,03	2 185,99
Cilindro de 20,41 kg (45 lb)	2 138,65	2 459,24
Cilindro de 27,22 kg (60 lb)	2 851,54	3 278,98
Cilindro de 45,36 kg (100 lb)	4 752,56	5 464,97

Fuente: Intendencia de Energía

Cuadro N.º 3

**MARGEN DE LOS OPERADORES DEL SERVICIO PÚBLICO
POR CAPACIDAD DE CILINDRO RICO EN PROPANO
(en colones por litro para cada cilindro)**

CAPACIDAD (en litros)	DISTRIBUIDOR DE CILINDROS	COMERCIALIZADOR DE CILINDROS
Cilindro de 4,54 kg (10 lb)	489,69	563,10
Cilindro de 9,07 kg (20 lb)	979,39	1 126,20
Cilindro de 11,34 kg (25 lb)	1 224,23	1 407,74
Cilindro de 15,88 kg (35 lb)	1 713,93	1 970,84
Cilindro de 18,14 kg (40 lb)	1 958,77	2 252,39
Cilindro de 20,41 kg (45 lb)	2 203,62	2 533,94
Cilindro de 27,22 kg (60 lb)	2 938,16	3 378,59
Cilindro de 45,36 kg (100 lb)	4 896,93	5 630,98

Fuente: Intendencia de Energía

Este ajuste en el margen de los distribuidores y comercializadores de cilindros de GLP, modifica el precio al consumidor final según la cadena de distribución por tipo de cilindro. Es por esta razón que se deben modificar los precios vigentes, fijados mediante la resolución RE-0010-IE-2019 publicada en el Alcance N.º 28 a La Gaceta N.º 27 del 7 de febrero de 2019, tal y como se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N.° 4
PRECIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO POR TIPO DE ENVASE Y CADENA DE
DISTRIBUCION
-mezcla propano butano-
-en colones por litro y cilindros incluye impuesto único-⁽¹⁾

Tipos de envase	Precio a facturar por el envasador⁽²⁾	Precio a facturar por distribuidor de cilindros⁽³⁾	Precio a facturar por el comercializador de cilindros⁽⁴⁾
Tanques fijos -por litro-	228,89	(*)	(*)
Cilindro de 4,54 kg (10 lb)	1 995,00	2 471,00	3 017,00
Cilindro de 9,07 kg (20 lb)	3 991,00	4 941,00	6 034,00
Cilindro de 11,34 kg (25 lb)	4 988,00	6 176,00	7 543,00
Cilindro de 15,88 kg (35 lb)	6 983,00	8 647,00	10 560,00
Cilindro de 18,14 kg (40 lb)	7 981,00	9 882,00	12 068,00
Cilindro de 20,41 kg (45 lb)	8 979,00	11 117,00	13 577,00
Cilindro de 27,22 kg (60 lb)	11 972,00	14 823,00	18 102,00
Cilindro de 45,36 kg (100 lb)	19 953,00	24 705,00	30 170,00
Estación de servicio mixta (por litro) ⁽⁵⁾		(*)	277,00

(*) No se comercializa en esos puntos de ventas.

(1) Precios máximos de venta según resolución RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta N.° 65 del 2 de abril de 2001.

(2) Incluye el margen de envasador de 53,036/litro, establecido mediante resolución RE-0074-IE-2018 del 14 de agosto de 2018, publicada en el Alcance Digital N.° 148 a La Gaceta N.° 152 del 22 de agosto de 2018.

(3) Incluye un margen de distribuidor y agencia propuesto de ₡54,519/litro.

(4) Incluye un margen de detallista propuesto de ₡62,692/litro.

(5) Incluye el margen de envasador de 53,036/litro, establecido mediante resolución RE-0074-IE-2018 del 14 de agosto de 2018 y 48,3128/litro para estación de servicio mixta, establecido mediante resolución RIE-062-2013 del 25 de junio de 2013.

Cuadro N.° 5
PRECIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO RICO EN PROPANO POR TIPO DE
ENVASE
Y CADENA DE DISTRIBUCION
-en colones por litro y cilindros incluye impuesto único-⁽¹⁾

Tipos de envase	Precio a facturar por el envasador⁽²⁾	Precio a facturar por distribuidor de cilindros⁽³⁾	Precio a facturar por el comercializador de cilindros⁽⁴⁾
Tanques fijos -por litro-	217,65	(*)	(*)
Cilindro de 4,54 kg (10 lb)	1 955,00	2 445,00	3 008,00
Cilindro de 9,07 kg (20 lb)	3 910,00	4 889,00	6 015,00
Cilindro de 11,34 kg (25 lb)	4 887,00	6 111,00	7 519,00
Cilindro de 15,88 kg (35 lb)	6 842,00	8 556,00	10 527,00
Cilindro de 18,14 kg (40 lb)	7 820,00	9 778,00	12 031,00
Cilindro de 20,41 kg (45 lb)	8 797,00	11 001,00	13 535,00
Cilindro de 27,22 kg (60 lb)	11 729,00	14 668,00	18 046,00
Cilindro de 45,36 kg (100 lb)	19 549,00	24 446,00	30 077,00
Estación de servicio mixta-por litro- ⁽⁵⁾		(*)	266,00

(*) No se comercializa en esos puntos de ventas.

(1) Precios máximos de venta según resolución RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta N.° 65 del 2 de abril de 2001.

(2) Incluye el margen de envasador de 53,036/litro, establecido mediante resolución RE-0074-IE-2018 del 14 de agosto de 2018, publicada en el Alcance Digital N.° 148 a La Gaceta N.° 152 del 22 de agosto de 2018.

(3) Incluye un margen de distribuidor y agencia propuesto de ₡54,519/litro.

(4) Incluye un margen de detallista propuesto de ₡62,692/litro

(5) Incluye el margen de envasador de 53,036/litro, establecido mediante resolución RE-0074-IE-2018 del 14 de agosto de 2018 y 48,3128/litro para estación de servicio mixta, establecido mediante resolución RIE-062-2013 del 25 de junio de 2013.

El impacto en los precios vigentes y propuestos de los cilindros de GLP, a nivel de comercializador (última cadena), por el efecto del incremento de los márgenes serían:

Cuadro N.º 6
COMPARATIVO DE PRECIOS DE GLP A COMERCIALIZADORES DE CILINDROS
POR TIPO DE ENVASE
-mezcla propano butano-
(en colones por litro)

Tipo de cilindro	Precio RE-0010-IE-2019	Precio Propuestos	Variación absoluta	Variación porcentual
Cilindro de 4,54 kg (10 lb)	2 997	3 017	20	0,67
Cilindro de 9,07 kg (20 lb)	5 993	6 034	41	0,68
Cilindro de 11,34 kg (25 lb)	7 492	7 543	51	0,68
Cilindro de 15,88 kg (35 lb)	10 488	10 560	72	0,69
Cilindro de 18,14 kg (40 lb)	11 987	12 068	81	0,68
Cilindro de 20,41 kg (45 lb)	13 485	13 577	92	0,68
Cilindro de 27,22 kg (60 lb)	17 980	18 102	122	0,68
Cilindro de 45,36 kg (100 lb)	29 967	30 170	203	0,68

Fuente: Intendencia de Energía

Cuadro N.º 7
COMPARATIVO DE PRECIOS DE GLP A COMERCIALIZADORES DE CILINDROS
POR TIPO DE ENVASE
-rico en propano-
(en colones por litro)

Tipo de cilindro	Precio RE-0010-IE-2019	Precio Propuestos	Variación absoluta	Variación porcentual
Cilindro de 4,54 kg (10 lb)	2 987	3 008	21	0,70
Cilindro de 9,07 kg (20 lb)	5 974	6 015	41	0,69
Cilindro de 11,34 kg (25 lb)	7 467	7 519	52	0,70
Cilindro de 15,88 kg (35 lb)	10 454	10 527	73	0,70
Cilindro de 18,14 kg (40 lb)	11 947	12 031	84	0,70
Cilindro de 20,41 kg (45 lb)	13 440	13 535	95	0,71
Cilindro de 27,22 kg (60 lb)	17 921	18 046	125	0,70
Cilindro de 45,36 kg (100 lb)	29 868	30 077	209	0,70

Fuente: Intendencia de Energía

III. POSICIONES A LA SOLICITUD TARIFARIA

La DGAU remitió el informe de oposiciones y coadyuvancias, mediante el oficio IN-0043-DGAU-2019, el cual indica que, vencido el plazo establecido, [...] no se recibieron oposiciones ni coadyuvancias [...].

IV. CONCLUSIONES

1. *El 2 de setiembre del 2008, mediante resolución RRG-8794-2008, se aprobó el Modelo Tarifario Extraordinario para fijar el margen de los Distribuidores, Agencias y Detallistas que comercializan gas licuado de petróleo envasado, el cual establece que los márgenes deberán actualizarse anualmente según la variación del IPC.*
2. *La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el periodo comprendido entre diciembre 2017 a diciembre 2018 fue de 2,03%.*
3. *De conformidad con lo establecido en el Reglamento General para la Regulación del Suministro de Gas Licuado de Petróleo (Decreto 41150-MINAE-S), se homologarán estos eslabones de la cadena de suministro de GLP, como sigue:*

Distribuidor y agencias pasará a denominarse Distribuidor de cilindros.

Detallistas pasará a denominarse Comercializador de cilindros.

4. *Ajustando los márgenes vigentes por la variación del IPC, se requiere hacer un incremento de ¢1,083 por litro al margen del distribuidor de cilindros y de ¢1,246 por litro al margen de comercializador de cilindros quedando como sigue:*

<i>Margen de distribuidor de cilindros</i>	<i>¢54,519/litro.</i>
<i>Margen de comercializador de cilindros</i>	<i>¢62,692/litro.</i>

[...]

- II. *Que de conformidad con lo señalado en los resultandos y considerandos precedentes y en el mérito de los autos, es fijar el margen de los distribuidores, agencias y detallistas que comercializan gas licuado de petróleo envasado en diferentes especificaciones de cilindros; tal y como se dispone;*

**POR TANTO
EI INTENDENTE DE ENERGÍA
RESUELVE:**

- I. Fijar el el margen del distribuidor de cilindros de gas licuado de petróleo en ¢54,519/litro.
- II. Fijar el margen de comercialización de cilindros de gas licuado de petróleo en ¢62,692/litro.
- III. Fijar el precio del gas licuado de petróleo al consumidor final, de la siguiente manera:

**PRECIO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO POR TIPO DE ENVASE Y CADENA DE DISTRIBUCIÓN
-mezcla propano butano-
(en colones por litro e incluye impuesto único) ⁽¹⁾**

TIPOS DE ENVASE	Precio		
	A facturar por el envasador ⁽²⁾	A facturar por distribuidor de cilindros ⁽³⁾	A facturar por comercializador de cilindros ⁽⁴⁾
Tanques fijos -por litro-	228,89	(*)	(*)
Cilindro de 4,54 kg (10 lb)	1 995,00	2 471,00	3 017,00
Cilindro de 9,07 kg (20 lb)	3 991,00	4 941,00	6 034,00
Cilindro de 11,34 kg (25 lb)	4 988,00	6 176,00	7 543,00
Cilindro de 15,88 kg (35 lb)	6 983,00	8 647,00	10 560,00
Cilindro de 18,14 kg (40 lb)	7 981,00	9 882,00	12 068,00
Cilindro de 20,41 kg (45 lb)	8 979,00	11 117,00	13 577,00
Cilindro de 27,22 kg (60 lb)	11 972,00	14 823,00	18 102,00
Cilindro de 45,36 kg (100 lb)	19 953,00	24 705,00	30 170,00
ESTACION DE SERVICIO MIXTA (por litro) ⁽⁵⁾		(*)	277

(*) No se comercializa en esos puntos de ventas.

(1) Precios máximos de venta según resolución RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta N.º 65 del 2 de abril de 2001.

(2) Incluye el margen de envasador de 53,036/litro, establecido mediante resolución RE-0074-IE-2018 del 14 de agosto de 2018, publicada en el Alcance Digital N.º 148 a La Gaceta N.º 152 del 22 de agosto de 2018.

(3) Incluye un margen de distribuidor y agencia propuesto de ¢54,519/litro.

(4) Incluye un margen de detallista propuesto de ¢62,692/litro

(5) Incluye el margen de envasador de 53,036/litro, establecido mediante resolución RE-0074-IE-2018 del 14 de agosto de 2018 y 48,3128/litro para estación de servicio mixta, establecido mediante resolución RIE-062-2013 del 25 de junio de 2013.

PRECIO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO POR TIPO DE ENVASE Y CADENA DE DISTRIBUCIÓN
-rico en propano-
(en colones por litro e incluye impuesto único) ⁽¹⁾

TIPOS DE ENVASE	Precio		
	A facturar por el envasador ⁽²⁾	A facturar por distribuidor de cilindros ⁽³⁾	A facturar por comercializador de cilindros ⁽⁴⁾
Tanques fijos -por litro-	217,65	(*)	(*)
Cilindro de 4,54 kg (10 lb)	1 955,00	2 445,00	3 008,00
Cilindro de 9,07 kg (20 lb)	3 910,00	4 889,00	6 015,00
Cilindro de 11,34 kg (25 lb)	4 887,00	6 111,00	7 519,00
Cilindro de 15,88 kg (35 lb)	6 842,00	8 556,00	10 527,00
Cilindro de 18,14 kg (40 lb)	7 820,00	9 778,00	12 031,00
Cilindro de 20,41 kg (45 lb)	8 797,00	11 001,00	13 535,00
Cilindro de 27,22 kg (60 lb)	11 729,00	14 668,00	18 046,00
Cilindro de 45,36 kg (100 lb)	19 549,00	24 446,00	30 077,00
ESTACION DE SERVICIO (por litro) ⁽⁵⁾		(*)	266

(*) No se comercializa en esos puntos de ventas.

(1) Precios máximos de venta según resolución RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta N.º 65 del 2 de abril de 2001.

(2) Incluye el margen de envasador de 53,036/litro, establecido mediante resolución RE-0074-IE-2018 del 14 de agosto de 2018, publicada en el Alcance Digital N.º 148 a La Gaceta N.º 152 del 22 de agosto de 2018.

(3) Incluye un margen de distribuidor y agencia propuesto de ¢54,519/litro.

(4) Incluye un margen de detallista propuesto de ¢62,692/litro

(5) Incluye el margen de envasador de 53,036/litro, establecido mediante resolución RE-0074-IE-2018 del 14 de agosto de 2018 y 48,3128/litro para estación de servicio mixta, establecido mediante resolución RIE-062-2013 del 25 de junio de 2013

IV. Establecer que los precios rigen a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

En cumplimiento de lo que ordenan los artículos 245 y 345 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) se informa que contra esta resolución pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el extraordinario de revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante el Intendente de Energía, a quien corresponde resolverlo y los de apelación y de revisión podrán interponerse ante la Junta Directiva, a la que corresponde resolverlos.

De conformidad con el artículo 346 de la LGAP, los recursos de revocatoria y de apelación deberán interponerse en el plazo de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación y, el extraordinario de revisión, dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de dicha ley.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Marco Cordero Arce
Intendente de Energía

RE-0018-IT-2019

San José, a las 15:30 horas del 21 de febrero de 2019

CONOCE EL DIRECTOR A.Í. DE LA INTENDENCIA DE TRANSPORTE SOBRE EL AJUSTE EXTRAORDINARIO DE OFICIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS, MODALIDAD TAXI, BASE DE OPERACIÓN ESPECIAL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARIA.

EXPEDIENTE ET-011-2019

RESULTANDOS:

- I. El Regulador General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, aprueba mediante resolución RRG-4199-2004 de las nueve horas del 13 de diciembre de 2004, publicada en La Gaceta Nº 23 del 2 de febrero de 2005, el modelo denominado: “Modelo de Regulación Económica del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas, Modalidad Taxi”.
- II. La Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, mediante resolución RJD-141-2014, publicada en La Gaceta 215 del 7 de noviembre de 2014, modifica el cálculo de la tarifa banderazo en el procedimiento extraordinario de fijación del modelo, esto a fin de introducir en la tarifa la variación en el canon de regulación de la Autoridad Reguladora (Aresep) y el canon del Consejo de Transporte Público (CTP).
- III. La Intendencia de Transporte, mediante resolución RE-0135-IT-2018, de las 10:00 horas del 24 de setiembre de 2018, publicada en el Alcance Digital Nº174 a la Gaceta Nº179, del 28 de setiembre de 2018, fija las tarifas vigentes para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi – base de operación especial.
- IV. El 07 de febrero de 2019 por medio del oficio IN-0027-IT-2019, la Intendencia de Transporte emite el informe preliminar del procedimiento extraordinario de fijación tarifaria para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi – base de operación especial (folios 2 al 14).
- V. El Director a.í. de la Intendencia de Transporte, por medio del oficio OF-0163-IT-2019 del 07 de febrero de 2019, solicita al Departamento de Gestión Documental la apertura del expediente tarifario, en el cual se tramitará la fijación tarifaria extraordinaria para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi, base de operación especial, correspondiente al primer semestre del año 2019. A partir de esta solicitud se apertura el expediente ET-011-2019. (folio 01).

- VI. La Intendencia de Transporte, mediante oficio OF-0169-IT-2019 del 07 de febrero de 2019, solicita a la Dirección General de Atención al Usuario la convocatoria a consulta pública (folios 15 al 16).
- VII. La convocatoria a consulta pública, se publica en los diarios La Extra, La Nación y La Teja del 13 de febrero de 2019 y en La Gaceta N°31 del 13 de febrero de 2019; en la misma, se otorgó un plazo a los interesados que feneció el 19 de febrero de 2019, para que presentaran sus posiciones a favor o en contra de la fijación tarifaria, indicando las razones que consideraran (folios 39 al 40).
- VIII. Mediante oficio IN-0038-DGAU-2019 de fecha 19 de febrero de 2019, la Dirección General de Atención al Usuario, indica que no se presentaron oposiciones ni coadyuvancias, según consta en el expediente administrativo.
- IX. El estudio de marras fue analizado por la Intendencia de Transporte produciéndose el informe IN-0033-IT-2019 del 21 de febrero de 2019, que corre agregado al expediente.
- X. Se han cumplido las prescripciones de ley en los plazos y procedimientos.

CONSIDERANDOS:

- I. El Director de la Intendencia de Transporte sustituye al Intendente de Transporte durante sus ausencias temporales, tales como vacaciones, incapacidades y sustituciones temporales con motivo de la representación institucional, entre otros. Para el caso en concreto, el Intendente de Transporte, el señor Enrique Muñoz Aguilar, se encuentra en vacaciones del 4 al 22 de febrero de 2019, por lo que este acto lo resuelve el señor Mauricio González Quesada, en su condición de Director a.í., según el oficio 658-RG-2018 del Regulador General de la Aresep, nombramiento realizado a partir del 24 de julio de 2018 y que a la fecha se encuentra vigente.
- II. Del oficio IN-0033-IT-2019 del 21 de febrero de 2019 que sirve de base para el dictado de la presente resolución, conviene extraer lo siguiente:

“(…)

2. MARCO REFERENCIAL

El 13 de diciembre de 2004, el Regulador General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, por medio de la resolución RRG-4199-2004 publicada en La Gaceta N°23 del 2 de febrero de 2005, aprueba

el “Modelo de Regulación Económica del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas, Modalidad Taxi”, dentro de este modelo de regulación se establece el procedimiento extraordinario de fijación tarifaria para el servicio, el cual tiene por objeto reconocer oportunamente en las tarifas, los cambios, aumentos o disminuciones en los precios de aquellos componentes de costo fijados por actores externos a la administración del servicio, con el fin de propiciar la continuidad operativa del servicio de transporte público por taxi. Específicamente en el capítulo V de la metodología, en el apartado del Procedimiento extraordinario de Fijación, se indica que las fijaciones se efectuarán, cada seis meses en el mes de febrero y agosto de cada año.

Adicionalmente, mediante resolución RJD-141-2014, publicada en La Gaceta Nº215 del 7 de noviembre de 2014, se modifica el cálculo de la tarifa banderazo en el procedimiento extraordinario de fijación del modelo, esto a fin de introducir en la tarifa la variación en el canon de regulación de la Autoridad Reguladora (Aresep) y el canon del Consejo de Transporte Público (CTP).

Asimismo, se aplica también el criterio de homologación tarifaria, establecido en el modelo de regulación (RRG-4199-2004), el cual señala que, en cada base de operación, se calcula la tarifa plana para los diferentes tipos de vehículos que estén autorizados a operar en ella y se escoge la mayor como la tarifa banderazo por jornada, que aplicará para todos los tipos de vehículos. También, se aplica como criterio de redondeo el llevar la tarifa a los cinco colones más próximos, según lo establece la resolución indicada.

Se indica además, con base en el “Modelo de Regulación Económica del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas, Modalidad Taxi” (resoluciones RRG-4199-2004 y RJD-141-2014), que desde la resolución RRG-4910-2005 de las ocho horas y treinta minutos del cuatro de agosto del 2005 y posteriores resoluciones de fijaciones extraordinarias de tarifas para el servicio de transporte público modalidad taxi, se ha instituido que la estructura tarifaria que se establece, no contempla diferenciación alguna respecto a las horas del día (diurna o nocturna) en que se presta el servicio y las tarifas se cobran de acuerdo con lo que marque el taxímetro, independientemente de situaciones tales como: a) condiciones del camino, b) distancia del recorrido, c) origen o destino del servicio d) naturaleza del día (hábil o feriado), e) nacionalidad del usuario. En consecuencia, el vehículo con que se presta el servicio debe poseer indefectiblemente, un sistema de medición de acuerdo con los mecanismos legales y técnicos estipulados para ello, según lo ordena el numeral 59 de la Ley 7969, siendo obligatorio que en todos los viajes se accione el taxímetro y que sin excepción la tarifa que cobra sea la que señale dicho dispositivo.

También se ha indicado, basados en la metodología vigente y desde la resolución RRG-10073-2009 de las nueve horas y treinta minutos del 7 de setiembre del 2009 en adelante, que el valor que debe cancelarse por el uso de vías de tránsito (peaje) no está considerado como un costo dentro de la tarifa del servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad taxis, de ahí que dependiendo de la vía de tránsito que escoja el usuario, éste deberá pagarlo en forma adicional a la tarifa. El pago del peaje procede únicamente cuando el usuario está haciendo uso del servicio de taxi.

3. CÁLCULO TARIFARIO

De conformidad con lo establecido en la resolución RRG-4199-2004 del 13 de diciembre de 2004, que corresponde al Modelo de Regulación Económica del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas Modalidad Taxi, específicamente en la Sección 1 del Capítulo V en el que se dispone el procedimiento automático de ajuste para la fijación extraordinaria de tarifas, se procede a calcular los componentes del índice de ajuste *I* según el siguiente algoritmo (en adelante ecuación N°1):

$$I = \left[\left(\frac{SMT_1}{SMT_0} \right) - 1 + \left(\frac{PPC_1}{PPC_0} \right) - 1 + \left(\frac{TC_1}{TC_0} \right) - 1 \right] \cdot 100$$

Donde:

I: Índice de ajuste automático de la tarifa.

*SMT*₁: Salario mínimo por jornada ordinaria para un taxista, vigente al mes anterior a la aplicación del procedimiento de fijación extraordinaria por ajuste automático.

*SMT*₀: Salario mínimo por jornada ordinaria para un taxista, vigente al mes anterior a la última fijación tarifaria (sea esta ordinaria o extraordinaria) por ajuste automático.

*PPC*₁: Precio ponderado del combustible (diésel, gasolina súper y gasolina regular) aprobado por la Autoridad Reguladora y vigente al mes anterior a la aplicación del procedimiento de fijación extraordinaria.

*PPC*₀: Precio ponderado del combustible (diésel, gasolina súper y gasolina regular) aprobado por la Autoridad Reguladora y vigente al mes anterior a la última fijación tarifaria.

*TC*₁: Tipo de cambio del colón con respecto al dólar estadounidense, vigente al último día del mes anterior a la solicitud de fijación extraordinaria por ajuste automático, calculado por el Banco Central de Costa Rica.

TC₀: Tipo de cambio del colón con respecto al dólar estadounidense, vigente al último día del mes anterior a la última fijación tarifaria (sea esta ordinaria o extraordinaria), calculado por el Banco Central de Costa Rica).

Este procedimiento automático de ajuste considera las variaciones de los parámetros que tienen mayor peso en las tarifas, determinados en la resolución supra indicada con base en un análisis de sensibilidad del modelo tarifario, estas son el salario mínimo por jornada ordinaria para un taxista, el precio ponderado del combustible y el tipo de cambio del colón con respecto al dólar estadounidense, las cuales, para el caso que nos ocupa de fijación tarifaria para el servicio de taxi, base de operación especial del I semestre 2019, se calculan de la siguiente forma:

3.1 Salario

En el año 2018, el Consejo Nacional de Salarios establece la resolución CNS-RG-03-2018 del 13 de agosto de 2018, publicada en La Gaceta 159 del 31 de agosto de 2018, mediante la cual resuelve modificar el salario por jornada diaria mínimo del taxista, de la siguiente manera:

*“(...) 2- Clasificar el puesto de servicio remunerado de traslado de personas, en la modalidad de Chofer de Taxi y afines a Taxista, en la categoría salarial de **Trabajador Calificado (TC)** y 3-Rige a partir de su publicación.” (Destacado no es del original).*

De acuerdo con el procedimiento establecido, aplicando el componente respectivo de la ecuación 1 anteriormente descrita y la modificación en la clasificación de categoría salarial del puesto del chofer de taxi, el cálculo de la variación del salario es como se indica a continuación:

Factor	Valor	Referencia
SMT ₀	11.897,51	Decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 40743-MTSS, publicado en el Alcance Digital 291 a La Gaceta N°228, del 01 de diciembre de 2017.
SMT ₁	11.471,53	Decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 41434-MTSS, publicado en la Gaceta N°235 del 18 de diciembre de 2018.
Variación	-3,58%	

Mediante el Decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 40743-MTSS, publicado en el Alcance Digital N°291 a La Gaceta N°228, del 01 de diciembre del 2017, el cual comenzó a regir el 01 de enero de 2018, se establecieron los salarios mínimos para el sector privado para el periodo 2018, según el ajuste salarial anual que se debe aplicar en octubre de cada año y que rige a partir del primero de enero del siguiente año, de acuerdo con la Metodología para la fijación de Salarios Mínimos para el Sector Privado establecida por el Consejo Nacional de Salarios, en el Acta de Sesión 5414-2016, del 31 de octubre de 2016.

Por su parte, en el Decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 41434-MTSS, publicado en La Gaceta N°235 del 18 de diciembre de 2018, se establecen los salarios mínimos para el sector privado para el periodo 2019, los cuales rigen a partir del 1° de enero de 2019.

3.2 Combustible

Los precios de referencia de los combustibles para el cálculo PPC_0 y PPC_1 son los siguientes:

Precio	PPC_0	PPC_1
Gasolina súper	677,00	596,00
Gasolina regular	652,00	581,00
Diésel	556,00	534,00

Los precios correspondientes al PPC_0 fueron los aprobados por la Autoridad Reguladora mediante resolución RIE-055-2018 de fecha 22 de junio de 2018, publicada en el Alcance Digital N°124, a La Gaceta N°116 del 28 de junio de 2018. Los precios correspondientes al PPC_1 fueron los establecidos por la Autoridad Reguladora mediante resolución RE-0001-IE-2019 del 07 de enero de 2019, publicada en el Alcance Digital N°06, a La Gaceta N°06 del 09 de enero de 2019.

De acuerdo con el procedimiento establecido aplicado en el componente de la ecuación N°1 y a los datos anteriormente indicados, el cálculo de la variación del combustible es como se indica:

Tipo de vehículo	Sedán	Microbús
Precio ponderado combustibles PPC_0	610,25	610,25
Precio ponderado combustibles PPC_1	561,25	561,25
Variación (%)	-8,03%	-8,03%

3.3 Tipo de cambio

De acuerdo con el procedimiento establecido, y aplicando el componente respectivo en la ecuación N°1, el cálculo de la variación del tipo de cambio es como se indica:

Factor	Valor	Referencia
TC_0	570,07	Tipo de cambio de venta de referencia del BCCR de 31 de julio de 2018.
TC_1	614,17	Tipo de cambio de venta de referencia del BCCR de 31 de enero de 2019.
Variación (%)	7,74%	

3.4 Índice de ajuste automático

En resumen, el cálculo del Índice de ajuste automático de la tarifa (I), cuya fórmula se describe en la ecuación N°1 es el siguiente:

Índice I		
Variable / Tipo de vehículo	Sedán	Microbús
Variación salarios	-3,58%	-3,58%
Variación precio combustibles	-8,03%	-8,03%
Variación tipo de cambio	7,74%	7,74%

Ahora bien, el índice de ajuste automático (I) es afectado por el peso que cada uno de los ítems de costo tiene en la estructura tarifaria, según lo establece la RRG-4199-2004, en la que se indica lo siguiente:

“Para efectos de la aplicación, en el procedimiento extraordinario del modelo automático de ajuste, del índice de ajuste automático, éste es afectado por el peso que cada uno de los ítem de costo tiene en la estructura tarifaria, lo cual genera un índice proporcional denominado I_w .”

Los pesos de los costos de las variables se obtienen de la última actualización de la estructura de costos realizada mediante la fijación tarifaria ordinaria de oficio, tramitada en el expediente ET-097-2009, resolución RRG-10231-2009. Los pesos para cada ítem de costo, para cada tipo de vehículo se detallan a continuación:

Rubro de costo	Peso	
	Sedán	Microbús
Costos por salarios y cargas sociales	38,28%	32,71%
Costos por consumos de combustibles	13,94%	11,91%
Reposición activos	8,27%	9,43%

Como se mencionó anteriormente, el índice proporcional denominado ($I\omega$) para cada tipo de vehículo, considera en su cálculo la variación de cada parámetro y el peso ponderado de su costo dentro de la estructura tarifaria, este cálculo se puede observar en el anexo de cálculo tarifario, cuyo resultado se muestra a continuación:

Variable/ Tipo de vehículo	Índice $I\omega$	
	Sedán	Microbús
Variación salario	-1,37%	-1,17%
Variación combustible	-1,12%	-0,96%
Variación tipo de cambio	0,64%	0,73%
$I\omega$	-1,85%	-1,40%

Una vez calculado el índice ($I\omega$), se procede a ajustar las tarifas para cada tipo de vehículo como sigue:

3.5 Tarifas

Para el cálculo de cada una de las tarifas establecidas en el pliego tarifario se procederá según se detalla en cada caso:

a. Tarifa banderazo

De acuerdo con la resolución RJD-141-2014, publicada en La Gaceta N°215 del 7 de noviembre de 2014 se incorpora en el cálculo de la tarifa banderazo del Procedimiento Extraordinario de Fijación del Modelo de Regulación Económica del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas Modalidad Taxi, la variación en el canon de regulación de la Aresep y el canon del Consejo de Transporte Público (CTP). Por lo consiguiente, el canon Aresep y el canon CTP, se incluyen como componentes en la fórmula de cálculo de la tarifa banderazo.

La tarifa banderazo se calcula según el siguiente algoritmo:

$$T_{bf} = T_b \cdot (1 + I\omega) + \left[\frac{\Delta_{\text{CanonCTP}} + \Delta_{\text{CanonARESEP}}}{N \cdot Vd \cdot 12} \right]$$

Donde:

- T_{bf} :** Tarifa banderazo final calculada después del ajuste.
- T_b :** Tarifa banderazo calculada en la última fijación tarifaria aprobada.
- $(1+I\omega)$:** Proporción del índice de ajuste automático.
- Δ_{CanonCTP} :** Diferencial entre el canon del CTP vigente al momento de la aplicación del modelo y el canon del CTP incorporado en la tarifa T_b .
- $\Delta_{\text{CanonARESEP}}$:** Diferencial entre el canon de Aresep vigente al momento de la aplicación del modelo y el canon de Aresep incorporado en la tarifa T_b .
- N :** Número promedio de días en operación por mes calculados en la última fijación ordinaria.
- Vd :** Número promedio de viajes por día calculados en la última fijación ordinaria.

El reconocimiento del canon en la tarifa banderazo según el tipo de vehículo, cuyo cálculo se puede observar en el anexo de cálculo tarifario, se detalla a continuación:

1. Vehículos tipo sedán

Detalle	Canon T_b (colones)	Canon Actual (colones)	Variación (colones)	N	Vd	Meses al año	Monto a reconocer (colones)
Canon Aresep	115.300,46	37.830,22	-77.470,24	26	12	12	-25,6635
Canon CTP	114.329,00	95.715,00	-18.614,00				

2. Vehículos tipo microbús

Detalle	Canon T_b (colones)	Canon Actual (colones)	Variación (colones)	N	Vd	Meses al año	Monto a reconocer (colones)
Canon Aresep	115.300,46	37.830,22	-77.470,24	26	12	12	-25,6635
Canon CTP	114.329,00	95.715,00	-18.614,00				

El monto del canon de Aresep incorporado en la tarifa banderazo (Tb) ϕ 115.300,46 es el publicado en el Alcance Digital N°248 a La Gaceta N°196 del 18 de octubre del 2017 y el del CTP ϕ 114.329,00 el publicado en el Alcance Digital N°213, a La Gaceta N°166 del 01 de setiembre del 2017.

Por su parte, el canon vigente al momento de la aplicación del presente ajuste tarifario de Aresep es el publicado en el Alcance 195 a La Gaceta N°210 del 13 de noviembre del 2018, el cual corresponde a ϕ 37.830,22 por lo cual su variación respecto al periodo 2018 es de ϕ -77.470,24 y para el canon del CTP, el monto es de ϕ 95.715,00, establecido mediante la resolución RG-0356-RG-2018 del 28 de agosto de 2018, por lo que la variación respecto al periodo 2018 es de ϕ -18.614,00. Esto aplica para cada una de las modalidades.

Así las cosas, la tarifa banderazo resultante para cada tipo de vehículo se detalla a continuación:

Tipo de vehículo	Tarifa vigente (colones)	1+lw	Incorporación del canon	Tarifa resultante (colones)	Tarifa propuesta (colones) utilizando el criterio de la RRG-4199-2004*
Sedán	995	0,9815	-25,6635	950	955
Microbús	995	0,9860	-25,6635	950	955

*Se aplica el criterio de homologación tarifaria, establecido como política en el modelo de regulación (RRG-4199-2004), el cual señala que en cada base de operación, se calcula la tarifa plana para los diferentes tipos de vehículos que estén autorizados a operar en ella y se escoge la mayor como la tarifa banderazo por jornada, que aplicará para todos los tipos de vehículos.

b. Tarifa variable por distancia

La tarifa variable por distancia se calcula según el siguiente algoritmo:

$$T_{vdf} = T_{vd} \cdot (1 + I\omega)$$

Donde:

T_{vdf} : Tarifa variable por distancia final calculada después del ajuste.

T_{vd} : Tarifa por distancia calculada en la última fijación tarifaria aprobada.

(1+lw): Proporción del índice de ajuste automático.

Como resultado de aplicar la fórmula indicada, se obtiene la siguiente tarifa variable para cada tipo de vehículo:

Tipo de vehículo	Tarifa vigente (colones)	1+Iω	Tarifa propuesta (colones)
Sedán	830	0,9815	815
Microbús	945	0,9860	930

c. Tarifa por espera

La tarifa por espera se calcula según el siguiente algoritmo:

$$T_{ef} = T_e \cdot (1 + I\omega)$$

Donde:

T_{ef}: Tarifa por espera final calculada después del ajuste.

T_e: Tarifa por espera calculada en la última fijación tarifaria aprobada.

(1+I ω): Proporción del índice de ajuste automático.

Como resultado de aplicar la fórmula indicada, se obtiene la siguiente tarifa por espera para cada tipo de vehículo:

Tipo de vehículo	Tarifa vigente (colones)	1+Iω	Tarifa propuesta (colones)
Sedán	3.875	0,9815	3.805
Microbús	4.440	0,9860	4.380

d. Tarifa por demora

La tarifa por demora se calcula según el siguiente algoritmo:

$$T_{df} = T_d \cdot (1 + I\omega)$$

Donde:

T_{df}: Tarifa por demora final calculada después del ajuste.

T_d: Tarifa por demora calculada en la última fijación tarifaria aprobada.

(1+I ω): Proporción del índice de ajuste automático.

Como resultado de aplicar la fórmula indicada, se obtiene la siguiente tarifa por demora para cada tipo de vehículo:

Tipo de vehículo	Tarifa vigente (colones)	1+lw	Tarifa propuesta (colones)
Sedán	8.230	0,9815	8.080
Microbús	9.465	0,9860	9.335

3.6 Resultado tarifario por tipo de vehículo

Los resultados obtenidos para cada tipo de vehículo, según los datos indicados anteriormente, son los siguientes:

Tarifa según tipo de taxi	Tarifas (en colones)		Variación	
	Vigente	Recomendada	Absoluto	Porcentual
Taxi Sedán				
Tarifa banderazo	995	955	-40	-4,02%
Tarifa variable	830	815	-15	-1,81%
Tarifa por espera	3.875	3.805	-70	-1,81%
Tarifa por demora	8.230	8.080	-150	-1,82%
Taxi Microbús				
Tarifa banderazo	995	955	-40	-4,02%
Tarifa variable	945	930	-15	-1,59%
Tarifa por espera	4.440	4.380	-60	-1,35%
Tarifa por demora	9.465	9.335	-130	-1,37%

(...)

5. RECOMENDACIÓN

1. Acoger el presente informe y fijar las siguientes tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi, base de operación especial Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, para el primer semestre de 2019:

Tarifa según tipo de taxi	Tarifa Recomendada (colones)
Taxi Sedán	
Tarifa banderazo	955

Tarifa según tipo de taxi	Tarifa Recomendada (colones)
Tarifa variable	815
Tarifa por espera	3.805
Tarifa por demora	8.080
Taxi Microbús	
Tarifa banderazo	955
Tarifa variable	930
Tarifa por espera	4.380
Tarifa por demora	9.335

2. *Reiterar lo indicado en anteriores resoluciones de fijaciones extraordinarias de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxis, base de operación especial Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, respecto a que el valor que debe cancelarse por el uso de vías de tránsito (peaje) no está considerado como un costo dentro de la tarifa del servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad taxis, de ahí que dependiendo de la vía de tránsito que escoja el usuario, éste deberá pagarlo en forma adicional a la tarifa. El pago del peaje procede únicamente cuando el usuario está haciendo uso del servicio de taxi.*
3. *Reiterar lo indicado en anteriores resoluciones de fijaciones extraordinarias de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxis, base de operación especial Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en cuanto a que la estructura tarifaria que se establece, no contempla diferenciación alguna respecto a las horas del día (diurna o nocturna) en que se presta el servicio y las tarifas se cobran de acuerdo con lo que marque el taxímetro, independientemente de situaciones tales como: a) condiciones del camino, b) distancia del recorrido, c) origen o destino del servicio d) naturaleza del día (hábil o feriado), e) nacionalidad del usuario. En consecuencia, el vehículo con que se presta el servicio debe poseer indefectiblemente, un sistema de medición de acuerdo con los mecanismos legales y técnicos estipulados para ello, según lo ordena el artículo N° 59 de la ley N° 7969, siendo obligatorio que en todos los viajes se accione el taxímetro y que sin excepción la tarifa que cobra sea la que señale dicho dispositivo.*

(..)"

- III. De acuerdo con el oficio IN-0038-DGAU-2019 de fecha 19 de febrero de 2019, de la Dirección General de Atención al Usuario no se presentaron oposiciones ni coadyuvancias en el proceso de consulta pública.

- IV. Conforme con los resultandos y considerando que preceden y de acuerdo con el mérito de los autos, lo procedente es ajustar las tarifas del servicio de transporte público remunerado de personas, modalidad taxi, base de operación especial, Aeropuerto Internacional Juan Santamaría; tal y como se dispone:

POR TANTO:

Fundamentado en las facultades conferidas en la Ley 7593 y sus reformas, en la Ley General de la Administración Pública (Ley 6227), en el Decreto Ejecutivo 29732-MP que es el Reglamento a la Ley 7593, el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos Desconcentrados (RIOF) y el Manual Descriptivo de Cargos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

EL DIRECTOR A.Í. DE LA INTENDENCIA DE TRANSPORTE

RESUELVE:

- I. Acoger el IN-0033-IT-2019 del 21 de febrero de 2019 y fijar las siguientes tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxi, base de operación especial Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, para el primer semestre de 2019:

Tarifa según tipo de taxi	Tarifa Recomendada (colones)
Taxi Sedán	
Tarifa banderazo	955
Tarifa variable	815
Tarifa por espera	3.805
Tarifa por demora	8.080
Taxi Microbús	
Tarifa banderazo	955
Tarifa variable	930
Tarifa por espera	4.380
Tarifa por demora	9.335

- II. Reiterar lo indicado en anteriores resoluciones de fijaciones extraordinarias de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxis, base de operación especial Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, respecto a que el valor que debe

cancelarse por el uso de vías de tránsito (peaje) no está considerado como un costo dentro de la tarifa del servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad taxis, de ahí que dependiendo de la vía de tránsito que escoja el usuario, éste deberá pagarlo en forma adicional a la tarifa. El pago del peaje procede únicamente cuando el usuario está haciendo uso del servicio de taxi.

- III. Reiterar lo indicado en anteriores resoluciones de fijaciones extraordinarias de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad taxis, base de operación especial Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en cuanto a que la estructura tarifaria que se establece, no contempla diferenciación alguna respecto a las horas del día (diurna o nocturna) en que se presta el servicio y las tarifas se cobran de acuerdo con lo que marque el taxímetro, independientemente de situaciones tales como: a) condiciones del camino, b) distancia del recorrido, c) origen o destino del servicio d) naturaleza del día (hábil o feriado), e) nacionalidad del usuario. En consecuencia, el vehículo con que se presta el servicio debe poseer indefectiblemente, un sistema de medición de acuerdo con los mecanismos legales y técnicos estipulados para ello, según lo ordena el artículo N° 59 de la ley N° 7969, siendo obligatorio que en todos los viajes se accione el taxímetro y que sin excepción la tarifa que cobra sea la que señale dicho dispositivo.
- IV. Las tarifas rigen a partir del día natural siguiente al día de la publicación de esta resolución en La Gaceta.

Cumpliendo lo que ordena el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública, se indica que contra esta resolución pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación. El de revocatoria y apelación deberán interponerse ante la Intendencia de Transporte, resolviendo el primero de ellos y el segundo se eleva al superior jerárquico. Los recursos de revocatoria y de apelación deberán interponerse en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de esta resolución.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.

**MAURICIO GONZÁLEZ QUESADA
DIRECTOR A.Í.
INTENDENCIA DE TRANSPORTE**

INTENDENCIA DE ENERGÍA
RE-0019-IE-2019 del 22 de febrero de 2019

**SOLICITUD PRESENTADA POR LA REFINADORA COSTARRICENSE DE
PETRÓLEO S.A. (RECOPE) PARA LA FIJACIÓN EXTRAORDINARIA DE
PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES DERIVADOS DE LOS
HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019**

ET-013-2019

RESULTANDO:

- I. Que el 30 de julio de 1981, mediante la Ley N.º 6588, se establece que Recope es la encargada de refinar, transportar y comercializar a granel el petróleo y sus derivados en el país.
- II. Que el 17 de agosto de 1993, mediante la Ley N.º 7356, se establece que la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados para satisfacer la demanda nacional son monopolio del Estado, por medio de Recope.
- III. Que el 15 de octubre de 2015, mediante la resolución RJD-230-2015, publicada en el diario oficial La Gaceta N.º 211 del 30 de octubre de 2015, se estableció la Metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final, modificada por la resolución RJD-070-2016 publicada en el Alcance N.º 70 de la Gaceta N.º 86 del 5 de mayo de 2016.
- IV. Que el 19 de febrero de 2018, las empresas envasadoras Tomza de Costa Rica S.A., Envasadora Súper Gas GLP S.A. y 3-101-622925 S.A. solicitaron, mediante oficio sin número, que se realicen ajustes mensuales incorporando la composición del GLP (folios 3013 al 3020 del expediente ET-081-2017).
- V. Que el 23 de marzo de 2018, la IE mediante la resolución RIE-030-2018, publicada en el Alcance Digital N.º 67 a La Gaceta N.º 58 del 4 de abril de 2018, aprobó entre otras cosas los otros ingresos prorrateados y la rentabilidad sobre base tarifaria en colones por litro para cada producto para el 2018 (ET-081-2017).

- VI.** Que el 27 de abril de 2018, la IE mediante la resolución RIE-038-2018, publicada en el Alcance N.º 89 de la Gaceta N.º 77 del 3 de mayo de 2018, aprobó entre otras cosas, el margen de operación de Recope en colones por litro para cada producto para el 2018 (ET-081-2017).
- VII.** Que el 20 de diciembre de 2018, Recope mediante el oficio EEF-0231-2018, remitió información relacionada con el diferencial de precios de noviembre 2018 (corre agregada al expediente).
- VIII.** Que el 23 de enero de 2019, Recope mediante el oficio EEF-0008-2019, remitió información relacionada con el diferencial de precios de diciembre 2018 (folios del 148 al 151).
- IX.** Que el 25 de enero de 2019, mediante el oficio OF-0063-RG-2019, el Regulador General nombró al señor Marco Cordero Arce, como Intendente de Energía a partir del 28 de enero de 2019 y hasta que se realice el concurso ordinario de la plaza.
- X.** Que el 8 de febrero de 2019, Recope mediante los oficios GAF-0207-2019, GAF-0206-2019, solicitó fijación extraordinaria de precios de los combustibles y remitió copia de las facturas de importación de combustible utilizados por la flota pesquera nacional no deportiva y presentó los montos del ajuste por calidad para las gasolinas y el diésel, respectivamente (folios 1 al 147 y del 170 al 183).
- XI.** Que el 11 de febrero de 2019, la IE mediante el oficio OF-0178-IE-2019 le otorgó admisibilidad y solicitó proceder con la consulta pública respectiva (folios 152 al 154).
- XII.** Que el 14 de febrero de 2019, Recope mediante el oficio EEF-0018-2019 presentó los precios del asfalto y emulsión respectivamente (folio 188).
- XIII.** Que el 15 de febrero de 2019, en los diarios nacionales: La Nación, La Teja y La Extra y en La Gaceta N.º 33, se publicó la invitación a los ciudadanos para presentar sus posiciones, otorgando plazo hasta el 21 de febrero de 2019 (folios 168 al 169).
- XIV.** Que el 20 de febrero de 2019, Recope mediante el oficio EEF-0020-2019 presentó las facturas y costos de importación correspondientes a enero (folios del 189 al 228).
- XV.** Que el 21 de febrero de 2019, mediante el oficio IN-0042-DGAU-2019, la Dirección General de Atención del Usuario (DGAU) remitió el informe de oposiciones y coadyuvancias, el cual indica que, *[...] vencido el plazo establecido, no se recibieron posiciones [...]* (corre agregado al expediente).

- XVI.** Que el 22 de febrero de 2019, mediante la resolución RE-0017-IE-2019, la IE, dispuso, entre otras cosas, fijar el margen de los distribuidores y comercializadores de cilindros de gas licuado de petróleo envasado en diferentes especificaciones (corre agregado al expediente ET-014-2019).
- XVII.** Que el 22 de febrero de 2019, mediante la resolución RE-0018-IE-2019, la IE, dispuso, entre otras cosas, acoger parcialmente el recurso de revocatoria interpuesto por Recope, contra la resolución RE-0001-IE-2019 del 7 de enero de 2019 (corre agregado al expediente ET-070-2018).
- XVIII.** Que el 22 de febrero de 2019, a las 11:00 horas se revisó el expediente digital el cual contienen 228 folios.
- XIX.** Que el 22 de febrero de 2019, mediante el informe IN-0026-IE-2019, la IE, analizó la presente gestión de ajuste tarifario y en dicho estudio técnico recomendó, fijar los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos.

CONSIDERANDO

- I.** Que del estudio técnico IN-0026-IE-2019, citado, que sirve de base para la presente resolución, conviene extraer lo siguiente:

[...]

II. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD TARIFARIA

De conformidad con la metodología vigente y aplicable al presente asunto, el cálculo del precio de cada uno de los combustibles se debe realizar con fecha de corte al segundo viernes de cada mes -8 de febrero de 2019 en este caso-, con base en las siguientes variables y criterios de cálculo:

1. Precio FOB de referencia (P_{rij})

Se utilizaron los precios internacionales de los 15 días naturales anteriores a la fecha de corte de realización del estudio. Los precios están sustentados en el promedio simple de los 11 días hábiles de los precios FOB internacionales de cada uno de los productos derivados del petróleo, tomados de la bolsa de materias primas de Nueva York (NYMEX) -período de cálculo comprendido entre el 24 de enero y 7 de febrero de 2019 ambos inclusive, excepto para el Av-gas que publica precios los sábados, razón por cual se cuenta con 13 registros durante este mismo período.

De este rango de precios se obtuvo un precio promedio por barril para cada tipo de producto. Dicho precio promedio a la fecha de corte se expresa en colones por litro, utilizando 158,987 litros por barril y el tipo de cambio promedio de venta para las operaciones con el sector público no bancario, correspondiente a los 15 días naturales anteriores al segundo viernes de cada mes, calculado por el Banco Central de Costa Rica para efecto de expresarlo en colones. El tipo de cambio promedio utilizado es de ₡612,99/\$, correspondiente al período comprendido entre el 24 de enero al 7 de febrero de 2019, ambos inclusive.

Resumen de los Pr_{ij}

En el siguiente cuadro se detallan los precios promedios vigentes de los combustibles y los propuestos, tanto en US dólares por barril -unidad de compra venta a nivel internacional- como en colones por litro -unidad de compra venta a nivel nacional-.

Se incorpora el ajuste de calidad de conformidad con lo señalado en la resolución RE-0018-IE-2019.

Cuadro N.º 1
Comparativo de precios FOB promedio (en \$/bbl y ¢/l)

Producto	Pr _{ij} (\$/bbl) RE-0009-IE- 2019	Pr _{ij} (\$/bbl) propuesta	Diferencia (\$/bbl)	Pr _{ij} (¢/l) ¹ RE-0009-IE- 2019	Pr _{ij} (¢/l) ² Propuesta	Diferencia (¢/l)
Gasolina RON 95	58,04	62,50	4,46	222,59	240,98	18,39
Gasolina RON 91	55,93	59,87	3,94	214,50	230,83	16,33
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre	70,73	77,51	6,78	271,29	298,84	27,55
Diésel marino	84,60	88,75	4,15	324,48	342,17	17,69
Keroseno	71,37	77,57	6,20	273,75	299,08	25,33
Búnker	52,25	58,98	6,73	200,39	227,41	27,02
Búnker Térmico ICE	58,29	65,04	6,75	223,57	250,76	27,19
IFO 380	62,53	57,49	-5,04	239,81	221,67	-18,14
Asfalto	48,69	57,26	8,57	186,76	220,77	34,01
Diésel pesado o gasóleo	59,40	66,15	6,75	227,80	255,06	27,26
Emulsión asfáltica rápida (RR)	31,97	37,38	5,41	122,63	144,10	21,47
Emulsión asfáltica lenta (RL)	31,65	37,22	5,57	121,39	143,50	22,11
LPG (70-30)	28,29	30,23	1,94	108,51	116,55	8,04
LPG (rico en propano)	26,65	27,87	1,22	102,20	107,46	5,26
Av-Gas	94,21	100,33	6,12	361,34	386,83	25,49
Jet fuel A-1	71,37	77,57	6,20	273,75	299,08	25,33
Nafta Pesada	66,81	72,44	5,63	256,24	279,31	23,07

Factor de conversión 1 barril = 158,987 litros

¹ Tipo de cambio promedio: ₡609,78/US\$

² Tipo de cambio promedio: ₡612,99/US\$

Fuente: Intendencia de Energía.

De acuerdo con la información presentada en el cuadro anterior, al comparar los precios promedio internacionales en dólares de esta propuesta, respecto a los utilizados en la última fijación tarifaria, que ajustó esta variable (RE-0009-IE-2019), se registró un aumento en el precio de los productos que importa Recope de la Costa del Golfo de los Estados Unidos.

Lo anterior responde a condiciones climáticas como lo fue la más reciente ola de frío polar que sufrió Estados Unidos, cuyos efectos se trasladan de manera inmediata sobre los precios de los productos finales. Adicionalmente, aconteció cambios geopolíticos que provocaron una menor oferta de crudo, el cual es la materia prima para la producción de los productos refinados. Dichos cambios obedecen a la reducción de la producción de crudo por parte de la OPEP, así como la sanción interpuesta por Estados Unidos a la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

De tal manera que el efecto sobre los precios finales a nivel interno sea al aumento para esta fijación tarifaria.

Por otro lado, el incremento que se registró en el tipo de cambio provocó que el aumento de los precios de los productos terminados fuese mayor.

El 25 de abril de 2016, mediante la resolución RJD-070-2016, publicada en el Alcance N.º 70 de la Gaceta N.º 86 del 5 de mayo de 2016, se modificó la referencia del Asfalto descrita en la tabla 1 de la metodología vigente, leyéndose correctamente: [...] Selling Prices Asphalt Cement, Gulf Coast, Area Barge y/o Asphalt Cement Texas/Louisiana Gulf. Dato puede ser proporcionado por Recope. [...]

*El 14 de febrero de 2019, mediante el oficio EEF-0018-2019, Recope proporcionó los precios del asfalto y emulsión, para esta fijación tarifaria y de conformidad con lo dispuesto en la resolución RJD-070-2016, la IE utilizó como referencia los precios FOB internacional del Asfalto de "Selling Prices Asphalt Cement, Gulf Coast/Mid-South, Area Barge", publicados en la revista *Poten & Partners* con reporte semanal.*

Dichos precios se encuentran expresados en dólares de los Estados Unidos por tonelada corta (por sus siglas en inglés US\$/ST). No obstante, con el objetivo de expresar los precios internacionales en dólares de los Estados Unidos (US\$) por barril, esta Intendencia, de conformidad con los resultados obtenidos por el Programa de Evaluación de la Calidad de Hidrocarburos (mediciones efectuadas por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), calculó el factor de conversión de la densidad del asfalto para el 2018 en 5,539 barril/tonelada corta. Este resultado se obtiene a partir del valor de densidad promedio anual obtenido por dicho Programa, el cual correspondió a 1,0302 g/cm³ a 25°C

La ecuación utilizada para determinar el factor de conversión fue:

$$(1 \text{ L}/1,0302 \text{ kg}) * (907,18 \text{ kg}/1 \text{ ton}) * (1 \text{ gal}/3,785 \text{ L}) * (1 \text{ barril}/42 \text{ gal}) = 5,539 \text{ barril/ton}$$

2. Margen de operación de Recope (K), otros ingresos prorrateados y rentabilidad sobre base tarifaria por producto

Mediante la resolución RIE-030-2018 del 23 de marzo de 2018, se aprobó entre otras cosas los otros ingresos prorrateados y la rentabilidad sobre base tarifaria para cada producto en colones por litro para el 2018 y mediante la resolución RIE-038-2018, del 27 de abril de 2018, que resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por Recope contra la resolución RIE-030-2018 entre otras cosas, se fijó el margen de operación de Recope, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N.º 2
Cálculo de componentes de precio por producto 2018
(colones por litro)

Producto	K	OIP _{i,a}	RSBT _i
Gasolina RON 95	38,20	(0,01)	9,44
Gasolina RON 91	37,76	(0,01)	9,67
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre	37,50	(0,01)	9,34
Diésel marino	29,95	(0,01)	0,00
Keroseno	39,11	(0,01)	8,50
Búnker	59,86	(0,01)	6,92
Búnker Térmico ICE	31,40	(0,01)	1,91
IFO-380	58,99	(0,01)	4,23
Asfaltos	96,73	(0,01)	12,91
Diésel pesado	32,71	(0,01)	6,33
Emulsión Asfáltica RR	65,16	(0,01)	15,59
Emulsión Asfáltica RL	69,28	(0,01)	15,59
LPG (mezcla 70-30)	55,19	(0,01)	12,10
LPG (rico en propano)	49,81	(0,01)	0,00
Av-gas	222,05	(0,01)	27,87
Jet fuel A-1	68,22	(0,01)	13,14
Nafta pesada	30,91	(0,01)	3,52

Fuente: RIE-030-2018 y RIE-038-2018

3. Ventas estimadas

En el expediente ET-013-2019 anexo N.º 3C, Recope presentó una explicación detallada sobre el procedimiento seguido para realizar la estimación de las ventas por producto de febrero a mayo de 2019. El Área de Información y Mercados de la IE, realizó una evaluación de esta estimación y como resultado, se concluyó que la metodología utilizada por Recope es más precisa que la que se obtiene directamente de la aplicación del FORECAST PRO, considerando que los ajustes realizados minimizan la diferencia entre ventas reales y estimadas. En consecuencia, se utilizó el dato proporcionado por Recope.

4. Diferencial de precios ($D_{i,j}$)

De acuerdo con la metodología vigente, el diferencial de precios $D_{i,j}$ que se debe incorporar a los precios de los combustibles bimestralmente, se originó de las diferencias diarias entre el costo FOB del litro promedio de combustible en tanque versus el precio FOB promedio de referencia del combustible i del ajuste j , dividido entre el total de ventas estimadas por producto i para el periodo de ajuste j . Y se calculó utilizando las ecuaciones del apartado 5.6 de la metodología.

Los cálculos de esta variable se basaron en la información suministrada mediante los oficios EEF-0231-2018 y EEF-0008-2019.

Es importante destacar que no se identificaron diferencias significativas entre el cálculo realizado por la IE y el presentado por Recope, con excepción de la línea de ajuste al cierre de diciembre que realiza la IE a fin de darle trazabilidad al cálculo con los datos de los Estados Financieros, para el Av.-Gas. Siendo que el costo del ajuste identificado era significativo, se le solicitó información a Recope. El 15 de febrero dan respuesta a la consulta señalando que, en diciembre se realizaron mezclas: [...] debido a que el Av.-Gas del tanque YT-7121 ha salido de especificación, en relación con parámetros como el RVP y punto de destilación, la única forma de recuperar parte de su valor es incorporándolo al pool de gasolina súper, en un máximo de 1% sin que ésta se salga de especificación [...] (folios del 184 al 187).

La IE muestra en sus hojas de cálculo en la línea de ajuste, la salida de inventario que se originó por la mezcla que indica Recope, sin embargo, considera prudente solicitarle un estudio detallado sobre el ajuste registrado como “Mezcla”, principalmente partiendo del hecho de que este producto tiene un costo superior al de la gasolina RON 95, por lo que no se recuperaría buena parte del valor del producto, y el solo hecho de emitir un correo meses después del hecho y hacerlo tras la solicitud del Ente Regulador, no justifica ni da respuestas detalladas al respecto.

Por otro lado, considerando que mediante la resolución RE-0018-IE-2019, la IE, dispuso, entre otras cosas, acoger parcialmente el recurso de revocatoria interpuesto por Recope, contra la resolución RE-0001-IE-2019 del 7 de enero de 2019, en el sentido de incorporar a los usuarios de GLP mezcla 70/30 el efecto del diferencial de precios de la importación de GLP rico en propano que se dio en octubre 2018, en el marco de la emergencia provocada por la huelga general que afectó el país, así como realizar un dimensionamiento de los cálculos correspondientes en la próxima fijación extraordinaria de precios de los combustibles que calcule la variable de diferencial de precios (corre agregado al expediente ET-070-2018), se muestra el efecto de la cuantificación de lo dispuesto en esta resolución:

Cuadro N.º 3
Cálculo del diferencial de precios por litro

Producto	Monto (¢ / litro) (*)
LPG (mezcla 70-30)	(29,58)
LPG (rico en propano)	0,53

(*) Los montos negativos corresponden a rebajas en las tarifas.

Fuente: IE

En el siguiente cuadro se muestra el cálculo correspondiente al diferencial de precios que regirá en marzo y abril, incorporando para el LPG (mezcla 70/30) el efecto acumulado del período en estudio y del embarque de GLP rico en propano:

Cuadro N.º 4
Cálculo del diferencial de precios por litro

Producto	Monto (¢ / litro) (*)
Gasolina RON 95	(28,64)
Gasolina RON 91	(22,98)
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre	(29,00)
Asfalto	(7,81)
LPG (mezcla 70-30)	(29,05)
Jet fuel A-1	(24,31)
Búnker	(34,16)
Búnker Térmico ICE	-
Av-gas	(26,85)

(*) Los montos negativos corresponden a rebajas en las tarifas.

Fuente: IE

5. Ajuste de la densidad para el GLP

De conformidad con lo indicado en la sección 2.1.4.1 y el Por Tanto VI y VII de la RIE-030-2018, para febrero 2019 se realiza el ajuste volumétrico en cilindros de acuerdo con la densidad media (15°C y 1 atm) en plantas envasadoras, utilizando los datos del trimestre comprendido entre noviembre de 2018 y enero 2019, tal y como se muestra a continuación:

Cuadro N.º 5
Litros de GLP por capacidad del cilindro

Capacidad del cilindro	Mezcla 70/30	Rico en propano
	Litros ajustados para febrero 2019	
4,54 kg (10 lb)	8,72	8,98
9,07 kg (20 lb)	17,43	17,96
11,34 kg (25 lb)	21,79	22,46
15,88 kg (35 lb)	30,51	31,44
18,14 kg (40 lb)	34,87	35,93
20,41 kg (45 lb)	39,23	40,42
27,22 kg (60 lb)	52,30	53,89
45,36 kg (100 lb)	87,17	89,82

Fuente: Recope, Intendencia de Energía.

6. Subsidios

6.1. Flota pesquera nacional no deportiva

De acuerdo con la aplicación de la Ley N.º 9134 de Interpretación Auténtica del artículo 45 de la Ley 7384, creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, y sus reformas, de 16 de marzo de 1994 y del artículo 123 de la Ley de Pesca y Acuicultura N.º 8436 y sus reformas de 1 de marzo de 2005 y lo establecido en la resolución RJD-230-2015, se actualiza en los precios de los combustibles, el subsidio a la flota pesquera, calculado con base en la facturación real de compra de combustible de enero de 2019.

6.1.1. Determinación del “Si” a aplicar a las tarifas vigentes:

El valor del subsidio se determinó como la suma de todas las diferencias entre lo que está incluido en la tarifa vigente y los costos que la Ley N.º 9134 indica le corresponde pagar a este sector, de tal forma que se resten esas diferencias a las tarifas vigentes, para obtener el precio final de venta.

De conformidad con lo indicado en el párrafo anterior, se detallan a continuación únicamente los componentes que se deben actualizar cada mes:

i. Margen de Recope:

El precio plantel del diésel y la gasolina para venta al sector pesquero nacional no deportivo debe contemplar, únicamente: flete marítimo, seguro marítimo y costos de trasiego, almacenamiento, distribución; éstos de acuerdo con la última información disponible, en este caso, el estudio ordinario (RIE-038-2018). De conformidad con el método de cálculo del subsidio para pescadores, primero se calcula cada uno de los componentes de costo del margen absoluto de ambos productos -gasolina RON 91 y diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre - determinados en el estudio ordinario de margen de Recope. Se obtiene como resultado los nuevos valores a incorporar al margen ajustado de pescadores, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N.º 6
Cálculo del margen de Recope a incluir en el precio de la flota pesquera
(colones por litro)

Gasolina RON 91		
Componente del margen	Margen total	Margen ajustado pescadores
Margen de Comercializador (Platt's) ¢/L	2,34	
Flete marítimo ¢/L	6,54	6,54
Seguro marítimo ¢/L	0,16	0,16
Costo marítimo ¢/L	0,42	
Pérdidas en tránsito \$/bbl	0,02	
Costos de trasiego almacenamiento y distribución	9,87	9,87
Costos de gerencias de apoyo	10,08	
Inventario de Seguridad en producto terminado	0,00	
Inversión (depreciación)	7,62	
Costos por demoras en embarques	0,32	
Transferencias	0,39	
Total	37,76	16,57

Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre

Componente del margen	Margen total	Margen ajustado pescadores
Margen de Comercializador (Platt's) ¢/L	2,34	
Flete marítimo ¢/L	6,24	6,24
Seguro marítimo ¢/L	0,17	0,17
Costo marítimo ¢/L	0,39	
Pérdidas en tránsito \$/bbl	-0,07	
Costos de trasiego almacenamiento y distribución	10,11	10,11
Costos de gerencias de apoyo	10,08	
Inventario de Seguridad en producto terminado	0,00	
Inversión (depreciación)	7,54	
Costos por demoras en embarques	0,32	
Transferencias	0,39	
Total	37,50	16,52

Nota: El margen total es el margen de comercialización de Recope determinado en la resolución RIE-038-2018, el margen ajustado a pescadores refleja los únicos tres costos listados anteriormente de conformidad con la Ley N.º 9134.

Fuente: RIE-038-2018

Por consiguiente, las tarifas propuestas de gasolina RON 91 incluirían un margen de operación de ¢37,76 por litro, mientras que el cargo por margen para la flota pesquera nacional no deportiva será de ¢16,57 por litro, generando un diferencial de ¢21,19 por litro.

Para el caso del diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre, las tarifas propuestas incluirían un margen de operación de ¢37,50 por litro, mientras que el margen para la flota pesquera nacional no deportiva será de ¢16,52 por litro, generando un diferencial de ¢20,98 por litro.

ii. Monto de la factura de compra del combustible:

Se calculó las diferencias entre los precios FOB vigentes a la fecha de este informe y los precios promedio simple facturados de los embarques recibidos en enero de 2019, según facturas adjuntas al expediente.

Cuadro N.º 7
Diferencia entre el Pri_{ij} y el precio facturado
(Facturas enero 2019)

Facturas pagadas en el último mes	Producto	Fecha de factura	\$ / bbl	Bbls	Total \$	Beneficiario	Embarque	
	Diésel 50 ppm de azufre	17/1/2019	\$65,49	230 308,70	15 083 005,80	Valero Marketing and Supply Co	002D062019	
	Diésel 50 ppm de azufre	21/1/2019	\$70,53	228 929,13	16 145 509,56	Valero Marketing and Supply Co	004D072019	
	Diésel 50 ppm de azufre	24/1/2019	\$74,20	227 093,73	16 851 220,93	Valero Marketing and Supply Co	010D082019	
	Gasolina RON 91	18/1/2019	\$50,46	139 966,12	7 062 071,82	Motiva Enterprises LLC	001M032019	
	Gasolina RON 91	30/1/2019	\$56,62	149 951,64	8 490 354,82	Atlantic Trading & Marketing, Inc	008G032019	
	Gasolina RON 91	8/1/2019	\$54,09	140 661,62	7 607 752,25	Atlantic Trading & Marketing, Inc	126G022018	
	Gasolina RON 91	7/2/2019	\$56,43	109 834,00	6 197 593,16	Motiva Enterprises LLC	012M042019	
	Diferencial de precios promedio							
	Producto	Pri promedio facturado \$	Pri vigente \$	dif /bbl \$	dif /L \$	dif /L ¢ (*)		
Diésel 50 ppm de azufre	\$70,05	\$70,73	-\$0,68	\$0,00	-2,62			
Gasolina RON 91	\$54,32	\$55,93	-\$1,60	-\$0,01	-6,17			

(*) Tipo de cambio promedio: #612,99/US\$

iii. *Subsidio por litro de enero 2019:*

Como resultado de lo anterior, el siguiente cuadro muestra el subsidio por litro para la gasolina RON 91 y diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre que vende Recope a la flota pesquera nacional no deportiva identificando el monto para cada ítem considerado:

Cuadro N.º 8
Cálculo del subsidio para la gasolina RON 91
y el Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre
para la flota pesquera nacional no deportiva
-enero de 2019-
(colones por litro)

Componentes del SC _{i,j} de gasolina RON 91 pescadores		Componentes del SC _{i,j} de diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre pescadores	
Pri -facturación-	-6,17	Pri -facturación-	-2,62
K	-21,19	K	-20,98
SC_{i,j}	-27,36	SC_{i,j}	-23,60

Fuente: Intendencia de Energía

6.1.2. Asignación del subsidio cruzado a otros combustibles:

De conformidad con la resolución RJD-230-2015, el subsidio del combustible *i* lo pagarán únicamente los combustibles no subsidiados en el ajuste extraordinario *j*, a menos de que la normativa vigente al momento del cálculo estipule lo contrario. La participación del pago del subsidio será distribuida de conformidad con la ecuación 18 de la metodología vigente.

Dicha ecuación establece para ventas estimadas de productos mayores que cero; en caso de que no se estimen ventas de alguno de los productos *i*, el porcentaje del subsidio a aplicar sería cero.

6.1.3. Cálculo del valor total del subsidio

Una vez obtenido el monto del subsidio para pescadores por litro de gasolina RON 91 y diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre, éste se multiplica por las ventas estimadas de esos productos durante marzo de 2019, con el fin de determinar el monto total a subsidiar.

Como resultado, el monto por litro a subsidiar, en febrero para la gasolina RON 91 para pescadores es de ¢27,36 y para el diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre de pescadores ¢23,60, tal y como se detalla a continuación.

Cuadro N.º 9
Cálculo del subsidio total a la flota pesquera nacional no deportiva
(colones)

Subsidio	Monto del subsidio por litro a trasladar en marzo	Ventas estimadas a pescadores marzo¹	Subsidio a pescadores
Gasolina RON 91	-27,36	693 286	-18 968 465
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre	-23,60	1 687 722	-39 834 717
Total		2 381 008,00	-58 803 182

Fuente: Intendencia de Energía

De conformidad con el cuadro anterior, el subsidio total a pescadores asciende a ¢58 803 182 a trasladar en marzo de 2019.

Una vez obtenido este monto se distribuye proporcionalmente, según las ventas estimadas de marzo de 2019 de todos los demás productos que expende Recope, con el fin de obtener el valor total del subsidio ($PS_{i,j}$), tal y como se muestra a continuación:

Cuadro N.º 10
Cálculo de la asignación del subsidio por producto

Producto	Recope: ventas enero 2019 ^a		Subsidio total ^c	Ventas marzo 2019 ^d	Subsidio €/litro
	Litros	Relativo ^b			
Gasolina RON 95	53 542 052	18,86	11 089 607	56 443 873	0,20
Gasolina RON 91	48 870 662	17,21	10 122 070	52 636 439	0,19
Gasolina RON 91 pescadores	760 469	-	-18 968 465	693 286	-27,36
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre	99 476 519	35,04	20 603 533	110 827 064	0,19
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre pescadores	1 458 286	-	-39 834 717	1 687 722	-23,60
Keroseno	582 846	0,21	120 719	550 902	0,22
Búnker	8 740 946	3,08	1 810 421	10 098 388	0,18
Búnker Térmico ICE	0	0,00	0	0	-
Ifo-380	0	0,00	0	0	-
Asfalto	10 727 966	3,78	2 221 972	11 222 705	0,20
Diésel pesado o gasóleo	1 054 084	0,37	218 321	1 103 014	0,20
Emulsión asfáltica rápida (RR)	1 491 457	0,53	308 910	1 359 975	0,23
Emulsión asfáltica lenta (RL) e/	53 579	0,02	11 097	79 494	0,14
LPG (70-30)	28 981 899	10,21	6 002 718	28 769 521	0,21
Av-Gas	133 867	0,05	27 726	152 554	0,18
Jet Fuel -A1	30 253 477	10,66	6 266 087	28 743 416	0,22
Nafta pesada	0	0,00	0	0	-
Total	286 128 109	100,00	0	304 368 354	

a/ Ventas reales preliminares, folio 27 ET-013-2019.

b/ No incluye ventas a pescadores.

c/ Los montos negativos corresponden al subsidio al precio de los combustibles para la flota pesquera nacional no deportiva, mientras que los montos positivos corresponden al monto adicional que se debe cobrar en los demás productos, diferentes al destinado a la flota pesquera nacional no deportiva, para financiar el subsidio que se otorga al combustible que se le vende a ésta.

d/ Ventas estimadas ET-013-2019.

Fuente: Intendencia de Energía.

6.2. Política sectorial mediante Decreto Ejecutivo N.° 39437-MINAE

Al actualizarse en este estudio tarifario las variables consideradas para mantener la relación con respecto al precio internacional similar a la vigente en el período 2008-2015 que indica la Política Sectorial dictada mediante Decreto Ejecutivo N.° 39437-MINAE, se debe recalcular el subsidio correspondiente:

Cuadro N.° 11
Porcentaje promedio del P_{rij} sobre el precio plantel, 2008-2015

Producto	Porcentaje promedio P_{rij} en PPC_i 2008-2015	Precio FOB	Precio plantel sin impuesto con nueva metodología	Precio plantel manteniendo la relación	Subsidio
Búnker	86,00	227,41	260,35	264,52	4,17
Búnker Térmico ICE	85,00	250,76	284,22	295,43	11,20
Asfalto	85,00	221,01	323,17	260,81	-62,37
Emulsión asfáltica rápida RR	85,00	144,24	225,36	170,41	-54,95
Emulsión asfáltica lenta RL	85,00	143,65	228,80	169,72	-59,09
LPG (70-30)	86,00	116,55	155,15	135,18	-19,97
LPG (rico en propano)	89,00	107,46	157,43	120,51	-36,93

Fuente: Intendencia de Energía

El valor total se obtuvo multiplicando el valor del subsidio para cada producto por las ventas estimadas para marzo de 2019, el monto total a subsidiar asciende a $\$$ 1 311 767 064,74 tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N.° 12
Valor total del subsidio por producto

Producto	Subsidio cruzado	Ventas estimadas marzo 2019	Valor total del subsidio
Búnker	4,17	10 098 387,61	42 085 490,20
Búnker Térmico ICE	11,20	-	-
Asfalto	-62,37	11 222 705,46	(699 923 457,98)
Emulsión asfáltica rápida RR	-54,95	1 359 975,00	(74 735 134,59)
Emulsión asfáltica lenta RL	-59,09	79 494,00	(4 696 980,66)
LPG (70-30)	-19,97	28 769 520,67	(574 496 981,70)
LPG (rico en propano)	-36,93	-	-
Total			(1 311 767 064,74)

Fuente: Intendencia de Energía

De acuerdo con la política sectorial y la metodología vigente, este monto debe ser distribuido entre los demás productos no subsidiados, proporcionalmente a las ventas estimadas para marzo de 2019.

Cuadro N.° 13
Cálculo de la asignación del subsidio según la política sectorial
marzo 2019

Producto	Ventas estimadas (en litros) marzo 2019	Valor relativo	Total del subsidio (en colones)	Asignación del subsidio (¢/L)
Gasolina RON 95	56 443 873,17	22,54	295 624 143,55	5,24
Gasolina RON 91	52 636 439,28	21,02	275 682 751,83	5,24
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre	110 827 064,06	44,25	580 455 487,06	5,24
Diésel marino	-	0,00	-	0,00
Keroseno	550 902,48	0,22	2 885 345,45	5,24
Búnker	10 098 387,61	-	-	-
Búnker Térmico ICE	-	-	-	-
IFO 380	-	0,00	-	0,00
Asfalto	11 222 705,46	-	-	-
Diésel pesado o gasóleo	1 103 014,40	0,44	5 777 025,36	5,24
Emulsión asfáltica rápida RR	1 359 975,00	-	-	-
Emulsión asfáltica lenta RL	79 494,00	-	-	-
LPG (70-30)	28 769 520,67	-	-	-
LPG (rico en propano)	-	-	-	-
Av-Gas	152 553,75	0,06	798 998,53	5,24
Jet fuel A-1	28 743 415,75	11,48	150 543 312,95	5,24
Nafta Pesada	-	0,00	-	0,00
Total	301 987 345,63	100	1 311 767 064,74	
Total (sin ventas de subsidiados)	250 457 262,88			

Fuente: Intendencia de Energía

VARIABLES CONSIDERADAS Y RESULTADOS

El siguiente cuadro muestra el resumen de las variables que componen los precios en plantel de distribución de Recope:

Cuadro N.º 14
Precio plantel sin impuesto final con las variables consideradas

PRODUCTO	Precio FOB Actual ⁽¹⁾	Precio FOB Actual	Margen de operación de Recope	Otros ingresos	Otros ingresos prorrateados	Diferencial de precio	Ajuste por gastos de operación	Ajuste por otros ingresos	Canon de regulaciones	Subsidio específico	Pescadores			Política Sectorial			Precio Plantel (sin impuesto)
											Subsidio cruzado	Asignación del subsidio	Subsidio cruzado	Asignación del subsidio	Rendimiento sobre base tarifaria		
											¢ / litro	¢ / litro	¢ / litro	¢ / litro	¢ / litro		
Gasolina RON 95	62,50	240,98	38,20	0,00	-0,01	-28,64	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,20	0,00	5,24	9,44	265,58	
Gasolina RON 91	59,87	230,83	37,76	0,00	-0,01	-22,98	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,19	0,00	5,24	9,67	260,85	
Gasolina RON 91 pescadores	59,87	230,83	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,36	-27,36	0,00	0,00	0,00	241,23	
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre	77,51	298,84	37,50	0,00	-0,01	-29,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,19	0,00	5,24	9,34	322,25	
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre pescadores	77,51	298,84	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,60	-23,60	0,00	0,00	0,00	312,73	
Diésel marino	88,75	342,17	29,95	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,27	
Keroseno	77,57	299,08	39,11	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,22	0,00	5,24	8,50	352,30	
Búnker	58,98	227,41	59,86	0,00	-0,01	-34,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,18	4,17	0,00	6,92	264,52	
Búnker Térmico ICE	65,04	250,76	31,40	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	1,91	295,43	
IFO 380	57,49	221,67	58,99	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	285,03	
Asfalto	57,32	221,01	96,73	0,00	-0,01	-7,81	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,20	-62,37	0,00	12,91	260,81	
Diésel pesado o gasóleo	66,15	255,06	32,71	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,20	0,00	5,24	6,33	299,68	
Emulsión asfáltica rápida RR	37,41	144,24	65,16	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,23	-54,95	0,00	15,59	170,41	
Emulsión asfáltica lenta RL	37,26	143,65	69,28	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,14	-59,09	0,00	15,59	169,72	
LPG (mezcla 70-30)	30,23	116,55	55,19	0,00	-0,01	-29,05	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,21	-19,97	0,00	12,10	135,18	
LPG (rico en propano)	27,87	107,46	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	-36,93	0,00	0,00	120,51	
Av-Gas	100,33	386,83	222,05	0,00	-0,01	-26,85	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,18	0,00	5,24	27,87	615,46	
Jet fuel A-1	77,57	299,08	68,22	0,00	-0,01	-24,31	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,22	0,00	5,24	13,14	361,73	
Nafta Pesada	72,44	279,31	30,91	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	313,89	

⁽¹⁾ Fuente: Platts, a excepción del IFO 380, asfalto, diésel marino y emulsión asfáltica.

Tipo de cambio promedio: ¢612,99 Nota: Las diferencias en los decimales se deben a efectos de redondeo.

7. Impuesto único

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.º 41524-H, publicado en el Alcance N°28 a La Gaceta N°27 del 7 de febrero de 2019, el Ministerio de Hacienda, actualizó el impuesto único a los combustibles según el siguiente detalle:

Cuadro N.º 15
Impuesto único a los combustibles

Tipo de combustible	Impuesto en colones por litro
Gasolina súper	257,75
Gasolina plus 91	246,25
Diésel 50 ppm de azufre	145,50
Asfalto	50,00
Emulsión asfáltica	37,75
Búnker	23,75
LPG -mezcla 70-30	50,00
Jet A-1	147,75
Av-gas	246,25
Keroseno	70,25
Diésel pesado	48,00
Nafta pesada	35,50

Fuente: Decreto Ejecutivo N.º 41524-H, publicado en La Gaceta N°22 del 31 de enero de 2019

8. Banda de precios para los combustibles que vende Recope en puertos y aeropuertos

La fijación del precio plantel de Recope en puertos y aeropuertos está dada por una banda. El rango está limitado por el cálculo de una desviación estándar, tomando como base los últimos 300 datos de precios FOB en dólares por barril tomados de Platt's. Para el caso del Jet fuel A-1 los valores son tomados de la referencia pipeline de acuerdo con el fundamento dado en la resolución RJD-230-2015. Para el Av-gas se considera el promedio de las referencias Borger TX (código DA398KS), Pasadena Tx (código DA416ZX) y Baton Rouge LA (código DA115KS) y para el IFO-380 la información es suministrada por Recope.

A la desviación estándar obtenida se le debe sumar o restar al precio internacional $-Pr_{ij}$, para establecer así su rango de variación. Una vez publicado en La Gaceta, Recope puede ajustar el Pr_{ij} diariamente según la fuente de información utilizada; luego adicionar los restantes factores que componen el precio y así determinar el precio final de los combustibles en puertos y aeropuertos, siempre y cuando este nuevo Pr_{ij} determinado por Recope, no esté fuera de la banda establecida.

En el cuadro siguiente se muestran las desviaciones estándar para cada combustible, así como los demás valores que permiten determinar la banda de precio.

Cuadro N.º 16
Rangos de variación de los precios de venta para IFO-380, AV-GAS y Jet-fuel

Producto	Desviación estándar \$/ lit	Desviación estándar ¢ / lit	Pr _{ij} ¢ / lit	K _i ¢ / lit	D _i ¢ / lit	PS pesquera ¢ / lit	PS Sectorial ¢ / lit	Precio al consumidor Límite	
								inferior ¢ / lit	Superior ¢ / lit
IFO-380	0,04	24,31	221,67	58,99	0,00	0,00	0,00	260,75	309,38
AV – GAS	0,08	48,31	386,83	222,05	-26,85	0,18	5,24	567,18	663,79
JET FUEL A-1	0,05	27,73	299,08	68,22	-24,31	0,22	5,24	334,03	389,48

Tipo de cambio promedio: ϕ 612,99/US\$
Fuente: Intendencia de Energía

La variación entre el cálculo presentado por Recope y el obtenido por esta Intendencia responde a la diferencia en el efecto de los subsidios a calcular.

9. Márgenes de comercialización

Según la resolución RIE-062-2013, publicada en el Alcance Digital N.º 118 a La Gaceta N.º 124 el 28 de junio de 2013, el margen de comercialización para estaciones de servicio mixtas y marinas a partir del 1 de mayo de 2015, se estableció en ϕ 48,3128 por litro.

El margen de comercialización del distribuidor sin punto fijo de venta - peddler- fue establecido mediante resolución RJD-075-96 de 4 de setiembre de 1996, en un monto de ϕ 3,746 por litro.

Para el caso del flete de productos limpios, se fijó un monto promedio de ¢9,6405 por litro, mediante resolución RIE-065-2018. Para el caso del jet-fuel y el Av-gas, se estableció un margen de comercialización para la estación de servicio -con flete incluido- de ¢16,2697 por litro, mediante resolución RIE-065-2018 del 24 de julio de 2018, publicada en el Alcance Digital N.º139 a La Gaceta N.º139 el 1 de agosto de 2018.

Para el caso del flete de productos negros -sucios-, se considera la fórmula establecida en resolución RIE-079-2014 del 24 de octubre de 2014 publicada en el Alcance digital N.º 61 a La Gaceta N.º 208 del 29 de octubre de 2014.

Según la resolución RE-0074-IE-2018 del 14 de agosto de 2018, publicada en el Alcance Digital N.º 148 a La Gaceta N.º 152 del 22 de agosto de 2018, el margen de comercialización para el envasador de GLP se estableció en ¢53,036 por litro para el 2019.

Según la resolución RE-0017-IE-2019 del 22 de febrero de 2019, el margen para el distribuidor de cilindros de GLP se estableció en ¢54,519 por litro y el margen de comercializador de cilindros de GLP, se estableció en ¢62,692 por litro.

III. CONSULTA PÚBLICA

La DGAU remitió el informe de oposiciones y coadyuvancias, mediante el oficio IN-0042-DGAU-2019 del 21 de febrero de 2019, el cual indica que, vencido el plazo establecido, [...] no se recibieron posiciones [...] –corre agregado al expediente-.

IV. CONCLUSIONES

- 1. De conformidad con la resolución RJD-230-2015, en esta fijación extraordinaria se actualizaron las siguientes variables: 1. Precio promedio FOB de referencia internacional, 2. Tipo de cambio, 3. Subsidios y 4. Diferencial de precios.*

2. *Los precios FOB de importación registraron un aumento, lo anterior se explica por las recientes condiciones climáticas que sufrió Estados Unidos, cuyos efectos son transmitidos de manera inmediata sobre los precios de los productos finales. Adicionalmente, aconteció cambios geopolíticos que provocaron una menor oferta de crudo.*
 3. *El tipo de cambio durante el periodo de revisión de precios, registro una depreciación de ϕ 3,21 por dólar, respecto al utilizado en la fijación anterior, afectando por ende los precios internos que son expresados en colones.*
 4. *Se calculó el diferencia del precios ($D_{ai,j}$) que regirá en marzo y abril, utilizando como base para su cálculo, la diferencia entre el costo FOB por litro promedio de combustible en tanque versus el precio FOB promedio de referencia del combustible i para el ajuste j , de noviembre y diciembre 2018. En promedio el diferencial de precios calculado es de $-\phi$ 25,42.*
 5. *Para esta fijación se incorpora la actualización del margen de los distribuidores y comercializadores de cilindros de gas licuado de petróleo.*
 6. *Los precios de los productos deben modificarse de conformidad con lo que se expone en el apartado siguiente [...].*
- II. Que de conformidad con lo señalado en los resultandos y considerandos precedentes y en el mérito de los autos, lo procedente es, fijar los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos, tal y como se dispone;

**POR TANTO
EL INTENDENTE DE ENERGÍA
RESUELVE:**

- I. Fijar el diferencial de precios que regirá durante marzo y abril de 2019, como se muestra a continuación:

Cálculo del diferencial de precios por litro

Producto	Monto (¢ / litro) (*)
Gasolina RON 95	(28,64)
Gasolina RON 91	(22,98)
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre	(29,00)
Asfalto	(7,81)
LPG (mezcla 70-30)	(29,05)
Jet fuel A-1	(24,31)
Búnker	(34,16)
Búnker Térmico ICE	-
Av-gas	(26,85)

(*) Los montos negativos corresponden a rebajas en las tarifas.

Fuente: Intendencia de Energía.

II. Fijar los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos, según el siguiente detalle:

a. Precios en planteles de abasto:

PRECIOS PLANTEL RECOPE -colonos por litro-

Producto	Precio sin impuesto	Precio con impuesto ⁽³⁾
Gasolina RON 95 ⁽¹⁾	265,58	523,33
Gasolina RON 91 ⁽¹⁾	260,85	507,10
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre ⁽¹⁾	322,25	467,75
Diésel marino	372,27	517,77
Keroseno ⁽¹⁾	352,30	422,55
Búnker ⁽²⁾	264,52	288,27
Búnker Térmico ICE ⁽²⁾	295,43	319,18
IFO 380 ⁽²⁾	285,03	285,03
Asfalto ⁽²⁾	260,81	310,81
Diésel pesado o gasóleo ⁽²⁾	299,68	347,68
Emulsión asfáltica rápida RR ⁽²⁾	170,41	208,16
Emulsión asfáltica lenta RL ⁽²⁾	169,72	207,47
LPG (mezcla 70-30)	135,18	185,18
LPG (rico en propano)	120,51	170,51
Av-Gas ⁽¹⁾	615,46	861,71
Jet fuel A-1 ⁽¹⁾	361,73	509,48
Nafta Pesada ⁽¹⁾	313,89	349,39

⁽¹⁾ Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida mediante resolución RIE-065-2018 del 24 de julio de 2018.

⁽²⁾ Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida en resolución RIE-079-2014 del 24 de octubre de 2014 publicada en el Alcance digital N.º 61 de La Gaceta N.º 208 del 29 de octubre de 2014.

⁽³⁾ Se exceptúa del pago de este impuesto, el producto destinado a abastecer las líneas aéreas y los buques mercantes o de pasajeros en líneas comerciales, todas de servicio internacional; asimismo, el combustible que utiliza la Asociación Cruz Roja Costarricense, así como la flota de pescadores nacionales para la actividad de pesca no deportiva, de conformidad con la Ley N.º 7384 y el artículo 1 de la Ley N.º 8114

b. Precios a la flota pesquera nacional no deportiva exonerado del impuesto único a los combustibles:

**PRECIOS A LA FLOTA PESQUERA NACIONAL NO DEPORTIVA ⁽¹⁾
-colones por litro-**

Producto	Precio Plantel sin impuesto
Gasolina RON 91	241,23
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre	312,73

(1) Según lo dispuesto en la Ley 9134 de interpretación Auténtica del artículo 45 de la Ley 7384 de INCOPECA y la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributarias

c. Precios al consumidor final en estación de servicio con punto fijo:

**PRECIOS CONSUMIDOR FINAL EN ESTACIONES DE SERVICIO
-colones por litro-**

Producto	Precio con impuesto ⁽³⁾
Gasolina RON 95 ⁽¹⁾	581,00
Gasolina RON 91 ⁽¹⁾	565,00
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre ⁽¹⁾	526,00
Keroseno ⁽¹⁾	481,00
Av-Gas ⁽²⁾	878,00
Jet fuel A-1 ⁽²⁾	526,00

⁽¹⁾ El precio final contempla un margen de comercialización de 48,3128/litro y flete promedio de 9,6405/litro, para estaciones de servicio terrestres y marinas, establecidos mediante resoluciones RIE-062-2013 de 25 de junio de 2013 y RIE-065-2018 del 24 de julio de 2018, respectivamente.

⁽²⁾ El precio final para las estaciones aéreas contempla margen de comercialización total promedio -con transporte incluido de 16,2697/litro, establecidos mediante resolución RIE-065-2018 del 24 de julio de 2018.

⁽³⁾ Redondeado al colón más próximo.

d. Precios del comercializador sin punto fijo -consumidor final-:

**PRECIOS DEL DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLES SIN PUNTO
FIJO
A CONSUMIDOR FINAL
-colones por litro-**

Producto	Precio con impuesto ⁽¹⁾
Gasolina RON 95	527,07
Gasolina RON 91	510,85
Diésel para uso automotriz de 50 ppm de azufre	471,49
Keroseno	426,29
Búnker	292,02
Asfalto	314,55
Diésel pesado	351,42
Emulsión asfáltica rápida RR	211,90
Emulsión asfáltica lenta RL	211,21
Nafta Pesada	353,13

⁽¹⁾ Incluye un margen total de 3,746 colones por litro, establecido mediante resolución RJD-075-96 de 4 de setiembre de 1996.

Se excluyen el IFO 380, Gas Licuado del Petróleo, Av-gas y Jet A-1 general de acuerdo con lo dispuesto en Decreto 31502-MINAE-S, publicado en La Gaceta N.º 235 del 5 de diciembre de 2003 y Voto constitucional 2005-02238 del 2 de marzo de 2005.

**e. Precios del gas licuado del petróleo –LPG- al consumidor final
mezcla 70-30:**

**PRECIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO POR TIPO DE ENVASE Y CADENA DE
DISTRIBUCION**

-mezcla propano butano-

-en colones por litro y cilindros incluye impuesto único- ⁽¹⁾

Tipos de envase	Precio a facturar por el envasador ⁽²⁾	Precio a facturar por distribuidor y agencias ⁽³⁾	Precio a facturar por detallistas ⁽⁴⁾
Tanques fijos -por litro-	238,22	(*)	(*)
Cilindro de 4,54 kg (10 lb)	2 077,00	2 552,00	3 098,00
Cilindro de 9,07 kg (20 lb)	4 153,00	5 104,00	6 197,00
Cilindro de 11,34 kg (25 lb)	5 191,00	6 380,00	7 746,00
Cilindro de 15,88 kg (35 lb)	7 268,00	8 931,00	10 844,00
Cilindro de 18,14 kg (40 lb)	8 306,00	10 207,00	12 393,00
Cilindro de 20,41 kg (45 lb)	9 345,00	11 483,00	13 942,00
Cilindro de 27,22 kg (60 lb)	12 459,00	15 311,00	18 590,00
Cilindro de 45,36 kg (100 lb)	20 766,00	25 518,00	30 983,00
Estación de servicio mixta (por litro) ⁽⁵⁾	(*)	(*)	287,00

(*) No se comercializa en esos puntos de ventas.

(1) Precios máximos de venta según resolución RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta N.º 65 del 2 de abril de 2001.

(2) Incluye el margen de envasador de 53,036/litro, establecido mediante resolución RE-0074-IE-2018 del 14 de agosto de 2018, publicada en el Alcance Digital N.º 148 a La Gaceta N.º 152 del 22 de agosto de 2018.

(3) Incluye el margen de distribuidor de cilindros de GLP de ¢54,519/litro establecido mediante resolución RE-0017-IE-2019 del 22 de febrero de 2019

(4) Incluye el margen de comercializador de cilindros de GLP de ¢62,692/litro establecido mediante resolución RE-0017-IE-2018 del 22 de febrero de 2018

(5) Incluye el margen de envasador de 53,036/litro, establecido mediante resolución RE-0074-IE-2018 del 14 de agosto de 2018 y 48,3128/litro para estación de servicio mixta, establecido mediante resolución RIE-062-2013 del 25 de junio de 2013.

f. Precios del gas licuado del petróleo –LPG- rico en propano al consumidor final:

PRECIO DE GAS LICUADO DE PETROLEO RICO EN PROPANO POR TIPO DE ENVASE

Y CADENA DE DISTRIBUCION

-en colones por litro y cilindros incluye impuesto único-⁽¹⁾

Tipos de envase	Precio a facturar por el envasador⁽²⁾	Precio a facturar por distribuidor y agencias⁽³⁾	Precio a facturar por detallistas⁽⁴⁾
Tanques fijos <i>-por litro-</i>	223,54	(*)	(*)
Cilindro de 4,54 kg (10 lb)	2 008,00	2 498,00	3 061,00
Cilindro de 9,07 kg (20 lb)	4 016,00	4 995,00	6 121,00
Cilindro de 11,34 kg (25 lb)	5 020,00	6 244,00	7 652,00
Cilindro de 15,88 kg (35 lb)	7 028,00	8 741,00	10 712,00
Cilindro de 18,14 kg (40 lb)	8 031,00	9 990,00	12 243,00
Cilindro de 20,41 kg (45 lb)	9 035,00	11 239,00	13 773,00
Cilindro de 27,22 kg (60 lb)	12 047,00	14 985,00	18 364,00
Cilindro de 45,36 kg (100 lb)	20 079,00	24 976,00	30 606,00
Estación de servicio mixta <i>-por litro-⁽⁵⁾</i>		(*)	272,00

(*) No se comercializa en esos puntos de ventas.

(1) Precios máximos de venta según resolución RRG-1907-2001 publicada en La Gaceta N.º 65 del 2 de abril de 2001.

(2) Incluye el margen de envasador de 53,036/litro, establecido mediante resolución RE-0074-IE-2018 del 14 de agosto de 2018, publicada en el Alcance Digital N.º 148 a La Gaceta N.º 152 del 22 de agosto de 2018.

(3) Incluye el margen de distribuidor de cilindros de GLP ϕ 54,519/litro establecido mediante resolución RE-0017-IE-2019 del 22 de febrero de 2019

(4) Incluye el margen de comercializador de cilindros de GLP de ϕ 62,692/litro establecido mediante resolución RE-0017-IE-2018 del 22 de febrero de 2018

(5) Incluye el margen de envasador de 53,036/litro, establecido mediante resolución RE-0074-IE-2018 del 14 de agosto de 2018 y 48,3128/litro para estación de servicio mixta, establecido mediante resolución RIE-062-2013 del 25 de junio de 2013.

g. Para los productos IFO-380, Av-gas y jet fuel que expende Recope en puertos y aeropuertos, los siguientes límites a la banda tarifaria:

Rangos de variación de los precios de venta para IFO 380, Av-gas y Jet fuel A-1

Producto	¢/L	
	Límite inferior	Límite superior
IFO 380	260,75	309,38
Av-gas	567,18	663,79
Jet fuel A-1	334,03	389,48
<i>Tipo de cambio</i>	<i>ϕ612,99</i>	

- III. Indicar a Recope que se mantienen los requerimientos de información establecidos en resoluciones anteriores.
- IV. Remitir en un plazo máximo de un mes, contados a partir de la notificación de la resolución, un informe técnico detallado acerca de las pruebas realizadas al Av gas en donde se observó la salida de especificación del combustible, con detalle de la cadena de custodia del producto identificando el momento y las razones por las que el producto se salió de especificación en una cantidad igual o similar a la que se importó en diciembre. Así como adjuntar los certificados de calidad del lote de producto en la importación, para todo el período que se haya detectado este evento.
- V. Remitir en un plazo máximo de un mes, contados a partir de la notificación de la resolución una copia de los términos de referencia para el contrato de compra del etanol que será utilizado para el proceso de mezcla con la gasolina RON 95.
- VI. La presente resolución modifica los precios establecidos en la resolución RE-0017-IE-2019 del 22 de febrero de 2019 e incorpora lo dispuesto en el “Por Tanto I y II” de la resolución RE-0018-IE-2019 del 22 de febrero de 2019.
- VII. Establecer que los precios rigen a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

En cumplimiento de lo que ordenan los artículos 245 y 345 de la Ley General de la Administración Pública (*LGAP*) se informa que contra esta resolución pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el extraordinario de revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante el Intendente de Energía, a quien corresponde resolverlo y los de apelación y de revisión podrán interponerse ante la Junta Directiva, a la que corresponde resolverlos.

De conformidad con el artículo 346 de la *LGAP*, los recursos de revocatoria y de apelación deberán interponerse en el plazo de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación y, el extraordinario de revisión, dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de dicha ley.

PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE

MARCO CORDERO ARCE
INTENDENTE DE ENERGÍA

NOTIFICACIONES

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL

EDICTOS DE TRÁNSITO

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL, SAN JOSÉ, A LAS OCHO HORAS DEL VEINTIDOS DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

A SOLICITUD DE DESPACHOS JUDICIALES SE PROCEDE A NOTIFICAR POR EDICTO A LAS PERSONAS, FÍSICAS O JURÍDICAS, PROPIETARIAS DE VEHÍCULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN:

JUZGADO DE TRÁNSITO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN CARLOS

N° EXPEDIENTE	PROPIETARIO	N° CEDULA	N° PLACA	N° CHASIS
18-000748-0742-TR	MARVIN MENDOZA SAENZ	RESIDENCIA 155802269015	708947	EL420020804
18-000742-0742-TR	ESTIVEN CUBERO MORALES	207720990	MOT-596124	LBMPCML32H1003959
18-000734-0742-TR	GUSTAVO ADOLFO FAIT BRAÑA	106850468	831867	KMHHT61DAAU025861
18-000734-0742-TR	JEFFREY VINICIO VARGAS VARGAS	205260421	CL226802	MM7UNY0W380655673
18-000728-0742-TR	BCT ARRENDADORA SOCIEDAD ANÓNIMA	CÉDULA JURÍDICA 3101136572	CL280711	MR0ES12G1F3041780
18-000712-0742-TR	SAMIR ANTONIO MARTÍNEZ DÍAZ	DE RESIDENCIA 155818893707	365057	1NXAE92E5KZ020237
18-000738-0742-TR	QUÍMICAS MUNDIALES ANÓNIMA	SOCIEDAD JURÍDICA 3101020272	CL 256997	MR0DR22G400010674
18-000745-0742-TR	BIMBO DE COSTA RICA ANONIMA	SOCIEDAD 3-101-148887	CL-251563	MR0CS12G800092080
18-000743-0742-TR	TOSTADORA EL DORADO SA Ahora ALIMENTOS Y BEBIDAS REGIONALES SA	3-101-305301	C-152978	JAAN1R71P97100022

JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE MENOR CUANTÍA DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA

N° EXPEDIENTE	PROPIETARIO	N° CEDULA	N° PLACA	N° CHASIS
18-000930-1756-TR	SOCIEDAD RENTACAR CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	3101011098	BMH231	MR2B29F37H1026554
18-000930-1756-TR	JEGAZE Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	3101652630	MOT 593326	LBMPCML3XH1004342
18-000931-1756-TR	GOMEZ SOTO ALBERTO	401270266	GYK856	KNADN412BH6026547
18-000937-1756-TR	DESPACHOS RAPIDOS COSTA RICA DERCO SOCIEDAD ANONIMA	3101043427	BLC698	MA3FB32S3H0861752
18-000937-1756-TR	GOYENAGA VILCHEZ ROSIBEL	104670520	BBD336	KM8JM12B75U082236
18-000938-1756-TR	MICROBUSES RAPIDOS HEREDIANOS SOCIEDAD ANONIMA	3101070526	HB 003440	9532L82W8FR429385
18-000938-1756-TR	VILLALOBOS MADRIGAL JOSE DOMINGO	400770885	TH 000001	KMHCG45C33U429208
18-000939-1756-TR	COUNTRY HOUSE SOCIEDAD ANONIMA	3101337287	CL 229425	MNCDSFE408W709805
18-000939-1756-TR	CUBIERTAS INTEGRALES AG LIMITADA	3102347971	CL 255724	KMFGA17LPBC153716
18-000943-1756-TR	HERNANDEZ MONTERO ALFREDO	400790118	MOT 505923	FR3PCMGD1GA000298
18-000945-1756-TR	SALAS CHAVES MARGARITA	107980414	NMT210	WBAJG1108JEE09792
18-000945-1756-TR	ARAYA BRENES RAMON MARIA	900280308	BFH168	K8601P036736
18-000946-1756-TR	ARRENDADORA DESYFIN SOCIEDAD ANONIMA	3101538448	CSG333	WBAKT0101H0U30417
18-000946-1756-TR	BRENES SANCHEZ WENDY ALICIA	401880897	JLC018	KM8JM12BX7U526888

18-000949-1756-TR	MORA LOPEZ JUAN RAFAEL	202880339	JRM453	MMBGUKS10JH002393
18-000949-1756-TR	BIMBO DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	3101148887	CL 243771	MR0CS12G100063942
18-000954-1756-TR	INDUSTRIAS VELLETRI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	3102721614	C 164166	JHHUCL2H4EK009239
18-000955-1756-TR	CARRILLO AVALOS PABLO ANTONIO	115470757	NGZ070	3N1CN7AD9ZK145975
18-000957-1756-TR	INVERSIONES GIRASOL LZ SOCIEDAD ANONIMA	3101624805	CL 351403	9BD578742G7981312
18-000958-1756-TR	VERASTEGUI ARCAALVARO ANDRE	800910024	MOT 448565	ME4KC1940F8015351
19-000007-1756-TR	DISITALI DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES ITALIANOS SOCIEDAD ANONIMA	3101568979	545975	9BD17216243087581
18-000960-1756-TR	MARÍA DEL CARMEN SOLÍS BLANCO	105130145	BHY618	KMHDN41AP1U294453
18-000961-1756-TR	BAC SAN JOSÉ LEASING S.A	3101083308	CI 292386	LZWCCAGA3G6030462
18-000790-1756-TR	ESQUIVEL REYES ELIZABETH ALICIA	401940177	BKD950	5YFBUWHXGP411602
19-000014-1756-TR	JOSE MIGUEL BLANCO SABORIO	113360321	740683	KL1TD51Y98B119577
18-000971-1756-TR	SCOTIA LEASING COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	3101134446	C 169748	JHDFG1JPUHXX20470
18-000981-1756-TR	TRANSPORTE PLAYA TAMARINDO-TRANSPLATA LIMITADA	3102483818	AB 4034	JTF5K22P700001484
19-000001-1756-TR	CASTILLO MORA WALBERTO	109260891	739942	K890XP009564

18-000956-1756-TR	RAMIREZ MOLINA PAMELA DE LOS ANGELES	113820573	MOT515119	LBMPCML37H1000376
18-000956-1756-TR	JORGE LUIS MORALES JIMENEZ	303800119	JMJ219	WAUZZZ8V3FA00981
19-000019-1756-TR	COOPERATIVA DE AUTOBUSEROS NACIONALES R.L	3004045200	SJB 014554	9532L82W1FR427865
18-000968-1756-TR	LESLIE ESQUIVEL MURILLO	108780055	CL 168135	JAANKR55EY7100007
18-000968-1756-TR	JENDRY SOLÍS MENA	110230914	BQK016	3N1CN7AP0FL871644
18-000969-1756-TR	RAMONA DELFA RUGAMA	155821621028	709220	KMHCG45G8YU045192
18-000979-1756-TR	AUTO CARE MOTORS CR S,A	3101680945	BLV939	MMBSNA13AHH002592
18-000962-1756-TR	DIAZ ALEMAN CARLOS MANUEL	801110923	MOT 225885	LWBPCJ1FX81006754

CONTRAVENCIONAL DE OSA

N° EXPEDIENTE	PROPIETARIO	N° CEDULA	N° PLACA	N° CHASIS
18-000407-1425-TR-3	DJS CASA DE VACACIONES LIMITADA	3-102-711422	DJS797	JTEBH3FJ3HK179388
17-000210-1425-TR-4	AUTOTRANSPORTES BLANCO Y HERNANDEZ S.A	3-101-120745	PB 001991	4V52CFHD7SR474827
19-000027-1425-TR-2	JHORGUEN CIBIANI CARMONA CALERO	06-0399-0712	BCB711	KMHDN45D02U281388
19-000027-1425-TR-2	3-102-708362 S.R.L	3-102-708362	JLT330	VF3DD9HJCHJ500854

CONTRAVENCIONAL DE COBANO PUNTARENAS

N° EXPEDIENTE	PROPIETARIO	N° CEDULA	N° PLACA	N° CHASIS
18-000112-1603-TR	XINIA DEL CARMEN UGALDE RAMIREZ	5-0234-0611	MOT 336560	LBPKE1294C0104480
18-000112-1603-TR	LUIS GUZOWSKI MAJCHEL EN REPRESENTACIÓN DE ALQUILER DE CARROS TICOS S.A	1-0753-0226	BNH 661	MMBGUKS10HH014391

JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA

N° EXPEDIENTE	PROPIETARIO	N° CEDULA	N° PLACA	N° CHASIS
18-000371-1781-TR	ORTIZ VARGAS ANNIA DEL ROCIO	4-0145-0767	BQW786	KMHCU4AE0DU45567
18-000371-1781-TR	SANCHEZ ARCE ENRIQUE GENARO	4-0087-0440	TH000287	KMHCT5AE6EU158432
19-000003-1781-TR	TRANSPORTES FILEMON VILLALOBOS E HJOS S.A	3101206672	HB001861	KMJTA18VP1C900033
19-000004-1781-TR	BAC SAN JOSE LEASING, S.A	3101083308	MPG418	94DBCAN17JB100869
19-000004-1781-TR	LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS Y AMBIENTALES G A I A SOCIEDAD ANÓNIMA	3101262062	GCR222	MA3ZF62S8DA165914
19-000008-1781-TR	LEIVA GARCIA KARLA CRISTINA	4-0169-0881	628522	JM1NA3514N0325960
19-000009-1781-TR	CLARKE CHAVARRÍA JEFROY	5-0322-0759	BJM052	JTDBT4K32B1406910
19-000014-1781-TR	CASTRO CORTES JOHNNY MAURICIO	6-0307-0194	94323	BJ40020768
19-000015-1781-TR	CABALLERO CASTILLO MAGALI	1-0471-0164	MOT103420	C50G027580CE
19-000017-1781-TR	CORDERO LEON GUILLERMO EMILIO	4-0178-0736	BFF798	JHLRE38367C006194
19-000022-1781-TR	PEREZ GAIRAUD ANDREY JESÚS	1-1269-0449	BJN449	MA3ZF62S9GA73801
19-000025-1781-TR	SANCHEZ FERNANDEZ CINTHYA	1-0842-0334	815001	JDAJ200G001020856

19-000025-1781-TR	PINNOCK BRANFORD GLENDORLEE	7-0072-0316	SBB115	SJNFBAJ11HA689317
19-000027-1781-TR	ARTAVIA VARGAS MARCO ANTONIO	1-0977-0558	KJK002	KMHJT81EBEU861014
19-000028-1781-TR	ARCE SÁNCHEZ MARCO	1-0792-0591	377611	JT2EL31F2L005844

JUZGADO CONTRAVENCIÓN Y MENOR CUANTÍA DE MORA

N° EXPEDIENTE	PROPIETARIO	N° CEDULA	N° PLACA	N° CHASIS
19-000002-1696-TR	BRYAN EDUARDO NARANJO RODRÍGUEZ	207220016	CL 301357	WC345704
19-000003-1696-TR	ILEANA ISABEL DEL CARMEN GARCIA PANA	105850122	BND569	KMHCT4AE1CU254928

JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y MENOR CUANTIA TURRIALBA, CARTAGO

N° EXPEDIENTE	PROPIETARIO	N° CEDULA	N° PLACA	N° CHASIS
18-000335-1008-TR	FRANCISO ARAYA VARGAS	302760467	C-155049	JAAN1R71R97100175
18-000335-1008-TR	TRANSPORTES ASTAVIA Y VEGA S.A	3101567892	C-154934	YC060578
18-000318-1008-TR	SHIRLEY SANCHEZ FALLAS	113550964	BBL404	KHMCG41FP1U197991
18-000322-1008-TR	DENNIS JIMENEZ	303360052	MOT-542058	LXAPCM707HC000006
18-000087-1008-TR	TRANSPORTES RAPIDOS TRANSPRAP S.A	3101259189	C-142736	JNAPC33L3YAM55074
18-000275-1008-TR	TRANSPORTES CIPARO S.A	3101093327	CB-1763	9BWRWF82W93R301863
18-000292-1008-TR	DHAYRA MACHADO MONTOYA	303420064	541495	VF32AKFWU3W06293
18-000322-1008-TR	DENNIS JIMENEZ GARITA	303360052	MOT-542058	LXAPCM707HC000006

18-000188-1008-TR	MILDRED RAMIREZ ORTIZ	302610402	BKR753	JMYXTGF2WHJ000221
18-000272-1008-TR	TRANSPORTES SUPERIORES DEL ESTE ROLAN S.A	3101083048	C-153842	1FUJBBCG02LH93039
18-000316-1008-TR	WILLIAM ALPIZAR MONTERO	107500595	MOT-211750	LC6PCJK6980807220
18-000334-1008-TR	IRIS CAMPOS LOPEZ	302320627	905704	1NXBA02E8TZ492946
18-000313-1008-TR	SILENY CAMBRONERO CAMPOS	303040972	C-27081	37622452750101
18-000271-1008-TR	RANDALL VEGA BASTOS	303700635	BKL287	TSMYD21S7GM194243
18-000271-1008-TR	RICARDO VEGA SANCHEZ	302620371	CL-219211	JN1CJUD22Z0084624

JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE TRANSITO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (PÉREZ ZELEDON)

N° EXPEDIENTE	PROPIETARIO	N° CEDULA	N° PLACA	N° CHASIS
19-000048-0804-TR	MANUEL MORA GUADAMUZ	01-0984-0194	282265	JD2BF3204M6308728
19-000048-0804-TR	CONCENTRADOS DE EL GENERAL SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-072117	C-166325	9C168670
18-001750-0804-TR	BARRANTES GUILLEN TATIANA	111580831	769278	KL1CC53F68B235107
18-001746-0804-TR	GAS NACIONAL ZETA SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-114502	C 154901	3HAMSADR09L104574
18-001746-0804-TR	HERNÁNDEZ ORDOÑEZ KERLYN LUZMILDA	01-1284-0900	BPH219	KMHCT4AE7CU228799
18-001744-0804-TR	MUSOC S.A.	3-101-008428	SJB-15282	9BSK4X200G3878746
18-001744-0804-TR	IMPROSA SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.	3-101-289909	CL-304899	MR0ES8CB3H0177747

18-001744-0804-TR	BAC SAN JOSE LEASING S.A.	3-101-083308	CPZ302	JMYXTGF2WHJ000199
18-001704-0804-TR	AUTO SUR S.A.	3-101-011492	CL-223480	MR0CS12G200036068
18-001704-0804-TR	FANNY YINNETH RIVERA GAMBOA	9-0094-0546	247604	1NXAE94AXLZ076895
18-000521-0804-TR	MORALES NAJERA MARIA LORENA	601490575	737024	2T1AE04B0SC074190
18-000521-0804-TR	DELGADO GUEVARA NEFER ARLEY	112410321	296910	AE920048981
18-000521-0804-TR	ALFARO ARAYA JOSE ALBERTO	106990429	TSJ 005582	JDAJ102G000549484
18-000690-080-4TR	BAC SAN JOSE LEASING, S.A	3101083308	CL 294646	LETYEA1XHHN00034
18-000461-0804-TR	PADILLA CASTRO OLDEMAR	104060712	MOT 149660	LC6PCJG9X60807890
19-000065-0804-TR	JONATHAN JESÚS LÓPEZ MORALES	1-1476-0897	MOT-198334	LBPKE104270061321
19-000044-0804-TR	RED COMERCIAL DEL PACIFICO S.A.	3-101-590101	CL-223768	JHF04H709000274
19-000044-0804-TR	MARGARITA SANTAMARÍA RODRÍGUEZ	6-0197-0514	BLF943	JTDBT1232Y0020131
18-001725-0804-TR	REBECA MORALES VARGAS	1-1447-0037	BCP186	JTEHD20V940014141

JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE BUENOS AIRES

N° EXPEDIENTE	PROPIETARIO	N° CEDULA	N° PLACA	N° CHASIS
----------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------

18-000041-1739-TR	ADRIAN JOSE RIVERA VARGAS	1-1453-0700	CL246909	1D7RV1GT3AS187695
-------------------	---------------------------	-------------	----------	-------------------

JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTIA DE JICARAL

N° EXPEDIENTE	PROPIETARIO	N° CEDULA	N° PLACA	N° CHASIS
19-000002-1581-TR	KLIMAIRE S.A	3101180685	CL168721	JB7FL24WXMP017834
18-000048-1581-TR	BAC SAN JOSE LEASING, S.A	3101083308	BLW316	JS3JB43V7H4101863

JUZGADO DE COBRO, CONTRAVENCIONAL Y MENOR CUANTIA DE GOLFITO

N° EXPEDIENTE	PROPIETARIO	N° CEDULA	N° PLACA	N° CHASIS
18-000076-1100-TR	MARLENE CASTRO ESPINOZA	601640016	MOT 410820	LAAAANKSXG0000072
17-000220-1100-TR	YORLENY VÁSQUEZ MARTÍNEZ	603000686	BJH930	3N1BC11E88L413608
18-000123-1100-TR	ALIMENTOS JACKS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-008739	CL 252712	MPATFR504157
18-000139-1100-TR	MARIELOS GAMBOA BADILLA	602740434	BJF305	KMH1T81EBFU117024
18-000139-1100-TR	JARVI ANTONIO MADRIGAL VARGAS	109600122	CL 308866	MMM148FL81H613576
18-000139-1100-TR	HOTEL CASA CLUB GOLFITO ZONA AMERICANA S.A.	3-101-381853	CL 204683	MMBJNK7406D007923
18-000139-1100-TR	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MÚLTIPLES DE PRODUCTORES DE PALMA ACEITERA R.L.	3004078431	CL 307141	MR0FZ29G7E2538087
18-000174-1100-TR	DORA ISABEL LÓPEZ SANTAMARÍA	602560859	482152	WVWZZZ6KZ2R503761
18-000171-1100-TR	ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE	302870460	CRC1728	JTERB71J90090554
18-000142-1100-TR	ALIMENTOS JACKS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-008739	CL 260356	JAANPR71HC7100378
18-000142-1100-TR	TRANSOLFOSOCIEDAD ANÓNIMA	3-101-037128	PB- 2352	KL5UM52HEDK000270
18-000159-1100-TR	CRISTHOFFER FABIAN BEITA MURILLO	115740174	MYR299	KMHCG51FP1U118528

18-000141-1100-TR	DRIFNET SOCIEDAD ANONIMA	3101492077	612286	JTEBY14R308003844
-------------------	--------------------------	------------	--------	-------------------

18-000141-1100-TR	MANEJO PROFESIONAL DE DESECHOS SOCIEDAD ANONIMA	3101310098	CL 245033	FE71PBA00533
-------------------	--	------------	-----------	--------------

JUZGADO DE TRÁNSITO DE ALAJUELA

N° EXPEDIENTE	PROPIETARIO	N° CEDULA	N° PLACA	N° CHASIS
----------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------

18-005953-0494-TRS	R.L. VIECON S.A.	3-101713502	CL 242114	LGWCAC167A086449
--------------------	------------------	-------------	-----------	------------------

18-001762-0494-TRF	JINNONG LIANG LIANG	8-0097-0867	CBL168	4S4WX9JD1D4400381
--------------------	---------------------	-------------	--------	-------------------

18-002186-0495-TRV	R.L. TELEFONICA DE COSTA RICA S.A.	3-101610198	CL 386522	ZFA25000G6B76640
--------------------	------------------------------------	-------------	-----------	------------------

18-002186-0495-TRV	JOSEPH GERARDO ARIAS HERNANDEZ	2-0604-0493	BLK812	MALBM51CBHM246338
--------------------	--------------------------------	-------------	--------	-------------------

18-002874-0494-TRA	ISAURA ROCIO CRUZ FERNANDEZ	6-0325-0116	BBW547	JTEBY25J900056741
--------------------	-----------------------------	-------------	--------	-------------------

18-002874-0494-TRA	MARISOL HERNANDEZ CAMPOS	1-0607-0163	CL 077133	LB120118005
--------------------	--------------------------	-------------	-----------	-------------

18-003599-0494-TRA	NICOLE STEPHANIE QUESADA GARCIA	1-1730-0440	BNF765	JTDBT923071097510
--------------------	---------------------------------	-------------	--------	-------------------

18-004330-0494-TRV	KENIA LILLIANA MARTINEZ GARCIA	1-1491-0529	MOT 521857	ME4JC40D0G8007309
--------------------	--------------------------------	-------------	------------	-------------------

18-004440-0494-TRA	CESAR GONZALEZ RODRIGUEZ	2-0253-0929	MOT 055591	MD091024805
--------------------	--------------------------	-------------	------------	-------------

18-004527-0494-TRP	KAREN FERNANDEZ MORALES	4-0190-0442	598147	EL420231755
--------------------	-------------------------	-------------	--------	-------------

18-004690-0494-TRA	R.L. ALPIZAR S.A.	3-101074028	AB 007336	288889
--------------------	-------------------	-------------	-----------	--------

18-004894-0494-TRF	R.L. AUTOTRANSPORTES LOPEZ S.A.	3-101095513	AB 007601	9532G82W1JR821802
--------------------	---------------------------------	-------------	-----------	-------------------

18-005343-0494-TRS	ALEX ALBERTO CARVAJAL ROSS	2-0754-0842	210860	JN1PB2216HU546500
18-005527-0494-TRP	MEIBAL FONSECA BUSTOS	6-0105-0905	CL 122998	JAANKR58EP7100344
18-005537-0494-TRP	NATALIA BERMUDEZ CASTILLO	2-0624-0186	BGM883	KMHCT51BAEU125541
18-005554-0494-TRF	RUBEN DE LA O DUARTE	8-0109-0941	BKN103	3G1J85CC2GS555415
18-005562-0494-TRP	FRANCISCO ENRIQUE SOTO VARGAS	2-0239-0643	MJZ746	KMHSG81BDCU902244
18-005562-0494-TRP	R.L. AUTOTRANSPORTES CAMBRONERO ALFARO S.A.	3-101046095	AB 003841	9BM3840735B387371
18-005577-0494-TRP	R.L. TRANSPORTES Z A DE ALAJUELA S.A.	3-101205453	CL 400840	3N6CD33B4HK820874
18-005607-0494-TRP	R.L. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA FERGAZ S.A.	3-101139982	CL 291784	VF18SRBW4GG889565
18-005627-0494-TRP	STEVEN RODRIGUEZ SOLORZANO	6-0366-0950	TA 000806	1NXBU4EEXAZ66298
18-005627-0494-TRP	HILDA ALFARO PANIAGUA	2-0347-0321	CL 189206	J8DC4B1K0P7007804
18-005647-0494-TRP	LEONARDO ORTEGA HERNANDEZ	1-1361-0713	BGP347	JN8HD17Y5MW001208
18-005677-0494-TRP	R.L. CENTRO DE BATERIAS DE COSTA RICA S.A.	3-102681107	MOT 534290	LBPKE1307G0116872
18-005682-0494-TRP	SERGIO DE JESUS MENDOZA MARTINEZ	5-0194-0135	BLC417	KMHCM36C47U029391
18-005687-0494-TRP	R.L. TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES S.A.	3-101004929	AB 007036	WMARR8ZZ5FC020946

18-005697-0494-TRP	JORGE ENRIQUESEGURA VARGAS	5-0275-0185	128250	EE900205036
18-005702-0494-TRP	DAGOBERTO CAMACHO MONGE	3-0365-0547	BNR908	KMHCS41CBBU142670
18-005702-0494-TRP	DEYBY VINICIO HIDALGO ANCHIA	1-1718-0095	MOT 542578	MLHPC46B0G5303117
18-005707-0494-TRP	DARDEN CRAIG	184000830808	882938	JHMRE3827C408094
18-005712-0494-TRP	R.L. DANISSA S.A.	3-101083067	CL 290242	3N6CD31B5GK848930
18-005727-0494-TRP	EDWIN JIMENEZ SOLIS	2-0242-0319	TAX PA 000036	JTDBJ42E70J000710
18-005736-0494-TRV	JESUS ANTONIO VARGAS QUESADA	6-095-01008	BDB488	2CNBE13C0X6929270
18-005737-0494-TRP	LUIS FABIAN SEQUEIRA SANCHEZ	4-0228-0185	BLN110	MA3ZF62S8HA906665
18-005737-0494-TRP	R.L. SAVER RENT A CAR S.A.	3-101704357	BJX524	KMHJ2813DGU065060
18-005742-0494-TRP	RAFAEL GERARDO RODRIGUEZ CAMPOS	2-0421-0466	491952	KNAJA523515084379
18-005757-0494-TRP	R.L. BAC SAN JOSE LEASING S.A.	3-101083308	CL 301294	JLBFE73CBJKU40003
18-005772-0494-TRP	YESENIA CAMPOS PORRAS	1-0863-0016	YCP971	KNADN512BG6734358
18-005812-0494-TRP	R.L. ANC CAR S.A.	3-101013775	BMC072	JTF5K22P7H0025392
18-005812-0494-TRP	JONATHAN TREJOS PORKET	2-0674-0788	640877	JMYSNCS3A6U006549

18-005817-0494-TRP	JONATHAN TREJOS PORKET	2-0674-0788	640877	JMYSNCS3A6U006549
18-005817-0494-TRP	R.L. DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.	3-101295868	C 149981	3HAMMAARX8L667614
18-005827-0494-TRP	DANIEL ALBERTO MONGE HERNANDEZ	3-0386-0585	BQJ292	MA6CH5CDXJT001173
18-005827-0494-TRP	R.L. TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES S.A.	3-101004929	AB 007042	WMARR8ZZ9FC020951
18-005832-0494-TRP	CHRISTIAN ALBERTO BARQUERO LOPEZ	4-0197-0286	833985	3N1CC1CD1ZL162893
18-005837-0494-TRP	R.L. CHARRIOTS DOCE S.R.L	3-102739660	TNY999	MALA841CBHM195935
18-005837-0494-TRP	R.L.ACX ANDRED S.R. L.	3-102719041	LCX001	MHFDZ8FS9H0090103
18-005862-0494-TRP	R.L. TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES S.A.	3-101004929	AB 006334	LKLR1KSF7EC627727
18-005862-0494-TRP	NORDIA AZUSENA AYALA ANDRADEZ	C02129979	BPZ067	VF3DDHMZ6JU505026
18-005887-0494-TRP	R.L. ARRENDADORA CAFSA S.A.	3-101286181	CL 303568	MR0HZ8CD8H0405817
18-005937-0494-TRP	R.L. AUTOS ZAVI S.A.	3-101672906	BNX650	3N1CN7AP4CL826749
18-005937-0494-TRP	JEFFRY ISAAC URIBE SANDI	1-1511-0409	BMB023	1NXBR32EX3Z135908
18-005938-0494-TRS	R.L. ALPIZAR S.A.	3-101074028	AB 006164	272544
18-005941-0494-TRV	MARILYN DE LOS ANGELES ECHAVARRIA MONESTEL	1-1315-0846	BPQ626	LB37122S2JX507101

18-005943-0494-TRS	CHTISTIAN ALBERTO AZOFEIFA ARCE	1-874-0916	598780	JS3TD03V0R4102186
18-005947-0494-TRP	JUNIOR RODRIGO ARCE CAMPOS	1-1319-0965	BJC003	JTDDR32T420113307
18-005947-0494-TRP	R.L. SAN JOSE GARNI S.A.	3-101105993	SJB 015358	JLBBE639JFRJ10090
18-005951-0494-TRV	R.L. SCOTIA LEASING COSTA RICA S.A.	3-101134446	BQQ943	JS2ZC63S7J6107923
18-005956-0494-TRV	CESAR GRANADOS GARCIA	1-1075-0803	SJB 15097	JLBBE639JFRK30011
18-005959-0494-TRF	R.L. INDUSTRIAS VELLETRI S.R.L.	3-102721614	CL 210773	JHFAY037305000413
18-005960-0494-TRA	R.L. MARIO RODRIGUEZ SIETE MR S.A.	3-101461856	C 164823	1FUBA5CG53LL99771
18-005963-0494-TRS	ROBERT WAYNE COOK	512696656	BKV327	KMJWA37HU803404
18-005963-0494-TRS	R.L. FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE BASE FUNDEBASE	3-006174345	CL 313581	MMBJTKB40FD006841
18-005964-0494-TRF	R.L. COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE SABANILLA Y SAN ISIDRO DE ALAJUELA R.L.	3-004075853	AB 005358	9BM384075AB703053
18-005967-0494-TRP	LESLIE ADRIANA CORRALES SANCHEZ	1-1434-0052	BNV850	KMHCT4AE7DU396427
18-005967-0494-TRP	LEMUEL NAUM CAMBRONERO VALVERDE	1-1451-0443	BHJ280	JTDBT123510157392
18-005968-0494-TRS	SERGIO ARAYA UMAÑA	1-1160-0163	BGV547	MA3FC31S5FA752845
18-005969-0494-TRF	R.L. BAC SAN JOSE LEASING S.A.	3-101083308	CL 309478	MR0EB8CB8J0868925

18-005971-0494-TRV	XIOMARA DOMINGA CANO MAYORGA	155803071318	501524	4S2CY58V7P4309720
18-005980-0494-TRA	KAREN STEPHANIE VASQUEZ	1-1347-0947	873836	JHMFA36248S026035
18-006024-0494-TRF	R.L. SCOTIA LEASING COSTA RICA S.A.	3-101134446	BKM219	TSMYD21S0GM190874
18-006024-0494-TRF	R.L. TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES S.A.	3-101004929	AB 004311	9BM3840737B494764
18-006027-0494-TRP	R.L. SEOK WOO COSTA RICA S.RL.	3-102422274	CL 309181	JAA1KR77EJ71000353
18-006030-0494-TRA	ANDREA MATAMOROS VARGAS	1-1583-0489	FMG321	MA3ZF62S2FA522927
18-006039-0494-TRF	ANTONIO MERCADO DIONIS	155815007806	CL 147940	1N6ND16S2JC378729
18-006061-0494-TRV	OLGA MARTA ROJAS CORDERO	2-0283-0735	787221	4T4BE46K28R017852
18-006061-0494-TRV	CARLOS VARGAS CALVO	2-0546-0797	C 166426	1FUJS6CV27LX41120
18-006065-0494-TRA	R.L. MAYCA DISTRIBUIDORES S.A.	3-101172267	C 161555	3ALACYCS3EDFU6174
18-006066-0494-TRV	R.L. BETO Z.M. S.A.	3-101574173	802019	K890YP041818
18-006069-0494-TRF	VICTOR HUGO BOLAÑOS VILLALOBOS	2-0373-0422	C 138324	1FUPBCXB2SL45893
18-006069-0494-TRF	R.L. BAC SAN JOSE LEASING S.A.	3-101083308	BMG588	KNABE511AHT264328
18-006072-0494-TRP	R.L. DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA COSTA RICA S.R.L.	3-102395241	CL 393033	3N6CD31B3HK803809

18-006073-0494-TRS	R.L. 3-101-610232 S.A.	3-101-610232	MOT 534310	MD2A12DZ8GCM61245
18-006074-0494-TRF	MARIA DEL CARMEN AVILA RODRIGUEZ	2-0445-0707	BMW638	3N1CN7AP5CL811211
18-006075-0494-TRA	R.L. TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES S.A.	3-101004929	AB 007025	WMARR8ZZ2GC021053
18-006076-0494-TRV	DESPACHOS RAPIDOS COSTA RICA DERCO S.A.	3-101043427	MOT 417569	LBPKE1299E0142080
18-006076-0494-TRV	R.L. CORPORACION ANDINA COANSA S.A.	3-101079790	CL 244416	JDA00V1180029158
18-006080-0494-TRA	EDDY HERNANDEZ SANDINO	1-0982-0649	706116	3N1AB41DXVL004688
18-006081-0494-TRV	OLGA LIDIA BALCAZAR PEREZ	8-0092-0729	BLH210	MR2KW9F3XH1119914
18-006081-0494-TRV	R.L. TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES S.A.	3-101004929	AB 006307	LKLR1KSF1EC627710
18-006083-0494-TRS	R.L. PRESTARTE RAPIDO DE COSTA RICA S.A.	3-101705221	BNR131	3N1CN7AP7CL891689
18-006083-0494-TRS	R.L. TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES S.A.	3-101004929	AB 004423	9BM3840737B499684
18-006084-0494-TRF	JORGE PIZARRO CARAVACA	5-0208-0008	BJM479	JTDBT123130310076
18-006084-0494-TRF	R.L. DISTRIBUIDORA EL ARMENIO S.A.	3-101316261	C 170700	1FUJGHDV0CSBH5871
18-006085-0494-TRA	CARLOS JOSE CASTILLO GUILLEN	3-0374-0049	BNB435	TSMYD21S5JM344146
18-006085-0494-TRA	ALEXANDER VARGAS TORRES	2-0531-0668	734326	JS3TD02V1P4106407

18-006085-0494-TRA	VIRGILIO ELADIO ESPINOZA CASTRO	2-0359-0679	246725	1N4GB22S2KC765690
18-006086-0494-TRV	R.L. BAC SAN JOSE LEASING S.A.	3-101083308	CL 291319	MPATFS86JGT006261
18-006087-0494-TRP	CHARLES COOL JEAN	EJ735035	844246	KNADC125446316928
18-006089-0494-TRF	R.L. BAC SAN JOSE LEASING S.A.	3-101083308	C 166472	JAAN1R71LH7100040
18-006091-0494-TRV	R.L. BAC SAN JOSE LEASING S.A.	3-101083308	HBS111	SJNFBAJ111JA039290
18-006091-0494-TRV	R.L. AUTOTRANSPORTES CAMBRONERO ALFARO S.A.	3-101046095	AB 006468	9BM384074BB743667
18-006092-0494-TRP	SEYLA SOLERA ALPIZAR	2-0453-0759	705054	2HGEJ6572VH566208
18-006094-0494-TRF	CRISTINA RODRIGUEZ SOTO	1-1773-0320	BGS703	KMHCT41DBEU489817
18-006098-0494-TRS	MINOR BENAVIDES PEREZ	1-0668-0326	799304	KMHCG41FP1U247029
18-006098-0494-TRS	R.L. CENTRO MEDICO JOSUE S.A.	3-101715916	553588	JN1TANZ50Z0001753
18-006099-0494-TRF	R.L. TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES S.A.	3-101004929	AB 007048	WMARR8ZZ5FC020980
18-006100-0494-TRA	CRISTOPOHER VARGAS GONZALEZ	2-0705-0987	BNS289	3G1B85DM4HS505936
18-006100-0494-TRA	R.L. MONTAÑAS LLUVIOSAS S.A.	3-101153131	329926	JA4GK41S0NJ007865
18-006102-0494-TRP	R.L. AGENCIA DATSUN S.A.	3-101007435	BQL785	JN1TG4E25Z0717801

18-006102-0494-TRP	R.L. KINERET S.A.	3-101025306	SKY742	WDDWF4AB3FF083046
18-006104-0494-TRF	FIDEL ANTONIO SALAS ALVARADO	2-0416-0499	480198	3N1AB41D3VL033739
18-006110-0494-TRA	R.L. SCOTIA LEASING COSTA RICA S.A.	3-101134446	CL 306104	JHHAFJ4H7JK006440
18-006111-0494-TRV	BRAYAN CORDERO RODRIGUEZ	2-0615-0249	331044	EL310328746
18-006112-0494-TRP	R.L. COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.	3-004045002	C 159448	3ALACYCS3DDBX7797
18-006115-0494-TRA	DAVID FRANCISCO SOLIS RUIZ	6-0160-0026	765515	KMHJN818P9U950273
18-006116-0494-TRV	JHONNY ALONSO SOLANO MORALES	6-0404-0733	MOT 414547	LKXPCNL02E1005866
18-006117-0494-TRP	VICTOR MANUEL ARCE OCAMPO	2-0224-0095	541966	KMXKPE1BPRU103296
18-006117-0494-TRP	LUCRECIA SLAS ALVAREZ	2-0549-0834	MOT 162139	9FNAAKJC270000247
18-006120-0494-TRA	YOSETH DANIELA CASTRO CHAVES	2-0750-0855	880867	JHMEG8645SS005727
18-006120-0494-TRA	R.L. TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES S.A.	3-101004929	AB 006334	LKLR1KSF7EC627727
18-006123-0494-TRS	R.L. GIMETABO S.A.	3-101278870	FNT117	KNAPR81ADH7173783
18-006130-0494-TRA	R.L. SERVICIO DE MICROBUSES ALAJUELA SAN JOSE LIMITADA	3-102073015	AB 005106	9BM3840738B591710
18-006132-0494-TRP	R.L. CREDI Q LEASING S.A.	3-101315660	BLC356	MALBM51CBHM237139

18-006147-0494-TRP	R.L. TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES S.A.	3-101004929	AB 007020	WMARR8ZZ0FC020966
18-006147-0494-TRP	JULIO RAFAEL MOYETONES PEÑA	186200673006	BND532	3G1B85DM3HS550480
18-006157-0494-TRP	R.L. ACARREOS Y TRANSPORTES JUSO S.A.	3-101733405	C 166981	9H055687
18-006157-0494-TRP	R.L. ARRENDADORA CAFSA S.A.	3-101286181	C 168526	JHDFG1JPUHXX20440
18-006161-0494-TRV	MARIA ROSA DELGADO ROJAS	2-0389-0950	MOT 520188	LZSPCJLG5G1902781
18-006161-0494-TRV	PAOLA JOP DEJUK	1-1156-0125	642813	JMYLRV76W6J000662
18-006165-0494-TRA	R.L. ARRIENDA EXPRESS S.A.	3-101664705	CTK004	MA3FB32S4K0C08163
18-006177-0494-TRP	MAYRA CASTILLO SOTO	2-0348-0001	168093	JN1PB12S6FU627710
18-006177-0494-TRP	RODOLFO GOLFIN LEANDRO	1-0705-0842	743417	MA3FB31S170743943
18-006179-0494-TRF	R.L. SCOTIA LEASING COSTA RICA S.A.	3-101134446	C 162870	WDB970078FL874573
18-006179-0494-TRF	R.L. CORPORACION D & G COSTA RICA DE INVERSIONES S.A.	3-101497077	C 168878	VC032593
18-006180-0494-TRA	IDINA LUNA SALAS	2-0401-0284	452078	JTEBY99J9001168264
18-006184-0494-TRF	ERROL ANDRES ALFARO CASTRO	2-0640-0569	CL 195189	LGWCABG884A077272
18-006184-0494-TRF	R.L. CORPORACION DE COMPAÑIAS AGROINDUSTRIALES CCA S.R.L.	3-102085278	BND458	JDAJ210E0H3000650

18-006190-0494-TRA	R.L. SCOTIA LEASING COSTA RICA S.A.	3-101134446	VFC006	SALRA2BK0HA029446
18-006190-0494-TRA	LUIS CARLOS MORALES ZUÑIGA	5-0326-0602	BDP335	JTDBT1239Y0014312
18-006194-0494-TRF	R.L. CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA S.A.	3-101598485	MOT 603957	LALMD4392H3002305
18-006196-0494-TRV	R.L. SCOTIA LEASING COSTA RICA S.A.	3-101134446	C 147079	1M2AG11C45M015708
19-000001-0494-TRP	ALFREDO AVILA SEGURA	1-0879-0300	FSM801	JTEBH9FJX05030093
19-000001-0494-TRP	R.L. MAQUINARIA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MACOMA S.A.	3-101098057	C 144925	1M1AE07Y5YW002885
19-000002-0494-TRS	R.L. COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE USUARIOS DE ATENAS R.L.	3-004071307	AB 007316	9BM382177HB042138
19-000004-0494-TRA	VINCENT ORLANDO ALVARADO AGUILAR	3-0443-0542	BCP675	2HGEH3386PH510121
19-000004-0494-TRA	DUNIA UGALDE CORDERO	2-0291-1337	BKC114	MAJHK2BA4GAJ02846
19-000005-0494-TRV	XINIA MARIA CASTRO ALFARO	9-0061-0388	XMC317	3N8CP5HE4J460583
19-000010-0494-TRV	KARLA MABEL ARIAS MEZA	1-1519-0769	MOT 367650	LBPKE1300D0089977
19-000013-0494-TRF	R.L. MUCHOS TANQUES S.A.	3-101147286	C 125040	1FUP2DYB2JP318855
19-000017-0494-TRS	R.L. ALPIZAR S.A.	3-101074028	AB 006755	1BABKBKA38F247634
19-000018-0494-TRF	R.L. TELECABLE S.A.	3-101336262	CL 260708	MR0CS12G600108213

19-000020-0494-TRV	R.L. HOTEL PASEO DE LAS DAMAS S.A.	3-101358670	SJB 014628	KMJWA37KAEU655522
19-000022-0494-TRS	EVELI FERRETO CARVAJAL	6-0377-0980	761216	MALAN51BP9M114995
19-000022-0494-TRS	SERGIO RAMIREZ CASTRO	2-0366-0298	MOT 612741	LZL20P216HHM40125
19-000023-0494-TRF	LESLIE MEDINA SANCHEZ	1-0847-0073	LST789	1FA6P8TH0F5356746
19-000024-0494-TRA	TAMBLY RODRIGUEZ ZUÑIGA	5-0312-0151	BLM544	JTMZD8EV8HJ073167
19-000027-0494-TRS	R.L. OLIMPO ALEXANDER DE LOS ANGELES CARDENAS AGUILAR	2-0411-0653	TA 000599	3N1EB31S0ZK700840
19-000028-0494-TRF	R.L. ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE DURMAN ESQUIVEL Y AFINES	3-002078763	C 161374	3ALACXCS1EDFS2580
19-000030-0494-TRV	R.L. AUTOTRANSPORTES SAN ANTONIO S.A.	3-101053317	SJB 011140	9BM3840737B513942
19-000032-0494-TRS	R.L. VALDIVIA QUINTEROS AMPARO DEL SOCORRO	155810055921	CL 256796	4TAWM72N7TZ167581
19-000033-0494-TRF	ROLANDO CALDERON CORRALES	1-0800-00008	MOT 524548	MD2A36FZ7GCF00862
19-000033-0494-TRF	R.L. JOHNSON Y JOHNSON DE COSTA RICA S.A.	3-101017803	BPY574	JN1JBAT32JW013480
19-000035-0494-TRV	ANABELLE PRENDAS SOLANO	1-1093-0194	BMB445	MA3VC41S1HA217824
19-000037-0494-TRS	R.L. ANC CAR S.A.	3-101013775	BPF672	MR2B29F31J1088781
19-000038-0494-TRF	R.L. AUTOTRANSPORTES LOPEZ S.A.	3-101095513	AB 006972	1BABKBKA55F218745

19-000039-0494-TRA	R.L. TRANSPORTES INTERNACIONALES AGUILAR GONZALEZ FRN S.A.	3-101565903	C 154093	LH271981
19-000040-0494-TRV	R.L. GADE S.A.	3-101569821	C 147954	1C020227
19-000043-0494-TRF	R.L. ARRENDADORA DESYFIN S.A.	3-101538448	MOT 368452	LGVSKP103DZ101539
19-000044-0494-TRA	R.L. CONSTRUCCIONES GUACAMAYA S.A.	3-101518295	BFM554	JTDBL42E60J123781
19-000047-0494-TRS	R.L. SCOTIA LEASING COSTA RICA S.A.	3-101134446	DMS327	3KPA241AAJE090235
19-000048-0494-TRF	NIDIA YOLANDA VENEGAS PORRAS	2-0335-0697	883703	1HGCD5551RA107540
19-000048-0494-TRF	BEATRIZ ADRIANA DURAN SOTO	2-0643-0868	301006	1N4EB32A0PC815496
19-000050-0494-TRV	OLY RAMONA ACEVEDO BERMUDEZ	142649059	BPX073	MMBXNA03AJH000483
19-000052-0494-TRS	GERARDO ENRIQUE ALFARO PICADO	2-0586-0022	281935	BJ40047670
19-000052-0494-TRS	R.L. CLINICA DE ESTETIA CAPILO FACIAL S.A.	3-101144915	816399	3N1AB41D8XL090750
19-000054-0494-TRA	GREIBIN ANTONIO GUTIERREZ CASTRO	6-0286-0147	BJS222	KMJWWH7HP4U596485
19-000059-0494-TRA	LAURA PATRICIA BADILLA LOBO	2-0573-0320	BMF762	JS2YB417375100094
19-000060-0494-TRV	HENRY OLIVER SEGURA SEGURA	1-0780-0088	BCB453	K9902J063545
19-000062-0494-TRS	R.L. TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES S.A.	3-101004929	SJB 013907	LKLR1KSF7DC606391

19-000063-0494-TRF	R.L. EMPRESA DE TRANSPORTES FERNANDO ZUÑIGA E HIJOS S.A.	3-101072628	SJB 009664	9BM3840734B383752
19-000064-0494-TRA	R.L. EL GUARCO TOSTADORES DE CAFE S.A.	3-101661621	C 154974	JAAN1R71R97100167
19-000067-0494-TRS	SANDRA RAMIREZ SOLORZANO	1-0749-0317	114135	EE90-0029886
19-000068-0494-TRF	MIGUEL ANGEL ARROYO MORERA	2-0457-0446	MOT 488046	LXYPCKL05F0360532
19-000068-0494-TRF	DIMAS RODRIGUEZ SIBAJA	2-0343-0334	BFZ409	JN1TANT31Z0106135
19-000070-0494-TRV	ALEXANDER RAMIREZ SANCHEZ	2-0608-0549	896876	KNADG411AC6866498
19-000070-0494-TRV	MELVIN YUVENI SOTO SANCHEZ	2-0530-0935	426899	CE1103033727
19-000073-0494-TRF	GUSTAVO CAMACHO GUTIERREZ	3-0325-0514	C 169046	1FUVDZYB0WP784044
19-000075-0494-TRV	SANDRA FALLAS GAMBOA	1-0883-0972	JCS864	MA3FC31SXCA487898
19-000077-0494-TRS	YERLIN DE LOS ANGELES ORTEGA BARBOZA	2-0716-0908	BPD473	3N4BC1AP3BL360017
19-000077-0494-TRS	MAINOR ROLANDO MEJIAS CARVAJAL	4-0146-0500	MOT 169398	LC6PCJG9X70801914
19-000078-0494-TRF	R.L. CETEBEDI S.A.	3-101212106	MOT 335520	LWBPCK102C1055070
19-000080-0494-TRV	JACKELINE HURTADO HERRERA	2-0604-0051	BPF579	JTDBT123430287571
19-000084-0494-TRA	R.L. BAC SAN JOSE LEASING S.A.	3-101083308	CL 301903	KNCSHX71CG7996432

19-000087-0494-TRS	ROGER ANDRES AJUN SANDI	5-0329-0408	494030	3VWRV49M63M064421
19-000087-0494-TRS	LUIS ENRIQUE CHAVES VASQUEZ	2-0655-0592	624703	1HGEG8540RL013534
19-000087-0494-TRS	WENDY PATRICIA PICADO REYES	1-1691-0315	737346	1HGFA15808L501018
19-000092-0494-TRS	VICTOR MANUEL NARANJO PEREIRA	3-0196-0034	BQH062	KMHCT5AE3DU121580
19-000095-0494-TRV	R.L. EPHEL DUATH S.A.	3-101371772	CL 229207	MPATFS54H8H526456
19-000095-0494-TRV	MARIA LUZ VILLEGAS ROJAS	2-0452-0703	340404	KMHVF22J5RU939233
19-000097-0494-TRS	JEFFERSON ESPINOZA EMMANUEL MUÑOZ	2-0759-0130	311358	3G1JX5448WS170739
19-000098-0494-TRF	MARIA MAYELA ZELEDON OVIEDO	2-0276-0785	475298	JTDKW113X03091752
19-000102-0494-TRS	MARIA ELENA MORA MENESES	3-0243-0088	183219	JT3YR26VXF5071990
19-000102-0494-TRS	R.L. RAFYTICA S.A.	3-101060314	750632	9BR53ZEC208713282
19-000105-0494-TRV	MARIA JOSE ARROYO HERRERA	1-1421-0962	BFY738	V77W3J028759
19-000105-0494-TRV	JENNIFER REBECA VALVERDE ULLOA	1-1120-0428	NGR410	KNAPRB1ADH7173435
19-000107-0494-TRS	ALEJANDRA ELIZONDO RUIZ	2-0536-0356	PJC072	KNAPB811AC7336895
19-000112-0494-TRS	ROSA BLEN CASTRO	1-0271-0916	751589	KMHNU81WP8U050067

19-000112-0494-TRS	MADIBET SABATIER VEGA	1-0985-0077	C 149536	1FUYYDDYB7TH546152
19-000113-0494-TRF	R.L. SCOTIA LEASING COSTA RICA S.A.	3-101134446	CL 278028	KMFWBX7HAEU636184
19-000114-0494-TRA	R.L. EMPAQUES UNIVERSAL S.A.	3-1010188842	CL 282285	MR0DR22G7F0021418
19-000114-0494-TRA	MARIAM YOLANDA CALVO SEQUEIRA	2-0360-0872	BQS917	5NPDH4AEXCH142956
19-000117-0494-TRS	MARIA NISIDA FONSECA JIMENEZ	5-0204-0314	474014	JS3TD02V9N4107110
19-000119-0494-TRA	YARIMA GOMEZ LOEZ	186200216321	BFY426	KMHCT41DBEU656255
19-000119-0494-TRA	GREDY ODIR MATA GAMBOA	6-0299-0219	BLM029	KMHCT51CBCU090406
19-000120-0494-TRV	R.L. COMIDAS CENTROAMERICANAS S.A.	3-101016470	MOT 264499	MD625GF5081F20626
19-000122-0494-TRS	R.L. ARRIENDA EXPRESS S.A.	3-101664705	CL 310613	LJ11PBBC6J6000095
19-000122-0494-TRS	ELSIE MARIA RAMIREZ RAMIREZ	5-0172-0204	CL 222895	LETYFCG267HN09482
19-000123-0494-TRF	JOSE FRANCISCO CAMACHO ROMERO	3-0414-0395	563247	JN1CFAN16Z0084706
19-000124-0494-TRA	SILVIA BAEZ ROJAS	1-0844-0416	BGD578	3G1J85CC6ES591198
19-000124-0494-TRA	R.L. DOS OCHO SIETE S.A.	3-101203847	C 136809	1FUYSSEB8WL965112
19-000125-0494-TRV	GERARDA QUESADA FERNANDEZ	2-0326-0290	824157	TA01V300064

19-000125-0494-TRV	R.L. ATI CAPITAL SOLUTIONS S.A.	3-101276037	C 170962	3HSDJSJR3CN448789
19-000127-0494-TRS	R.L. TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES S.A.	3-101004929	AB 004395	9BM3840737B498488
19-000128-0494-TRF	LUISA AMANDA SANTANA SERRANO	155820004908	BLQ112	JTDBT4K39A1377808
19-000128-0494-TRF	LIZBETH SANTAMARIA	97361519	840743	VC793204
19-000130-0494-TRV	R.L. TROCONIS INGENIERIA S.A.	3-101716858	CL 180845	KNR1M2HEA1T024432
19-000133-0494-TRF	R.L. TODO EN FRENOS Y CLUTCH DOS MIL UNO S.A.	3-101303276	CL 233480	KNCSE261587312544
19-000143-0494-TRF	R.L. TRANS-TALENO DE ROBLE S.A.	3-101490226	C 146859	736276
19-000145-0494-TRV	KAROLINA VARGAS DIAZ	1-1433-0234	652141	1NXBR32E06Z599875
19-000150-0494-TRV	JOSE ENRIQUE ACUÑA MONGE	1-1561-0606	306891	AE920114774
19-000152-0494-TRS	R.L. MOTO SERVICIO HUSA S.A.	3-101235506	C 153260	1FUPCSZBXYDA97892
19-000157-0494-TRS	R.L. EQUIPOS Y ATRACCIONES EL CHAPAZON S.A.	3-101619416	843632	WBASN6100BC457238
19-000165-0494-TRA	R.L GRUPO EMPRESARIAL TRANS PIEDRA DE CARTAGO S.A.	3-101721967	CB 002364	KMJHD17BPAC047236
19-000166-0494-TRV	R.L. TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES S.A.	3-101004929	AB 007279	WMARR8ZZGC021940
19-000166-0494-TRV	CARLOS ARCE RODRIGUEZ	4-0117-0191	CL 165248	JAACR16E5L7239218

19-000168-0494-TRS	R.L. GRUPO SERVICIA COSTA RICA S.A.	3-101031018	SSS856	KNADN512BH6774953
19-000168-0494-TRS	R.L. GRUPO VERSATIL A Y D S.A.	3-101237900	C 146261	1FV6HLBA7YDH13290
19-000171-0494-TRV	ERVING SANDOVAL VILLAGRA	155802168114	MOT 331882	9FSNF41B6CC25380
19-000253-0494-TRS	LEIDY QUESADA MORERA	2-0193-0620	CL 233138	LETYEAA158HN08929
19-000253-0494-TRS	JOSE ANTONIO RUZICKA TARRAGO	1-0486-0397	721594	JTEBK29J300031569
19-000290-0494-TRA	PABLO JOSE QUESADA BERMUDEZ	2-0527-0833	723094	JTMZD33V805069011
19-000290-0494-TRA	R.L. TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES S.A.	3-101004929	AB 007036	WMARR8ZZ5FC020946
19-000335-0494-TRA	R.L. TRANSPORTES MONTECILLOS ALAJUELA S.A.	3-101137039	AB 006559	4DRBAAN84A964744
19-000340-0494-TRA	JOHONATAN VILLEGAS CUBERO	1-1042-0482	YCY612	SJNFBNJ11GA386431
19-000350-0494-TRA	R.L. ESCOLAB S.R.L.	3-102117583	TSS888	3N1CC1AD5ZK254730
19-000350-0494-TRA	R.L. GRUPO SERVICIA COSTA RICA S.A.	3-101031018	SSS856	KNADN512BH6774953
19-000355-0494-TRA	R.L. SOCIEDAD RENTACAR CENTROAMERICANA SA	3-101011098	BQZ792	9BEB29BTJ2193205
19-000360-0494-TRA	FREDDY JIMENEZ BONILLA	2-0407-0522	BBN234	KMHNN81XP5U176292
19-000360-0494-TRA	R.L. GRUPO TRANSPERS DE COSTA RICA S.A.	3-101758637	VKH044	KNADM511AG6665720

19-000365-0494-TRA	R.L. TRANSPORTES ALAJUELENSES S.A.	UNIDOS	3-101004929	AB 007027	WMARR8ZZ3GC021031
19-000370-0494-TRA	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS VARGAS		9-0053-0753	BJL284	LC0CG4CG1G1000026
19-000345-0494-TRA	JASON ALONSO DELGADO ALVARADO		4-0177-0484	DNL287	MA3ZF63SXJA192395
19-000345-0494-TRA	R.L. ARRENDADORA DESYFIN S.A.		3-101538448	KWD010	WDCDA2DB1HA840200
19-000415-0494-TRA	VERONICA DOWNEY ISAZA		1-1095-0592	229894	EL400042077
19-000415-0494-TRA	JUSTIAN ABEL MEDINA RIOS		C01371517	656839	4A3AC44GX1E209113
19-000410-0494-TRA	R.L. BAC SAN JOSE LEASING S.A.		3-101083308	LGR294	JN1JBNT32HW003694
19-000410-0494-TRA	LUIS ALBERTO MUÑOZ SALAS		2-0412-0220	222655	JN1GB21S4KU502593
19-000385-0494-TRA	R.L. CREDI Q INVERSIONES CR S.A.		3-101394506	BDQ238	KMCT21CBDU091109
19-000385-0494-TRA	R.L. PULMITAN DE LIBERIA S.A.		3-101010089	PB 001773	9BSK4X2B063573265
19-000375-0494-TRA	R.L. SCOTIA LEASING COSTA RICA S.A.		3-101134446	CL 305671	MMM148MK1JH607578
19-000255-0494-TRA	R.L. CORPORACION DAFO CR S.A.		3-101669545	706218	KMHJM81BP8U724386
19-000173-0494-TRS	R.L. SCOTIA LEASING COSTA RICA S.A.		3-101134446	MYL202	KNAB3512BJT102575
19-000173-0494-TRS	ELIZABETH MARIA UGALDE VEGA		2-0356-0751	TA 000504	JTDBJ21E002003822

19-000173-0494-TRS	CARLOS IGNACIO CHAVARRIA CASTRO	1-1179-0974	663864	1HGFA16507L500286
19-000343-0494-TRS	R.L. TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES S.A.	3-101004929	AB 006298	LKLR1KSFOEC6227701
19-000343-0494-TRS	R.L. EQUIPOS AB DE COSTA RICA S.A.	3-101228335	CL 211772	JN1AHGD22Z0032932
19-000348-0494-TRS	SHIRLEY MARIA GARRO PEREZ	2-0527-0528	487827	JTDBJ21E302000929
19-000348-0494-TRS	R.L. JACK CAR ENGLEMBER S.A.	3-101701375	BNZ847	KL8CB6S93DC500463
19-000353-0494-TRS	NORMA CECILIA VALVERDE ABARCA	2-0390-0786	MBZ216	WDCTG4CB9JJ381785
19-000358-0494-TRS	SEIRY MARIA JESUS ALVAREZ LARA	5-0221-0617	BCL839	MA3ZF62S1DA160067
19-000358-0494-TRS	LAURENCE GERARDO GOMEZ JIMENEZ	1-1057-0515	TA 001139	KMHCT41DADU438622
19-000363-0494-TRS	JOSE ANTONIO VARGAS GUEVARA	1-0974-0416	BJV009	JMYXTGF2WGW000489
19-000368-0494-TRS	R.L. KUVUS LOGISTIKS INC. S.A.	3-101682759	MOT 624473	8CHMD3410JP300047
19-000368-0494-TRS	WENSY KARINA RECONCO DURON	8-0096-0258	BHB919	KMHCG41GPYU127385

JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE SANTA ANA

N° EXPEDIENTE	PROPIETARIO	N° CEDULA	N° PLACA	N° CHASIS
17-000223-1729-TR	MARÍA DE LOS ÁNGELES DÍAZ PACHECO	1-0413-0833	449789	KMHVF21JPNU673863
18-001379-1729-TR	AUTOBUSES BARRANTES ARAYA S.A.	3-101-080606	HB002880	9BM384075AB682270
18-001379-1729-TR	CENTRIZ COSTA RICA S.A.	3-101-036194	CL307855	8AJFB8CD1J1584694

18-001205-1729-TR	COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA TAPACHULA S.A.	3-101-086411	SJB010318	KL5UM52FE5K000022
18-001229-1729-TR	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	186200623633	BNP716	5NPDH4AE7CH067780
18-001247-1729-TR	BERNARD MARC PERRAUD	PA: 11AL90251	MTM769	JDAJ210G003005102
18-001247-1729-TR	COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA TAPACHULA S.A.	3-101-086411	SJB012883	KL5UM52FEBK000200
18-001295-1729-TR	COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA TAPACHULA S.A.	3-101-086411	SJB010029	KL5UM52HE4K000015
18-001297-1729-TR	YORLENI MARIA HIDALGO CAMBRONERO	1-1036-0859	546331	KMHVF21NPSU174842
18-001305-1729-TR	MARIBELL ROCIO MORA GARRO	1-0642-0667	BPT555	KNADM4A31D6244262
18-001305-1729-TR	COCA COLA FEMSA DE COSTA RICA S.A.	3-101-005212	C160026	3HAMMAAR8DL302813
18-001309-1729-TR	MARÍA CRISTINA VEGA MORALES	1-0955-0287	658729	4S2CK58E5V4321640
18-001315-1729-TR	RAFAEL ÁNGEL ARTAVIA AGUILAR	1-1044-0718	MOT304106	FR3PCMG04BD000140
18-001339-1729-TR	MARIA ISABEL S.A.	3-101-059065	343581	JHLRD1750XC224973
18-001339-1729-TR	ZACATE ZOULU S.A.	3-101-471964	CL239416	1C331333
18-001341-1729-TR	SCOTIA LEASING COSTA RICA S.A.	3-101-134446	BQR344	MMSVC41S7JR106456
18-001345-1729-TR	3-102-745704 S.R.L.	3-102-745704	CL297201	WV1ZZZ2HZHA002177

18-001345-1729-TR	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEHIAS S.A.	3-101-203897	MOT578566	LALMD4393H3001437
18-001353-1729-TR	COCA COLA FEMSA DE COSTA RICA S.A.	3-101-005212	CL266835	MR0CS12G700119298
18-001375-1729-TR	HELICONIA GRIEGO S.A.	3-101-181470	C159465	RC082851
18-001375-1729-TR	AUTOBUSES BARRANTES ARAYA S.A.	3-101-080606	HB003519	9BM3840735B397442
18-001381-1729-TR	COMPAÑÍA TRANSPORTISTA DEL SUROESTE S.A.	3-101-010970	SJB015453	9BSK4X200G3877052
18-001381-1729-TR	CORPORACIÓN CAEST S.A.	3-101-443271	CL311011	JAA1KR77EJ7100438
180012301729TR	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL VICTORIA R.L	3-002056451	C160358	1XKADR9X5YR960598
180012301729TR	SCOTIA LEASING COSTA RICA S.A.	3-101-134446	SJL419	MA3ZE81S6F0279399
180012901729TR	ISIDRO ENRIQUE DE LA TRINIDAD MONGE	1-0611-0723	TSJ-5931	JTDBJ42E209006612
180013101729TR	ACU#A CHAVARRIA DENNIS ALBERTO	110930954	720379	1HGEJ1122SL046442
180013301729TR	AUTO MERCADO SOCIEDAD ANONIMA	3101007186	C 166031	MEC2162SCHP028560
180013301729TR	DISTRIBUIDORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA	3101295868	C 146062	3ALACYCS97DY78961
180013801729TR	SOLIS RANGEL CLAUDIA	105520019	JGS013	KNADN412AH6679793
180012321729TR	QUESADA CHAVES MARCELA	111230086	892696	KMHJT81BBBU320334

180012321729TR	LINARDI BARBARA	138000115323	889324	JS2YA21S2B6300804
180013021729TR	FLEXI CAR LEASING CRC SOCIEDAD ANONIMA	3101756112	BJT448	MR2BT9F37G1206824
180013321729TR	SCOTIA LEASING COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	3101134446	CL 423002	KNCSHX76CJ7230777
180013241729TR	RIOS ROJAS ROXANA	109090032	MOT 400695	MD2A36FZ8ECE00783
180013941729TR	MONTOYA QUESADA MARTA EUGENIA	107830235	MOT 305853	JSAAK4AA692102718
180013061729TR	AGUILAR AGUILAR PAMELA	112740509	905672	KMHCT51CACU018880
180013461729TR	GARCIA LEZCANO HAROL ADRIAN	116070907	MOT 474612	LBMPCML37G1000456
180013661729TR	REPUESTOS GIGANTE SOCIEDAD ANONIMA	3101156677	CL 304400	KMFZCX7KAFU133615
180010981729TR	CREDI Q LEASING SOCIEDAD ANONIMA	3101315660	BPX248	KMHJ2813CHU460962

JUZGADO DE TRÁNSITO II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, GOICOECHEA

N° EXPEDIENTE	PROPIETARIO	N° CEDULA	N° PLACA	N° CHASIS
18-009457-0174-TR	REP LEGAL DE EMPRESA GUADALUPE LTDA	3-102-005183	SJB1483	000014000000200
18-009547-0174-TR	KEVIN GUZMÁN BALDIZON	01-1260-0387	BQP401	MA6CH5CDXKT002227
18-009547-0174-TR	ARNOLDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	01-0821-0648	CL 450071	3N6CD33BXJK861175
18-009197-0174-TR	REP LEGAL DE LARED LIMITADA	3-102-016101	SJB16671	9BM384076GB029055
18-009507-0174-TR	GUILLERMO ESCALANTE RODRÍGUEZ	01-0628-0153	PBS572	JTMBF9EV4GJ022894

18-009507-0174-TR	REP LEGAL DE TRANSPORTES EMPRESARIALES CHINCHILLA FLORES S.A.	3-101-498758	SJB8296	9BM3840731B277972
18-007857-0174-TR	DAVID CHACÓN ALVARADO	02-0677-0221	TXT717	KMHJ2813AHU207803
18-007857-0174-TR	HELVEX DE COSTA RICA S.A.	3-101-560481	C 163548	JHHZCL2H8FK004990
18-010067-0174-TR	SILVIA ODIO AGUILAR	01-0683-0284	218421	11R0049090
18-010047-0174-TR	GRACE MORA ARCE	02-0390-0351	C 150352	S514720
18-010117-0174-TR	REP LEGAL EMPRESA GUADALUPE LTDA.	3-102-005183	SJB10564	9BM3840736B448991
18-009657-0174-TR	REP LEGAL K NUEVE INTERNACIONAL S.A.	3-101-141045	MOT 350853	9C2MD3400CR520171
18-009867-0174-TR	REP LEGAL MAURO ELECTROMERCADO S.A.	3-101-108037	MOT 622933	LWBKA0295J1000269
18-005637-0174-TR	REP LEGAL 3101527112 S.A.	3-101-527112	CL 231338	LETYFCG248HN04654
18-009467-0174-TR	REP LEGAL AUTOTRANSPORTES LUMACA S.A.	3-101-280236	CB 3191	LA6A1M2M8JB400649
18-009687-0174-TR	REP LEGAL ARRENDADORA CAFSA S.A.	3-101-286181	BQN670	JTFJK012P5K5014210
18-009917-0174-TR	RODOLFO SALAS FONSECA	04-0141-0003	C 146377	475400
18-009917-0174-TR	CARLOS ALFARO TREJOS	02-0257-0965	TSJ 887	JTDBJ42E3EJ007743
18-009717-0174-TR	ARNOLDO DELGADO MORA	01-0790-0670	332461	JGCBJ18U1KWB25497
18-009717-0174-TR	REP LEGAL AUTOTRANSPORTES LUMACA S.A.	3-101-280236	CB 2991	WMARR8ZZJGC021899

18-009907-0174-TR	ALBA GONZÁLEZ VELÁSQUEZ	01-1117-0987	BCD430	JTDKW9D340D511753
18-009907-0174-TR	MAGALY CALDERÓN CERDAS	01-0578-0182	BQL207	MA3ZF63S8JA155846
18-010307-0174-TR	DANIELA MONTENEGRO ESQUIVEL	02-0588-0748	DMF836	JMYSNCS3ADU000318
18-009277-0174-TR	MARIA RUIZ CASTILLO	05-0127-0699	TSJ5566	KMHDN41AP4U829778
18-009277-0174-TR	REP LEGAL ARRIENDA EXPRESS S.A.	3-101-664705	BGY022	MA3ZF6256FA545594
18-009137-0174-TR	REP LEGAL AGENCIAS FEDURO C.R. S.A.	3-101-337371	CL 269314	8AJCR32GX00008247
18-009137-0174-TR	REP LEGAL SCOTIA LEASING C.R. S.A.	3-101-134446	BNZ785	KMHCT41DBHU207646
18-009587-0174-TR	REP LEGAL CREDI Q LEASING S.A.	3-101-315660	BLX209	MALC281CBHM141857
18-009377-0174-TR	FÉLIX MORENO GARCÍA	05-0284-0489	BCH719	2HGEJ8547XH501052
18-009377-0174-TR	ERICKA VILLALOBOS NAVARRO	01-1398-0876	BGC288	MALAM51CAEM523125
18-008237-0174-TR	REP LEGAL ALVIMUNDO S.A.	3-101-108737	CL 202801	JHFCY417805000264
18-005667-0174-TR	REP LEGAL FOOD MONGERS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LTDA.	3-102-659423	CL 263425	KNCSHX71AC7652549
18-009667-0174-TR	AMALIA VEGA ÁLVAREZ	01-0416-0299	BFD801	MR2T9F3201051220
18-009667-0174-TR	MIGUEL MORA NIÑO	02-0633-0038	BJL714	JTDBJ42E6EJ007770
18-008907-0174-TR	REP LEGAL AUTOTRANSPORTES LA CARPINTERA S.A.	3-101-277580	CB 1864	9BM3840734B357465
18-009780-0174-TR	GRICELDA BARBOZA VARGAS	303990723	SJB 13368	9532F82W9CR218313
18-009780-0174-TR	EMPRESA GUADALUPE LIMITADA	3102005183	FFB006	KNADN412AH6039096

18-009750-0174-TR	DISTRIBUIDORA Y DEPOSITO DE MADERAS LOS PINARES DE HEREDIA LIMITADA	3102339404	CL 245830	MR0FZ29G701577213
18-009750-0174-TR	CREDI Q LEASING S.A.	3101315660	BMK137	MALA841CAHM208384
18-010400-0174-TR	AUTO TRANSPORTES CESMAG S.A	3101065720	SJB 14835	LA9C5ARY3FBJXK056
18-010130-0174-TR	BLAS ANTONIO CHACON GONZALEZ	502450921	BJN003	JTDBT923471114860
18-010300-0174-TR	SCOTIA LEASING C.R S.A	3101134446	CL 418209	MR0ES8CD4H0220431
18-010300-0174-TR	HELEN ZUGEY BRENES ALVAREZ	112100751	YGS183	KL1MJ6C42DC004756
18-010310-0174-TR	TRANSPORTE PARACITO S.A.	3101054120	SJB 017273	L1KDK5GH7G0000003
18-009970-0174-TR	WILSON ADRIAN CORRALES PICADO	111390005	CL 203011	3D7KS28C45G783779
18-006720-0174-TR	SCOTIA LEASING COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA	3101134446	LSD586	3N8CP5HD4JL492201
18-006720-0174-TR	CESAR ALONSO BADILLA HERRERA	110510056	CL 306424	LETFEAA15EHN00087
18-008770-0174-TR	NATALIA GOMEZ ALFARO	401780762	198878	EL400022261
18-009921-0174-TR	FABIÁN OBANDO DELGADO	109350161	BKJ468	2HGES16531H535914
18-009971-0174-TR	MANUEL ARIAS CASTRO	105600734	BFG030	KMHCT41CBEU530104
18-009971-0174-TR	BCT ARRENDADORA, S.A	3101136572	FQZ911	WAUZZZ8U7JR023276
18-009981-0174-TR	JERRY DANIEL CAMPOS CHACÓN	116030370	TVZ678	KNAFU411BC5547405
18-010011-0174-TR	REFRITEC REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO S.A	3101335585	CL 214638	JAANKR55E77100408
18-010011-0174-TR	BAC SAN JOSÉ LEASING, S.A	3101083308	MOT 544775	9C2MD3400GR520488

18-010061-0174-TR	AGRIBIOTECNOLOGIA DE COSTA RICA, S.A	3101063988	650239	JN1TESY61Z0559058
18-010061-0174-TR	PATRICIA ARAYA MARTINEZ	302720592	865356	KMJRD37FPYU471997
18-010071-0174-TR	CENTRIZ COSTA RICA, S.A	3101036194	BJW270	JDAJ210G0G3014824
18-010111-0174-TR	DOS OCHO NUEVE, S.A	3101203837	EE 22842	1HSRDJNR0FHB17221
18-010111-0174-TR	MB LEASING, S.A	3101668666	BNH520	MMBSNA13AHH005665
18-010191-0174-TR	TRANSPORTES PUBLICOS LA UNION, S.A	3101054127	SJB 11572	KL5UM52FE8K000100
18-010471-0174-TR	DIANA SERRANO SEQUEIRA	116650576	581441	KMHVF21NPVU502095
18-009921-0174-TR	FABIÁN OBANDO DELGADO	109350161	BKJ468	2HGES16531H535914
18-009971-0174-TR	MANUEL ARIAS CASTRO	105600734	BFG030	KMHCT41CBEU530104
18-010142-0174-TR	RAUL RAMON FERNANDEZ MARTINEZ	18620056907	MVM124	KNADN412BG6630218
18-006142-0174-TR	REP. LEGAL DEL BAC SAN JOSE LEASING S.A.	3101083308	CL 291320	LZWCCAGA4G6014979
18-008942-0174-TR	REP. LEGAL DE SCOTIA LEASING C.R S.A	3101134446	C 166174	3BKBL50X4HF724142
18-009955-0174-TR	BCT ARRENDADORA SOCIEDAD ANONIMA	3101136572	CL 262229	KL16B0A5XCC107355
18-006825-0174-TR	TALOMEX SOCIEDAD ANONIMA	3101090323	BGY568	KMHCT41BEFU743609
18-006825-0174-TR	ROJAS PADILLA JOSE PABLO	116620050	MOT 543657	LZL20P10XHHE40415
18-009595-0174-TR	CHAVES WSEDA ANA GABRIELA	113760082	BDY954	MA3ZF62S5EA287373
18-009595-0174-TR	MADRIGAL GONZALEZ ARGERIE GERARDA DE LA TRINIDAD	107250701	BKH970	MR2BT9F30G1215820

18-009535-0174-TR	SCOTIA LEASING COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	3101134446	BQR825	3KPC3411AJE037077
18-009525-0174-TR	MORA MADRIZ ERIC JOSE	206210597	MOT 388595	LV7MGZ40XEA900026
18-009645-0174-TR	ROMAN CARVAJAL NELLY	103680741	215343	SV213213505
18-009835-0174-TR	ALVARADO ZAMORA ILIANA C.C. ILEANA MARIA	302630550	284620	JMB0NV450WJ000398
18-009135-0174-TR	SANCHEZ SALAS MELISSA	111800848	BGN088	JA4LS21G4WP043880
18-010045-0174-TR	MORALES SEGURA KAROL	110570439	BLR352	SXA110155664
18-004125-0174-TR	EMPRESA GUADALUPE LIMITADA	3102005183	SJB 14643	9BM384074BB739755
18-009855-0174-TR	TRANSPORTES PUBLICOS LA UNION SOCIEDAD ANONIMA	3101054127	SJB 12870	KL5UM52HEBK000211
18-009855-0174-TR	MAJZOUN EL MAJZOUN FADEL	186200405331	BQP947	3N1AB7AP7FL669089
18-009335-0174-TR	BAC SAN JOSE LEASING, S.A	3101083308	MOT 523094	9C2MD2895GR100082
18-009845-0174-TR	CERDAS VILLALOBOS ELISA MARIA	205960459	BMF960	KMHCN4AC2AU516994
18-009845-0174-TR	ROMERO VALVERDE LIGIA JEANNETTE	302420686	TSJ 1630	JTDBJ21EX04016193
18-010055-0174-TR	ANC CAR SOCIEDAD ANONIMA	3101013775	BPF695	MR2B29F37J1088123
18-010125-0174-TR	CESPEDES BENAVIDES JORGE	102150160	TSJ 005539	KMHDN46D95U940541
18-010075-0174-TR	SOLANO JIMENEZ IDALIA DE LOS ANGELES	109990263	748535	JN1EB31PXRU311361
18-010145-0174-TR	ALVAREZ MEDRANO DAVID EDUARDO	114090977	797741	SC704145
18-010145-0174-TR	LOPEZ CASCANTE CARMEN MARIA	103890853	MOT 491004	LB425Y609FC100313

18-010375-0174-TR	UNIVERSAL PAYMENT SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA	3101357977	RYD100	KMHJT81EAFU115455
18-010375-0174-TR	BAC SAN JOSE LEASING SA	3101083308	MJJ009	SALVA2BN3JH302854
18-009885-0174-TR	BAC SAN JOSE LEASING SA	3101083308	NCN123	WAUZZZ4G3FN001791
18-009885-0174-TR	EL SEXTO CHAKRA SOCIEDAD ANONIMA	3101677573	MOT 367292	LB420YC09CC103585
18-010235-0174-TR	CANO CHAMORRO MARTHA LORENA	155808653003	153375	BCAB13501697
18-010255-0174-TR	SANTOS TOUR CR SOCIEDAD ANONIMA	3101361222	CL 292724	1FT8W3BT0GEB63836
18-009715-0174-TR	DISTRIBUIDORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA	3101295868	C 141801	3HAMMAAR66L326773
18-009765-0174-TR	INVERSIONES J A DUBER SOCIEDAD ANONIMA	3101132512	BKX822	MA3VC41S3GA157916
18-009765-0174-TR	ARRENDADORA CAFSA SOCIEDAD ANONIMA	3101286181	BPK542	MAJTKNFE4JTC69084
18-009785-0174-TR	TRANSPORTES SERGON DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	3101364412	AB 002822	9BSK4X2BKY3514822
18-010395-0174-TR	TORRES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	105030663	MTM777	KNAPM81AAH7078726
18-010395-0174-TR	QUESADA MENA MARIO ALEXANDER	111390402	CL 213397	KMFGA17AP7C047165
18-010415-0174-TR	RAMIREZ SANDI PAULA VALERIA	115090692	PVR814	KL1TD56697B110724
18-010415-0174-TR	ALCAZAR OVARES CHRISTOPHER DE JESUS	116680469	354111	KMHJF31LPPU516641
19-000015-0174-TR	GUTIERREZ MONTERO YAMILETH	106880262	208005	1HGAD5423EA000188

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE ESTAS PERSONAS, QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE TRÁNSITO N.º 9078, TIENEN DERECHO A COMPARECER AL DESPACHO JUDICIAL DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, A MANIFESTAR SI DESEAN CONSTITUIRSE COMO PARTE O NO DEL PROCESO, CON LA ADVERTENCIA DE QUE DE NO HACERLO, SE ENTENDERÁ QUE RENUNCIAN A ESE DERECHO Y LOS TRÁMITES CONTINUARÁN HASTA SENTENCIA. PUBLIQUESE POR UNA VEZ EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.

Lic. Wilbert Kidd Alvarado

Subdirector Ejecutivo a. í del Poder Judicial

1 vez.—O. C. N° 2019-090480.—Solicitud N° 03-DP-19.—(IN2019316962).